

5
lej

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ACATLAN

"EL PERIODO DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR EN CHILE:
.1970 - 1973"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADA
EN HISTORIA

P R E S E N T A

VILLANUEVA MERCADO PATRICIA ELVIRA

ASESOR: LIC. HALIVE HERNANDEZ ASCENCIO

MEXICO

1986



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

INTRODUCCION	4
--------------------	---

CAPITULO I

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA SOCIEDAD CHILENA: UNA VISION HISTORICA DESDE 1830 HASTA 1958.

1.1 Primera etapa: la economía y la política chilena antes de la guerra del Pacífico	7
1.2 Segunda etapa: la guerra del Pacífico y el enclave salitrero	18
1.3 Las modificaciones sociales y económicas	36
1.4 El sistema político y las Fuerzas Armadas en el periodo	52

CAPITULO II

LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PERIODO 1956-1970.

2.1 Crisis socio-económica y reestructuración de la instancia política a fines del gobierno de Ibañez	63
2.2 La derecha regresa al poder: la elección de 1958	70

2.3 El gobierno de la Democracia Cristiana	77
2.4 La coyuntura electoral de 1970	92

CAPITULO III

PRIMERA FASE DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR: 4 DE NOVIEMBRE DE 1970 MEDIADOS DE JUNIO DE 1972.

3.1 Caracterización de la vía chilena al socialismo	113
3.2 El programa económico de la Unidad Popular y sus realizaciones	127
3.3 Recursos institucionales utilizados por el gobierno de la Unidad Popular para la constitución del área de propiedad social	163
3.4 Desajustes económicos en el periodo	175
3.5 Estrategia política de los partidos opositores al gobierno de la Unidad Popular	191
3.6 Los partidos políticos de la izquierda en esta etapa	233
3.7 Luchas sociales en el periodo	244
3.8 El gobierno popular y las Fuerzas Armadas.....	271

CAPITULO IV

SEGUNDA FASE DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR: MEDIADOS DE JUNIO DE 1972 HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

4.1 El bloqueo de Estados Unidos al gobierno de la Unidad Popular	288
---	-----

4.2 Política Matus - Millas: un intento de respuesta a la crisis económica	329
4.3 Diálogo UP - DC y los problemas de conducción política en la izquierda	345
4.4 Estrategia política de la oposición unida y de los gremios patronales contra el gobierno popular	357
4.5 Agudización de la crisis económica y del conflicto político	389
4.6 Del derrumbe institucional al golpe militar	414
4.7 El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 ...	443
CONCLUSIONES	467
BIBLIOGRAFIA	522

INTRODUCCION

El periodo de gobierno de la Unidad Popular y su desenlace revisten una gran importancia en el desarrollo histórico de Chile y tienen también una significación de vastos alcances en los procesos histórico-políticos de varios países latinoamericanos y europeos.

El triunfo electoral del conjunto de partidos de la izquierda chilena agrupados bajo la denominación de Unidad Popular y que llevó a la presidencia de la República a Salvador Allende Gossens, abrió una posibilidad nueva en la historia nacional: la de construir las bases de una sociedad socialista dentro de los marcos institucionales regulados en la Constitución de 1925. Utilizando los mecanismos legales ya establecidos y sujetando su acción a la normatividad del Estado de derecho, el gobierno de Allende se volcó a la tarea de cumplir el programa electoral con que se presentó a las elecciones presidenciales de 1970, es decir, a la transformación radical de las estructuras socio-económicas del capitalismo dependiente chileno.

La estrategia política que subyacía tras el programa electoral de la Unidad Popular - la vía chilena al socialismo - y en la que se vislumbraban grandes esperanzas de justicia

social se truncó con la sangrienta derrota del movimiento - popular, el 11 de septiembre de 1973.

Nuestra inquietud por indagar y analizar cómo y por qué se llegó a la coyuntura histórica que permitió el acceso de Allende a la presidencia de la nación y cómo y por qué se produjo el fracaso político de la vía chilena al socialismo, constituyen las razones centrales de la elección de este tema de tesis.

Consideramos que para una mejor comprensión de la compleja gama de problemas políticos, ideológicos, sociales y económicos que caracterizaron el periodo de gobierno de la Unidad Popular era necesario hacer una referencia a sus antecedentes. Por ello dedicamos parte de nuestro trabajo a una revisión del proceso de conformación de la institucionalidad política, el rol de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de las clases sociales en general y del movimiento obrero en especial y los rasgos dominantes del sistema económico. Creemos que sin una aproximación histórica de la evolución de la sociedad chilena no es posible la explicación de algunas especificidades de la misma, las que permitieron, en 1970, la victoria electoral de un candidato marxista como Salvador Allende e influyeron, posteriormente, en el desenlace del proceso de gobierno de la Unidad Popular.

En consecuencia nuestra investigación pretende:

- 1.- Examinar las condiciones económicas, políticas y sociales previas que hicieron posible el triunfo electoral de Salvador Allende en 1970.
- 2.- Analizar la estrategia política del programa de gobierno de la Unidad Popular: la vía chilena al socialismo.
- 3.- Examinar las transformaciones estructurales que logró realizar el gobierno de Allende y los diversos mecanismos institucionales utilizados para materializarlas.
- 4.- Revisar los efectos de las transformaciones estructurales en la economía y en las distintas fuerzas sociales chilenas.
- 5.- Analizar la evolución de la estrategia política de la oposición al gobierno de la Unidad Popular.
- 6.- Contribuir a la comprensión de los consensos y disensos generados en el seno de la alianza política conformada por la Unidad Popular.
- 7.- Analizar el bloqueo económico de Estados Unidos al gobierno de Allende y la política exterior de la Unidad Popular.
- 8.- Analizar y evaluar las causas del fracaso de la experiencia de la Unidad Popular en 1973.

Capítulo Primero. Características específicas de la sociedad chilena: una visión histórica desde 1830 hasta 1958.

Describir a grandes rasgos la evolución de la economía y la política chilena, hasta fines de la década de los cincuenta, es un paso indispensable para la comprensión cabal de algunas de las principales particularidades socio-políticas del país. Se trata, obviamente, de un bosquejo histórico que pone el acento fundamental en las líneas gruesas de dicha evolución y en la interrelación entre el proceso económico y la estructuración y práctica de las clases sociales nacionales. El análisis se completa con un examen de la conformación y rol del Estado, de las características peculiares del sistema político chileno, de la inserción de las Fuerzas Armadas en dicho sistema y una visión del otro componente importante del espectro político nacional: el movimiento sindical y los partidos de izquierda.

1.1 Primera etapa: la economía y la política chilena antes de la guerra del Pacífico.

Al igual que en la mayoría de las colonias de América hispana, la lucha por la independencia se desarrolló en Chile "como un drama que se representaba en un escenario muy limitado: las élites criollas". (1) Entre 1810 y 1830 el país vivió un periodo caracterizado por los intentos de los liberales,

(1) Halperin Donghi, Tulio, "Historia contemporánea de América Latina". Alianza Editorial, Madrid, 1970, p. 91.

por un lado, y los conservadores, por el otro, para conquistar la hegemonía sobre sus rivales y, por consiguiente, sobre la sociedad nacional en su conjunto.

A partir del derrocamiento de Bernardo O'Higgins, uno de los principales artífices de la independencia nacional, se abrió un periodo de luchas intestinas, alzamiento de caudillos militares, intentos de secesión de algunas provincias y desorden generalizado conocido como el periodo de la anarquía. (2). Esta etapa, que amenazó la incipiente vida independiente de Chile, concluyó definitivamente con el triunfo militar de los terratenientes conservadores, que casi no participaron en las guerras de la Independencia, contra los liberales y los jefes militares más destacados del proceso emancipador. Se inició así la denominada República portaliana o etapa de la restauración, que duró 30 años y durante la cual se consolidó la estructura institucional del Estado oligárquico nacional.

En 1830 Diego Portales, un hombre de negocios, es designado Ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Guerra y de Marina. Su carrera política fue corta y singular, pero su clarividencia y las condiciones históricas en las que se desarrolló determinaron que su paso por el gobierno dejara una profunda huella en la política nacional. En 1831

(2) Ver sobre el particular, Villalobos, Sergio, et. al, "Historia de Chile", vol. III, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1979, pp. 454 a 524.

es elegido Vicepresidente de la República junto al Presidente José Joaquín Prieto, pero renunció a su cargo recién electo y aceptó, en cambio, su designación como gobernador de Valparaíso. En 1835 regresó al Ministerio de Guerra ante la inminencia de una guerra contra la Confederación peruano-boliviana. Dos años más tarde, es asesinado y su muerte, atribuida a una conspiración extranjera, aceleró los preparativos de la guerra, que estalló ese mismo año y que concluyó con la victoria de las tropas chilenas en la batalla de Yungay en 1839.

Portales vio con claridad que la continuación de las luchas fraccionales en el seno de la clase dominante en Chile podía poner fin a la posibilidad de constituir al país en una República independiente. Los males que había que extirpar para impedirlo eran evidentes y visibles: la disgregación nacional, el caudillismo, el militarismo, el relajamiento de la disciplina social y laboral que había caracterizado al país durante la dominación colonial. Había que constituir un gobierno fuerte, un verdadero Estado nacional impersonal, por encima de los caudillos y las facciones. Para ello era preciso eliminar políticamente a quienes creían tener derechos a dirigir el país por su contribución a la independencia nacional, etapa ya superada que debía dar paso a la constitución de la unidad nacional. El ostracismo político, la prisión o el destierro fueron las armas utilizadas por Portales para lograr su propósito central y jefes políticos y militares tan

importantes como Bernardo O'Higgins y Ramón Freire fueron - víctimas de estas tácticas.

La temprana constitución de una Estado nacional fue la magna tarea a la que se entregó con éxito Portales durante su paso por la política chilena. Una premisa necesaria para la consecución de este fin era la creación de una Fuerzas Armadas funcionales a su proyecto. "Dentro de los propósitos de la aristocracia y de Diego Portales, estuvo la --- transformación de las Fuerzas Armadas en órganos profesionales esencialmente obedientes, encargadas de cumplir exclusivamente las funciones asignadas por el gobierno. No se trataba que esa fuerza fuera neutral frente a los factores que actuaban en la escena social; más que eso, se buscaba que es tuviera estrechamente ligada al régimen que se instauraba y, por lo mismo, preparada para obedecer al poder aristocrático que se había establecido".(3)

La "institucionalización del autoritarismo", como la llama Sergio Villalobos, (4) era otra de las premisas sobre las cuales debía erigirse el Estado portaliano. La primera Constitución nacional de 1828 fue reemplazada por la Constitución de 1833 que, con algunas modificaciones, estuvo en vigor durante casi un siglo. Dicha Constitución establecía - el voto censitario, es decir, votaban solamente quienes de-

(3) Ramírez Necochea, Hernán, "Las Fuerzas Armadas y la política en Chile". (1810-1970). Editado por Casa de Chile en México, México, 1984, p. 27.

(4) Villalobos, Sergio, op. cit., vol. III, p. 539.

mostraban contar con bienes de un monto mínimo, establecía - la elección indirecta del Presidente de la República y la elección directa del Congreso, y atribuía al Jefe de Estado - tal cantidad de atribuciones que un historiador tan conservador y admirador de Portales como Jaime Eyzaguirre debe reconocer que, en realidad, el régimen político consagrado en la Constitución de 1833 era "una monarquía electiva".(5)

Una visión aún más crítica de este periodo tan importante de la vida nacional, ya que imprimió su sello al Estado y al sistema político por largo tiempo, es la del historiador Julio César Jobet. En su obra "Desarrollo económico-social de Chile", dice refiriéndose a la obra de Portales: "La dictadura portaliana significó la instauración de las formas coloniales bajo la aparente estructura republicana.

Se produce lo que el pensador argentino José Ingenieros denominaría 'la restauración'. Los rasgos sobresalientes de esta época son los siguientes: mantenimiento de la paz interna, es decir, el 'orden', utilizando para ello todos los medios posibles con el objeto de eliminar el movimiento liberal; poca política y mucha administración, para adormecer la conciencia política del pueblo y conseguir prestigio en el exterior para que el extranjero nos vea con bueno ojos, nos dé su confianza y su crédito." (6)

- (5) Eyzaguirre, Jaime, "Fisonomía histórica de Chile", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1960, p. 63.
 (6) Jobet, Julio César, "Desarrollo económico-social de Chile", Ensayo crítico, Centro de Estudios Salvador Allende, Casa de Chile, en México, 1982, p. 34.

Los principios portalianos rigieron la vida política del país durante casi treinta años y fueron el punto de partida de la evolución institucional de Chile. Sólo cedieron en su rigidez ante la vigorización de la actividad económica y la apertura del país a nuevas influencias liberales y ante el empuje de nuevas fracciones de la burguesía nacional. Su vigencia, sin embargo, tiene también explicaciones que hunden sus raíces en la instancia económica, según lo asevera Celso Furtado: "En el resto de América, los grupos urbanos que dirigieron las luchas por la independencia se encontraron imposibilitados para abrir líneas de exportación y no pudieron, por largo tiempo, crear un sistema de poder estable. El caso de Chile constituyó un excepción a esta regla. Chile no era ni un centro de metales preciosos ni región exportadora de productos agropecuarios hacia la metrópoli. Sus sectores exportadores agricultura y ganadería estaban fuertemente vinculados al polo peruano y su burguesía comercial ligada a los sectores agropecuarios. Por ello, Chile pudo sacar partido de las condiciones favorables de su comercio exterior tras la Independencia". (7)

La temprana unidad entre la burguesía comercial y los terratenientes, la también temprana subordinación del poder militar al poder político, la homogeneidad étnica y cultural, la constitución de un Estado nacional fuerte e impersonal, la favorable posición de Chile en el comercio internacional y la

(7) Furtado, Celso, "La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la Revolución Cubana", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969, p. 40.

victoriosa guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia fueron factores que permiten comprender la estabilidad política de Chile durante sus primeros años como nación independiente, y su auge económico, favorecido también por la importancia del estrecho de Magallanes para la navegación comercial antes de la construcción del canal de Panamá.

Una característica sui generis del periodo de dominación conservadora o portaliana es la política económica caracterizada por una fuerte participación del Estado en la actividad económica, con una declarada orientación proteccionista extendida a cuestiones tan importantes como la construcción de los primeros ferrocarriles públicos de América Latina. Aníbal Pinto intenta una explicación de este original hecho: "Parece razonable la hipótesis de que aquella política económica era la prolongación de las ideas dominantes en los medios intelectuales y administrativos del régimen colonial, de cepa mercantilista y estatista a su modo. Lo que ocurrió, como fue intuido agudamente por Subercaseaux, es que los españoles concebían el mercantilismo y la acción oficial 'al revés', o sea, para beneficio de la metrópoli y los dirigentes del gobierno independiente lo aplicaron 'al derecho', esto es, en función de los intereses de la joven república".(8)

Dos fenómenos económicos, uno coyuntural y el otro estructural, fueron los indicadores de que el orden conserva-

(8) Pinto, Aníbal, "Desarrollo económico y relaciones sociales", en "Chile Hoy", Pinto, Aníbal, et. al, Siglo XXI Editores, México, 1970, p.7.

dor-basado en la hegemonía de los terratenientes-tocaba a su fin. El primero de ellos fue la crisis de los precios de los productos agrícolas que constituían hasta entonces el grueso de las exportaciones chilenas. Una de las causas fundamentales de este fenómeno, que aparece en 1858, fue el cierre de los mercados de California y Australia.

El otro fenómeno, más profundo, fue el creciente auge de la burguesía minera cuyo peso económico fue un factor decisivo en la articulación de la economía del país al mercado mundial. Durante la década de 1850-60, Chile fue el primer productor mundial de cobre, constituyendo su producción el 61% de la producción mundial de dicho metal, era también gran productor de plata y de oro. Las exportaciones mineras representaban ya para el país una entrada superior en 2,5 veces a los ingresos provenientes de las exportaciones agrícolas.(9)

La pujante burguesía minera se diferenciaba notoriamente de la clase terrateniente tanto en el dinamismo de sus actividades propiamente económicas, necesidad impuesta por los requerimientos del mercado mundial, como en su ideología, fuertemente influenciada por el iluminismo francés y por el libre cambismo económico de origen inglés. Dispuesta a conquistar su lugar en el seno del Estado, presentó sus propios candidatos a las elecciones parlamentarias de 1858.

(9) Cfr. Jobet, Julio César, op. cit., p.54.

Algunos de ellos fueron elegidos (Tomás y Angel Gallo, Manuel Antonio Matta, José Victoriano Lastarria) y aprovecha la tribuna del Parlamento para proclamar la necesidad de profundas reformas liberales en la institucionalidad política del país. El gobierno conservador, sintiéndose amenazado, "declaró el estado de sitio y desterró a los mencionados dirigentes, lo que encendió la mecha de la revolución, que ya estaba bastante gestada, aunque no madura, por el proceso económico."(10)

La revolución de 1859 terminó con la derrota militar de la burguesía demo-liberal, pero no con su derrota política. En efecto, su entrada en la escena política no era sino el correlato de su ascenso económico, y los terratenientes conservadores terminaron haciendo una extraña alianza con dicha clase social para conservar el poder. En el periodo 1861-1876 gobierna una alianza liberal-conservadora que abrió paso a la creciente influencia de la burguesía minera, pilar del modelo económico dominante en el país. La razón fundamental de tal fenómeno radicó en la esfera económica; como lo señala con bastante claridad Aníbal Pinto: "Pero, insistimos, no hay antagonismos fundamentales en el terreno económico. Como grupo, todos son productores primarios o de servicios anexos o subordinados; todos son más o menos libre cambistas por las mismas razones y sus mercados

(10) Jobet, Julio César, op. cit., p.47.

principales están afuera, y en el exterior se hallan también los aprovisionamientos que requiere su demanda habitualmente refinada; no son proteccionistas por la simple razón de que tienen poco que proteger; y, finalmente, todos van a ser en alguna medida partidarios de la depreciación monetaria porque mejora sus posibilidades en el mercado externo y alivia sus deudas, cosa importante cuando son ellos los únicos que gozan del crédito".(11)

La vinculación al mercado externo constituyó, pues, un lazo de unión entre la clase terrateniente exportadora agropecuaria y la burguesía exportadora minera. Este lazo de unión impidió que las diferencias entre ambos sectores de las clases dominantes se profundizaran y condujeran a un desplazamiento definitivo de uno de ellos en favor del otro, como ocurrió en los países europeos con las revoluciones democrático-burguesas. Si bien es cierto que Chile se convirtió durante el siglo pasado en un exportador minero, siguió constituyendo la exportación agrícola uno de sus rubros fundamentales. Y dichos lazos se harán aún más estrechos en la etapa siguiente: la del enclave salitrero, periodo durante el cual el sector de productores agrarios tiene como misión fundamental abastecer de productos agrícolas al sector minero-exportador.

La cohesión que existía entre los distintos sectores -

(11) Pinto, Aníbal, "Chile, un caso de desarrollo frustrado" Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1973, p. 39.

de la clase dominante en materias económicas no impidió, sin embargo, que los temas ideológicos y políticos aparecieran en escena ocupando un lugar cada vez más importante en el debate nacional. Durante el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu (1871-1875) se agudizó la polémica en torno a las más importantes reivindicaciones de los sectores liberales: supresión del fuero eclesiástico, la única que efectivamente se logró imponer, laicización de los cementerios, separación de la Iglesia del Estado, matrimonio civil, educación laica, etc. La crisis económica que experimentó el país hacia esa época agravó el conflicto, y se rompió así la coalición liberal-conservadora en 1873 pasando a gobernar por el resto del periodo presidencial de Errázuriz una alianza liberal-nacional-radical, con exclusión de los conservadores. Posteriormente fue elegido un Presidente liberal, Aníbal Pinto, (1876-1881) durante cuyo mandato el país debió enfrentar dos hechos de gran importancia: una profundización de la crisis económica a causa de la caída del precio de los productos minerales de exportación y también de los agrícolas y la guerra del Pacífico, que fue realmente la guerra por la conquista de la región salitrera en poder de Perú y Bolivia. Estos dos hechos paralizan totalmente el proceso de discrepancias ideológico-políticas en el seno de la clase dominante, las que vendrán a resolverse en forma institucional con posterioridad.

1.2 Segunda etapa: la guerra del Pacífico y el enclave salitrero.

Cuando asumió Aníbal Pinto la presidencia de la República, Chile atravesaba por una de las crisis económicas más graves en su corta vida como nación independiente. Plenamente inserta su economía en el mercado mundial, como ya hemos visto, la crisis capitalista de los años 1873-1878 le afectó gravemente, agregando a ello algunos hechos que agravaron la situación aún más en el caso específico de Chile. Se produjo así una crisis de sus sectores exportadores. En lo que se refiere a sus exportaciones agrícolas, le afectó un acelerado descenso de sus precios en el mercado mundial, como consecuencia de la incorporación a la producción mundial de vastos territorios vírgenes en Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina y de la utilización de nuevas técnicas de producción que los empresarios chilenos no dominaban. En el caso de sus exportaciones mineras-mucho más importantes componentes de sus exportaciones que los productos agrícolas-los ingresos disminuyeron en forma aún más acentuada debido a la incorporación al mercado mundial de nuevos sectores productivos, al aumento correlativo de la producción mundial y al perfeccionamiento técnico que permitía rebajar costos y precios a los países competidores, dejando a la burguesía minera chilena en imposibilidad de competir por su atraso tecnológico.

La extrema vulnerabilidad de la economía chilena ante las fluctuaciones de la economía mundial quedó bien reflejada con lo sucedido con la industria del cobre, su más importante producto de exportación hasta antes del surgimiento del enclave salitrero. "Hacia 1859, Chile producía el 61% de la producción mundial de ese metal. A raíz de la crisis mundial de la época, el cobre perdió dos tercios de su valor, cayendo el precio de la tonelada de 108 libras a 37 y provocando una brutal disminución de la producción nacional y de los ingresos globales por exportaciones. Puede afirmarse que en esos pocos años (1873-1878) se cierra un primer ciclo del cobre chileno".(12)

La crisis del sector externo de la economía se tradujo, lógicamente, en una profunda recesión interna y en una aguda crisis social que amenazó seriamente la estabilidad política del régimen. La guerra del Pacífico constituyó así una especie de salida a la crisis nacional, aunque confluyeron varios factores para su desencadenamiento. Hacia 1878, la situación era casi insostenible: no se pudo pagar el sueldo a los empleados del Estado, se suspendieron casi todas las obras públicas y se decretó la inconvertibilidad de los billetes que emitían los bancos privados, dándoles curso legal forzoso. La libertad de emisión del papel moneda por parte de los consorcios bancarios se tradujo en una acelerada inflación y en la progresiva desvalorización del peso, golpeando fuertemente a quienes vivían de un sueldo o salario.

(12) Labrousse, Alain, "El experimento chileno. Reformismo o revolución", Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1973, p. 33.

A partir de 1850 se había generalizado en Europa el uso de abonos químicos, y el salitre adquirió a partir de entonces una creciente importancia. Ubicado en las provincias de Antofagasta y Tarapacá, pertenecientes a la sazón a Bolivia y Perú, fue descubierto por exploradores chilenos y muy pronto se inició su explotación, en la cual tomaron parte muy activa capitalistas chilenos. El interés por el salitre movilizó a la activa burguesía minera chilena, y agitó el problema limítrofe entre Bolivia y Chile, y posteriormente el de delimitación fronteriza entre Chile y Perú, ya que los inversionistas chilenos avanzaron hasta la provincia de Tarapacá en su afán de explotación del salitre. Como se trataba de provincias casi desérticas, muy pronto se encontraron habitadas mayoritariamente por chilenos. Según Jobet, "el censo de 1876 indica que de 8.507 habitantes, en Antofagasta, 6.554 eran chilenos, 1.266 bolivianos y el resto de distintas nacionalidades. Lo propio ocurrió en Tarapacá, en cuya industria salitrera trabajaban 10 mil obreros chilenos".(13)

En 1866 se firmó un tratado entre Chile y Bolivia -- que intentó zanjar el conflicto fijando el paralelo 24 como límite entre ambas naciones y la repartición por iguales partes de los minerales provenientes de la zona comprendida entre los paralelos 23 y 25. Ante el fracaso de esta fórmula, se firmó un nuevo tratado en 1874 que conservó el paralelo 24 como límite, pero suprimió el sistema de mediería e introdujo una cláusula protectora de los

(13) Jobet, Julio César, op. cit. p, 64.

inversionistas chilenos; los derechos de exportación de los minerales extraídos de la zona no podrían exceder del monto que tenían al suscribirse el tratado y las personas, industrias y capitales chilenos quedarían exentos de cualquier otro tipo de contribuciones por 25 años.

La creciente importancia económica del salitre y la expansión de los capitales chilenos e ingleses en sociedad con ellos hacia las zonas productoras generaron, a pesar de lo anterior, nuevos conflictos políticos. En 1873 el gobierno peruano decretó el estanco del salitre y en 1875 el monopolio del Estado sobre los yacimientos salitreros de Tarapacá, expropiando las empresas chilenas. El gobierno boliviano, por su parte, celebró en 1873 un tratado secreto de alianza militar con Perú ante la eventualidad de una guerra con Chile y, en 1878, estableció un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado, en violación a las disposiciones del tratado de 1874. (14)

El hecho anterior agudizó el conflicto y estalló la guerra. La superioridad militar de Chile produjo rápidos resultados y, en 1880, las tropas chilenas ocupaban Lima e imponía Chile un tratado mediante el cual arrebatava a Perú y Bolivia las ricas provincias de Tarapacá y Antofagasta, privando a los bolivianos del acceso al mar.

(14) Cfr. Villalobos, Sergio, et al, op. cit., vol. IV, p. 586.

La burguesía chilena se encontró de esta manera con inmensos recursos, que le permitirían hacer frente a la crisis nacional e internacional y consolidar su dominación política. Sin embargo, no fue la principal beneficiaria de los recursos provenientes de la guerra de conquista realizada por tropas chilenas. Por el contrario, fue el imperialismo inglés el beneficiario principal de la llamada guerra del Pacífico.

Para explicar el fenómeno descrito es preciso tener presente dos hechos importantes:

- 1) La penetración de capitales ingleses que existía en Chile a la fecha de la guerra de 1879. En esa época, Inglaterra era el principal acreedor del gobierno chileno, el que, a su vez, era el segundo cliente latinoamericano de los ingleses pues el 49% del comercio exterior de Chile se realizaba con Inglaterra. En 1875, capitalistas chilenos controlaban el 18% de los capitales invertidos en las regiones salitreras y los ingleses un 15% de los mismos, asociados muchas veces con capitales chilenos. (15)
- 2) La solución dada por el gobierno chileno al régimen de propiedad de los yacimientos salitreros, que ilustra en toda su magnitud el carácter dependiente de la burguesía chilena y su virtual entrega al im-

(15) Cfr. Labrousse, Alain, op. cit., p.34.

perialismo inglés. En efecto, cuando el gobierno peruano nacionalizó los yacimientos salitreros en 1875, entregó a los propietarios bonos que garantizaban que serían indemnizados. En 1879, cuando era inminente la derrota peruana, los tenedores de bonos los vendieron a precios no mayores al 11% de su valor inicial a hombres de negocios y especuladores. En su mayoría, los adquirentes eran capitalistas ingleses que contaban con la seguridad de que el gobierno chileno respetaría sus derechos al finalizar la guerra. Y para hacer aún más lucrativo el negocio, obtuvieron préstamos de los bancos chilenos para la adquisición de los bonos. (16)

Finalizada la guerra, el gobierno chileno decidió en tregar en propiedad los yacimientos a los tenedores de bonos, pasando de este modo el imperialismo inglés a detentar, en poco tiempo, la casi totalidad de los yacimientos salitreros obtenidos gracias a la guerra de conquista que fue la guerra del Pacífico. Como lo señala Aníbal Pinto, es cierto que ello se puede explicar, en parte, por las -- presiones de Inglaterra, que tenía ya una gran influencia sobre las decisiones económicas y políticas del gobierno chileno. Pero la explicación fundamental, sostiene el autor en forma acertada, radica en la "propia renuncia o fal

(16) Cfr. Ramírez Necochea, Hernán "Historia del imperialismo en Chile", Editorial Universitaria, Santiago de -- Chile, 1960, p. 97.

ta de decisión y propósito del grupo dirigente para consolidar el dominio nacional".(17)

Dicha falta de capacidad de los empresarios privados nacionales para reivindicar para sí el manejo del negocio salitrero, por una parte, y del Estado, por la otra, para convertirse en productor directo, dio como resultado que Chile se convirtiera en un enclave salitrero del imperialismo inglés. La burguesía chilena se conformó con el aumento de los ingresos fiscales por concepto de exportación de salitre. En diez años, los ingresos fiscales se cuadruplicaron y con ello fue el Estado el que se robusteció, ya que el agente que administraba y decidía cómo emplear la renta generada por el comercio exterior era el gobierno, que emprendía nuevas obras públicas, creaba servicios y generaba nuevos empleos, dando origen así a una nueva capa social: las capas de sectores medios.(18)

Al no tener la propiedad directa del sector más productivo de la economía nacional, la clase dominante chilena se subordinó tempranamente al capital extranjero. Sus relaciones con dicho capital eran a título individual, en algunos casos como abogados, gestores o proveedores de las empresas inglesas, y como clase, a través del Estado, que de esta manera readquirió importancia en la política nacional. Los -

(17) Pinto, Aníbal, en "Chile Hoy", p.13.

(18) Cfr. Gil, Federico, "El sistema político de Chile", Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1969, p.62.

ingresos provenientes del salitre permitían también a esta clase derogar el sistema de impuestos directos que gravaban el capital.

La clase dominante emprendió tras la guerra del Pacífico otra empresa militar que la consolidó en el poder: la llamada pacificación de la Araucanía. Se trataba de cuatro ricas provincias del sur de Chile sobre las cuales el gobierno no había logrado establecer una dominación clara y en la que vivían los indígenas araucanos: Arauco, Bío-Bío, Malleco y Cautín. Estos indígenas no estaban asentados en lugares fijos, sino que circulaban libremente por extensas zonas que controlaban militarmente, impidiendo la explotación agrícola por parte de los capitalistas chilenos. Hacia 1883, los indígenas son derrotados, diezmados y despojados de sus tierras, incorporándose dichas enormes extensiones de territorio al sistema de latifundio.

La incorporación de nuevas tierras para el cultivo se completó con el inicio de la explotación económica de Magallanes. La Araucanía llegó pronto a ser "la zona de mayor producción cerealera, la más importante región maderera y el asiento principal de la ganadería vacuna, pero su control económico quedó en manos de grandes latifundistas y concesionarios. Magallanes se transformó en la base de una poderosa industria ganadera, pero su riqueza quedó con-

centrada en tres o cuatro grandes familias, favorecidas - con el otorgamiento de concesiones que aquí alcanzaban di mensiones monstruosas".(19)

Gracias a los altos tributos aplicados a la exportación salitrera y a la extensión de la superficie cultivable que pasó a poder de los latifundistas, la burguesía nacional se enriqueció y reafirmó su dominación política sobre el conjunto de la sociedad. Pero ello se hizo a -- costa de una desnacionalización económica de grandes magnitudes que instaló a Chile, a partir de esa época, como u na nación monoexportadora de productos minerales, depen-- diente y subdesarrollada. Los trabajadores no experimentaron bienestar apreciable con este proceso y empezaron a organizarse para defender sus derechos.

El periodo de bonanza económica permitió a la clase burguesa realizar reformas que habían quedado suspendidas por la crisis económica previa a la guerra del Pacífico, y por la guerra misma. En 1884, bajo la presidencia de - Domingo Santa María, se eliminaron las restricciones al -- voto relacionadas con los ingresos y la propiedad estable cidas en la Constitución de 1833, concediendo derecho a - sufragio a todos los chilenos mayores de 25 años, se promulgaron leyes de matrimonio civil y de registro civil y se reglamentaron y ampliaron las garantías individuales.

(19) Jobet, Julio César, op. cit., p.72.

Se mantuvo, sin embargo, la unión del Estado y la Iglesia, situación que perduraría hasta la vigencia de la Constitución de 1925. (20)

Es importante señalar que el capital extranjero, fundamentalmente el inglés, logró el control de los yacimientos salitreros en un proceso que si bien fue rápido, no fue instantáneo. Al asumir la presidencia de la República José Manuel Balmaceda, quien como Ministro del Interior de Santa María fue el inspirador de las reformas liberales, el Estado era aún propietario de importantes yacimientos salitreros, y los empresarios nacionales controlaban aún un porcentaje minoritario de los mismos. Entre ambos, poseían alrededor de un 35 a un 40% de las propiedades salitreras, controlando el resto el capital extranjero.

Al ocupar Balmaceda la presidencia de la República, el país se encontraba en una fase económica de auge derivado de las rentas salitreras y el aumento de producción agrícola proveniente de la incorporación de nuevas tierras al cultivo. La progresiva hegemonía que iba logrando el capital extranjero sobre el conjunto de la clase dominante nacional al ir extendiendo su influencia no sólo a la producción salitrera sino a otros rubros de la economía nacional, auspició el surgimiento de un sector finan-

(20) Cfr. Gil, Federico, op, cit, p.62.

ciero y comercial enteramente subordinado al capital inglés. Los terratenientes, por otra parte, se articulaban también al enclave salitrero y a la dominación del capital extranjero.

El Estado se erigió nuevamente como el centro vital del capitalismo chileno; es el lugar en el que las distintas fracciones o sectores de la clase burguesa pueden negociar su participación en los ingresos provenientes de los impuestos a exportación de salitre y es, además, el real interlocutor del capital inglés.

Lo anterior explica el conflicto derivado de la orientación que Balmaceda imprimió a su gobierno, el que no logró ser zanjado pacíficamente al interior de la clase dominante y que finalizó con una guerra civil en 1891. En efecto, Balmaceda utilizó los ingresos fiscales en la construcción de obras de infraestructura como carreteras, puentes, ferrocarriles, alumbrado público, etc., con el propósito de estimular a la incipiente burguesía industrial de la época, cuyo desarrollo era indispensable en la óptica balmacedista para la consolidación de la independencia nacional.

Con el mismo propósito, Balmaceda intentó crear un Banco estatal que nacionalizara el crédito para ponerlo a disposición de la burguesía industrial y que sirviera de

puntal para la reconversión metálica, poniendo límites a la especulación financiera. Propuso, además, la nacionalización de la industria salitrera la que debería quedar en manos del Estado y de los empresarios chilenos. Y completó su programa político, que intentó poner en aplicación durante su gobierno, con un plan de distribución de tierras entre pequeños propietarios.

Los sectores financieros, terratenientes y exportadores se unieron para impedir que Balmaceda consumara sus propósitos. Teniendo, además, todo el apoyo del capital inglés, lograron que la Armada se levantara en contra del gobierno constituido, precipitando al país a una cruenta guerra civil, ya que el Ejército permaneció fiel al Presidente Balmaceda. Tras ocho meses de enfrentamientos, triunfaron los insurrectos, que habían levantado las banderas del parlamentarismo para hacer frente a una supuesta tiranía, basada en lo que los opositores a Balmaceda llamaban una excesiva autoridad presidencial. La mayor parte de los historiadores nacionales reducen la polémica entre Balmaceda y sus enemigos políticos a estos aspectos jurídicos-políticos, sin penetrar en los aspectos socio-económicos del debate, que son, a nuestro juicio, los fundamentales.(21)

(21) Ver sobre el particular la obra de Hernán Ramírez Necochea, "Balmaceda y la contrarrevolución del 91", Editorial Austral, Santiago de Chile, 1958.

Tras el suicidio de Balmaceda, quien no sobrevivió a su derrota, dejando un testamento político que se parece mucho al último discurso que pronunciara Salvador Allende en el sitio de La Moneda, se abrió un largo periodo que a barca desde 1891 hasta 1920, denominado la República Parlamentaria por la historiografía oficial siempre atenta a los aspectos legales y constitucionales de la política.

Durante la vigencia de la llamada República Parlamentaria se configuraron tendencias y fenómenos que imprimieron su sello al periodo. Sus principales características son las siguientes:

- 1) En el aspecto político-institucional, la autoridad presidencial disminuyó enormemente, se multiplicaron los partidos políticos y "los oligarcas del Congreso llegarían a ostentar un poder sin -- restricciones", (22)

Las modificaciones legales introducidas para ampliar el derecho a sufragio dieron como resultado la introducción del cohecho practicado por los -- partidos de la oligarquía y acentuaron el caracter plutocrático de los sucesivos gobiernos de esta República Parlamentaria , que a juicio del profesor norteamericano Federico Gil, representa el periodo más bajo y corrupto de la historia política de Chile .(23)

(22) Gil, Federico, op. cit., p. 65.

(23) Cfr., Gil Federico, op. cit., p.69-71.

- 2) Desde el punto de vista de la soberanía económica nacional, el periodo no es menos nefasto que en materia política. En efecto, la alianza entre la burguesía criolla y el imperialismo inglés que de terminó el derrocamiento de Balmaceda se consolidó durante este lapso, y el país asistió a un proceso acelerado de desnacionalización de su economía en favor de los capitales ingleses. El gobierno vendió a las empresas inglesas sus propiedades salitreras y lo mismo hicieron los empresarios privados chilenos. Se acentuó el carácter minero-exportador de la economía nacional y, por lo tanto, su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado mundial, verdadera enfermedad crónica de los países latinoamericanos en general.
- 3) Desde el punto de vista de las clases sociales en el poder hubo también algunas modificaciones, más bien desplazamientos graduales de algunos sectores hacia lugares de privilegio en el seno del Estado, y disminución de la importancia de otros sectores. La burguesía minera nacional, por ejemplo, perdió progresivamente el rol hegemónico que desempeñó durante largo tiempo en la escena política nacional. Los terratenientes perdieron tam-

bién la fuerza hegemónica que tuvieron en periodos anteriores, pero conservaron el poderío suficiente para entrar en alianzas con otras capas de la burguesía y controlar los órganos importantes del aparato del Estado. La burguesía industrial no jugó en el periodo un rol importante en el bloque en el poder, aún cuando continuó desarrollándose y reclamando para sí un lugar en el aparato estatal.

Una característica dominante en la dinámica social y política de este periodo es la movilidad de los capitales, que se desplazaron con rapidez desde el sector agrario y financiero hacia el naciente y potencialmente importante sector industrial manufacturero. Se produjo-desde muy temprano-un entrecruzamiento de intereses económicos entre las distintas capas de la burguesía chilena, hecho que facilitará posteriormente la unidad política de la clase dominante,

- 4) En cuanto a los partidos políticos, siguieron existiendo básicamente los mismos que fueron creados durante las etapas anteriores del desarrollo político chileno, y que se unieron en una especie de santa alianza oligárquica en contra de Balmacedá. El Partido Conservador tuvo un repunte electoral

gracias a la ley sobre las Comunas autónomas , - que facilitaba a los latifundistas el cohecho y el control total de las votaciones en las localidades rurales. Siguió representando los intereses de terratenientes, grandes comerciantes y banqueros y continuó siendo un partido confesional - estrechamente ligado a la Iglesia Católica.

El Partido Liberal representaba, igualmente, a sectores de la burguesía comercial, minera y financiera y a sectores de la naciente burguesía industrial. Sus diferencias con los conservadores eran mínimas. El Partido Radical, que había sido fundado por la burguesía minera en 1861 y que acogió a los liberales más ortodoxos, incorporó en su seno a sectores de la incipiente burguesía industrial y algunos sectores medios que empezaban en la época a jugar un rol político de cierta importancia. Finalmente, el Partido Democrático fundado en 1887 como una escisión del Partido Radical, no logró convertirse realmente en un polo de atracción para los asalariados, y si al principio "representó una fuerza educativa y de entrenamiento, más tarde se transformó en una influencia restrictiva. El movimiento obrero superó el refor-

mismo limitado del partido".(24). Por lo anterior, su influencia fue muy limitada y aparte de hacer elegir algunos diputados de sus filas, no incidió mayormente en la lucha política del periodo.

- 5) Otra de las características de esta etapa, que sólo mencionaremos en este punto pues será desarrollada más adelante, fue la aparición de un proletariado - numeroso y combativo, que comenzó a dar demostración de una capacidad de organización reivindicativa y - política que será pronto una de las características típicas de la política chilena. Fiel a su naturaleza de clase, el Estado oligárquico de la época reprimió duramente al movimiento sindical, en particu^llar al que se desarrollaba en los yacimientos salitreros, asegurando así al capital extranjero las -- condiciones necesarias para la explotación de los - recursos naturales de Chile. De esta forma, la bur^guesía nacional pagaba los menguados beneficios que recibía por concepto de derechos e impuestos de ex- portación del salitre.

Hacia comienzos de la segunda decena del siglo XX, era evidente que la transformación que había experimentado la - sociedad chilena reclamaba de cambios políticos sustanciales. La aparición en escena de la burguesía industrial, la

(24) Angell, Alan, "Partidos políticos y movimiento obrero en Chile". Editorial Era, México, 1974, p.34.

emergencia de las capas medias y la agudización de la lucha de clases, motivada por la aparición del proletariado y los comienzos de su organización como clase, no podían seguir - teniendo como marco político un Estado oligárquico y plutocrático, impermeable a los cambios sociales. Un suceso exterior inesperado vino a agudizar las contradicciones internas: la invención del nitrato sintético por parte de los alemanes durante el curso de la Primera Guerra Mundial. "La nación ya no podía depender de los ingresos provenientes -- del salitre para financiar el gasto público, y si se requirían nuevos impuestos, los intereses de los terratenientes podrían verse afectados. Los trabajadores mineros habían si do fuertemente impactados, y las filas de los desocupados a mentaban a diario, además, sufrían dificultades los intereses agrícolas del valle central y de las regiones sureñas, privados de su mercado del norte. En último término, no fue insignificante la influencia de revoluciones sociales recientes y exitosas en México y Rusia". (25)

(25) Gil, Federico, op cit., p.74.

1.3 Las modificaciones sociales y económicas.

A medida que se extendía por el país el sistema capitalista, se fue conformando un proletariado numeroso y de elevada combatividad, cuyo ingreso a la instancia política—logrado en un proceso de luchas bastante largo—pasó a convertirse en una de las singularidades de la sociedad chilena.

Los primeros núcleos proletarios propiamente tales se desarrollaron en el sector minero, tanto del oro, la plata, el carbón, el cobre, como posteriormente, del salitre. Otros núcleos importantes de trabajadores eran los campesinos, que se empezaron a convertir en obreros agrícolas a medida que se extendían en el campo chileno las relaciones capitalistas de producción, proceso que de todas maneras era lento.

La concentración de trabajadores en sectores apartados del resto del país y sometidos a la explotación directa del capital extranjero, secundado en su explotación intensa por la burguesía nacional y el aparato del Estado, determinó que los obreros salitreros se constituyeran en uno de los sectores más conscientes y combativos del incipiente movimiento obrero chileno. Su número fue aumentando sustancialmente a medida que crecía en importancia el negocio del salitre: "de poco más de dos mil en 1880, pasa

a trece mil en 1890, veinticuatro mil en 1904 y a cuarenta y cinco mil en 1912", (26). Según el censo de 1907, -- "de una población activa de 1.250.000 personas, que constituían a su vez el 40% de la población nacional, casi un millón eran trabajadores asalariados. De ellos, 300.000 eran obreros; 240.000 trabajadores ambulantes; 220.000 -- campesinos; 40.000 mineros y 140.000 comerciantes y empleados de comercio".(27)

Las condiciones de extrema explotación convirtieron pronto a los sectores del proletariado minero del norte de Chile en una avanzada importante del proceso de la organización del proletariado como clase. Totalmente excluido del acontecer político nacional y sin contar con ningún tipo de legislación social que protegiera mínimamente sus derechos, el proletariado nacional comenzó a organizarse. Entre los obreros portuarios y del sector industrial surgieron las sociedades de resistencia y los primeros sindicatos. En el norte surgieron las Mancomunales obreras. Todas perseguían las mismas finalidades: luchar por mejorar las deplorables condiciones de trabajo imperantes en la época, aumentar los salarios, totalmente insuficientes en condiciones de devaluación monetaria y de inflación, proporcionar a los trabajadores una mínima estabilidad en sus puestos de trabajo, luchar por el abaratamiento de --

(26) Ramírez Necochea, Hernán, "Historia del movimiento obrero en Chile. Antecedentes", Editorial Austral, -- Santiago de Chile, 1960, p.104.

(27) Jobet, Julio César, op. cit., p. 133.

los artículos de primera necesidad, etc. A medida que el nivel de conciencia de los trabajadores va aumentando como producto de las brutales represiones de que eran objeto, el movimiento sindical se fue politizando y se erigiría en el factor fundamental del auge de la izquierda chilena y del posterior triunfo electoral de la Unidad Popular.

El comienzo del siglo XX constituye el marco histórico del ingreso de los obreros chilenos a la lucha social. El 10. de mayo de 1900 se formó la primera Mancomunal obrera con los portuarios de Iquique, extendiendo posteriormente su influencia a todo el norte grande del país. Dos años más tarde, esa organización dirigió la primera huelga general de la zona. En 1903 se fundó la Mancomunal de Antofagasta y el proceso organizativo se extendió hasta el sur del país, estallando en Lota y Coronel una de las primeras huelgas del carbón, que duró 43 días y que fue violentamente reprimida por el Ejército, en el año 1903. (28)

Ese mismo año 1903, los trabajadores de Valparaíso iniciaron una huelga general por mejores condiciones de vida, la que fue violentamente reprimida, resultando más de 100 muertos. Dos años más tarde, la capital fue escenario

(28) Cfr. con Vitale, Luis, "Interpretación marxista de la Historia de Chile" Tomo V, Editorial Fontamara, Barcelona, 1980, p.42-43.

de una gigantesca movilización obrera, calificada de levantamiento popular por la prensa de la época. Los trabajadores se apoderaron de las calles de Santiago por 48 horas, exigiendo ser recibidos por el Presidente de la República para plantearle sus reivindicaciones sociales. Ante la magnitud de la movilización popular, el gobierno de Germán Riesco movilizó varios regimientos y organizó guardias blancas de jóvenes de la oligarquía. Los que en forma conjunta reprimieron salvajemente a los trabajadores, resultando 500 obreros asesinados y más de 1,500 heridos, según periódicos populares de la época.(29)

En 1907, como respuesta a una huelga general en los yacimientos salitreros del norte en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo, el gobierno movilizó en barcos de guerra tropas y consumó en la Escuela de Santa María de Iquique una de las peores represiones de la accidentada historia de la lucha de clases en Chile: entre 2 mil y 2 mil quinientos muertos, según Julio César Jobet, cifra que Alan Angell, recogiendo testimonios de la época hace llegar a tres mil. (30)

La respuesta de la clase obrera a la sobreexplotación capitalista y a la violencia gubernamental tuvo dos aspectos centrales: la ampliación y consolidación de los sindicatos para la defensa de sus reivindicaciones propia

(29) Cfr. con Vitale Luis, op. cit. p. 47.

(30) Cfr. Jobet, Julio César, op. cit., p. 139 y Angell Alan, op. cit., p.24.

mente laborales, y el apoyo masivo a los partidos revolucionarios que se formaron durante el periodo: el Partido Obrero Socialista, que se fundó en 1912 y que se transformó en el Partido Comunista de Chile en 1920, y el Partido Socialista, que se creó en 1933, organizaciones que a partir de entonces se convirtieron en los representantes políticos de la clase obrera.

Como lo señala Angell, el movimiento obrero chileno se caracterizó, desde sus inicios, por "la abundancia de pequños sindicatos y la consiguiente debilidad de la mayoría de ellos".(31) Esta característica determinó a su vez otros rasgos típicos del sindicalismo chileno, que se afianzan durante el periodo que analizamos, es decir, durante la primera mitad del siglo XX: la tendencia a la constitución de grandes federaciones u organizaciones nacionales que agrupan a todos los sindicatos organizados y la politización visible del movimiento obrero, que tempranamente canalizó su apoyo a los partidos de izquierda marxista, y en menor medida a los partidos de centro: el Partido Radical primero, y la Democracia Cristiana después.

A medida que avanzaba el proceso de industrialización y que pasó de la etapa del crecimiento hacia afuera a la fase del crecimiento hacia adentro o sustitución de importaciones, la clase obrera aumentó en número y en importanta

(31) Angell, Alan, op. cit. p.13 .

cia social y económica. En 1909 se creó la primera gran organización sindical nacional, la Federación Obrera de Chile, que si bien inicialmente perseguía sólo algunas -tibias metas reivindicativas, pasó a reflejar hacia 1920-1922 la influencia del primer partido marxista chileno: el Partido Comunista, sucesor del Partido Obrero Socialista. La FOCH se pronunció oficialmente por la supresión del sistema capitalista y por el control obrero de las -fábricas, elevando el nivel de conciencia general de los trabajadores pero al mismo tiempo debilitando la organización al identificar la suerte de la FOCH con el Partido Comunista.

Ante el avance y la progresiva toma de conciencia de los trabajadores, el sistema político y la dominación oligárquica se resquebrajaron, según veremos con mayor detalle en el punto siguiente. Por segunda vez en la historia nacional, las Fuerzas Armadas intervinieron activamente en el proceso de configuración del Estado, en una coyuntura clave, obligando a la clase política a adoptar una serie de reformas institucionales de gran importancia: una nueva Constitución y un Código del Trabajo que legalizó y reglamentó la actividad de los sindicatos, hasta entonces ilegales, dando origen al marco jurídico de las relaciones de trabajo que requería el sistema capita-

lista para evitar que la acción organizada de los obreros desbordara los límites del sistema.

En 1936 la Federación Obrera de Chile, FOCH, cedió su lugar a una nueva organización de los trabajadores: la -- Central de Trabajadores de Chile, que fue la resultante de la línea política del Frente Popular que los comunistas y socialistas pusieron en práctica en Chile siguiendo las orientaciones generales de la Tercera Internacional. Como dichos partidos entraron a colaborar con el gobierno del Frente Popular chileno, que fué el único experimento de esta naturaleza en América Latina, la CTCH tuvo por primera vez un apoyo gubernamental, que se les había negado totalmente a los sindicatos hasta entonces. Ello no quiere decir que el gobierno hubiera pasado a controlar los sindicatos, sino que existía una colaboración debido a la incorporación de los partidos marxistas al gobierno, colaboración que terminó abruptamente cuando se quebró la alianza política entre el Partido Radical y los partidos marxistas, hacia 1948.

En sus mejores momentos la CTCH llegó a representar el 90% de los trabajadores sindicalizados en Chile. Tres fueron las características fundamentales de su accionar:

- a) la moderación de su línea política, ya que no se predicaba la destrucción del capitalismo y la lucha sin cuartel

en contra de la burguesía, sino que sostenía la necesidad de una alianza entre la burguesía nacional y los trabajadores; b) su colaboración con los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y, durante un breve lapso, - con Gabriel González Videla, Presidentes radicales elegidos por el Frente Popular, es decir, con el apoyo de los partidos marxistas. Sin embargo, hay que remarcar el hecho de que este breve periodo fue el único en que existió tal colaboración de socialistas y comunistas con el gobierno, y ello como consecuencia de la incorporación de socialistas y comunistas a algunas carteras ministeriales. A partir de los cincuenta, dicha colaboración desapareció para dar paso a una lucha política entre los trabajadores, colocados en la oposición, y los partidos de la burguesía en el gobierno. Esta lucha se profundizará seriamente durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular;

c) la competencia interna que se dio en el seno de la CTCH por la hegemonía del movimiento sindical entre los comunistas y la nueva fuerza marxista de izquierda revolucionaria que se incorporó en 1933 a la lucha de clases en Chile: el Partido Socialista, otra de las características específicas que acompañará al movimiento popular de Chile hasta el presente.

La etapa del Frente Popular terminó con la llegada de

la política de guerra fría a América del Sur, con la derechización del Partido Radical y con la ilegalización y persecución en contra del Partido Comunista, la principal fuerza política en el seno del movimiento obrero. La CTCH desapareció por completo y durante cinco años, el movimiento obrero chileno no logró articularse a nivel nacional hasta que, en 1953, se llegó a un acuerdo político entre la izquierda marxista, los radicales e incluso los sectores de obreros cristianos afiliados a lo que entonces era la Falange y que posteriormente, en 1957, pasaría a ser el Partido Demócrata Cristiano, para formar una organización que agrupará a todos los trabajadores sindicalizados, fueran éstos obreros o empleados: la Central Unica de Trabajadores, CUT.

La creación de la CUT representó un importante salto cualitativo en la organización de los trabajadores chilenos. Se trataba de una organización de clase mucho más definida que la CTCH que luchaba por reemplazar la sociedad capitalista por una sociedad socialista y que es ampliamente representativa de los trabajadores industriales, hasta que en 1967 se dictó la ley de sindicatos del campo. Se mantuvo en su seno la hegemonía de los partidos Socialista y Comunista, pero el sectarismo y la identificación absoluta de la lucha sindical con los partidos de iz-

quierda que habían sido nocivos en el pasado desaparecieron de manera considerable para dar paso a la unidad clasista, otra de las características del movimiento popular chileno, que perdura hasta el presente.

La experiencia frente populista o de colaboración de clase en la que los partidos con mayor representatividad de la clase obrera apoyaron a la burguesía industrial en el proceso de sustitución de importaciones y de industrialización constituyó la puerta de entrada de la clase obrera a la instancia política, tras largos años de duras luchas sociales, represión y marginamiento de las decisiones nacionales. La mayor parte de los autores que estudian el periodo están de acuerdo en un análisis crítico de la experiencia, ya que la clase obrera, en realidad, no obtuvo ventajas de importancia en ese periodo, puesto que los partidos de izquierda se limitaron a un participar en forma subordinada al proyecto de la burguesía en el gobierno, sin fuerzas para imponer las transformaciones sociales, económicas y políticas por las que luchaban. (32)

B) Modelo económico y ascenso de las capas medias y la burguesía industrial.

Entre 1920 y 1938 Chile vivió acontecimientos políticos que rompieron el decurso más o menos normal del siste-

(32) Cfr. Vitale, Luis op. cit., p.p.129-152; Angell, Alan - op.cit. pp.113-131; Jobet, Julio César, op. cit. p.p. 200-208.

ma político oligárquico que tenía hasta entonces. Los acontecimientos visibles en la esfera política reflejaron fenómenos económicos y sociales que no teniendo la espectacularidad de los primeros, transformaron profundamente la sociedad chilena.

La crisis del salitre dio por terminado el periodo -- del enclave, situación que se agravó con las repercusiones de la gran crisis capitalista de 1929 y sus efectos sobre América Latina en general, y sobre Chile en particular. La decadencia de los terratenientes y de la burguesía intermedia del modelo exportador dio como resultado lo que Falletto y Ruiz llaman "una escisión en el bloque dominante" (33) , que culminaría con el ascenso político de la burguesía industrial y de las capas medias al poder en la crisis política de 1924. En dicha coyuntura, las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, el Ejército, actuaron como brazo armado de la nueva alianza de clases hegemónica y reinstalaron en el gobierno a Arturo Alessandri, generando una apertura del sistema político hacia las capas medias y la clase obrera que impidió la agudización de la lucha de clases en este periodo tan difícil para la clase dominante. Esto demostró la extraordinaria capacidad de la clase dominante chilena para "institucionalizar" la lucha de clases y los conflictos sociales y políticos, de manera que el sistema po-

(33) Citado por de Riz, Liliana "Sociedad y Política en Chile". (De Portales a Pinochet), UNAM, México, -- 1979, p.42.

lítico chileno-democratizado y ampliado-salió indemne de esta coyuntura crítica.

Haciendo uso de las ventajas de esta democratización, la izquierda de la época, Partido Comunista, Partido Democrático y FOCH, levantó la candidatura de José Santos Salas en la elección para suceder a Alessandri en 1925. A pesar del abultado triunfo del candidato de la burguesía, Emiliano Figueroa, Salas obtuvo poco menos del 30% de los votos, hecho que generó grandes manifestaciones populares en Santiago que reclamaban fraude electoral. "Turbas armadas de garrotes, de hachas, de cuchillos, recorrieron las calles de Santiago durante toda esa tarde y todo el día 26, manteniendo la ciudad bajo su control", recuerda un testigo de la época.(34)

Ante el peligro de un levantamiento popular, el nuevo Presidente designó un hombre fuerte como Ministro del Interior: al general Carlos Ibáñez del Campo que, un año después, asumió la presidencia. "El ascenso de Ibáñez al poder fortaleció la alianza entre las capas mayoritarias de la burguesía y el imperialismo norteamericano, que ya había desplazado a su competidor inglés del control de las principales áreas de la economía chilena".(35). Se trataba, en realidad, de un proceso que se había iniciado durante la gestión de Alessandri como Presidente y que no era -

(34) Citado por Vitale, Luis op. cit., p.98 Se trata de los "Recuerdos de un soldado" de Carlos Sáez, Tomo II, p. 26, Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1933.

(35) Vitale, Luis, op. cit. p. 99 .

sino el resultado de la crisis salitrera y del inicio del segundo ciclo del cobre chileno en el mercado mundial, ahora bajo control norteamericano, lo cual generó la dependencia de la economía del país respecto de Estados Unidos.

En julio de 1931, Ibáñez fue derrocado por un frente formado por casi todas las fuerzas sociales y políticas - del país. Tras su derrocamiento se sucedieron gobiernos de corta duración. La crisis económica mundial y nacional afectó a todos los sectores del país. Las Fuerzas Armadas se vieron penetradas por la crisis y así se produjo una singular República Socialista que duró 13 días, como producto de un golpe de oficiales progresistas hasta que, en 1932, volvió a triunfar Arturo Alessandri en elecciones en las que recibió ahora el apoyo de los sectores mayoritarios de la burguesía nacional.

En este segundo periodo de Alessandri, se inició en Chile una fase económica similar a la que se producía en la mayor parte de los países de América Latina y que se conoce con el nombre de etapa de sustitución de importa-ciones. De esta forma, se dio especial impulso a una industria dependiente de insumos y maquinaria extranjera y que producía bienes de consumo para el mercado interno.. Al mismo tiempo, en el caso chileno, se basó en la explotación intensiva de una mano de obra barata y abundante

debido a la crisis salitrera.

Durante el periodo del Frente Popular, (1938-1947) esta industria que producía para el mercado interno tuvo su etapa de crecimiento más dinámico. Esto se debió a la creación de un organismo estatal, la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) que auspició y orientó la participación del Estado como inversionista, empresario y constructor de obras de infraestructura. Así el desarrollo industrial "que no podía seguir creciendo sin desarrollar nuevas fuentes de energía y acero"(36), encontró en el Estado, a través de la CORFO, su principal impulsor.

La industrialización del país, que tuvo como pilar básico al Estado como inversionista y constructor, fue una etapa que duró aproximadamente hasta fines de la década de los cincuenta, época en que se agotó el modelo de sustitución fácil de las importaciones y se entró a una nueva fase que requería de una tecnología más especializada, de mayores inversiones y de mano de obra más calificada. La burguesía industrial, que floreció al amparo del Estado y de la sustitución fácil de importaciones, debió recurrir hacia los sesenta a una subordinación cada vez mayor del capital extranjero para hacer frente a la nueva fase del capitalismo: la internacionalización del capital y del proceso de producción.

(36) Lagos, Ricardo, "Antecedentes históricos de la actual situación económica de Chile" en "La vía chilena al Socialismo", Salvador Allende, et. al, Siglo XXI Editores. México, 1973, p.36.

La progresiva declinación del salitre en los mercados mundiales fue acompañada, en el caso chileno, por la disminución de sus exportaciones agrícolas como consecuencia de la industrialización interna y de la falta de competitividad en lo externo. También en forma progresiva, el país se fue convirtiendo en exportador de un nuevo mineral que ya había sido importante en la estructura de sus exportaciones en el siglo anterior: el cobre.

La diferencia fundamental entre el primer ciclo del cobre chileno y este segundo ciclo que se inició en los 30, se consolidó en los cuarenta y se transformó en vital para la economía nacional en los cincuenta, es que en la primera etapa el cobre fue un negocio controlado por capitales chilenos, y en esta segunda fase su control accedió, por la vía de las inversiones extranjeras, al capital norteamericano.

A medida que se debilitaba la hegemonía británica y ascendía como potencia en los asuntos mundiales Estados Unidos las inversiones norteamericanas fueron penetrando en Chile con la misma velocidad con la que desaparecían las inversiones inglesas. Ya en 1912, las inversiones norteamericanas - en rubros tales como el salitre, los yacimientos de hierro, las telecomunicaciones y los seguros ascendían a 200 millones de dólares, en tanto que las inversiones británicas superaban escasamente los trescientos millones. Muy pronto, las

inversiones norteamericanas se empezaron a radicar en los minerales de cobre. "En 1906, William Braden puso en explotación la mayor mina subterránea de cobre en el mundo, El Teniente. Después vendió su sociedad al 'gigante' norteamericano Kennecot Copper Corporation y compra, en 1913, el yacimiento de El Salvador, que se convirtió más tarde en propiedad de la Anaconda Copper Mining Company. El mismo año, Anaconda adquirió Chiquicamata, la mayor mina a cielo abierto del mundo. En 1948, estas tres minas -- producían el 95% del cobre chileno".(37)

Ya hacia finales de la década de los cincuenta, el cobre representaba para Chile el rubro de exportación vital del cual obtenía el 80% de las divisas que requería para realizar las importaciones que iba exigiendo progresivamente su proceso de industrialización.

Hacia finales de la década de los cincuenta, el proceso chileno de industrialización había perdido dinamismo en forma acelerada. Entre 1940 y 1948, bajo el impulso de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la orientación de los gobiernos radicales del Frente Popular, "la producción industrial chilena creció un 80%, es decir, a un promedio de 10% anual. En 1948 decayó -, hasta obtener apenas un crecimiento anual del 4% en 1960, cifra que después de ese año llegaría a tasas negativas

(37) Lamour, Catherine, "Allende: la nueva sociedad chilena", Editorial DOPESA, Barcelona, 1972, p.72.

de crecimiento".(38). De este modo, la economía nacional sería cada vez mas dependiente de la exportación de cobre controlado por la inversión norteamericana en cuanto a -- producción, refinación y comercialización.

Otra de las características de la economía nacional en esta fase es la extraordinaria concentración del ingreso, así como la concentración de la propiedad de las empresas. El proceso de industrialización tuvo como objetivo esencial satisfacer la demanda interna de bienes de consumo que, en forma preferente, producía la industria nacional y es por ello que el modelo se agotó rápido, si consideramos que el chileno es un mercado pequeño, con una reducida población (10 millones de habitantes en esa época) y una renta per cápita anual de 400 dólares mal distribuidos.

1.4 El sistema político y las Fuerzas Armadas en el periodo.

Como ya hemos visto, la conformación de unas Fuerzas Armadas profesionales, obedientes del poder civil y respetuosas de los mecanismos constitucionales fue una de las características del sistema político chileno desde la estructuración del Estado portaliano. A partir de entonces, la total prescindencia política de las Fuerzas Armadas

(38) Gunder Frank, André, "Capitalismo y subdesarrollo en América Latina", Siglo XXI Editores, México, 1978, p. 108.

se transformó en uno de los clichés de la mayor parte de los analistas del sistema político chileno y de los estudiosos de su historia. Se trataba, sin embargo, de una idea superficial y errónea. Es efectivo que las Fuerzas Armadas chilenas no demostraron disposición alguna para ejercer directamente el poder político hasta 1973. Pero ello no significaba que estuvieren al margen de la política nacional; por el contrario, habían participado en ella en forma muy activa, interviniendo en forma directa cuando estimaron necesaria dicha intervención.

Ya hemos visto que, en el periodo anterior, las Fuerzas Armadas se dividieron en la guerra civil de 1891. En tanto que el Ejército tomaba partido por el gobierno, y por lo tanto por la incipiente burguesía industrial, la Armada se colocó al lado de los insurrectos y su participación definió el curso de la guerra civil en favor de la oligarquía nacional. Resulta de interés anotar que aún - en dicha coyuntura, los jefes de la Armada se preocuparon de subrayar que actuaban en resguardo de la legitimidad constitucional y a petición del Congreso, que se decía depositario de la voluntad popular. Para subrayar tal hecho, hicieron que las autoridades políticas del Congreso Nacional se trasladaran a los buques de guerra para dirigir desde allí personalmente la guerra civil.(39)

(39) Villalobos, Sergio, et. al, op. cit., vol. IV, p.769.

La guerra civil de 1891 fue una clara demostración de que las Fuerzas Armadas no eran impermeables a las contradicciones sociales que se gestaron en esa época en el seno del bloque en el poder.

En el turbulento periodo que va de 1924 a 1932—años en los cuales Chile resintió la crisis del salitre de 1929—las Fuerzas Armadas intervinieron directamente en la política nacional de diversas maneras. Un golpe militar derrocó a Alessandri en septiembre de 1924 y se constituyó una Junta Cívico Militar de Gobierno; en 1925, otro golpe militar, de signo político diverso encabezado por oficiales jóvenes, devolvió a Alessandri la presidencia y exigió la aprobación de una nueva Constitución, la de 1925, que estaría en vigencia hasta 1973.

La división en el seno de las Fuerzas Armadas, como expresión de las contradicciones que atravesaban la sociedad chilena tuvo otra manifestación: el golpe militar de junio de 1932, en el que un sector de oficiales nacionalistas de la Fuerza Aérea se apoderó del gobierno, formó una Junta Cívico Militar y declaró a Chile República Socialista. La experiencia duró apenas 13 días y fue liquidada -- por el Ejército, lo que demuestra el grado de politización de las Fuerzas Armadas de la época.

Como lo señala el sociólogo francés Alain Joxe, tan-

to en la guerra civil de 1891, en la que la Armada actuó - como una fracción de la oligarquía, como en 1924, coyuntura en la que el Ejército actuó como fracción de la clase media, la intervención militar "lleva a cierto progreso en el camino de la democratización formal, a un acrecentamiento de la participación política real, a un aumento del --- cuerpo electoral (especialmente a partir del Frente Popular), así como a la mayor eficacia del sistema, acompañándose todo este conjunto de hechos-de manera no fortuita --- con la aceleración en cierto tipo de inversiones extranjeras, que conducen a una expansión y a un fortalecimiento - del poder económico del Estado en el interior del país, al mismo tiempo que a su dependencia del exterior".(40)

El sistema político chileno volvió a la normalidad - institucional y al predominio civil gracias a un hecho que apunta Joxe: "se produjo un acercamiento entre la oligarquía y las capas medias debido al temor a que el militarismo de izquierda que había aparecido en 1932 reapareciera - en alianza con el movimiento popular".(41)

La ilusión de la falta de participación militar en - la política chilena se debe, pues, a que no fue sino hasta 1973 cuando asumiera el poder en forma directa. Pero en cada coyuntura clave del sistema político nacional apareció el brazo militar para remodelar el Estado, ampliar sus

(40) Joxe, Alain, "Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno" Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970, p.84.

(41) Ibid.,p. 84.

bases políticas y contribuir de este modo a la estabilidad del régimen capitalista. Ello queda muy claro si tomamos en cuenta el hecho de que en ningún momento los cuerpos armados dejaron de cumplir su papel de fuerzas represivas -- del movimiento popular. "Prácticamente la generalidad de las masacres que hubo entre 1901 y 1970 y que ocasionaron no menos de quince mil muertos fueron perpetrados con singular premeditación, violencia y hasta ferocidad por los institutos castrenses. Entre ellas sobresalen, porque fueron cobardes e inmisericordes carnicerías, la de la Escuela Santa María de Iquique, en diciembre de 1907, las de San Gregorio y La Coruña, en 1921 y 1925. Hay además, suficiente evidencia incluso documental de que en los centros mineros del Norte, no pocos jefes y oficiales de cuerpos armados servían incondicionalmente a los empresarios de la zona, en su mayoría extranjeros y, principalmente, norteamericanos".(42)

Como todo un símbolo del real rol de las Fuerzas Armadas en la política nacional, la última de las masacres señaladas por Ramírez Necochea fue perpetrada por el Presidente Arturo Alessandri, que había sido reinstalado en el poder por ellas mismas para democratizar el Estado y poner en vigor la Constitución de 1925. En dicha masacre resul-

(42) Ramírez Necochea, Hernán, "Las Fuerzas Armadas y la Política en Chile", p. 78.

taron más de 3 mil obreros asesinados.(43)

Sin perjuicio de lo expuesto, es innegable que a partir de 1938, es decir, desde la llegada al gobierno de -- los gobiernos de Frente Popular y hasta el golpe militar - de 1973, el sistema político chileno demostró extraordinaria permeabilidad y flexibilidad, convirtiéndose en el marco institucional de los cambios sociales que se reflejaban con transparencia en la escena política. A ello contribuyó poderosamente el rol que las clases dominantes atribuyeron a las instituciones castrenses, y que Ramírez Necochea sintetiza magistralmente de la siguiente manera: "En resumen las clases dirigentes pretendieron que las Fuerzas Armadas poseyeran los siguientes rasgos fundamentales:

- 1) Un sentimiento profesional robusto y una conciencia de la especificidad de sus funciones lo suficientemente sólidos como para que mantuvieran una actitud de marginalización de las actividades políticas militantes las -- que se suponía-infundadamente, por cierto-eran algo así como patrimonio exclusivo de las fracciones burguesas civiles, dentro de una suerte de división del trabajo - entre los diversos órganos del Estado: este sentimiento significaba dedicación a las funciones de defensa nacional y de protección del orden interno que específicamente le habían asignado;

(43) Cfr. Lamour, Catherine, op. cit. p.87.

2) Un carácter genéricamente conservador que las identificara completamente con la estructura económico-social y política de la sociedad burguesa que prevalecía y a la que se revestía con los atributos de un ordenamiento natural, surgido de la nación misma y conveniente para ésta".(44)

La Constitución de 1925 introdujo sustanciales reformas al régimen político que había sido consagrado en la anterior Constitución de 1833. Se creó un Poder Ejecutivo fuerte y se eliminó la facultad del Congreso de derrocar los gabinetes ministeriales. Se quitaron importantes atribuciones que tenía el Congreso, como la de juzgar la validez de las elecciones del Presidente de la República y la de sus miembros, creándose para ello un Tribunal Calificador de Elecciones. Se concedieron nuevas facultades al Presidente en materia de iniciativa legislativa y en lo que se refiere a la Ley de Presupuesto. Se creó la Contraloría General de la República, encargada de velar por la legalidad de los decretos presidenciales y por el buen uso del gasto público y se estableció la elección directa del Presidente de la República.

En general, podemos decir que la Constitución de 1925 amplió el margen de acción del Presidente, amplió el cuer

(44) Ramírez Necochea, Hernán, op. cit. p.71.

po electoral al conceder derecho a voto a todos los chilenos mayores de 21 años que supieran leer y escribir, precisó las facultades del Congreso, que de todas formas conservó una importante cuota de poder y reiteró la necesaria -- prescindencia política de las Fuerzas Armadas. En su artículo 22, las define como instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no de liberantes. (45)

En su calidad constitucional de Jefe de Estado, el Presidente de la República tenía la facultad exclusiva de disponer de las Fuerzas Armadas, organizarlas, llamar a retiro a sus jefes superiores, nombrar comandantes en jefe, -- con el consentimiento del Senado para los ascensos de los jefes superiores.

Las disposiciones constitucionales sobre la materia son un buen resumen del rol asignado a los cuerpos armados en el supuesto de que el sistema político se mantuviera dentro de los márgenes del sistema capitalista. Sin embargo, es importante señalar que muchos altos oficiales internalizaron de tal forma el apego a las normas constitucionales, que en coyunturas críticas para el régimen se negaron a tener consideraciones políticas con las fuerzas de derecha, y actuaron de acuerdo a los procedimientos democráticos esta

(45) Cfr. Gil, Federico, op. cit. p. 111.

blecidos en la Constitución. Ello ocurrió, por ejemplo, con el triunfo del Presidente radical apoyado por el -- Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, en 1938, que pretendió ser desconocido por los partidos de derecha, manio--bra que fue rechazada por los generales del Ejército, que apoyaron a su Comandante en Jefe en esta actitud. Algo - similar volvería a ocurrir años más tarde con el general Schneider, permitiendo así que Salvador Allende asumiera como Presidente de la República en 1970. (46)

En una caracterización de las Fuerzas Armadas chilenas no se puede dejar de mencionar su subordinación material, técnica e ideológica respecto de las instituciones cas--trensas norteamericanas. Se trata de un proceso que empezó a gestarse durante los años que antecedieron a la Se--gunda Guerra Mundial, que prosiguió durante el curso de - ésta, se profundizó con la guerra fría y se consolidó después de la Revolución Cubana con la doctrina de la seguridad nacional--de origen norteamericano--el anticomunismo y la estrategia de la contrainsurgencia.

En virtud de la Ley de Préstamos y Arriendo (Lend-Lease Bill), Chile recibió de parte de los Estados Unidos "cin--cuenta millones de dólares en armamentos, convirtiéndose en la nación latinoamericana que más ayuda recibió por tal

(46) Cfr. Ramírez Necochea, Hernán, op. cit. op.72.

concepto, después de Brasil. En 1952 Chile y Estados Unidos suscribieron un Pacto Militar que colocaba a Chile bajo la tutela norteamericana en materia militar. Entre 1933 y 1966, Chile había recibido 143 millones de dólares en armamentos, era uno de los principales compradores de armas norteamericanas de América Latina y ocupaba el segundo lugar en oficiales enviados a las academias e institutos militares norteamericanos para recibir formación técnica e ideológica-política".(47)

La transformación de las instituciones castrenses latinoamericanas en instrumentos de una estrategia política de largo alcance, que recibe una preparación para combatir y erradicar cualquier levantamiento popular por atentar en contra de la seguridad continental y nacional tuvo, en el caso chileno, su más clara expresión.

El periodo que estamos analizando se cierra con el gobierno del ex-General Carlos Ibáñez del Campo, vieja figura representativa de la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la política durante la década de los 20 y los 30. Con un programa populista, fiel expresión del populismo latinoamericano de los años de posguerra, Ibáñez obtuvo un amplio triunfo electoral en 1952 levantando las banderas de la honestidad, la justicia social y el naciona

(47) Ibid., pp. 123-125.

lismo, Ninguno de los partidos tradicionales lo apoyó, y en la izquierda sólo se incorporó a su candidatura el Partido Socialista Popular.

El balance del gobierno de Ibáñez es tan contradictorio como su figura política. Durante su primer periodo aceptó algunas tibias medidas de justicia social, como la asignación familiar, la indemnización por años de servicio y el salario mínimo agrícola, pero a continuación en lo realmente fundamental aceptó una orientación derechista y proimperialista absoluta. La congelación de salarios, la liberación de precios, la devaluación monetaria se combinaron con las facilidades extremas al capital extranjero con la rebaja de impuestos a las compañías del cobre mediante la Ley del Nuevo Trato, conformando una política antipopular y desnacionalizadora que fue resistida por los trabajadores mediante huelgas generales dirigidas por la CUT. Los socialistas abandonaron pronto el gobierno ibañista, que finalizó su periodo con dos medidas cuyo propósito era recuperar el apoyo popular: la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, que permitió en su momento ilegalizar al Partido Comunista, y la introducción de la cédula única en los procedimientos electorales, que permitió eliminar el cohecho en forma total, medida que favoreció extraordinariamente la candidatura de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1958.

Capítulo Segundo. Los conflictos sociales y los partidos políticos en el periodo 1956-1970.

En este capítulo veremos las consecuencias políticas del fracaso del gobierno de Ibáñez que se tradujeron en el delineamiento de las tendencias políticas chilenas en tres frentes partidarios. Luego nos referiremos a la administración de Jorge Alessandri quien gobernó apoyado por liberales, conservadores y un sector del Partido Radical y a la gestión gubernamental de Eduardo Frei, líder de la Democracia Cristiana. Finalmente trataremos la coyuntura política que hizo posible la conformación de la Unidad Popular que triunfó en las elecciones presidenciales de 1970 y cuyo candidato fue Salvador Allende.

2.1 Crisis socio-económica y reestructuración de la instancia política a fines del gobierno de Ibáñez.

El gobierno de Carlos Ibáñez finalizó en medio de una aguda crisis económica y social. El rotundo fracaso del programa de austeridad impuesto por la misión económica Klein-Sacks, asesores norteamericanos del gobierno ibañista, cuyas recetas monetarias para frenar la inflación ocasionaron una recesión económica con sus secuelas de desempleo, baja de la producción y de los salarios, dio como resultado la aparición de una crisis social de gran envergadura. Huelgas parciales, huelgas generales y estallidos populares de

todo tipo se sucedieron en los últimos dos años del gobierno de Ibáñez, creando el marco idóneo para el resurgimiento y reestructuración de los partidos políticos de diverso signo ideológico, cuyo rol social había disminuido en importancia en la primera etapa de la administración ibañista.

El fracaso del populismo y el fin del apoyo popular a un hombre fuerte, que había llegado a la presidencia minimizando a los partidos políticos y sin el apoyo de éstos, colocó nuevamente a las organizaciones políticas en el primer plano de las prioridades de la sociedad chilena.

Ninguna de las grandes tendencias políticas escapó a las modificaciones orgánicas e ideológicas que aparecieron como necesarias para enfrentar el futuro. La administración de Ibáñez, si bien no había incentivado la lucha partidista, polarizó al país desde el punto de vista de las opciones estratégicas. La derecha consolidó su proyecto y su organización, la izquierda avanzó sustancialmente en la definición de sus metas estratégicas y su política de alianzas y el centro experimentó un importante refuerzo: el nacimiento del Partido Demócrata Cristiano.

En 1958 se gestó el primer acontecimiento importante dentro de este periodo de reorganización de las fuerzas políticas: se creó el Frente de Acción Popular o FRAP, que --

agrupaba a todas las fuerzas de izquierda existentes en esa época, es decir, a los Partidos Socialista de Chile y Socialista Popular, al Partido Comunista (que continuaría en la ilegalidad hasta 1958), y a tres pequeños partidos: el Partido Democrático, el Partido Democrático del Pueblo y el -- Partido del Trabajo.

Indudablemente que eran los socialistas y los comunistas quienes componían el núcleo esencial de la nueva alianza política expresada en el FRAP. Su antecedente mediato fue el Frente Popular, es decir, el frente político que comunistas y socialistas constituyeron en la década de los 30 con el Partido Radical como representante de los sectores medios. Las diferencias entre el recién constituido FRAP y el Frente Popular eran notables. En tanto la formación del Frente Popular tuvo por objeto apoyar al Partido Radical y la política de industrialización que éste llevó a cabo reconociendo la izquierda marxista la hegemonía ideológica y política de los radicales, la formación del FRAP tuvo el claro propósito de constituir un frente político con hegemonía de los partidos proletarios marxistas.

Comunistas y socialistas habían ya avanzado algunos pasos en esta dirección al formar, en 1953, la Central Unica de Trabajadores, con clara hegemonía de ambos partidos y -- que aglutinaba a la gran mayoría de los trabajadores sindi-

calizados del país. La formación del FRAP vino, pues, a consolidar la unidad socialista-comunista como núcleo aglutinador de la izquierda chilena, fenómeno político sui generis que no tardaría en rendir sus frutos. El programa que articuló a los partidos de izquierda señalaba: "El Frente de Acción Popular será una organización que concertará la acción de los partidos que la constituyen en el campo político, parlamentario, sindical y electoral. El FRAP se caracterizará fundamentalmente por ser núcleo aglutinador de las fuerzas que están dispuestas a luchar por un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto de los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la emancipación del país, el desarrollo industrial, a la eliminación de las formas precapitalistas de la explotación agraria, el perfeccionamiento de las instituciones democráticas y la planificación del sistema productivo con vista al interés de la colectividad y la satisfacción de las necesidades de la población trabajadora." (48)

No había transcurrido aún un año desde la formación del FRAP, cuando se produjo otro hecho de importancia en el seno de la izquierda chilena: los Partidos Socialista Popular y Socialista de Chile se fusionaron en uno solo reconstituyendo

(48) Citado por de Riz, Lilitana, op. cit., p.69.

yéndose así el Partido Socialista. "En julio de 1957 se celebra el llamado Congreso de la Unidad, que homogeniza el socialismo chileno en torno a la línea política de Frente de Trabajadores. Esta concepción, presente en los inicios del Partido y concebida como una táctica de lucha de la clase obrera a partir de una correcta caracterización de la revolución chilena, rescata la autonomía del proletariado y reclama la unidad política y social de los trabajadores."(49)

La unificación del Partido Socialista le dio a esta organización mayor capacidad de influencia electoral, mayor peso sindical y campesino y más fuerza de negociación política frente al Partido Comunista, el que si bien era su aliado, trataba de imponer sus proyectos y concepciones políticas en el seno del FRAP. La lucha ideológica entre ambas organizaciones izquierdistas—que data desde la fundación del Partido Socialista en 1933—se desarrolló entonces, y se seguiría desarrollando en el futuro, sin entorpecer la unidad de acción de ambos partidos. En la época, la discrepancia fundamental radicaba en la distinta concepción de cada partido respecto del carácter que debería tener la revolución chilena, que era la meta estratégica de ambas colectividades. Para el Partido Comunista, era preciso realizar primero una revolución democrática que ampliara las bases del sistema político y que convirtiera al Estado en el sec-

(49) Altamirano, Carlos, "Dialéctica de una derrota", Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 22.

tor fundamental de la economía. Para esta tarea, debería - contarse con el apoyo de las capas medias y de la burguesía progresista no comprometida con los terratenientes ni con el imperialismo. Se trataba de la constitución de un "Frente de Liberación Nacional", que consumaría la revolución de mocrática, etapa previa que abriría paso a la revolución socialista.

Para el PS, en cambio, la revolución chilena era caracterizada como una revolución socialista, la que se lograría por la lucha de masas de los trabajadores, sin realizar alianzas políticas con la burguesía-clase social que, según los socialistas, estaba comprometida en su conjunto con el imperialismo—ni tampoco con los partidos de centro, los que si bien tenían a los sectores medios como base de apoyo social, no hacían más que favorecer los intereses de la burguesía desnacionalizadora. Por ello era preciso formar un "Frente de Trabajadores" que impulsara estas tareas revolucionarias. (50)

En el mismo año 1957 hizo su entrada a la escena política uno de los partidos que jugará en los años siguientes un rol protagónico en la historia contemporánea de Chile: el Partido Demócrata Cristiano. Se formó a raíz de la fusión de la Falange Nacional, grupo político desgajado del antiguo Partido Conservador a finales de los 30, y el Partido Conservador Socialcristiano.

(50) Cfr. Heller, Claude, "Política de unidad en la izquierda chilena", El Colegio de México, México, 1973 p.p. 69-70.

Desde el punto de vista doctrinario, el PDC recogió la doctrina de la Iglesia Católica y se planteó como un crítico a la vez del sistema socialista-al que califica como un estatismo totalitario-y del capitalista, en el que predomina el interés material egoísta de una minoría. Como alternativa, plantea la sociedad comunitaria. En palabras de Eduardo --- Frei, uno de sus fundadores, "la idea comunitaria tiene una doble acepción: como medio y como fin. Como fin, representa una estructura social, donde adquiere fundamental importancia la comunidad formada por los hombres que trabajan en una misma empresa, cualquiera que sea su naturaleza: industrial o agrícola. Esto importa la superación del profundo conflicto de clases inherente a nuestra actual organización, donde un grupo más bien reducido dispone del poder, los recursos y la dignidad que les otorga el control de los bienes, frente a la vasta mayoría de los asalariados. La idea comunitaria propugna, en definitiva, un orden de cosas donde el capital y el trabajo ya no están separados-y, por tanto, no entran en conflicto-ya no pertenecen a grupos diferentes, sino que se reúnen en las mismas manos". (51)

El PDC se caracterizó, desde su fundación, por ser un partido pluriclasista, con un apoyo de las capas medias y -- los sectores campesinos que fue aumentando progresivamente -- hasta 1964, fuertemente ligado a la poderosa Iglesia Católi-

(51) Citado por Guillisasti, Sergio, "Partidos políticos chilenos", Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1964, p. 214.

ca chilena y vinculado orgánicamente a la Democracia Cristiana Mundial. Como partido reformista, se sintió plenamente identificado con el programa "Alianza para el Progreso", que lanzara la administración Kennedy como una forma de enfrentar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, rol que desempeñaría en Chile el PDC, en la década de los sesenta.

Los dos últimos hechos políticos de importancia ocurridos durante las postrimerías de la administración de Ibáñez fueron, por una parte, la legalización del Partido Comunista y, por la otra, la derogación de las disposiciones de la ley electoral que permitían a los terratenientes, y a la burguesía en general, controlar y alterar a su arbitrio las votaciones. De este modo, el escenario quedaba preparado para la elección presidencial de 1958, en la que el centro, la derecha y la izquierda medirían sus fuerzas ya nítidamente perfiladas.

2.2 La derecha regresa al poder: la elección de 1958.

Cancelada la experiencia populista de Ibáñez y ante la agudización de la lucha de clases y la amenaza que significaba la unificación de la izquierda en el FRAP, la derecha chilena concertó una alianza de sus partidos tradicionales, Liberal y Conservador, y decidió enfrentar la elección presidencial con un candidato de sus filas: Jorge

Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri, y destacado empresario y político. Tras una campaña electoral en la que la derecha utilizó las más modernas técnicas de comunicación masiva, el resultado fué el siguiente:

Cuadro No. 1

Resultado de las elecciones presidenciales de 1958*

Alessandri	387.297	votos . . .	(31,6%)
Allende	352.168	votos . . .	(28,9%)
Frei (PDC)	252.168	votos . . .	(20,7%)
Bossay (PR)	190.832	votos . . .	(15,5%)
Antonio Zamorano	41.268	votos . . .	-o-

Los resultados electorales de la elección de 1958 demostraron varios hechos:

-La existencia de tres grandes vertientes políticas, la derecha, el centro y la izquierda, las que expresaban a nivel electoral la división de la sociedad chilena en tres grandes conglomerados sociales: la burguesía, las capas medias, el proletariado y el campesinado. Ello, sin perjuicio de dejar establecido que el candidato de derecha atrajo, gracias a una manipulación de grandes dimensiones de los medios de comunicación masiva, el voto de segmentos pequeños, pero decisivos, de las capas medias.

* Fuente: Vitale, Luis, op. cit., p. 153 y Gil, Federico, op. cit., p. 252.

-El acierto que significó la constitución del FRAP como frente político de una clara pertenencia de clase, representativo de obreros, campesinos, pobladores e intelectuales chilenos cuya meta política era el socialismo.

-La importancia de la Democracia Cristiana como expresión política reformista y su innegable atracción en los sectores medios y en el campesinado, como en el sector femenino.

-El lento proceso de deterioro del otrora poderoso Partido Radical, que aún conservando fuerza en determinadas zonas del país, ocupó el último lugar entre las fuerzas políticas de importancia nacional.

-La falta de madurez y desarrollo político del electorado de ciertas zonas campesinas. En efecto, tradicionalmente el campesinado era el sector más atrasado cultural y políticamente del país, debido a las condiciones semifeudales de su existencia. A pesar de lo anterior, Allende obtuvo el triunfo en varios de los que tradicionalmente eran reductos electorales de la derecha, gracias al cohecho y al control electoral que, esta vez, no pudo ser ejercido por los terratenientes debido a las modificaciones electorales que hemos comentado.

Sin perjuicio de lo dicho, hay que reconocer que el ritmo de toma de conciencia del campesinado fue un proceso

mucho más lento que el general de los obreros industriales, hecho que queda demostrado con el siguiente dato: la sindicalización campesina tuvo que esperar hasta el gobierno de Frei para convertirse en realidad. Aprovechando esa situación, la derecha financió la candidatura de un ex-sacerdote de la provincia campesina de Talca, Antonio Zamorano, - quien recorrió el país diciéndose el candidato de los pobres del campo y la ciudad. Se trataba de una especie de populismo diseñado especialmente para quitar algunos votos a Allende en las zonas más retrasadas del país. La maniobra resultó perfecta, si tomamos en cuenta que Allende obtuvo 35 mil votos menos que Alessandri, que el ex-sacerdote obtuvo 41 mil votos y que la mayoría de éstos habrían sido para Allende, de no mediar la nada de providencial -- aparición de este personaje de opereta que fue Zamorano, quien después desapareció totalmente de la política nacional.

En las primeras elecciones parlamentarias realizadas durante la administración Alessandri en 1961, el electorado chileno volcó sus preferencias hacia el FRAP, que pasó a controlar el 27,5% de todas las bancas de la Cámara, y hacia la Democracia Cristiana, que llegó a contar con el 14,6% de dichas bancas. A pesar de lo anterior, la coalición oficialista retuvo la mayoría ya que el Partido Radical-que el año anterior había ingresado al gobierno de de-

recha —retuvo el 27,5% de los cargos parlamentarios. Pero la polarización política era ya una realidad incontrastable que se acentuaría aún más con la política económica implantada por lo que los políticos de oposición llamaban -- "el gobierno de los gerentes". (52)

En materias económicas, el programa puesto en aplicación por Jorge Alessandri tuvo las siguientes características:

-Con el propósito de controlar la inflación, estableció un rígido control salarial que redujo sustancialmente el poder adquisitivo de los trabajadores.

-Para incentivar la producción, rebajó la tasa de interés bancario a menos de la mitad de la vigente y contrató masivamente créditos externos, lo que determinó que el endeudamiento público aumentara en un 56,1% entre 1958 y 1961. (53)

-Para hacer frente al agotamiento del modelo de sustitución fácil de importaciones—es decir, a la crisis de las industrias de consumo popular como textiles, alimentos, calzado, etc.—abrió las puertas al capital extranjero para desarrollar las industrias productoras de bienes de capital y bienes de consumo durables.

-Alessandri convirtió al Estado en un elemento fundamental en el aumento de la tasa de inversión, necesaria a su -

(52) Cfr. Guilisasti, Sergio, op. cit., p. 182 .

(53) Vitale, Luis, op. cit., p. 158,

juicio, para incentivar el desarrollo nacional.

Si bien durante los tres primeros años esta política logró rebajar en forma drástica la inflación, provocó en cambio una deflación que semiparalizó la economía nacional y arrojó a la cesantía a miles de trabajadores en todo el país. Posteriormente, la inflación recuperó su nivel ascendente y el gobierno de Alessandri finalizó en medio de una crisis económica, social y política tan aguda como la existente al terminar el gobierno de Ibáñez. El desempleo era muy alto, el nivel de las remuneraciones de los trabajadores era insuficiente para cubrir sus necesidades fundamentales, la concentración del ingreso se hizo aún más regresiva, el capital extranjero pasó a ocupar posiciones importantes en la industria nacional gracias a una legislación particularmente favorable a sus intereses y el Estado reforzó su rol en la economía nacional, beneficiando principalmente a la burguesía y los intereses extranjeros.

Al acercarse las elecciones de 1964, los integrantes del Frente Popular reactivaron una vieja polémica, siempre dentro de los márgenes de lucha ideológica interna previa a la adopción de una estrategia común. En tanto el Partido Socialista-fiel a su línea del Frente de Trabajadores- era partidario de levantar nuevamente la candidatura de su dirigente Salvador Allende, convertido ya en una figura na

cional de primera magnitud, el Partido Comunista, siguiendo su línea del Frente de Liberación Nacional, se mostraba inclinado a pactar con los demócratacristianos y con los sectores radicales que se habían restado a la alianza de su Partido con liberales y conservadores en el llamado --- Frente Democrático.

El informe del Comité Central del PC, publicado en su periódico oficial "El Siglo", de 6 de enero de 1963, decía sobre este punto, después de sostener la necesidad de presentar una alternativa viable a las fuerzas de derecha: -- "En armonía con estos planteamientos, concebimos la posibilidad que sectores políticos que no están en el FRAP contribuyan a la generación de un gobierno popular y luego -- participen en él con los mismos derechos y deberes de los demás partidos, entendiendo por esto último no una repartición de prebendas, sino que una repartición proporcional - en las responsabilidades de la realización y dirección de los cambios. Nos estamos refiriendo obviamente a los demócratacristianos y también a aquellos radicales que están, en contra del gobierno y contra el Frente Democrático." (54)

Las pretensiones del Partido Comunista de realizar una alianza política con el PDC-e incluso apoyar directamente al candidato demócratacristiano-para las elecciones presidenciales de 1964 tropezaron con la negativa socialista, --

(54) Citado por Faletto, Enzo y Ruiz, Eduardo, "Conflicto político y estructura social", en "Chile Hoy", p. 249.

por una parte, y con la renuencia de la Democracia Cristiana, por la otra. En efecto, a raíz del triunfo obtenido - por la Democracia Cristiana en las elecciones municipales de 1963, en la que obtuvo un 22% del electorado, convirtiéndose en la fuerza política mayoritaria individualmente considerada, los dirigentes demócratas cristianos decidieron llevar un candidato de sus filas a la presidencia de la República.

2.3 El gobierno de la Democracia Cristiana.

Las fuerzas políticas chilenas terminaron de alinearse para la justa electoral de septiembre de 1964, en marzo de ese mismo año, fecha en la que se realizó una elección parlamentaria en la provincia rural de Curicó, considerada un baluarte de la coalición liberal conservadora. En Curicó, para sorpresa general, triunfó arrolladoramente el candidato del FRAP con un 39,2% de los votos, en tanto que la derecha más el Partido Radical obtenía un 32,5%, disminuyendo 17 puntos respecto a la elección anterior, al paso de que los demócratas cristianos obtenían un 27,7%, es decir, subían en 6 puntos su votación anterior. (55)

El resultado provocó un verdadero terremoto político en Chile. Era evidente que la izquierda marxista podía vencer en la elección presidencial a menos que la derecha y el centro presentaran un frente unido en su contra. Y ello fue

(55) Cfr. Gil, Federico, op. cit., p. 26.

precisamente lo que ocurrió: el llamado Frente Democrático se disolvió, los Partidos Liberal y Conservador decidieron apoyar a Eduardo Frei, el candidato demócratacristiano, en tanto que los radicales, formalmente, mantuvieron la candidatura de Julio Durán para negociar posteriormente en mejores condiciones con los triunfadores, maniobra que a la -- postre resultó fallida.

La fuerza de la izquierda obligó, pues, a definirse al centro político chileno, que optó mayoritariamente por la derecha. La polarización política del país fue prácticamente total, y las fuerzas políticas en pugna se lanzaron a la lucha por obtener los votos de un electorado deseoso de contribuir al establecimiento de un gobierno que erradicara las causas de la pobreza y el atraso económico y social de Chile.

La campaña fue una de las más violentas que haya conocido el país. "Los fondos de que dispuso la Democracia Cristiana (procedentes del Departamento de Estado y del gobierno de la RFA , según se comprobaría después en el Senado de Estados Unidos,) se estimaron quince veces superiores a -- los del FRAP. Su campaña 'a la americana' bajo la dirección de un equipo extremadamente eficaz, actuó esencialmente sobre el reflejo anticomunista. A intervalos regulares, la radio transmitía el traqueteo de una ráfaga de ametralladora y a continuación el grito lacerante de una mujer que -

gemía por la muerte de su hijo, acusando de ello a los comunistas. Luego, un locutor que, al parecer, no podía contener su emoción comentaba que, para evitar en Chile horrores semejantes, convenía elegir a Eduardo Frei. El norteamericano George Grayson, estudiante universitario, autor apologético de una tesis doctoral sobre la Democracia Cristiana, hacía resaltar que docenas de militantes y dirigentes de dicho partido le confesaron que nunca habían creído en el peligro comunista y que su táctica obedecía solamente al propósito de ganar votos. Por consiguiente, cristianos, pero ante todo, políticos." (56)

Pero la DC chilena no sólo hablaba el lenguaje anticomunista, sino que se dirigía también a las masas campesinas, obreras y a los sectores medios con un programa populista. Consciente de que el pueblo chileno quería cambios sociales y que el real enemigo del Partido Demócrata Cristiano era la izquierda que sí planteaba seriamente dichos cambios, elaboró una plataforma electoral que, bajo el epígrafe de "Revolución en libertad", prometía la realización de una profunda reforma agraria y la estabilidad en los empleos, además de la creciente participación de los trabajadores en las utilidades, gestión y propiedad de las empresas. La propiedad comunitaria, la cooperativización de la economía y el rol del Estado en la gestión económica eran

(56) Labrousse, Alain, op. cit., p. 94.

otros de los temas que la Democracia Cristiana, a despecho del apoyo que le otorgaba la derecha, levantaba como banderas para obtener el apoyo popular.

Las elecciones se efectuaron el 4 de septiembre de 1964 y sus resultados fueron los que ilustra el cuadro siguiente.

Cuadro No. 2

Resultado electoral de las elecciones presidenciales de 1964*

Frei	1.409.012 votos . . .	56,1%
Allende	977.000 votos . . .	38,9%
Durán	125.000 votos . . .	4,9%

"El análisis de los resultados demostró que mientras en votos masculinos Frei aventajaba por escaso margen a Allende, en cambio, en votos femeninos le llevaba una ventaja de dos a uno. En efecto, Frei obtuvo 736.117 votos femeninos es decir, un 64,11% de los mismos, y Allende 384.132, lo que equivale apenas al 32,08% del total de votos de mujeres." (57)

Es importante dejar en claro que el anticomunismo esgrimido como arma electoral por la DC no era un fenómeno tan artificial como lo parece sugerir la cita de Alain Labrousse, sino que correspondía en buena medida a un sentimiento extendido en los militantes de ese partido, cuyos orí

* Fuente: Labrousse, Alain, op. cit., p. 95.
(57) Ibid, p. 95.

genes eran conservadores y han demostrado siempre un gran apego a los lineamientos de la Iglesia Católica. Con toda razón, un observador que se muestra en el conjunto de su obra, como un admirador de la Democracia Cristiana-el científico social norteamericano Federico Gil-sostiene que una de las causas fundamentales del triunfo de Frei fue -- precisamente el tono anticomunista de su campaña, que tuvo un gran impacto en lo que entonces era un sector no evolucionado del electorado nacional: el femenino. (58)

A diferencia del Partido Radical, la DC no había aceptado jamás un pacto político, ni aún coyuntural, con el -- Partido Comunista, y ese antecedente se vio confirmado al no aceptar el apoyo que el PC le ofrecía para las elecciones presidenciales de 1964. En cambio, la DC no tuvo problema alguno en aceptar el apoyo de la derecha, a cuyos -- ojos el Partido Demócrata Cristiano se presentaba como una carta a jugar para impedir el triunfo de la izquierda.

En marzo de 1965, el PDC obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso sobre todas las demás fuerzas políticas, lo que lo dejó en posibilidades de realizar desde el gobierno su programa de Revolución en Libertad que, si bien no era -- muy preciso ni tenía un contenido muy coherente había entusiasmado a sus electores, que conformaban la mayoría nacional. La derecha, que intentó ya entonces deslindar respon-

(58) Cfr. Gil, Federico, op. cit., p. 327.

sabilidades con la DC fue la gran perdedora de dicha justa electoral y aunque recompuso el antiguo Frente Democrático con el Partido Radical, resultó ser el bloque político más débil en el Congreso Nacional.

Para analizar con propiedad el gobierno demócrata cristiano hay que tomar en cuenta previamente las expectativas que generó el primer experimento latinoamericano de esta fuerza política nacida en Europa, tanto a nivel nacional como internacional. Puede afirmarse que, en Chile, el triunfo de la Democracia Cristiana fue visto por la mayor parte de los sectores medios, por grandes grupos de campesinos y de marginados como una esperanza real de solución de los principales problemas nacionales.

Internacionalmente, el triunfo de Eduardo Frei en Chile despertó importantes expectativas en la administración norteamericana, que veía a la DC como una fuerza reformista, -- que podía impedir que Chile -- y quizás el resto de América si este experimento se extendía a otros países -- cayera en el comunismo. (59) Recordemos que en esa época el tema era de vital importancia para el Departamento de Estado, ante la creciente influencia de la Revolución Cubana en América Latina.

¿Respondió la Democracia Cristiana a estas expectativas?. Contestar a esta pregunta exige realizar un balance

(59) Cfr. Labrousse, Alain, op. cit., p. 146 y Altamirano, Carlos, op. cit., p. 90.

del gobierno de Frei, tras el cual la DC debió abandonar el primer plano político al ser derrotada por la Unidad Popular. Dicho balance debe considerar los aspectos económico, social y político.

Aspectos económicos. Los tres pilares básicos de la política económica realizada por la administración Frei -- fueron: a) reforma agraria; b) modernización de la industria, mediante el aumento sustancial de las inversiones extranjeras; c) nueva política sobre el cobre, encaminada a redefinir las relaciones del Estado con las empresas norteamericanas (la llamada "chilenización") y a aumentar las exportaciones en este rubro. Veamos cuáles fueron los problemas en cada punto y los resultados obtenidos.

En materia de reforma agraria, el gobierno de Frei se planteaba los siguientes objetivos: incorporar a la propiedad de la tierra a miles de familias campesinas, mejorar sustancialmente la situación productiva de la agricultura, aumentando la productividad y la producción en todos sus niveles y realizar una promoción efectiva de los campesinos y sus familias, incorporándolos realmente a la vida social, cultural y política del país. (60)

En 1967 fueron aprobadas tres leyes fundamentales para lograr estos propósitos: una reforma constitucional que re

(60) Cfr. Labrousse, Alain, op. cit., p. 113.

forzaba la dimensión social del derecho de propiedad, la que fue votada favorablemente por los parlamentarios demócratas cristianos y la izquierda, y desfavorablemente por la derecha; la Ley de Sindicalización Campesina, la primera de este género para el campo chileno, y la Ley de Reforma Agraria.

La aprobación de estas leyes, que fueron obstaculizadas por todos los medios legales por la derecha, generaron luego una interesante dinámica social que produjo contradicciones tanto en la sociedad chilena en su conjunto como al interior del propio partido de gobierno. En efecto, -- mientras los campesinos tomaban plenamente conciencia de sus derechos y apoyaban el proceso en forma cada vez más crítica debido a la falta de velocidad y profundidad del mismo, la derecha y los latifundistas iniciaban una campaña de oposición social que asumió muchas veces un carácter violento. Al interior del PDC, por otra parte, las contradicciones se empezaron a agudizar. Su ala izquierda apoyaba las reivindicaciones agrarias e intentaba, desde los -- cargos de los organismos públicos encargados de implementar el proceso, acelerar éste superando los obstáculos legales, sociales y políticos.

En buenas cuentas, puede decirse que lo más importante de la reforma agraria demócrata cristiana fue la movilización social que desató en el campo. "Durante su campaña electoral, la Democracia Cristiana había prometido dar tie

rra a cien mil familias, o sea, a un tercio de los trabajadores agrícolas y campesinos pobres. En septiembre de 1970 habían sido expropiados 1.364 propiedades sumando 3.433.774 hectáreas, lo cual representaba el 18% de las tierras cultivadas del país. Se habían beneficiado 25.000 familias, o sea, la cuarta parte de lo que se había prometido, aproximadamente la décima parte de los que podían aspirar al mismo beneficio, o sea, el 2,8% de la población activa." (61)

Uno de los principales funcionarios demócrata cristianos de los organismos del agro, Jacques Chonchol, Jefe del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, se transformó en el más agudo crítico del proceso de reforma agraria debido a sus limitaciones e insuficiencias. Relevado de su cargo por el Presidente Frei, se convirtió en uno de los principales líderes del Movimiento de Acción Popular Unitaria, un partido que se formó en 1969 por ex-militantes demócrata cristianos desengañados por la orientación del -- proceso iniciado en 1964. En conferencia de prensa de junio de 1969, Chonchol sostenía que el programa demócrata -- cristiano de reforma agraria se caracterizaba por una ambigüedad consistente en "la disyuntiva de querer tomar medidas de reforma profunda y que respondieran a las aspiraciones creadas en interés de las masas campesinas y, simultáneamente, pretender conservar, ayudar e incentivar el sec--

(61) Ibid., p. 120.

tor capitalista agrícola, que se deseaba fuera más capitalista, más eficiente, más dinámico y más moderno". (62)

En resumen, se puede afirmar que el proceso de reforma agraria de la Democracia Cristiana generó expectativas que no pudo satisfacer, gestándose un proceso de movilización campesina desconocido hasta entonces en la historia de las luchas populares en Chile. Cuando los campesinos estimaban que no se expropiaban los predios convenientes, o el proceso era demasiado lento, procedían a tomar masivamente los terrenos agrícolas, agudizando las contradicciones entre el gobierno y los campesinos, si éste hacía intervenir la fuerza pública para desalojarlos, o entre el gobierno y la derecha, si el Ejecutivo no hacía uso de sus atribuciones para restablecer el orden.

En materia industrial, el gobierno de la Democracia --- Cristiana se propuso modernizar la estructura económica en este ramo. Dinamizar las industrias productoras de bienes de capital y de bienes de consumo duradero-tendencia iniciada ya en el gobierno de Alessandri-se convirtió en el elemento predominante de la estrategia económica demócratacristiana.

Para lograr este propósito, encaminado a que el desarrollo de las industrias más dinámicas sirviera de base pa-

(62) "Cuadernos de la Realidad Nacional", número 4, junio de 1970, Universidad Católica de Chile, p. 59.

ra el incremento de las industrias orientadas hacia el mercado interno, se concedieron mayores facilidades al capital extranjero, fundamentalmente de origen norteamericano. Además, dicho programa económico coincidía con la tendencia a la internacionalización del capital que desde fines de la década de los sesenta era el proceso dominante en el capitalismo desarrollado. Dicho proceso consistía fundamentalmente en que las inversiones ya no se radicaban principalmente en las áreas de la industria de extracción de minerales, sino en la industria manufacturera.

Como resultado de la tendencia señalada, el capital norteamericano pasó a tener un peso considerable en la economía chilena, acelerando además la concentración económica ya existente.

Hacia la finalización del gobierno de Frei, el 40% de los activos de las sociedades anónimas estaban controlados por el capital extranjero, y su influencia se extendía a todas las ramas de la economía nacional. Si a este hecho le agregamos que todas las empresas de importancia estaban organizadas como sociedades anónimas y que existía un alto grado de concentración monopólica, hecho que permitía que las 35.000 empresas industriales existentes en el país fueran 114 sociedades anónimas las que controlaban el 75% de los activos de las mismas, podremos darnos cuenta de la importancia adquirida en la toma de decisiones económicas por

el capital extranjero invertido en el rubro industrial. (63)

A estas características-hegemonía del capital extranjero y concentración monopólica-debemos agregar otras dos que si bien no son producto exclusivo del gobierno de Frei, tal como en las ya señaladas, se profundizaron extraordinariamente durante su gestión. Nos referimos a la concentración del ingreso y al rol del Estado como inversionista. - El Estado era en Chile omnipresente en la economía, ya que realizaba el 75% de la inversión en capital fijo. (64) En lo que se refiere a la concentración del ingreso, ésta tenía en 1967 las siguientes características.

Cuadro No. 3*

<u>Porcentaje de la población</u>	<u>Porcentaje del ingreso</u>
50	17.1
(20)	(4.0)
(30)	(13.1)
30	26.4
20	56.5
(10)	(40.2)

Es decir, en tanto el 10% más rico de la población recibía el 40.2% del ingreso, al 50% más pobre le correspondía apenas el 17.1% del ingreso total.

(63) Caputo, Orlando y Pizarro, Roberto, "Desarrollismo y capital extranjero", Editado por la Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1970, p. 86.

(64) Cfr. Bitar, Sergio, "Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena", Siglo XXI Editores, México, 1979, p. 28.

En lo que se refiere al cobre, el principal producto de exportación chileno, Frei decidió "asociar" al Estado con las empresas norteamericanas Kennecot y Anaconda comprando el 51% de las acciones y concediéndoles ventajas fiscales con el propósito de que éstas elevaran sustancialmente la producción. Al finalizar su gobierno, Frei poco podía exhibir como éxito en tales acuerdos, ya que las empresas no cumplieron con sus compromisos en materia de producción, el control de las empresas seguía en manos de los capitales norteamericanos y el Estado chileno había desembolsado grandes cantidades de divisas en cumplimiento a los acuerdos de chilenización.

Aspectos sociales y políticos. La estrategia económica del gobierno de la Democracia Cristiana agudizó enormemente las profundas contradicciones de la sociedad chilena. La inflación no logró ser controlada, la participación de los salarios en el ingreso global disminuyó enormemente, las diferencias sociales se hicieron aún mayores y la desnacionalización económica convirtió al país en una especie de protectorado norteamericano. Estos hechos no pasaron, por supuesto, inadvertidos para un pueblo con elevado nivel de conciencia política. Las propias medidas populistas de Frei crearon expectativas que luego, al no concretarse en la práctica, se convirtieron en elementos catalizadores de una amplia movilización social que conmovió al país, en especial durante los años 1969 y 1970. A las movilizaciones campe-

sinas se sumaron otras formas de movilización no comunes en la política chilena; las tomas de terrenos urbanos por grandes masas de pobladores a quienes el propio gobierno demócrata cristiano había organizado políticamente con la promesa de otorgarles viviendas, promesas que luego no pudo cumplir. Los trabajadores industriales, por su parte, incrementaron en grado considerable el número de huelgas con ocupación de fábricas.

Incapaz de dar respuesta a las reivindicaciones que su propio partido había agitado con propósitos electorales, el gobierno de Frei decidió endurecerse y respondió con medidas legales que intentaban quebrar el movimiento sindical— como los decretos de reanudación obligatoria de faenas en caso de huelgas— procesos en contra de dirigentes de pobladores y de campesinos, desalojos violentos e incluso con masacres, como las de el Salvador y Puerto Montt, en las que resultaron 8 obreros del cobre y ocho pobladores sin casa asesinados, respectivamente.

Con las medidas anteriores, el gobierno de Frei no recuperó, sin embargo, la confianza de la derecha, que se había distanciado progresivamente de la Democracia Cristiana a raíz de la reforma agraria y de las medidas de corte populista que la DC intentó realizar, y que se había parapetado políticamente en el Partido Nacional producto de la fusión

de los Partidos Liberal y Conservador en 1966. El propio partido de gobierno sufrió una división a raíz de la evidente derechización a la que conducía la administración -- Frei, y la izquierda acentuó su oposición al régimen democratacristiano.

Hacia finales del periodo presidencial, la DC perdió el control de la influyente Federación de Estudiantes de Chile, la que pasó a poder de la izquierda marxista. En todo el país, los estudiantes se incorporaron activamente al proceso de movilización social por reivindicaciones específicas: reforma universitaria en este caso y por un cambio de régimen. El propio Ejército no está ausente de esta oleada de reivindicaciones y movilizaciones que caracterizan el periodo: el 21 de octubre de 1969, el general Roberto Viaux Marambio, acompañado de 176 oficiales de diversos regimientos del país y de numerosos suboficiales y soldados, se acuartelaron en el regimiento Tacna de Santiago y exigieron la solución de un pliego de peticiones que había presentado anteriormente al gobierno y que se refería a medidas para mejorar la situación de los militares chilenos. Exigía, además, la dimisión del Ministro de Defensa. La respuesta del gobierno, amenazado en su propia estabilidad, consistió en acceder a todas las peticiones de mejoramiento económico, pedir la dimisión de todo el Estado Ma--

yor y la renuncia del Ministro de Defensa y dar de baja y someter a juicio al General Viaux, nombrando jefe de las -- Fuerzas Armadas al general René Schneider. (65)

Distanciado de los aliados que le permitieron conquistar la presidencia en 1964, enfrentados a una movilización social sin precedentes en la historia nacional y enfrascados en una lucha interna de tendencias de vastas proyecciones, los demócratas cristianos llegaron al final del periodo presidencial de Frei. La ambigüedad en política no resultó ser buena orientadora, como quedó demostrado con el fracaso de éste que parecía ser en 1964, un promisorio experimento político capaz de cerrar el paso a los partidos proletarios chilenos.

2.4 La coyuntura electoral de 1970.

En el curso del gobierno de Frei se habían ido perfilando con claridad tres tendencias fundamentales al seno -- del PDC.: la derechista, liderada por el propio Presidente Frei; la centrista, en la que militaban figuras de tanta importancia como Radomiro Tomic, y, finalmente, la izquierdista abierta a un entendimiento con los partidos marxistas.

Cuando llegó el momento de definir tanto el programa -- que presentaría la DC para la elección presidencial de 1970,

(65) Cfr. Prats González, Carlos, "Memorias", Editorial Pe huén, Santiago de Chile, 1985, p. 127.

como la persona del candidato, entraron en juego los siguientes factores:

-La imposibilidad de llegar a un entendimiento con la derecha, que llegó a la conclusión de que podía enfrentar el proceso electoral exitosamente con un hombre de sus filas: Jorge Alessandri.

-La necesidad del Partido de distanciarse programáticamente de la gestión del Presidente Frei, ya que era evidente que el pueblo exigía cambios al sistema económico y político.

-La imposibilidad de llegar a una alianza con los partidos de izquierda, ya que ello no era factible debido a la oposición tanto del ala freísta del PDC, que controlaba el aparato del partido, como de la propia izquierda, que había actuado siempre en la oposición a Frei (en especial al Partido Socialista), y que estaba en un proceso de unificación con el Partido Radical. (66)

En síntesis, el PDC se encontraba enfrentado a una difícil coyuntura, a la que ha debido enfrentarse a menudo dada la naturaleza pluriclasista de su base social: si apoyaba a la izquierda o celebraba una alianza con ella-en el caso que hubiere sido posible- el ala derecha podía quebrar el partido. Por otra parte, si celebraba un pacto electoral con la derecha-también en el caso que ello hubiere sido posi

(66) Cfr. Labrousse, Alain, op. cit., p. 216.

ble-sus bases obreras, campesinas y de capas medias, ya suficientemente golpeadas por la política económica del gobierno de Frei podrían haber seguido el camino trazado por el MAPU, partido nacido de una escisión del PDC por la izquierda en 1969.

En dicho contexto, el PDC adoptó dos decisiones de importancia: a) elaboró un programa de centroizquierda mediante el cual pretendía recuperar el apoyo popular perdido a raíz de la gestión Frei; b) eligió un candidato no comprometido personalmente con el gobierno freísta, pero confiable desde el punto de vista del aparato partidario.

Resultó entonces elegido Radomiro Tomic, fundador de la Falange junto a Frei, exembajador de la DC en Estados Unidos y político de dilatada trayectoria. El PDC se presentaba, de esta manera, ante el electorado nacional como una izquierda cristiana. (67) Para ello, Tomic intentó distanciarse en la forma más visible de la gestión de Eduardo Frei, con un costo necesario: el propio Frei se distanció de la candidatura de su partido, a la cual no le prestó el apoyo que podía haberle prestado.

La derecha, por su parte, representada por el Partido Nacional, producto de la fusión de los antiguos partidos Liberal y Conservador, y por el Partido Democracia Radical, - escisión derechista del Partido Radical, decidió presentar

(67) Labrousse, Alain, op. cit., p. 216.

como candidato a Jorge Alessandri Rodríguez, ex-Presidente a quien se hacía aparecer como una figura que estaba "por encima de los partidos y de sus querellas estériles". (68) De esta forma, la derecha confiaba en que la creación del mito alessandrista podría canalizar los votos de un electorado que, según ella, estaba cansado de la lucha partidista. Con tal propósito, Alessandri se presentaba como un candidato independiente, aunque lo cierto es que su proclamación - la hizo la derecha chilena.

En la izquierda, por otra parte, se había iniciado un interesante proceso de convergencia política entre los partidos Comunista, Socialista, Radical-en el que su ala izquierda pasó a controlar el Partido en la XIII Convención de 1969-MAPU, Socialdemócrata y Acción Popular independiente. Los realmente importantes eran los tres primeros, que habían obtenido el 41% de los votos en las elecciones parlamentarias de 1969 (aunque había que descontar los votos que correspondían al ala derecha del Partido Radical, que se escindió para apoyar a Alessandri) y el MAPU, que no participó en las elecciones pero que representaba una fuerza potencialmente importante en el medio cristiano.

Se trataba esta vez de una alianza o frente político -- mucho más amplio que el simple FRAP, ya que se incorporaban partidos que representaban a los sectores medios. Tampoco

(68) Ibid, p. 217.

era una situación parecida al antiguo Frente Popular, ya que indiscutiblemente, la hegemonía correspondía ahora a los partidos marxistas, tal como quedó reflejado en la elaboración del programa y en la designación del candidato de esta nueva alianza,

Los partidos de la naciente Unidad Popular, nueva expresión orgánica de la izquierda chilena, acordaron que el primer paso que debían dar para presentar un proyecto político, definido y viable al pueblo era la elaboración de un programa de gobierno que recogiera, al mismo tiempo, la orientación ideológica de los partidos que la conformaban y la tradición histórica del movimiento popular chileno. El 17 de diciembre de 1969, aprobaron en forma unánime el "Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular", documento que pronto pasaría a convertirse en una verdadera guía para las acciones del gobierno del Presidente Allende. (69) Por su importancia, analizaremos sus puntos fundamentales basándonos en su texto original. (70)

El documento se inicia con un diagnóstico crítico de la sociedad chilena, constatando su condición de país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero e incapaz de solucionar los grandes problemas na-

(69) Garcés, Joan, "Chile: el camino político hacia el socialismo", Editorial Ariel, Barcelona, 1972, p. 245.

(70) Programa Básico de la Unidad Popular en Labrousse, -- Alain, op. cit. p.p. 457 a 482.

cionales puesto que éstos derivan precisamente de sus privilegios de clase, a los cuales la burguesía no renunciará jamás en forma voluntaria.

Del diagnóstico macroeconómico y político, el documento pasa enseguida al análisis concreto de las implicancias de tal situación en la vida cotidiana de los trabajadores chilenos. El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10% de la población, afirma el Programa, acaparan más de la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas, y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos del pueblo y de la clase media.

El alza del costo de la vida es otro de los temas analizados. En los últimos diez años, se afirma, el costo de la vida ha subido en un mil por ciento. Ello hace que un 50% de los menores de 15 años estén desnutridos, desnutrición que afecta y limita su capacidad de aprender y de instruirse.

Por todos los motivos anteriores, sostiene el documento programático que estamos analizando, la tarea fundamental del gobierno del pueblo será terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios y de la oligarquía terrateniente y sentar las bases para la construcción del socialismo en Chile.

Las transformaciones sociales, sigue diciendo el documento, sólo serán posible sobre la base de la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, es decir, de los más de tres millones de trabajadores que con sus familias constituyen el grueso del pueblo. La Unidad Popular se ha creado precisamente para eso: para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la -- conquista del poder.

El Programa llama a la constitución de los Comités de - Unidad Popular (CUP), organismos sociales de base que deben formarse en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela del territorio nacional para integrar a todo el -- pueblo a la campaña de la izquierda y, posteriormente, al ejercicio del poder.

A continuación, el Programa diseña las principales medidas que adoptaría la Unidad Popular en caso de conquistar el triunfo electoral, las podemos dividir en tres áreas. -- principales: políticas, institucionales y económicas.

En materia política, el gobierno popular no sólo se com prometía a respetar las garantías democráticas y los derechos humanos, sino que sostenía la necesidad de profundizar la democracia, eliminando todos los obstáculos que existían para una real integración del pueblo a la vida política na cional. El gobierno Popular, sostenía el Programa, será -

pluripartidista y respetará los derechos de la oposición -- siempre que ésta los ejerza dentro de los marcos legales.

Para asegurar la plena incorporación de los trabajadores a la conducción del país, el Programa Básico sostenía que las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes y profesionales, intelectuales, artesanos y pequeños y medianos empresarios serían llamados a intervenir en los órganos de poder. Por ejemplo, sostenía la necesidad de entregar la administración de las instituciones de previsión social a los trabajadores, de incorporar las Juntas de Vecinos y organizaciones de pobladores sin casa a la dirección de los organismos públicos de la vivienda y de integrar a los obreros y empleados a los Consejos Directivos de las empresas del Estado.

En materia institucional, el Programa sostenía la necesidad de generar una movilización organizada de las masas -- para construir desde la base social una nueva estructura -- de poder. Era necesario, afirmaba, la aprobación de una nueva Constitución Política que institucionalizara la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

El organismo superior del nuevo Estado popular debería ser una Asamblea del Pueblo, Cámara Unica en la que se expresaría la voluntad y la soberanía popular; normas especí-

ficas determinarían con precisión cuáles serían las atribuciones del Presidente de la República, de los Ministros, de la Asamblea del Pueblo y de los organismos regionales y locales de poder y de los partidos políticos, a fin de asegurar un real respeto a la mayoría ciudadana. Todas las autoridades políticas del país serían elegidas en un solo proceso legislativo, y los representantes populares estarían sujetos a mecanismos de control de los electores, quienes podrían, incluso, revocar sus mandatos.

En materia económica, el Programa de la Unidad Popular proponía la creación de un sistema nacional de planificación que tendría carácter ejecutivo y cuya misión esencial sería dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes nacionales deberían ser aprobados por la Asamblea del Pueblo y los organismos de trabajadores tendrían una intervención fundamental en dicho sistema de planificación.

El proceso de transformación económica se iniciaría con una política destinada a crear un área estatal dominante, llamada área de propiedad social. Dicha área, cuya constitución era un elemento fundamental en la estrategia política de la Unidad Popular, estaría formada por las empresas que eran propiedad del Estado a esa fecha y por aquellas que se expropiarían. Como primera medida para la con-

formación de esta área, el Programa contemplaba la nacionalización de aquellas riquezas básicas que estuvieran en manos del capital extranjero y de los monopolios nacionales.

Se conformarían, además, un área privada que permanecería en manos de los dueños del capital y que serían beneficiadas por la planificación económica nacional, siempre que garantizaran los derechos de sus trabajadores, y un área mixta compuesta por empresas que combinarían los capitales del Estado y los particulares. En forma paralela al proceso de transformación de la economía nacional, el gobierno de la Unidad Popular se comprometía a impulsar y profundizar una auténtica reforma agraria, superando los vacíos e inconsecuencias de la existente.

En general, los grandes objetivos de la política económica eran planteados de la siguiente manera por el Programa Básico: a) Volcar la capacidad productiva a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías nacionales, incentivando la producción de bienes de consumo popular, baratos y de buena calidad; b) garantizar ocupación a todos los chilenos, con remuneraciones adecuadas lo cual implicaba el necesario diseño de una política de pleno empleo; c) liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero, expropiando el capital imperialista; d) diversificar los mercados de las exportaciones y lograr una plena independencia

tecnológica; e) tomar las medidas necesarias para estabilizar la moneda.

El Programa se extendía también a los campos cultural, educacional y social en los que se contemplaban medidas -- tendientes a democratizar las políticas y las instituciones de estos sectores, con el propósito de incorporar a todo el pueblo a las ventajas y a la dirección de la cultura y la educación nacional.

El 22 de enero de 1970, la Unidad Popular chilena designó a su candidato presidencial: Salvador Allende Gossens, militante del Partido Socialista, político de larga y destacada trayectoria en las filas del movimiento popular chileno y candidato de la izquierda en las últimas elecciones presidenciales de 1958 y 1964. Allende había sido Ministro, diputado, senador, Presidente del Senado, Presidente del Colegio Médico de Chile y dirigente de su Partido Socialista y era un profundo conocedor de su pueblo y de su sistema político.

La campaña presidencial de 1970 representó un salto cualitativo importante en la política nacional. Definidas ya -- claramente tres alternativas políticas--la derechista, la de la izquierda y la de centro-izquierda--se le ofrecieron al -- pueblo chileno tres programas perfectamente diferenciados y claros. En tanto Allende ponía el acento fundamental en la existencia de una profunda crisis nacional y en la necesidad

de enfrentarla mediante la transformación radical de la sociedad en todos sus aspectos, creando las bases para una sociedad socialista ya que en el capitalismo los problemas no podrían ser resueltos, Alessandri insistía en que la crisis se debía a la excesiva politización de la vida nacional, y que era necesario un gobierno tecnócrata para superar los problemas nacionales, dentro de los marcos del capitalismo.

Tomic, por su parte, planteaba al electorado un programa bastante similar al de la Unidad Popular. Sostenía la necesidad de crear una nueva economía, con un área social y otra privada. Con ello se iniciaría un proceso de cambios orientado por dos actores fundamentales: Estado y los trabajadores. El área social se formaría, al igual que lo planteado por el programa de la UP, por expropiaciones. Pero-y ésta es una diferencia importante-el programa de la DC si bien contemplaba la nacionalización del cobre, no extendía el proceso expropiatorio al hierro, el salitre, el carbón, ni al sistema financiero y los monopolios industriales.

El programa de Tomic denunciaba con vigor los efectos nocivos de la concentración monopólica. Para superarlo, --sostenía, es preciso incrementar el rol del Estado y de la participación popular en todos los aspectos centrales de la economía nacional. Sus proposiciones, si bien eran de un claro contenido progresista, no iban más allá que del plan-

teamiento de reformas al sistema capitalista para hacerlo más justo y democrático. Así, "el programa de Tomic reposa ba sobre la creencia en la posibilidad de una alianza entre el Estado y los diferentes sectores productivos (privados y socializados), respetando las normas del bien común, de la eficiencia, de la independencia nacional y de una participa ción democrática en la determinación de los objetivos y los productos de desarrollo. El hecho de que las medidas pro-- puestas no alteren sino parcialmente las estructuras de pro-- ducción, es la causa de las neutralizaciones a las que se - enfrenta el propósito de la DC de reemplazar lo que ellos - llaman la vía capitalista de desarrollo". (71)

A pesar de sus diferencias, lo cierto es que los progra mas de Allende y de Tomic se asemejaban mucho más entre sí - que lo que se parecía el programa demócratacristiano al de - la derecha. El estilo de conducción de la campaña contribu yó, además, a alejar aún más a la derecha de la DC, ya que - Tomic dirigió toda su campaña y propaganda y sus discursos a atacar la posibilidad de una vuelta de la derecha al gobier no, planteando la de su partido como una alternativa revolu cionaria y popular.

El 4 de septiembre de 1970 se realizaron, finalmente, - las elecciones presidenciales chilenas. Los resultados fue- ron los que aparecen en el cuadro siguiente.

(71) Garcés, Joan "Chile: el camino político hacia el socia lismo", p. 117.

Cuadro No. 4

Resultados electorales de las elecciones presidenciales de 1970*

Allende	1.070.334 votos	. . .	36,3%
Alessandri	1.031.151 votos	. . .	34,98%
Tomic	821.000 votos	. . .	27,84%

Al hablar al pueblo el día 5 de septiembre de 1970, en una concentración realizada en Santiago que reunió a más de un millón de personas-en una ciudad de tres millones-Allende no dejó lugar a dudas en cuanto a su intención de cumplir escrupulosamente con lo que había prometido durante la campaña. Después de asegurar que respetaría los derechos de todos los chilenos, dijo: "Pero también declaro, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a La Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico - que hemos contraído, de convertir en realidad el Programa de la Unidad Popular". (72)

El triunfo del candidato de la Unidad Popular generó, - por una parte, una extraordinaria movilización popular en todo el país, y por otra, una variada cantidad de reacciones en los sectores que veían con preocupación el ascenso inminente de Allende a la presidencia: los partidos de derecha, los sectores derechistas de la Democracia Cristiana y las Fuerzas Ar ma da s, en cuyo seno se inició una lucha de tendencias que ter

*Fuente: Labrousse, Alain, op. cit., p. 241.

(72) Allende, Salvador, "Discursos", Editorial
 ciales de La Habana, Cuba, 1975, p. 22.

minaría dramáticamente con el asesinato del general René -- Schneider, Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, correspondía, según la Constitución de 1925 en vigencia a esa fecha, al Congreso elegir a cualquiera de los dos que hubieren obtenido las mayores votaciones: Allende o Alessandri. La tradición indicaba que, en casos similares, el Congreso se había pronunciado siempre por otorgar el -- triunfo a quién hubiere obtenido el primer lugar. Pero nunca como ahora el Congreso se había enfrentado a la disyuntiva de designar como Presidente de la República a un candidato marxista que se mostraba dispuesto a transformar radicalmente la sociedad chilena, iniciando la construcción del socialismo.

En el lapso de sesenta días que mediaba entre la elección y la investidura de Allende como Presidente, es decir, entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de noviembre de ese mismo año, Chile vivió momentos de extrema tensión. Parecía como si todas las fuerzas defensoras del status se hubieran concertado para impedir, por diversos medios, que Allende asumiera la Primera Magistratura nacional.

Radomiro Tomic, el derrotado candidato de la DC, reaccionó la misma noche en que se declaró el triunfo de Allende. - Con plena conciencia del significado de su acción y ante la

inminente posibilidad de que la derecha intentara desconocer, en su beneficio, el triunfo de la UP, visitó a Allende a las diez de la noche del día 4 de septiembre de 1970 y, ante la prensa nacional y extranjera reconoció, el legítimo triunfo de Salvador Allende. (73)

El reconocimiento anterior, que demostraba la consecuencia de Tomic con su orientación progresista y con su programa electoral, no hizo sino avivar las contradicciones al seno de la Democracia Cristiana y su sector de derecha, encabezado por el propio Presidente Frei e inició una serie de maniobras para impedir que el Congreso confirmara los resultados electorales. Y como el Congreso de la época estaba compuesto por 80 representantes de la Unidad Popular, (entre diputados y senadores), 75 de la Democracia Cristiana y 45 de la derecha, la DC jugaba un papel de árbitro en la situación.

"El miércoles 9 de septiembre, Alessandri hizo una declaración pública sugiriendo una maniobra legal susceptible de cerrar el paso a Allende. Dijo 'en el caso de ser elegido -- por el Congreso, renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección'. Anticipó, desde luego, en forma categórica, que en ella no participaría por motivo alguno". (74)

El día 13 de septiembre se realizó en Santiago y en las

(73) Cfr. Bitar, Sergio, op. cit., p. 360.

(74) Labrousse, Alain, op. cit., p. 243.

principales ciudades del país una serie de gigantescas manifestaciones populares con el propósito de defender el triunfo electoral de Allende y disuadir a las fuerzas sociales y políticas que trataban de impedirlo. Allende dijo en aquella oportunidad: "El pueblo sabe ahora defender su victoria. Si pretenden, en una actitud de locura, provocar una situación que nosotros rechazamos, que sepan que el país se va a parar, que no habrá empresa, industria, taller, escuela, hospital o campo que trabaje, como primera demostración de nuestra fuerza. Que sepan que los obreros ocuparán las fábricas y que sepan que los campesinos ocuparán las tierras. Que sepan perfectamente bien que tenemos el sentido de la responsabilidad, pero que sabemos también la fuerza que representa un pueblo disciplinado y organizado".

(75)

La reacción popular, la actitud enérgica del ala izquierda del PDC y el temor de los sectores del centro a generar una situación de abierta lucha armada en Chile fueron factores que decidieron la actitud final de la Democracia Cristiana. El gobierno de Frei, sin embargo, y el ala derecha de su partido, no se dieron por vencidos muy rápidamente. Mediante maniobras como el discurso del Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar, de mediados de septiembre del 70, intentaron desquiciar la economía nacional provocando una masiva fuga de capitales y el mercado negro.

Otro elemento decisivo en la posición del Partido Demócrata Cristiano fue el fracaso de sus intentos por hacer que las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado, para llamar luego a elecciones en las que la DC repararía su error histórico y celebraría una alianza con la derecha para impedir el triunfo de la izquierda. En sus "Memorias", el general Carlos Prats González ha dejado testimonios indesmentibles de los reiterados llamados que en tal sentido hicieron al alto mando del Ejército los principales dirigentes democristianos, asegurando que esa era la real posición del Presidente Frei, aunque éste, en público, manifestó ser siempre contrario a un golpe de Estado, limitándose a expresar su preocupación por el futuro de la patria que caería irremediablemente en manos del marxismo. (76)

Ante la virtual imposibilidad de impulsar un golpe de Estado para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República, y ante la repulsa de tal maniobra por parte de su sector de izquierda, la directiva del PDC y Frei optaron por exigir que la Unidad Popular aprobara un Estatuto de Garantías que, como reforma constitucional, asegurara a la oposición el control de los medios masivos de comunicación, el control de las universidades y colegios -- particulares a los cuales el Estado debería, además, financiar y la inamovilidad de los funcionarios públicos designa

(76) Prats, Carlos, op. cit., p. 169-174.

dos por la Democracia Cristiana. El mencionado Estatuto ampliaba, además las atribuciones del Congreso de modo de hacer aún más difícil la aprobación de leyes destinadas a modificar la estructura social, económica y política de Chile. (77)

El 15 de octubre de 1970, la Cámara de Diputados aprobó el Estatuto de Garantías. El 19 del mismo mes, Alessandri declaró que reconocía el triunfo de Salvador Allende y que retiraba su candidatura y renunciaba a la opción de ser elegido Presidente por el Congreso. El mismo día, el Senado aprobó el Estatuto de Garantías y la Democracia Cristiana dio orden a sus parlamentarios de votar por Salvador Allende en la sesión plenaria del Congreso.

El 22 de octubre fue asesinado por un comando de derecha, bajo las órdenes del general retirado Roberto Viaux, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas René Schneider, quien mantuvo siempre una actitud constitucionalista, negándose a aceptar las sugerencias de la derecha, Democracia Cristiana y del propio Frei para dar un golpe de Estado que impidiera el triunfo de Allende. Lo reemplazó en el cargo, por designación del Presidente Frei en consulta con el Presidente electo Salvador Allende, el general Carlos Prats González. El 24 de octubre el Congreso -

(77) Selser, Gregorio, "Chile para recordar", Ediciones - Crisis, Buenos Aires, 1974, p. 108.

eligió a Salvador Allende como Presidente de la República, por 153 votos contra 35 para Alessandri y 7 votos en blanco. El 4 de noviembre de 1970 asumió la presidencia de la República el candidato de la Unidad Popular, Salvador ---- Allende, iniciándose de este modo un nuevo periodo en la - historia de Chile. (78)

(78) Labrousse, Alain, op, cit., p. 247.

Capítulo Tercero: Primera fase del gobierno de la Unidad Popular : 4 de noviembre de 1970 a mediados de junio de 1972 .

En este capítulo trataremos lo que hemos denominado primera fase del gobierno de la Unidad Popular que abarca desde el 4 de noviembre de 1970, fecha en que Allende accedió a la presidencia de Chile, hasta mediados de junio de 1972. Iniciaremos el capítulo con una caracterización de la estrategia política de la Unidad Popular, conocida como vía chilena al socialismo y aludiremos a las diversas interpretaciones y tendencias respecto a dicha vía existentes dentro del bloque político de la coalición gobernante. A continuación analizaremos el programa económico de la Unidad Popular y las metas alcanzadas en materia económica por la gestión gubernamental en este periodo. Luego desarrollaremos los recursos institucionales utilizados por el gobierno popular para lograr la aplicación de su programa y los desajustes económicos de esta etapa. Continuaremos con los aspectos propiamente políticos de esta primera fase, centrándonos en la estrategia opositora de la Democracia Cristiana, Partido Nacional y Democracia Radical y en la lucha ideológica desarrollada en el seno de la izquierda chilena durante los primeros dieciocho meses del gobierno de Allende. Finalizaremos el capítulo con un análisis de las luchas sociales desatadas en el país como consecuencia de las contradicciones generadas por el proceso de gobierno y de las relaciones del gobierno popular con las Fuerzas Armadas.

3.1 Caracterización de la vía chilena al socialismo.

La instalación del gobierno de la Unidad Popular, el 4 de noviembre de 1970, abrió una perspectiva nueva en el desarrollo histórico chileno: la vía chilena al socialismo. Esta estrategia política — conocida también como transición al socialismo en democracia — postulada en el programa de gobierno de la UP concitó, además, un profundo interés y preocupación en la opinión pública mundial pues, también, abría nuevas perspectivas a las luchas populares de otras naciones.

La ortodoxia marxista parecía romperse en un país pequeño y distante como Chile donde una amplia alianza popular cuyo eje lo conformaban dos partidos marxistas — el Comunista y Socialista — advenía al gobierno con un programa revolucionario que pretendía iniciar la construcción del socialismo en libertad, pluralismo y democracia. Y lo más sorprendente: ello había sido posible mediante el sufragio universal.

Como sostiene Bitar, "el avance simultáneo hacia la transformación de la base económica y la ampliación de la democracia, en el marco de la institucionalidad, le otorgaba a la experiencia chilena su rasgo distintivo y único: transición al socialismo en democracia". (79)

(79) Bitar, Sergio, op. cit., p. 54 .

De acuerdo a su programa de gobierno la Unidad Popular suponía que las condiciones históricas objetivas del país harían factible iniciar una vía al socialismo diferente a las otras experiencias conocidas hasta entonces. Es decir, "que el desarrollo económico e institucional de Chile y la organización social y política permitirían un segundo camino al socialismo cuya peculiaridad residiría en la transformación de la base económica y el subsecuente cambio de las relaciones sociales de producción en el marco de la institucionalidad".(80)

Según el mencionado programa, el bloque político de la Unidad Popular proponía en lo económico que: "Las fuerzas populares unidas... buscarían como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo".(81) En lo político, el programa fijaba como doble tarea - la de "...preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores, y transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder".(82)

(80) Ibid, p. 54-55.

(81) Programa Básico de la Unidad Popular en Labrousse, Alain, op. cit., p. 462.

(82) Ibid, p. 457.

En otra de sus partes la propuesta programática dejaba sentado que el gobierno popular "garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad de domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente... Asimismo, el gobierno popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, -- con el pleno respeto de todas las ideas y de las creencias -- religiosas, garantizando el ejercicio de su culto... El gobierno popular será pluripartidista. Estará integrado por -- todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarios ... El gobierno popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales."(83)

Más adelante el programa de la UP se refería a la -- creación de un nuevo orden institucional cuando afirmaba que : "A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se cons--- truirá desde la base una nueva estructura de poder. Una nueva constitución política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal"(84) Para tal efecto -- postulaba por "una organización del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del

(83) Ibid, p.p. 458-459 .

(84) Ibid, p. 459.

Pueblo como órgano superior de poder. La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión... Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos".(85)

Por consiguiente, de acuerdo a las propuestas del programa de la Unidad Popular transcritas era claro que éstas no podían llevarse a cabo sin la construcción de un Estado popular, no burgués (aunque no proletario) pues se proponía el reemplazo de la actual organización estatal por otra, cuyo órgano superior sería la Asamblea del Pueblo. En esencia, esta tesis significaba que ese Estado popular podía construirse -- desde y a partir del Estado burgués existente en Chile. Esta era la originalidad de la vía chilena al socialismo y la diferencia con las tesis clásicas y con la experiencia marxista leninista en que el gobierno pasa a ser el instrumento de destrucción del sistema institucional burgués, a partir de la -- cual, en función de la correlación favorable de fuerzas, puede construirse el nuevo Estado.

La estrategia del programa de la UP, en cambio, partía de la base que con la institucionalidad vigente en Chile era

(85) Ibid, p.p. 459-460.

posible llevar a la práctica reformas sustantivas en la infraestructura económica las que, a su vez, ampliarían la base de apoyo popular y crearían las condiciones favorables para la gestación de una nueva institucionalidad. El ejercicio del poder Ejecutivo y la utilización de las normas jurídicas vigentes posibilitarían concretar las nacionalizaciones y expropiaciones contempladas en el programa de gobierno y, al mismo tiempo, con el apoyo y movilización de las masas generar una nueva estructura de poder. Marini puntualiza muy claramente la perspectiva que planteaba la vía chilena al socialismo al afirmar que se trataba de "la posibilidad de transformar revolucionariamente la sociedad chilena mediante la utilización del aparato estatal existente, y de promover la sustitución gradual de ese aparato a medida que avanza el proceso mismo de transformación social... La especificidad de la vía chilena estaría en que la toma del poder no precede, sino que sigue a la transformación de la sociedad, en otras palabras, es la modificación de la infraestructura social lo que, alterando la correlación de fuerzas, impone y hace posible la modificación de la superestructura. La toma del poder se realizaría así gradualmente y, en cierto sentido, pacíficamente, hasta el punto de conformar un nuevo Estado correspondiente a la estructura socialista que se habría ido creando". (86)

(86) Marini Ruy, Mauro, "El reformismo y la contrarevolución". Editorial Era, México, 1976, p.p. 86-87.

El Presidente Allende resumió esta tesis programática en varios de sus discursos. Así en su Primer Mensaje al Congreso Pleno, de 21 de mayo de 1971, manifestó: "...Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una nueva manera de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia con sus poderosos partidos obreros de definición marxista. Sin embargo, una vez más la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo -- donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista".(87)

En otra ocasión, en marzo de 1972, Allende afirmaba: "Queremos, dentro de nuestro modelo político a partir del pluralismo, la democracia, y la libertad, utilizando la -- institucionalidad burguesa para hacer posible los cambios que este país reclama y necesita, en el campo político, en el campo económico y en el campo social, para llegar al so

(87) Witker, Alejandro, "Salvador Allende (1908-1973). Prócer de la liberación nacional", UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, México, 1980, p. 131.

cialismo. En el caso de Chile es posible el uso de la institucionalidad porque es amplia y abierta para estos cam---bios."(88) En otra parte de su Primer Mensaje al Congreso Pleno de mayo de 1971 también sostuvo: "El principio de legalidad rige hoy en Chile...No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos populares... La lucha de los movimientos y partidos populares que hoy son gobierno - ha contribuido sustancialmente a una de las realidades más prometedoras con que cuenta el país: tenemos un sistema institucional abierto que ha resistido incluso a quienes pre--tendieron violar la voluntad del pueblo. La flexibilidad - de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera de contención. Y que al igual que nuestro sistema legal se adaptará a las nuevas exigencias pa--ra generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la superación del capitalis--mo... Al mismo tiempo es necesario adecuar las institucio--nes a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el siste--ma bicameral en funciones, por la Cámara Unica".(89)

Finalmente es importante destacar que la transición al socialismo en democracia o vía chilena al socialismo impli

(88) Allende, Salvador, "La vía chilena al socialismo" en "La vía chilena al socialismo", p.p. 7-8.

(89) Witker, Alejandro, op. cit., p.139-140 .

caba transformar el sistema económico capitalista vigente dentro de un marco restrictivo. Como lo señalaba Allende: "Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, la institucionalidad y las libertades políticas exige adecuar nuestra acción en lo político a ciertos límites".(90) Sin duda el éxito o viabilidad del proyecto político de la Unidad Popular dependía de ciertas condiciones: del apoyo que las clases medias brindaran al gobierno, de la actitud que asumieran en el Congreso Nacional los partidos políticos que no pertenecían a la alianza gobiernista, en especial, la Democracia Cristiana representante de esos sectores medios y de la postura que adoptarían las Fuerzas Armadas chilenas. No obstante, así como la vía chilena al socialismo presuponia estas condiciones tenía la ventaja de que en un Estado presidencialista con fuerte predominio del poder Ejecutivo, la Unidad Popular disponía del gobierno no centro del aparato estatal.

Lo anteriormente señalado resume las líneas generales de los supuestos básicos en que descansaba la estrategia política de la Unidad Popular. Sin embargo al interior de esta coalición no existía un criterio unánime en torno a cómo se aplicaría dicha estrategia. Para una mejor comprensión de las diferentes tendencias y orientaciones respecto a la

(90) Ibid, p. 142 .

línea política de la vía chilena al socialismo, es necesario recurrir a la historia de la conformación del frente partidista de la Unidad Popular.

Hemos visto que el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970 fue el resultado de la elección a tres bandas, es decir, de la división de los partidos burgueses - que permitió una aritmética electoral favorable a la izquierda. Pero esa victoria fue, además, la consecuencia de medio siglo de luchas del movimiento popular y de los partidos de la izquierda chilena que lograron constituir un frente popular con otras agrupaciones. Así, desde su inicio, la UP - constituyó un frente político que por medio de un programa - expresó una alianza de clases antimonopólica, antiimperialista y antilatifundista y no un simple pacto electoral para -- presentar un candidato único en 1970.

En el capítulo anterior vimos que antes de la designación del candidato, en enero de 1969, se estableció un programa común de gobierno y un acuerdo básico sobre la conducción de la campaña a partir de un compromiso político contraído, en octubre de 1969, por los partidos Comunista, Socialista, Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitaria y dos asociaciones partidarias de menor importancia ligadas a la pequeña burguesía: el Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente. Pero la constitución de la Uni-

dad Popular no se realizó sin dificultades; provocó una importante escisión de derecha del Partido Radical y la definición misma del programa desató una intensa discusión.

Este debate reflejaba una cuestión esencial: la existencia de dos posturas diferentes respecto a la estrategia política a seguir. Por esta razón, si bien la formación de la Unidad Popular "reeditó, bajo nuevas formas, una trayectoria de alianza entre comunistas y socialistas en la sociedad chilena" (91), ésta no estuvo exenta de discrepancias. Como las divergencias entre los dos partidos más importantes de la Unidad Popular aflorarán durante el gobierno de Allende, creemos necesario detenernos en ellas y para lo cual, es preciso, hacer una breve historia de sus respectivos proyectos estratégicos ante la problemática del país.

Heller refiriéndose a la política de unidad practicada por la izquierda chilena entre 1956 y 1970, sostiene -- que la unidad fue posible gracias a la gran capacidad de a daptación del Partido Comunista a las cambiantes con tradicciones internas, así como a su capacidad de negociación con las demás fuerzas políticas. Afirma que: "Comparado con el Partido Socialista ha sido y es la fuerza más conservadora de la izquierda, pero también la más flexible... Mientras que el Partido Socialista, que ocupa la posición más radical en el espectro político y es el más escéptico en cuanto a la

(91) de Riz, Liliana, op. cit., p. 105.

viabilidad de la transición pacífica al socialismo, ha abrigado en su seno facciones en algunos momentos abiertamente opuestas entre sí, lo que evidentemente ha obstaculizado la realización de una política coherente... el Partido Comunista ha sido más cohesionado dada su sólida y rígida estructura que no acepta divergencias entre sus miembros".(92)

El Partido Comunista chileno, congruente con la línea política de la vía pacífica para llegar al gobierno definida en su X Congreso de 1957, corroborada en 1964 y en su XIII Congreso partidario de 1965, postulaba por la actuación de la izquierda dentro de los marcos electorales y por la negociación con otras fuerzas políticas no marxistas en la perspectiva de un gobierno popular. En 1956, Luis Corvalán Secretario General del Partido Comunista chileno sostenía:

"Ciertamente no es fácil que el pueblo gane las elecciones en nuestro país. Pero los hechos indican que ha sido capaz de ganarlas una vez y que las podrá ganar con menos dificultades en el futuro, en la medida en que se fortalezca y desarrolle todavía más el movimiento popular y éste pueda imponer nuevas y más profundas ampliaciones a sus derechos políticos y electorales".(93)

Siete años más tarde, en 1963, Corvalán insistía en la estrategia legal o pacífica, aunque añadía: "...en el curso

(92) Heller, Claude, op. cit., p. 135.

(93) Ibid, p. 105.

del proceso revolucionario puede resultar conveniente pasar de una a otra vía (vía pacífica versus vía armada)"(94)

El Partido Socialista, en cambio, debido a su heterogeneidad ideológica interna antes señalada, sostuvo una estrategia oscilante entre la vía reformista y la vía revolucionaria que se resumían en la línea política del Frente Popular y del Frente de Trabajadores respectivamente. Así, en el Congreso efectuado en 1959, los socialistas se pronunciaron por el camino reformista cuando acordaron que "la reestructuración e independencia económica solamente podían modificar su crítica situación y abrir un proceso de cambio, en el cual la recuperación de las riquezas nacionales y el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, por medio de la nacionalización, la reforma agraria y una industrialización adecuada, de las reformas tributaria, educacional, previsional dentro de un plan revolucionario integral de desarrollo, transforme completamente el contenido de la actual democracia fraudulenta para dar vigencia a una real democracia económica, social y política."(95)

Sin embargo, esta postura tuvo un viraje radical en el XX Congreso partidario de 1965 donde se aprobó la línea revolucionaria del Frente de Trabajadores cuya tesis esencial se

(94) Ibid, p. 106.

(95) Jovet, Julio César, "El Partido Socialista de Chile", Editorial Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1971, Tomo II.

sintetiza en la declaración: "Nuestra estrategia descarta el hecho de la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder".(96)

En el XXII Congreso del Partido Socialista, celebrado en 1967, se ratificó la posición del camino revolucionario pues se acordó que: "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada". (97)

Pero las vacilaciones de la línea política de los socialistas volvieron a manifestarse. A pesar de las formulaciones verbales revolucionarias del XXI y XXII Congreso, en la acción concreta, el partido asumió posiciones opuestas y, paulatinamente, se fue asimilando a la línea postulada por el Partido Comunista que tendía a "agrupar las más amplias fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas, en una alianza de partidos marxistas y no marxistas".(98).

Una prueba de la aceptación de la postura comunista fueron las declaraciones del Pleno Nacional del Partido Socialista de 1969 que definieron al frente revolucionario

(96) Ibid, p. 111.

(97) Ibid, p. 130.

(98) Ibid, p. 153.

como aquel en el que "...tienen cabida todos los partidos, organizaciones y personas abiertamente comprometidos en la lucha antiimperialista y que estén por la sustitución del régimen capitalista por una sociedad socialista."(99)

No obstante, la adaptación socialista a la estrategia de la vía pacífica defendida por el Partido Comunista no fue fácil, ni contó con el apoyo unánime de los socialistas. Ocasionó intensas discusiones partidarias internas y no logró convencer a un sector del Partido Socialista por lo que cuando la Unidad Popular llegó al gobierno se perfilaban -- dos posturas en el seno del bloque político allendista.

Una de ellas propiciada por el Partido Comunista, un sector importante del Partido Socialista, el Radical y el propio Allende que, en definitiva, predominó durante el proceso del gobierno popular. Esta postura consideraba que la fase que el gobierno popular inauguraba sería preparatoria, es decir, permitiría sentar las bases de la construcción del socialismo pero no iniciaría la construcción del mismo.

La otra posición, minoritaria pero significativa, era sostenida por un sector de los socialistas y fuera de la Unidad Popular por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Postulaba que desde la fase inicial debía empezar la construcción del socialismo, y que la línea correcta era la conquista

(99) Ibid, p. 151 ..

del poder total y la transformación revolucionaria y radical del Estado.

Nos hemos detenido en reseñar las posiciones divergentes que existían en el seno de la alianza popular porque, - como veremos más adelante, estarán presentes en el transcurso del gobierno de la Unidad Popular y, en parte, influirán en el fracaso político de la vía chilena al socialismo. En efecto, a medida que el gobierno fue avanzando en las transformaciones estructurales de la sociedad chilena y se vio enfrentado a los escollos de la institucionalidad vigente, los partidarios de la última línea directriz empezaron a cuestionar al gobierno y a exigir una rectificación de la estrategia hegemónica de la Unidad Popular.

3.2 El programa económico de la Unidad Popular y sus realizaciones.

Antes de hacer un recuento de las realizaciones económicas del gobierno de Allende examinaremos las propuestas programáticas que la Unidad Popular postulaba en esta materia.

El programa económico de la Unidad Popular proponía una serie de medidas antimonopólicas, antiimperialistas y antilatifundistas que sentarían las bases para la construcción del socialismo.

Los rasgos centrales a partir de los cuales se habían definido estos lineamientos esenciales del programa eran: "un creciente sometimiento de la economía chilena a intereses extranjeros, una creciente concentración de la propiedad de los medios de producción y, por lo tanto, una creciente concentración de la capacidad de control de los sectores fundamentales de la economía chilena por intereses extranjeros o por fuertes intereses monopólicos internos, y una concentración también creciente del ingreso nacional".(100)

Al mismo tiempo en la formulación del programa económico de gobierno se consideró que la situación antes descrita había traído como consecuencia "una tasa de crecimiento relativamente baja, una tasa de acumulación también tradicionalmente baja; una incapacidad cada vez mayor para asegurar oportunidades de empleo productivo para el crecimiento de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, el sostenimiento de tasas de desempleo relativamente altas y la presencia persistente de presiones inflacionarias".(101)

Con base a esta caracterización de la economía del país, el programa planteaba la construcción de una nueva economía cuyo objetivo central era reemplazar la estructura económica existente en Chile, es decir, terminar con el poder del capi

(100) Allende, Salvador, "La vía chilena al socialismo" en "La vía chilena al socialismo", p. 43.

(101) Ibid, p. 43.

tal monopolístico nacional y extranjero y del latifundio a fin de iniciar la construcción del socialismo. Para lograr lo anterior el programa establecía que el proceso transformador de la economía chilena se iniciaría con la constitución de -- tres áreas de propiedad:

- a) Area de propiedad social o estatal que sería la dominante y estaría conformada por las empresas que actualmente poseía el Estado más las que se expropiarían. Para tal efecto se nacionalizarían las -- llamadas riquezas básicas como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras en poder de los capitales extranjeros y de los monopolios internos. De esta forma, integrarían el área de propiedad social o estatal: la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón, el sistema financiero del país especialmente, la banca privada y seguros, el - comercio exterior, las grandes empresas y monopolios de distribución, los monopolios industriales estratégicos. Además, se incluía en esta área de propiedad social a aquellas actividades consideradas como estratégicas porque condicionaban el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones,

la producción, refinamiento y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado, la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa y el papel. El programa establecía que la constitución de esta área de propiedad social o estatal se realizaría mediante expropiaciones que resguardarían los intereses de los pequeños accionistas.

- b) Area de propiedad privada integrada por aquellos sectores de la industria, minería, agricultura y servicios en que permanecería vigente la propiedad privada de los medios de producción. Las empresas pertenecientes a este sector se verían beneficiadas con la planificación general de la economía nacional, el Estado les brindaría asistencia técnica y financiera y les aseguraba una adecuada y justa comercialización de sus productos. El programa, además, establecía que estas empresas debían garantizar los derechos a salarios y condiciones de trabajo justos a sus obreros y empleados.
- c) Area de propiedad mixta constituida por empresas en que se combinarían los capitales del Estado con los particulares. El programa disponía que los créditos o préstamos otorgados por los organismos estatales

de fomento a las empresas de esta área podrían serlo en calidad de aportes a fin de que el Estado sea socio y no acreedor de la empresa. Igual mecanismo regirá en los casos en que dichas empresas obtuvieran créditos avalados o garantizados por el Estado y sus instituciones.

Extensión y profundización de la Reforma Agraria. El programa de gobierno contemplaba, además, la extensión y profundización de la Reforma Agraria iniciada por el gobierno precedente. Establecía que el reparto agrario se concebía como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general.*

Ahora nos refereremos a los logros económicos de la primera fase del gobierno de la Unidad Popular. Abarcaremos el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 1970 - fecha en que Allende asumió la presidencia de la República - hasta mediados de 1972. Esta etapa correspondió a las directrices del Ministro de Economía Pedro Vuskovic y se caracterizó por el predominio de la acción ofensiva del gobierno contra la burguesía monopólica nacional y extranjera cuya consigna de movilización popular fue "ganar la batalla de la producción".

* Lo relacionado con las áreas de propiedad social, mixta y privada y la Reforma Agraria, Cfr. con Programa Básico de la Unidad Popular en Labrousse, Alain, op. cit., pp. 462-465.

El Presidente Allende congruente con la línea política central de su programa de gobierno: la vía chilena al socialismo, afirmaba que el crecimiento económico acelerado de la economía del país propuesto en dicho programa no implicaría la construcción de grandes empresas de acumulación socialista. En su Primer Mensaje al Congreso Pleno de 21 de mayo de 1971, antes citado, Allende sostenía: "Nuestras obras no sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en provecho de empresas ciclópeas. Nuestro objetivo no es otro que la edificación progresiva de una nueva estructura de poder, fundada en las mayorías y centrada en satisfacer, en el menor plazo posible, los apremios más urgentes de las generaciones actuales".(102)

Para lograr esta meta el gobierno contaba, como señalamos, con el Programa de la Unidad Popular que en lo económico pretendía, esencialmente, liberar a la economía chilena del control extranjero de los recursos productivos estratégicos a través de la socialización de los medios de producción más importantes que dominaban el proceso productivo interno y elevar el bienestar material de los sectores populares. Sin embargo, como veremos más adelante, varios factores — externos e internos — condicionarían estas metas.

En el plano externo constituiría una limitante el hecho de que, en 1970, Chile se encontraba subordinado a la es

(102) Witker, Alejandro, op. cit, p. 137.

estructura de relaciones internacionales del mundo capitalista, especialmente, del imperialismo norteamericano. Además, su ubicación geopolítica, en gran medida, le impediría hacer --- frente a un bloqueo económico abierto o solapado de Estados Unidos. En lo interno, hemos señalado que el gobierno de la Unidad Popular tenía su origen formal en un proceso político electoral y aún cuando poseía una legitimidad institucional que lo facultaba para dirigir el aparato del Estado, este mismo aparato le impondría serias trabas para actuar con plena libertad de maniobra.

Antes de referirnos a las realizaciones concretas del gobierno en este periodo, es necesario señalar que la política económica inicial se planteó en términos de una subordinación de su contenido y de sus modalidades al requerimiento político de propender a una ampliación de la base de sustentación del gobierno popular. Debido a esa necesidad, las orientaciones básicas de la política económica en esta fase: la --reestructuración de la economía en lo que el programa definía como tres áreas de propiedad— social o estatal, privada y mixta — la reactivación económica y la redistribución del ingreso, fueron llevadas a la práctica en forma interdependiente. Consciente de este requerimiento el Ministro Vuskovic sostenía: "No es posible profundizar en las transformaciones sustantivas sin ampliar la base de sustentación política del go-

bierno y, por lo tanto, los problemas de reactivación y redistribución del ingreso son un elemento necesario para poder impulsar esos cambios de fondo. Y a la inversa, no se podría seguir una política de reactivación y de redistribución sin que simultáneamente se estuviera atendiendo esas modificaciones de fondo".(103) Basada en esta premisa política la gestión gubernamental de la Unidad Popular en la etapa que estudiamos concretó en forma simultánea las metas -- que reseñamos a continuación.

Hemos visto que el programa planteaba la construcción de una nueva economía cuyo objetivo central era reemplazar la estructura económica existente en Chile en 1970. En esencia se trataba de que el Estado adquiriera el control de las empresas motrices de la economía y, en forma paralela, lograr la reactivación económica por medio del aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada de las mismas.

El primer punto supuso las nacionalizaciones y la constitución de la llamada área de propiedad social o estatal, y el segundo, el esfuerzo productivo particular de los trabajadores bautizado como la "batalla de la producción".

En cuanto a las nacionalizaciones y a la conformación del área de propiedad social, mediante la expropiación o control de las riquezas básicas -- en especial mineras -- de los

(103) Vuskovic, Pedro, "La política económica del gobierno de la Unidad Popular" en "La vía chilena al socialismo", p. 45.

monopolios industriales y empresas claves de la manufactura y la distribución, del sistema bancario y financiero se sentaron las bases para un desarrollo económico antimonopólico y antiimperialista del país, como fase preparatoria de la transición al socialismo.

Nacionalización de los recursos mineros. Con el objeto de recuperar los recursos mineros chilenos que estaban en manos de monopolios extranjeros, en especial norteamericanos, el -- presidente Allende -- inmediatamente de instalado en el gobierno -- presentó al Parlamento un proyecto de reforma constitucional para nacionalizar las grandes minas. Dicho proyecto fue aprobado por la unanimidad del Congreso a mediados de 1971 lo que facultó a Allende para promulgar, el 15 de julio de ese año, la ley de reforma constitucional que estipulaba "el derecho total, exclusivo e inalienable del Estado sobre todas las minas, el salitre, las tierras metalíferas, los salares, los yacimientos de carbón, los yacimientos de petróleo y gas y los otros recursos minerales".(104) Establecía además que "las expropiaciones deberán dar lugar a indemnizaciones".(105)

Acorde a lo establecido por esta ley de reforma constitucional las minas de cobre, de cuya mitad eran dueños eran los monopolios norteamericanos Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation, pasaron al área de propiedad social y su administración.

(104) Kudachkin, M., "Chile: la experiencia de la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias", Editorial Progreso, Moscú, 1978, p. 180.

(105) Lamour, Catherine, op. cit., p. 110.

quedó a cargo de comisiones integradas por representantes del Ministerio de Minería, de las Fuerzas Armadas y dirigentes -- sindicales. Para comprender esta trascendental medida adoptada por el gobierno popular es necesario detenernos en su análisis. La nacionalización del cobre significó incorporar al patrimonio nacional el recurso natural más importante de la nación pues representaba aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos en divisas del país y daba trabajo a más de treinta y seis mil personas. Además fue uno de los puntos claves que motivó la reacción del imperialismo norteamericano en contra del gobierno de Allende, como veremos más adelante en el capítulo cuarto de nuestro trabajo.

Las condiciones políticas para nacionalizar el cobre eran favorables en Chile en esos momentos. Las candidaturas de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana habían considerado la nacionalización en sus programas presidenciales. Por esas razones, incapaces de enfrentar la crítica de antipatriotismo de las masas chilenas, los diputados de la oposición votaron por unanimidad la reforma constitucional en las dos - Cámaras del Congreso reunidas en sesión plenaria el 11 de julio de 1971. Un afiche popular conmemorativo que clamaba "Chíle se puso pantalones largos", se pegó en las principales ciudades y, como relata una observadora del proceso de gobierno - de la UP: "El domingo 11 de julio de 1971 ha sido bautizado

con el nombre de 'Día de la Dignidad Nacional' y celebrado como tal. Mientras que las manifestaciones populares se desarrollaban en todo el país, el Jefe de Estado se trasladaba a Rancagua, donde le esperaba una multitud en fiesta, formada por los trabajadores de la gran mina El Teniente y sus familiares. Procedentes de los cuatro rincones de la ciudad columnas de manifestantes agitando banderolas y pancartas se reunieron en la Plaza de los Héroes de la Independencia para recibir a Salvador Allende, que iba acompañado por el Cardenal de Santiago, por los ministros de Asuntos Exteriores, de la Vivienda, de Educación y por el presidente de la CUT. Durante el larguísimo discurso, pero extremadamente didáctico, dirigido a todo el pueblo chileno, el Jefe del Estado dijo: 'Hoy es el Día de la Dignidad Nacional, porque Chile ha tomado definitivamente el camino de su independencia económica, es decir, el de su plena independencia política'.(106)

Como la nacionalización del cobre era un asunto delicado en la medida que definía las relaciones con el sistema entrelazado de corporaciones transnacionales y su representante político: el gobierno norteamericano, el Presidente Allende "temiendo el enfrentamiento con Estados Unidos buscó en torno a esta meta el máximo apoyo nacional".(107) Con esa finalidad trató de involucrar en la decisión de la nacionaliza--

(106) Ibid, p.p. 111-112.

(107) Bitar, Sergio, op., cit. p. 116 .

ción y la correspondiente indemnización a los otros poderes estatales, además del Congreso. De allí que el proyecto -- presidencial propusiera que el Contralor General de la República fijara el monto de indemnización. Sin embargo durante las discusiones del proyecto en el Parlamento, este propósito fue desvirtuado pues se acordó que el Contralor haría los descuentos del valor de libros a 1970 por derechos mineros, bienes en mal estado y por revalorizaciones de activos efectuados después de 1964. Pero el aspecto más importante a descontar, las utilidades excesivas, se dejó a criterio del Presidente de la República. En definitiva "la reforma constitucional aprobada por el Parlamento estableció que la indemnización se calculara sobre el valor de libros al 31 de diciembre de 1970. Luego se descontarían: a) las revalorizaciones efectuadas por las empresas con posterioridad al 31 de diciembre de 1964; b) el valor de los derechos sobre yacimientos mineros; c) el valor de los bienes que se encontrarán en condiciones deficientes. Por último facultaba al Presidente de la República para disponer que el Contralor, al calcular la indemnización, dedujese todo o parte de las utilidades excesivas devengadas a partir del 5 de mayo de 1955 hasta el 31 de diciembre de 1970."(108)

(108) Ibid, p. 116.

Esta modificación puso al Jefe del Estado en una situación difícil ya que dejó en sus manos la determinación de la indemnización. Entre tanto se desataban en el país grandes movilizaciones populares en contra del pago de indemnización a las compañías norteamericanas. Dentro de los partidos de la Unidad Popular, el Partido Socialista inició, a partir de julio de 1971, una intensa campaña que puede resumirse en las declaraciones formuladas por Carlos Altamirano, Secretario General de ese partido, en el Pleno del Comité Central de Algarrobo el 15 de agosto de ese año: "Puesto que los yankees se han llevado de nuestro país más de lo que le han dado, no tenemos ninguna razón para pagarles ni un céntimo".(109)

El Presidente Allende, presionado y sostenido, a la vez, por las masas, ejecutó una hábil maniobra. Así "mientras que la Anaconda y la Kennecott estimaban el valor de sus inversiones en Chile en unos 550 millones de dólares, Salvador Allende anunció el 28 de septiembre de 1971 que un total de 774 millones de dólares, correspondientes a los 'excesivos beneficios' - realizados por estas dos compañías durante los últimos quince años, sería deducido de la indemnización fijada por el Contralor de la República... A mediados de octubre, el Contralor General dio su veredicto definitivo: teniendo en cuenta las deducciones por 'beneficios excesivos'... la Anaconda debía al

(109) Lamour, Catherine, p. cit., p. 116 .

Estado chileno 78 millones de dólares y la Kennecott, 310 millones. Chile debía entregar por su parte 10 millones de dólares a Anaconda y 18 millones de dólares a la Cerro Corporation, por las minas Exótica y Andina, recientemente puestas en explotación, y en las que ningún exceso de beneficios se había podido realizar. Quedaba a las dos sociedades la facultad de recurrir de esta decisión ante un tribunal especial...(110)

En el caso de las minas de hierro, ese mismo año, se acordó la compra directa de las acciones en "33 millones de dólares a la Bethelheim Steel".(111) e igualmente se procedió con el capital nacional y extranjero invertido en el salitre y en el carbón. De esta forma, con la recuperación de las riquezas mineras básicas y su paso al área de propiedad social, a fines de 1971," el Estado controlaba la producción de salitre y de yodo; aproximadamente el 100% de la producción de carbón gracias a la nacionalización de la Compañía Lota - Schwager; la producción de hierro gracias a la nacionalización de la Bethelheim Chile Iron Mines, de la Compañía Santa Fé y Santa Bárbara." (112)

Nacionalización de los monopolios industriales.

En esta fase se lograron los más importantes avances

(110) Ibid, p. 117.

(111) Kudachkin, M., op. cit., p. 182.

(112) Bruna, Susana, "Chile: la legalidad vencida" Editorial Era, México, 1976, p. 157.

respecto a la nacionalización y posterior traspaso al área de propiedad social de los monopolios industriales y empresas -- claves de la manufactura. Ya fuera por la vía de la negociación o compra directa, de la expropiación, intervención o requisición — que analizaremos en el punto 3.3 de este capítulo — pasaron a integrar el área de propiedad social los monopolios de la industria textil, alimentaria, de bebidas gaseosas, metalmeccánica, del cemento, cuero y calzado y las industrias -- pesqueras. Esto trajo como resultado que, hacia fines de 1971, el área de propiedad social de la economía agrupara "a 187 empresas, de las cuales 159 fueron puestas bajo control del Estado después de noviembre de 1970" (113) y que, en este mismo periodo, el área de propiedad social constituyera "aproximadamente el 25% de la producción".(114)

En lo relativo a las industrias claves de la distribución los logros alcanzados por el gobierno fueron menos relevantes pues "se habían creado empresas de distribución tales como ENAVI (para la agricultura) y ENADI (para el gas licuado) y se habían transferido al área de propiedad social las empresas privadas de ABASTIBLE, LIPIGAS, SERVIGAS (en la provincia de Magallanes) y GASVALPO (en la provincia de Valparaíso)".(115)

(113) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", Siglo XXI Editores, Madrid, 1974, p. 138.

(114) Bruna, Susana, op. cit., p. 158.

(115) Ibid, p. 158.

Nacionalización de la banca.

Para la estatización o paso de la banca al área de propiedad social el gobierno lanzó una campaña de compra de acciones de los bancos, ofreciendo un precio ligeramente superior al curso normal en bonos reajustables y, presionando al mismo tiempo, con la inminencia de la estatización para provocar la consiguiente baja de la cotización de las acciones bancarias.

Por otra parte, mediante el control que el Estado tenía sobre las operaciones financieras a través del Banco del Estado y el Banco Central, pudieron detectarse una serie de situaciones irregulares en la banca privada que permitieron la intervención y su posterior paso al área de propiedad social. Así en marzo de 1972, salvo el Banco de Chile, lo esencial de los bancos más importantes del país estaban bajo control del Estado, como indica el cuadro No. 5. Las sucursales de bancos extranjeros: Bank of América, First National City Bank, el Banco Francés y el Banco de Londres, aceptaron su compra por bancos estatizados e incluso dieron créditos para facilitar la operación.

Nombre del Banco	Porcentaje de acciones transferidas
------------------	-------------------------------------

Chile	45
Edwards+	--
Continental +	55
Crédito e Inversiones +	12
Español-Chile	95
Israelita-Chile	95
O'Higgins	98
Nacional del Trabajo	85
Panamericano ++	--
Sudamericano	26
Chileno-Yugoeslavo	5
Chillán +	17
Comercial de Curicó	92
Concepción	93
Constitución	1
Llanquihue +	1
Osorno y La Unión	89
Regional de Linares +	6
Sur de Chile	78
Talca	92
Valdivia	72

Las cifras estadísticas que aparecen a continuación nos brindan una idea de la configuración del área propiedad social de la economía en esta etapa.

- + Bancos intervenidos por irregularidades comprobadas por la Superintendencia de Bancos.
- ++ El Banco Panamericano se fusionó con el Banco Nacional del Trabajo.

* Fuente: Bitar, Sergio, op. cit., p. 115.

Empresas incorporadas o bajo tuición estatal desde
noviembre de 1970 a octubre de 1971*

Sectores	Empresas incorpo radas o aumento de la participa ción estatal	Requisadas o intervenidas	Total
I. Sectores Producti- vos	23	38	61
Minería	4	--	4
Gran Minería	5	--	5
Industria	14	38	52
II. Sectores de infraes tructura y servicios	5	-	5
Energía y Combustible	2	-	2
Comunicaciones y difu sión	1	-	1
Transporte	2	-	2
III. Sectores financieros	10	4	13
Bancario	10	3	13
T O T A L	38	42	79

Por otra parte en lo relativo al comercio exterior, "la ampliación del área de propie
dad social significó el control por el Estado del 80% de las exportaciones y el 50% de
las importaciones."(116)

* Fuente: Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobier-
no de Allende", p. 139.
(116) Bruna, Susana, op. cit., p. 158 .

Expropiación de los latifundios. Mediante la expropiación de los latifundios, el gobierno de la Unidad Popular sentó las bases para un desarrollo económico antilatifundista en el agro.

El instrumento jurídico utilizado por el gobierno popular para cambiar las relaciones de producción en el campo fue la Ley de Reforma Agraria No. 16640, promulgada durante la gestión gubernamental de Eduardo Frei en 1967. Fiel al programa con el cual ganó las elecciones, Allende hizo de la liquidación del latifundio uno de los principales objetivos de esta etapa de su gobierno. Afirmaba que "si el cobre es el salario de Chile, la tierra es su pan. Este pan, sin embargo, no es suficiente para alimentar a diez millones de chilenos. No es la tierra lo que falta. Bien explotada podría alimentar fácilmente a treinta millones de personas".(117)

La Ley de Reforma Agraria, expedida durante la administración freista, era una ley reformista con una serie de limitaciones que sólo facultaban a la Unidad Popular para acelerar y profundizar el proceso de reparto agrario iniciado unos años antes. En términos generales, de acuerdo a esta ley se podía expropiar todo predio cuya extensión fuera superior a 80 hectáreas de riego bási

(117) Lamour Catherine, op. cit., p. 123 .

co. Esta era una medida simbólica equivalente a las tierras regadas de buena calidad cercanas a la provincia de Santiago. Debido a los grandes contrastes en las calidades de la tierra chilena, la ley contemplaba para cada zona del país un equivalente de estas 80 hectáreas de riego básico. Así podían significar "en algunas partes del sur, 500 hectáreas de secano arables y en otras partes 700 u -- 800 hectáreas y, en algunos casos, si eran terrenos de pas toreo o de cordillera, varios miles de hectáreas".(118) A demás facultaba para expropiar los predios, latifundios, pequeña o mediana propiedad que estuvieran mal explotados o abandonados por su dueño durante tres años después de -- promulgada la ley.

Respecto a las limitaciones y dificultades que -- presentaba la Ley de Reforma Agraria, Novoa Monreal señala lo siguiente:

- a) Permitía expropiar únicamente lo que constituía el dominio inmueble y con importantes excepciones.
- b) La expropiación excluía los denominados inventarios agrícolas, es decir, máquinas, herramientas, ganado, etc., elementos básicos para una - explotación adecuada de la tierra. Estos podían ser retirados y comercializados libremente por - sus dueños.

(118) Chonchol, Jacques, "La política agraria del gobierno - popular" en "La vía Chilena al socialismo", p. 104.

- c) Establecía el pago al contado de toda mejora efectuada en la propiedad después de noviembre de 1964, por lo cual la Corporación de Reforma Agraria (CORA) debía disponer de grandes capitales para pagos elevados por concepto de establos, almacenes, silos, sistema de irrigación, etc.
- d) La situación anterior propiciaba la expropiación de terrenos agrícolas desprovistos de los elementos necesarios para su explotación eficiente, o bien, que el latifundista, amparado por la ley tuviera el derecho a dismantelar la tierra antes que fuera entregada al control de la CORA,
- e) Disponía la inexpropiabilidad de las propiedades inferiores a 80 hectáreas de riego básico.
- f) Establecía que los agricultores expropiados tenían el derecho a reservas que no superaran las 80 hectáreas de riego básico, así como a zonas de tierras inexpropiables. Esto impedía una organización adecuada de la producción agraria, ya que las reservas o tierras inexpropiables quedaban a veces en medio de una explotación agrícola reformada o porque los antiguos dueños elegían sus reservas en las mejores tierras, desde donde podían controlar las aguas de riego.

- g) Los procedimientos legales establecidos para la expropiación de los predios eran dilatorios y obstruían el proceso de reforma agraria, pues exigían una tasación previa provisional, el acopio de títulos de propiedad, informes técnicos, etc. (119)

El Ministro de Agricultura de este periodo fue Jacques Chonchol quien había colaborado, durante varios meses, en la reforma agraria cubana. En 1967 fue el director de INDAP - (Instituto Nacional de Desarrollo de la Producción Agrícola) uno de los organismos promotores de la reforma agraria chilena. Sin embargo, como vimos en el capítulo precedente, en 1969 presentó la dimisión a sus funciones, y al año siguiente a la Democracia Cristiana como protesta contra la lentitud de las realizaciones del gobierno de Frei y, junto a otros disidentes de ese partido, fundó el MAPU que se adhirió a continuación a la Unidad Popular. Chonchol admitía que la legislación agraria democristiana que seguía vigente durante el gobierno de Allende adolecía de fallas. Pero con realismo reconocía que "era mejor aplicarla con sus defectos, que intentar hacer aprobar una nueva ley en el Parlamento en donde la mayoría nos es hostil". (120)

Para una mayor comprensión del proceso de reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular creemos necesario pun-

(119) Cfr. con Novoa, Eduardo, "Vías legales para avanzar al socialismo" en Revista de Derecho Económico, Santiago, octubre de 1970, año IX, No. 33, p.p. 22-23.

(120) Lamour, Catherine, op. cit. p. 130.

tualizar algunos aspectos. Si bien es cierto que en 1970 la agricultura chilena, a diferencia de la producción cuprífera que, como señalamos reportaba al país el 80% de sus divisas, tenía poca importancia en el ingreso nacional pues: "representaba no más del 8% de éste, tenía sin embargo, una importancia estratégica muy grande en ese momento, desde el punto de vista de la situación del comercio exterior".(121)

Chile hasta los años cuarenta exportaba más productos del campo de los que importaba. Pero a causa del lento crecimiento de la agricultura entre 1940 y 1970 todos los gobiernos de ese período se vieron obligados a acrecentar las importaciones agrícolas, llegando así a una situación en -- que las importaciones de alimentos, en los últimos treinta años, "aumentaron de 15 millones de dólares a 200 millones de dólares"(122). Esta situación se veía, además, agravada por el hecho de que las exportaciones agrícolas no aumentaron pues se mantuvieron con los mismos índices de los años cuarenta. De ahí que la erradicación del latifundio en el campo y el aumento de la producción agrícola constituyeran una de las metas importantes del gobierno. Además de estos aspectos, el fin del latifundio buscaba objetivos políticos y sociales más profundos en la medida que la reforma agraria permitiría elevar los niveles de vida de las masas del campesino pobre y del proletariado agrícola chileno, -

(121) Chonchol, Jacques, "La política agraria del gobierno popular" en "La vía Chilena al socialismo", p.110.

(122) Ibid, p. 110.

hambrientos de tierra y trabajo durante generaciones.

En el capítulo precedente vimos que el proceso de reforma agraria iniciado en la administración de Frei tuvo que -- vencer la fuerte obstrucción parlamentaria de la derecha en la discusión misma de la ley 16640 y tuvo que enfrentar en el campo la oposición abierta de los latifundistas. Al mismo tiempo provocó el auge de la movilización campesina para empujar y acelerar el reparto agrario que, iniciado en 1967, alcanzó a expropiar "un 18% de las tierras productivas y a beneficiar a 25.000 antiguos inquilinos y medieros del total de 100.000 familias que esperaban solución".(123)

El contexto social en que el gobierno de Allende empezó a profundizar y extender la reforma agraria fue esta situación de efervescencia y descontento campesino heredados del periodo freísta que la campaña electoral de la Unidad Popular contribuyó, a su vez, a exacerbar. El instrumento jurídico para llevar a la práctica la profundización de la reforma del agro chileno fue esa ley cuyas limitaciones ya señalamos. La legislación vigente disponía la expropiabilidad de los predios superiores a 80 hectáreas de riego básico, y su entrega a los campesinos que viviesen permanentemente dentro del predio en el momento de la expropiación, es decir, inquilinos, medieros y algunos trabajadores permanentes, pero no así a los afuerinos, ni trabajadores temporales que trabajaban

(123) de Riz, Liliana, op. cit., p.85.

esas tierras y no vivían en ellas. Por otra parte estas tierras expropiadas, según la ley vigente, "se organizaban en un sistema transitorio que duraba un periodo de tres a cinco años que se denominaba asentamiento. El asentamiento es una sociedad de explotación que se hace con el Estado, que es el dueño de la tierra expropiada, y los campesinos que ahí viven".(124) Durante el periodo que duraba el asentamiento había gestión y explotación colectiva del predio expropiado y pasada esta fase, los asentados debían decidir la forma de asignación definitiva de la tierra: la cooperativa, la asignación individual o una combinación de ambas. Cualquiera que fuese la opción elegida el resultado final del proceso era la repartición de la tierra en manos de una multitud de pequeños propietarios individuales o cooperativos que incrementaban la producción por un uso intensivo del suelo, pero que se constituían en una base social de defensa de la propiedad privada.

Chonchol respecto a esta situación heredada en parte del gobierno anterior y, que tendería a agudizarse si no se encontraba otra fórmula de organización de la tierra en el sector reformado, sostenía: "Sin embargo, la experiencia que se tuvo en estos años en los asentamientos revelaron, en la práctica, que tenían muchos defectos, aunque no cabe la menor duda que los campesinos ahí existentes están mucho mejor que en el antiguo latifundio."(125)

(124) Ibid, p. 116 .

(125) Ibid, p. 110 .

En el ensayo que citamos Chonchol se refiere a esas fallas: asentamientos más pequeños que el antiguo predio porque la ley permitía al agricultor expropiado mantener una reserva de 80 hectáreas básicas; asentamientos demasiado exiguos para planificar una agricultura especializada e integrada; la marginación de los asentamientos de los afuerinos y de los campesinos, que habían trabajado en el predio pero no residían en él; actitudes egoístas de los asentados, que se negaban a integrar a más campesinos al predio expropiado por temor de que, en el momento de asignación de la tierra, les correspondiesen menos hectáreas. (126)

A causa de estos problemas el gobierno popular implantó, en algunas zonas del país, los Centros de Reforma Agraria (CERA), que se formaron "reuniendo varios predios vecinos para constituir unidades mayores que permitían una cierta especialización del trabajo y cuyo financiamiento se hacía a través de una cuenta que les abría el sistema bancario sobre la cual podían girar de acuerdo a un plan de producción, preparado por los miembros del Centro de Reforma Agraria" (127). Con este sistema los campesinos tenían más participación en el manejo de estos centros ya que eran ellos mismos quienes, en asamblea general, elegían los órganos de di-

(126) Cfr., de Riz Liliana, op. cit. p.p. 108-109 .

(127) de Riz Liliana, op. cit., p. 110 .

rección del CERA y, además, tenían "igualdad de derechos sobre los beneficios marginales de la producción".(128)

Sin embargo, estos centros generaron en el campesinado chileno cierta resistencia política que fue incentivada por los ex-latifundistas y su representante político, el Partido Nacional y por los sectores conservadores de la Democracia Cristiana. Así, Rafael Moreno vice-presidente de la CORA en tiempos de Frei, "criticó vivamente a Chonchol, acusándolo de negar el derecho de los campesinos a la propiedad privada de la tierra y querer constituir, bajo una forma camuflada, granjas estatales siguiendo el modelo cubano. Afirmando que Chonchol se salía del marco de la ley de Reforma Agraria lo hizo interpelar en la Cámara. Simultáneamente organizó una gran manifestación alrededor de los edificios del Congreso y centenares de campesinos cortaron las carreteras durante doce horas".(129)

No obstante estos problemas la Unidad Popular, acorde con su programa de gobierno, logró avances cuantitativos espectaculares en el terreno agrario, en comparación con el ritmo de expropiación de la presidencia freísta: "Después de 18 meses de gobierno, en abril de 1972, se había traspasado a manos de 50.000 inquilinos y medieros el 21% de -

(128) Ibid, p. 136.

(129) Lamour, Catherine, op. cit., p. 132.

la tierra productiva, completándose de este modo el total -
previsto por la ley". (130)

Garcés, por su parte, nos proporciona más cifras ilustrativas del proceso de extensión de reforma agraria en el campo chileno durante esta primera etapa del gobierno popular: "El gobierno ha expropiado, en un periodo de veinticuatro meses prácticamente todas las unidades agrícolas superiores a ochenta hectáreas de riego básico, que representan más de la mitad de la superficie agrícola actualmente en cultivo y el 30 por ciento de la superficie agrícola total del país" (131). La gráfica siguiente demuestra los miles de hectáreas expropiadas entre noviembre de 1970 y mayo de 1972.

CUADRO No. 7

Reforma Agraria.*

(Miles de hectáreas)

Acumulada 1970	1971	Enero-Mayo 1972	Total
4.093,4	2.025,8	2.359,3	8.478,5

(130) de Riz, Lilibana, op. cit., p. 136.

(131) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 148.

* Fuente: Ibid, p. 148.

Los motivos fundamentales de la rapidez del ritmo expropiatorio fueron dobles. Por un lado, disponer de una proporción sustancial de tierra regada en torno a la cual ganar la batalla de la producción agrícola y liberar al país del fardo de las importaciones de productos alimenticios. Y, por otro, golpear a los sectores latifundistas foco principal de las tentativas sediciosas en esta fase del gobierno.

Reactivación económica y aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada de las empresas motrices de la economía. Lograr una reactivación de la economía del país por medio del aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada de empresas básicas de la economía era otra de las metas propuestas por el programa del gobierno de Allende. El logro de este objetivo supuso el esfuerzo productivo de los obreros y se le denominó "batalla de la producción". Esta consigna que al principio fue propugnada para el conjunto de la economía, se centró particularmente en las empresas del área social y "se tradujo en comprometer los esfuerzos de los trabajadores por lograr aumentos de producción y productividad que permitieron hacer frente a la expansión prevista de la demanda. La movilización de los trabajadores tras estos objetivos se impulsó mediante la creación de mecanismos de incentivos y esquemas de participación en la administración de las empresas".(132)

(132) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 172 .

El crecimiento económico alcanzado en este periodo equivalió a casi el doble del de los sexenios anteriores como lo demuestra el cuadro siguiente.

CUADRO No. 8

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION *

Año	Tasa de crecimiento del producto geográfico bruto
1959 - 1964	4.0
1965 - 1970	3.9
1971 - 1972	7.1

Además el crecimiento del producto geográfico bruto por sectores fue igualmente significativo comparados con los gobiernos precedentes, como lo ilustran las estadísticas que aparecen a continuación.

* Fuente: Ibid., p. 171.

CUADRO No. 9Tasa media anual de crecimiento del Producto GeográficoBruto por sectores *

Sectores productivos	1959-1964	1965-1970	1971-1972
Agricultura y pesca	1,7	1,8	3,6
Minería	5,2	4,3	5,3
Industria	5.7	3,8	10.5
Construcción	5.7	0,5	8,3
Electricidad	7.3	4.7	10,9
Sectores de servicios			
Transportes	8.0	5,5	6,7
Comercio	1.06	4.7	6.9
Banca	0.6	18.5	9.9
Vivienda	8.4	1.7	2.8
Administración Pública	2,3	2,8	5.8
Servicios	2,9	3.0	7.5

* Fuente: Ibid., p. 172 .

Redistribución del ingreso y elevación del nivel de vida.

Acorde con su planteamiento programático de redistribuir el ingreso nacional y aumentar el bienestar material de las mayorías, el gobierno de Allende elevó el nivel de vida de todo el pueblo cualquiera que fuera su situación en la producción. Así la Unidad Popular, aparte de aplicar una política redistributiva de ingreso, decretó el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad y de los alquileres; propició un aumento sustancial en la disposición de bienes y servicios colectivos (como vivienda, salud y educación); estimuló la absorción de la alta tasa de cesantía existente en el país e incrementó el nivel de consumo individual y colectivo.

En lo relativo a la redistribución del ingreso, "dado a que el alza de los precios había alcanzado el año anterior el 35%, el gobierno de la Unidad Popular decidió que los aumentos de salarios a partir del primero de enero de 1971 debían representar no sólo una recuperación sino un acrecimiento real del poder de compra, principalmente para las categorías más desamparadas. De esta forma el salario de los obreros y campesinos fue aumentado en un 100%, el de los burocratas, militares y carabineros en un 69% y el de los empleados del sector privado en un 35%".(133)

(133) Labrousse, Alain, op. cit., p. 271.

Paralelamente se congelaron los precios de los artículos de primera necesidad: pan, leche, ropa, etc. y se decretó la prohibición de alzar las rentas de arrendamiento. Con estas medidas "en los primeros ocho meses de 1971 los precios aumentaron en un 12,7% contra 29,5% en el mismo periodo del año anterior".(134)

La absorción de la alta tasa de cesantía existente en el país se logró con "la creación de 200.000 nuevos empleos en 1971 y 100.000 en la primera mitad de 1972" (135) con lo cual la tasa media de desocupación, durante el primer periodo del gobierno de la Unidad Popular, se redujo a 3,8% a nivel nacional y a 4,9% en la capital del país. El cuadro comparativo que aparece a continuación refleja el gran avance alcanzado en la baja del índice de desempleo.

CUADRO No. 10

Tasas Promedio de Desocupación *

Año	Tasa media de desocupación en el país	Tasa media de des ocupación en -- Santiago
1959-1964	7,5	6,4
1965-1970	5,7	6,0
1971-1972	3,8	4,9

(134) Ibid, p. 271.

(135) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el go
bierno de Allende", p. 174 .

* Fuente: Ibid, p. 174 .

El incremento del consumo fue concebido no sólo como una medida de justicia social sino también como un recurso para estimular la producción. La política de redistribución del ingreso permitió aumentar el consumo individual en casi un 12% y el del gobierno creció en un 13%. Ambos mostraron el siguiente comportamiento diferenciado, respecto de los años anteriores.

CUADRO No. 11

Tasas medias anuales de variación del consumo *

Año	Consumo de las personas	Consumo del gobierno
1959 - 1964	4,2	3,1
1965 - 1970	4,8	6,2
1971.	11,9	13,0

Otros indicadores sociales muestran el notable crecimiento alcanzado en materia educativa, salud y vivienda durante esta primera fase del gobierno. En lo que respecta a educación los logros más trascendentes fueron:

* Fuente: Ibid, p. 174.

- la reducción del índice de analfabetismo del 12% en 1970 a 10% en 1972.
- el crecimiento medio anual de la enseñanza básica - que en los periodos 1960 - 64 habían sido de 3,9%, en 1966 - 70 del 3,4%, alcanzó el 6,5% en 1971 - 72.
- el incremento de la escolaridad promedio en niños entre 6 y 14 años que del 87,8% en 1960 - 64 y del 91% en 1964 - 70, subió al 99% en 1971 - 72
- el crecimiento medio anual de la enseñanza media se elevó del 6,2% de 1960 - 64 y del 16,6% de 1966 - 70 al 18,2% en 1971 - 72.
- el incremento de la población estudiantil que ingresó a las universidades pues en el periodo 1959 - 60 había sido de un 7,4%, en 1965 - 66 de un 19,6% en 1971 - 72 aumentó al 34,9%. (136)

El incremento sustancial de la asistencia médica y sanitaria alcanzado durante esta etapa lo demuestra el aumento de las consultas en el Servicio Nacional de Salud y el número de kilos de leche entregada a los niños que se ilustran en el cuadro siguiente.

(136) Cfr., Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 174.

CUADRO No. 12Consultas en el Servicio Nacional de Salud y kilos*
de leche en polvo repartidos a los niños

	<u>1959-1964</u>	<u>1965-1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
Consultas del S.N.S.	7.282,685	8.981,978	10.284.490	--
Kilos de leche repartidos.....	7.239,778	13.170.408	48.000.000	52.000.000

Finalmente si comparamos los programas para resolver los problemas de vivienda de los gobiernos anteriores al de Allende, vemos que "durante 1959 - 64 se construyeron dos millones de metros cuadrados de edificaciones, en 1965 - 70 dos millones y medio y en 1971 - 72 ascendieron a cuatro millones y medio."(137)

* Fuente: Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 174.

(137) Ibid, p. 175.

3.3 Recursos institucionales utilizados por el gobierno de la Unidad Popular para la constitución del área de propiedad social.

La ocupación del gobierno por los representantes del movimiento popular no sólo fue una gran victoria del pueblo, sino que resquebrajó el sistema de dominación política que la burguesía chilena había creado para proteger sus intereses. Pero era evidente que el pueblo tenía el gobierno, mas no el poder, es decir, no podía organizar la sociedad en función del conjunto de reivindicaciones contenidas en el programa de gobierno, especialmente las relativas a la conformación de las tres áreas de la economía. Por esa razón uno de los mayores obstáculos que debió enfrentar el gobierno de Allende fue el no contar en el Parlamento con una mayoría que le permitiera legislar de acuerdo a su programa.

La composición del Congreso en este periodo del gobierno popular era el siguiente:

CUADRO No. 13*

Unidad Popular	80 diputados y senadores
Democracia Cristiana	75 diputados y senadores
Derecha (Partido Nacional y	
Democracia Radical	45 diputados y senadores

* Fuente: Labrousse, Alain, op. cit., p. 243.

En consecuencia la Unidad Popular debió utilizar la vía institucional, o sea, las disposiciones legales vigentes para llevar adelante las transformaciones en la estructura económica que había prometido realizar cuando llegara a la presidencia de la República. Dentro de la Unidad Popular existía claridad en cuanto a que la construcción de una sociedad socialista no podría llevarse a cabo sin la construcción de un Estado popular. Un primer paso en este sentido sería el reemplazo de la Constitución liberal de 1925 por una Constitución de orientación socialista y del sistema bicameral existente por el de la Cámara Unica, tal como lo proponía el Programa Básico de gobierno. Sin embargo de acuerdo con la línea política que el mismo programa postulaba —la vía chilena al socialismo— y acorde con las continuas reiteraciones formuladas por el Presidente Allende, las transformaciones revolucionarias se realizarían respetando el Estado de derecho. En el Primer Mensaje Presidencial al Congreso citado en puntos anteriores Allende afirmaba: "No es un simple compromiso formal sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y orden institucional son consustanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el periodo de transición".(138) Tal consideración era seguida por su convencimiento de que -

(138) Allende, Salvador, "Discursos", p. 92.

transformar el sentido de clase de la institucionalidad vigente en Chile en 1970 era una tarea ambiciosa "cuya realización escapa a nuestra voluntad, a nuestra sola voluntad: dependerá fundamentalmente de la configuración de nuestra estructura social y económica, su evolución a corto plazo y del realismo en la actuación de nuestro pueblo." (139) Este convencimiento de Allende no era arbitrario. Descansaba, en primer lugar, en la excepcional importancia del Presidente en el sistema político chileno y en la extensa gama de intervenciones, en todos los planos, que tradicionalmente había tenido el Estado en el país. En particular el Presidente no sólo disponía del Ejecutivo sino que tenía amplias atribuciones en materia legislativa y contaba, además, con el derecho a veto sobre el Parlamento con sólo tener a su favor un tercio más uno de los votos. De la misma forma tenía atribuciones para sortear los controles jurídico-administrativos de la Contraloría General de la República mediante los llamados decretos de insistencia que le permitía la aplicación de sus decisiones aún contra la voluntad del Contralor. Pese a ello, como señala Eduardo Novoa Monreal, principal consejero jurídico de Allende: "Estas facultades...suficientes o aun sobradas cuando se trata de gobernar una sociedad en reposo, destinada a preservar su status o, cuando más, a evolucionar lentamente dentro de los marcos llamados de desarrollo, se -

(139) Ibid, p. 94.

tornaban dramáticamente insuficientes para el Jefe de Estado que aspira a provocar transformaciones profundas en las estructuras y en sus condiciones socio-económicas como es el caso del Presidente Allende!"(140)

En otras palabras, si bien el proceso chileno de transición al socialismo tuvo el régimen institucional vigente como factor fundamental para llegar a la Presidencia de la República, no fue empresa fácil adaptar las modalidades de su legalidad de tal manera "que resultaran compatible con la sutil relación entre el movimiento popular y la institucionalidad formal del Estado!"(141)

Por estas razones y, en especial, ante la imposibilidad de utilizar la vía legal de la expropiación para transferir al Estado los medios de producción privados—dado el control de la derecha opositora sobre el Parlamento—la vía que la Unidad Popular siguió para constituir el área de propiedad social y mixta fue recurrir a las disposiciones jurídicas existentes. De esta forma, el gobierno debió iniciar un tortuoso camino de negociación directa y compra de acciones, por un lado, y de intervenciones y requisiciones por otro.

Las únicas excepciones en que el gobierno no recurrió a lo antes señalado fueron dos. En la nacionalización del co-

(140) Novoa, Monreal, Eduardo "El difícil camino en la legalidad" en Revista de la Universidad Técnica del Estado, abril de 1972, p. 18.

(141) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 119.

bre que, como vimos, se realizó mediante una ley de reforma constitucional aprobada por la unanimidad del Congreso, y en la expropiación de los latifundios, que se efectuó en virtud de la Ley de Reforma Agraria dictada durante la administración de Frei. Enseguida analizaremos las disposiciones legales vigentes que la Unidad Popular utilizó para traspasar al área de propiedad social y mixta los demás medios de producción privados expropiados durante su gestión gubernamental.

El origen de esas normas jurídicas en vigencia en 1970 databa de gobiernos anteriores. Eran, como sostiene Novoa - Monreal, "bien disposiciones legales olvidadas dictadas por regímenes que, durante breves periodos, hicieron esfuerzos para cambiar las estructuras económico-sociales del país, -- bien preceptos promulgados en épocas en que sin procurar tales cambios se trató de procurar al Poder Ejecutivo facultades más amplias, atribuyéndole poderes discrecionales y no reglados rigurosamente, bien mediante la utilización del Estado como órgano actualmente capacitado para actuar en la vida económica".(142)

Estas leyes autorizaban procedimientos jurídicos como la expropiación, requisición e intervención y que el gobierno usó ampliamente según cada caso. Veremos más en detalle estos aspectos porque, a nuestro juicio, no sólo reflejan el a-

(142) Novoa Monreal, Eduardo, "Vías legales para avanzar al socialismo" en Revista de Derecho Económico, Santiago de Chile, octubre de 1970, No. 33. p. 26.

pego del gobierno popular a la legalidad vigente sino que, a demás, porque fue a propósito de estas posibilidades jurídico-legales existentes que explotaría el conflicto de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Contraloría - General de la República.

a) La vía de la expropiación y la requisición: decreto-ley - 520.

En el transcurso de los doce días de la República Socialista, instaurada de facto después del golpe militar del 4 de junio de 1932, se dictaron alrededor de 700 leyes protectoras de los intereses populares. El origen de estas normas no era regular pues habían sido dictadas por la Junta de Gobierno y los sucesivos Ejecutivos de facto con prescindencia del Parlamento. Cuando estos gobiernos cayeron y se volvió a la normalidad institucional, a los juristas se les planteó el dilema si se debía o no reconocer la validez de esa legislación. En definitiva su juridicidad fue reconocida. Tanto así que esos decretos-leyes algunas veces se aplicaron, otras fueron modificados y la mayoría fueron derogados por otras leyes con lo cual se admitió su condición de normas jurídicas. En consecuencia sólo podían ser modificados o derogados por el Poder Legislativo.

Esta era la situación del decreto-ley 520 existente durante todo el gobierno de la Unidad Popular y cuyas disposiciones "constituyeron un arma fundamental para la organiza--

ción de la nueva economía en los términos del comienzo de la transición al socialismo"(143) En virtud de lo dispuesto en este decreto-ley había sido creado, en 1952, el Comisariato de Subsistencia y Precios que, con algunos cambios, en la administración de Alessandri pasó a llamarse Dirección de Industria y Comercio, (DIRINCO).

b) La vía de la expropiación.

De acuerdo al artículo 10, inciso 10, de la Constitución Política de 1925: "Nadie podrá ser privado de su propiedad si no en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social calificado por el legislador". Debido a la exigencia constitucional, en apariencia, no había en Chile disposición legal general alguna que facultara la expropiación de medios de producción o de distribución de bienes. Sólo se tenía conocimiento de la existencia de leyes que autorizaban la expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública: construcción de carreteras, escuelas, hospitales y remodelación urbana en general, y la ley 11640 de Reforma Agraria promulgada bajo la administración de Frei en 1967.

Como afirma Bruna "...la tarea de los juristas de la UP consistió en desempolvar preceptos. Subsistían cinco artículos del decteto-ley 520 (4o., 5o., 6o., 7o., y 8o.) que decla

(143) Bruna, Susana, op. cit., p. 132.

raban de utilidad pública—y en cuanto tales susceptibles de expropiación—a las propiedades agrícolas y a... las empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y a la distribución de artículos de primera necesidad. Nótese que sólo el Presidente de la República tenía el poder de determinar la calificación de artículo de -- primera necesidad para el bienestar de la población".(144)

En virtud las disposiciones antes mencionadas la expropiación procedía por las siguientes causas:

- "1. Por mantener en receso el respectivo establecimiento industrial o comercial. Estar en receso significa -- que se haya producido cesación o paralización de las actividades del establecimiento.
2. Por no cumplir un productor con la obligación de producir o elaborar en su establecimiento empresa o explotación, artículos declarados de primera necesidad en cantidades, calidades y condiciones que determine el Presidente de la República.
3. Por negarse sin justificación un productor a mantener un ritmo normal de producción ocasionando deficiencias en el abastecimiento de la población.
4. Por mantener un productor o un distribuidor mayorista stocks ocultos de artículos de primera necesidad con igual efecto en el abastecimiento de la población.

(144) Ibid, p. 133.

5. Por especular el productor o distribuidor mayorista con los precios de los artículos de primera necesidad, produciendo deficiencias en el abastecimiento de "la población".(145)

Según el mismo decreto-ley 520, al realizarse la expropiación debía pagarse de inmediato una indemnización cuya cantidad se regía por las disposiciones del Código Civil, previo informe del Consejo de Defensa del Estado. Las expropiaciones efectuadas merced a este decreto surtían el mismo efecto legal que las realizadas de acuerdo a una ley de expropiación, es decir, significaban el término o cese de la propiedad jurídica de los propietarios de las empresas.

Este recurso legal fue inaugurado por el gobierno para la expropiación y traspaso al área de propiedad social de la industria textil monopólica Bellavista-Tomé, el 10. de diciembre de 1970 y, más tarde, se siguió utilizando en la expropiación de varias empresas industriales y de distribución monopólicas.

c) La vía de la requisición.

Otro camino para transferir al área de propiedad social empresas privadas fue el de la requisición, que era una de las facultades legales de la DIRINCO. La requisición "procedía co

(145) Ibid, p. 134.

mo medida de regulación económica en el caso de acaparamien-
to y de especulación con artículos de primera necesidad.
Esta medida era ejecutada a través del Ministerio de Economía
que publicaba el decreto correspondiente para enviarlo des-
pués a la Contraloría para su acuerdo".(146) Pero debido a
que la ley de creación de la DIRINCO tenía un vacío jurídico
ya que no establecía el plazo de duración de la requisita, ésta
"implicaba una condición temporal de la administración esta-
tal" (147) y quien debía fijarla era el Ejecutivo.

d) La vía de la intervención.

El Código del Trabajo, en su artículo 626, confería atri-
buciones al Ejecutivo para "ordenar la reanudación obligatoria
de faenas en caso de huelga, paralización o cierre de empresas,
cuyos efectos ocasionaran perjuicios a la salud o a la vida eco-
nómica y social del país".(148) A su vez el artículo 38 de
la ley 12927 o Ley de Seguridad Interior del Estado ampliaba
la disposición al autorizar al Presidente de la República pa-
ra dictar "la reanudación de faenas con intervención de las au-
toridades civiles y militares, en caso de paralización de in-
dustrias vitales para la economía del país, empresas de trans-
porte, empresas productoras o elaboradoras de bienes esenciales
para la defensa nacional o el abastecimiento de la población o
que desempeñen servicios públicos de utilidad pública."(149)

(146) Ibid, p. 135.

(147) Espinosa, Juan y Zimbalist, Andrew, "Democracia Económica:
la participación de los trabajadores en la industria chi-
lena, 1970-1973", Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p.67.

(148) Bruna, Susana, op., cit., p. 140.

(149) Ibid, p. 140.

En el caso de intervención de empresas el gobierno debía dictar un decreto de reanudación de faenas y, al mismo tiempo, designar un interventor quien asumía la administración y la representación judicial y extrajudicial de la empresa intervenida. Al igual que la requisa, la intervención no implicaba la cesación jurídica del derecho de propiedad del dueño de la empresa. Sólo producía el efecto de permitir que el interventor estatal la administrara durante el lapso de tiempo que durara la intervención.

Por otra parte si bien la intervención requería de pasos burocráticos adicionales, confería al interventor designado -- por el Estado mayores atribuciones económicas que la requisa. Generalmente la intervención de una empresa era precedida por alguna forma de iniciativa de los trabajadores, ya fuera huelga, toma de instalaciones, trabajo a desgano. En muchos casos el gobierno se resistía a intervenir porque se trataba de empresas pequeñas o que no estaban contempladas en su programa para ser transferidas al área social, pero se veía obligado a hacerlo ante la presión de los trabajadores y el apoyo y movilización masivos de obreros de fábricas cercanas. La mayoría de las requisiciones se efectuaron a raíz de acciones de los propietarios, despidos, paros, negociaciones en el mercado negro, desmantelamiento de instalaciones. Respecto al número de empresas afectadas por estas medidas administrativas del go---

bierno: "En total, de las 420 empresas que había en el sector estatal el 10 de septiembre de 1973, cerca de 260 habían sido intervenidas o requisadas. Sin embargo, en su gran mayoría eran empresas pequeñas de menos de 300 trabajadores"(150) En cuanto al periodo en estudio, el cuadro siguiente nos aporta cifras del número de empresas intervenidas o requisadas.

CUADRO No. 14

Intervenciones y requisas*

Año	Procedimiento	Total	Regresaron al área privada	Permanecieron en el área social
1971	Intervenciones	128	26	102
1971	Requisas	39	1	38
1972	Intervenciones	65	27	28
1972	Requisas	86	11	75
Totales		318	65	253

e) La vía de la negociación.

Consistía en el acuerdo o negociación directa de los propietarios y el Estado para el paso de una empresa privada al área de propiedad social o mixta. Un número significativo de empresas pasaron a integrar estas áreas mediante el camino de la

(150) Espinosa, Juan y Zimbalist, Andrew, op. cit., p. 68 .

* Fuente: *Ibid*, p. 70 .

negociación entre sus dueños y el Estado. Así ocurrió con la mayoría de los bancos, la empresa carbonífera Lota-Schwager y un número pequeño de empresas industriales.

La vía de la negociación directa podía asumir diversas modalidades:

- "a) La empresa aumenta su capital, y ese aumento se hace por la suscripción de acciones por parte de organismos estatales (CORFO, CAP., etc.)
- b) La CORFO u otros organismos del Estado toman a su -- cargo las deudas de la empresa y ello se considera - como una aportación de capital del Estado a la empre sa;
- c) Puede suceder que la empresa contraiga deudas directa mente con la CORFO, y en ese caso la deuda se convier te en una aportación de capital por parte de la CORFO;
- d) La CORFO compra acciones ya emitidas, o bien, los ac tivos;
- e) Por último se compra la sociedad entera".(151)

3.4 Desajustes económicos en el periodo.

La reactivación económica lograda en esta fase del go-- bierno no ofrece lugar a dudas. Las cifras consignadas en el punto 3.2 así lo demuestran. Los logros alcanzados son doble

(151) Eruna, Susana, op. cit., p. 140.

mente meritorios si consideramos que la estrategia económica seguida por la Unidad Popular se aplicó en un momento difícil. No hay que olvidar que en los meses precedentes al acceso de Allende a la Presidencia se evadieron capitales, la inversión privada se detuvo, se despidió a gran número de trabajadores en las empresas, se sacrificó ganado o se sacó del país y se paralizó la producción agrícola. Después que la Unidad Popular llegó al gobierno tuvo que aplicarse en condiciones de incertidumbre política y, sobre todo, haciendo frente a un verdadero sabotaje económico de la burguesía nacional, los grandes propietarios agrarios y el imperialismo norteamericano. Además en medio de la depresión económica provocada por la baja del precio del cobre en el mercado mundial.

Sin embargo en el transcurso de 1971 y con más nitidez a mediados del año siguiente, empezaron a aflorar factores negativos en el funcionamiento de la economía cuyos efectos fueron aprovechados hábilmente por la burguesía. A continuación nos referiremos a los problemas económicos más importantes -- surgidos en esta etapa.

a) La expansión del consumo superó el crecimiento de la producción. Esto fue el resultado de la redistribución del ingreso y del alto índice de abatimiento del desempleo. Es decir, los reajustes de sueldos y salarios, el gran número de trabajadores que antes estaban cesantes y ahora podían deman-

dar productos básicos en el mercado y la política de control de precios adoptada por el gobierno originó un aumento espectacular del poder adquisitivo de la población. Ahora bien, la consecuencia del incremento del poder adquisitivo fue un aumento masivo del consumo donde "por primera vez, el consumo de alimentos y artículos indispensables siguió el movimiento ascendente de otros consumos", (152) como lo evidencia el cuadro No. 15.

CUADRO No. 15

Aumento del consumo de las familias, en porcentajes*

Aumentos % sobre 1970.

1. Agricultura	6,4
2. Minería	38,1
3. Consumo básico	13,2
4. Bienes durables	12,0
5. Resto de la industria	28,0
6. Resto de la economía	7,5

Las cifras precedentes nos reflejan el éxito de la política del Ministro Vuskovic en relación al aumento de la capacidad de consumo que, "en promedio fue del 13% siendo mayor para las familias de más bajos ingresos". (153) Como apunta Lamour, periodista observador del proceso: "En gran parte, los objetivos

(152) Bitar, Sergio, op. cit., p. 102 .

* Fuente: Bruna, Susana, op. cit., p. 120.

(153) Bitar, Sergio, op. cit., p. 104 .

que se había fijado Pedro Vuskovic han sido alcanzados, e incluso, desgraciadamente superados. El consumo ha aumentado rápidamente. La demanda no se ha dirigido únicamente hacia los productos alimenticios o la vestimenta, sino también hacia los bienes de consumo duraderos: aparatos electrodomésticos, sanitarios, mobiliario. Cierta euforia se ha apoderado de los industriales, que desde hacía mucho tiempo no habían hecho tan buenos negocios. La producción nacional bruta alcanzaba a finales de 1971 el 8 por ciento, lo que no se había visto desde hace quince años. El crecimiento de la producción industrial superaba el 10 por ciento. El índice de inflación había disminuido a un 18 por ciento lo que, en Chile, puede ser considerado una hazaña. El índice de paro era inferior al 3,6 por ciento. Más de 100.000 personas habían encontrado trabajo. El nivel de vida global había aumentado en un 20 por ciento... Sin embargo es cierto que se han registrado desajustes entre la oferta y la demanda. El crecimiento global de los ingresos no ha podido ser controlado -- tan estrechamente como hubiera sido de desear. La masa monetaria en circulación se ha doblado prácticamente bajo la presión de las reivindicaciones obreras estimuladas por la victoria, tan esperada, de un gobierno popular".(154)

Pero esta situación coyuntural llevaba en sí los gérmenes de sus crisis. En efecto, por un lado, no toda la deman

da generada en este periodo podía ser satisfecha por el aumento de la producción interna, no obstante los altos índices de crecimiento productivo alcanzados y que reseñamos en el punto 3.2. Además la agricultura, tradicionalmente deficitaria, no aumentó su producción en ritmo suficiente y hubo rubros en que ese crecimiento fue bajo. En particular la producción de carne descendió debido al sabotaje de los latifundistas, a la reorganización de la explotación a través de la Reforma Agraria y a las dificultades para poner en marcha las nuevas redes estatales de comercialización.

Por otra parte refacciones industriales y de automóviles, bienes de equipo, productos suntuarios y bienes indispensables no producidos en Chile, debían continuar siendo importados. De modo que la expansión de la demanda se encontró con dos escollos básicos: la producción agrícola, y en especial pecuaria, y la capacidad de importación ligada a las divisas. La primera dificultad revirtió también sobre la segunda al intentarse su superación mediante la importación masiva de alimentos y en particular carne. De esa forma, a mediados de 1972, empezaron a producirse desabastecimientos, en especial de carne y refacciones. Aquí es necesario destacar que no se producía todavía una escasez generalizada en el país y que, en gran medida, la falta de productos se agudizaba debido a la capacidad económica

de las clases altas para acaparar el consumo. En efecto, "el a bastecimiento de carnes creció en 1971 en un 18% (9.6% en vacunos, 24,9% en porcinos, 3,3% en ovinos y 44% en aves) especialmente a través de la importación: el abastecimiento de carne de vacuno importada en Santiago creció en 1971 en un 118,5%".
(155)

Dentro de esta situación creemos de interés destacar que el relativo desabastecimiento entre los estratos medios y altos en esa fecha, se planteaba como una verdadera lucha de clases por el consumo, porque entraban a competir en la compra de esos productos con las masas populares tradicionalmente excluidas de ellos por el juego del mercado. Más concretamente cuando "antes de 1970, una familia de altos ingresos consumía 180 kilogramos de carne al año y una familia obrera 20 kilogramos", (156) puede entenderse que para esa minoría antes referida surgieran algunas dificultades en la coyuntura creada por el gobierno. La derecha opositora no desaprovechó la ocasión. A propósito de estos problemas desencadenó una agitación que desembocó en la "marcha de las cacerolas", en diciembre de 1971, con señoras del barrio alto y sus empleadas domésticas, protegidas por grupos de choque de los Partidos Nacional y Demócratista Cristiano como veremos más adelante.

(155) Pitar, Sergio, op. cit., p. 122 .

(156) Marini, Ruy Mauro, op. cit., p. 79 .

Lamour nos ilustra muy claramente el momento que vivía el país a mediados de 1971 cuando relata en su reportaje: "Desde el mes de agosto de 1971, algunos productos de consumo corriente han comenzado a faltar esporádicamente y más concretamente la carne y el pollo. La disminución de los almacenamientos corría el riesgo de producirse rápido en ciertos productos textiles y aparatos electrodomésticos. Esto era debido al aumento de la demanda solvente. Desde el estricto punto de vista económico estas dificultades podían ser consideradas como menores y se podrá esperar que fueran temporales. Pero eran suficientes para alimentar las campañas de prensa de la derecha que creaba una psicosis de desabastecimiento, transformándose, a su vez, en factor de agravación de la situación. Las amas de casa desvalijaban los supermercados para formar sus pequeñas despensas". (157)

Otro elemento que es de interés señalar porque contribuyó a acentuar el desabastecimiento de ciertos productos en esta etapa, fue el atractivo que significaba para sectores de las clases adineradas de los países limítrofes viajar a Chile a adquirir mercancías a bajo costo, dado el cambio favorable. Como señala la misma autora: "También había que contar con el verdadero pillaje de la producción chilena realizado por visitantes de los países limítrofes. Cuando un argentino entra a Chile con dólares puede cambiarlos en el mercado negro

(157) Lamour, Catherine, op. cit., p. 158.

a 70 escudos, mientras que en un banco le abonan 24 escudos, y entonces Chile se convierte para él en una verdadera jauja. En aviones enteros, estos turistas vienen a aprovisionarse en trajes, zapatos, tejidos y sobre todo de radios, tocadiscos y aparatos fotográficos... La negativa del Parlamento a modificar la legislación sobre cambios de moneda, con la evidente intención de aumentar sus dificultades, ha impedido al gobierno reaccionar enérgicamente".(158)

b) Exceso de liquidez o dinero circulante. Esto se debió al aumento del gasto público para compensar la baja de la inversión privada, pagar las indemnizaciones por las expropiaciones de empresas, y financiar las obras de beneficio social (construcción de escuelas, aumento del presupuesto para educación, salud, vivienda etc.)

El exceso de liquidez generó una disponibilidad monetaria en los grupos de altos ingresos que no se destinó a la inversión productiva ni al ahorro. Bitar afirma que la cantidad de dinero en manos del sector privado creció "en 119% en los meses de diciembre de 1970 y 1971".(159)

Esta fuerte disponibilidad de dinero, en virtud de su estrategia opositora al gobierno, la burguesía no la destinó a la inversión en la producción sino que a actividades especulativas.

(158) Ibid, p. 159 .

(159) Bitar, Sergio, op. cit., p. 86 .

Una de ellas fué invertir en "la compra de dólares en el mercado paralelo, que alcanzaba hasta 40 veces el valor de -- mercado bancario restringido a las operaciones de importa----ción".(160).

La otra, y más desarticuladora del conjunto de la economía, fue el acaparamiento y el mercado negro organizados por la burguesía en forma de empresas y redes semi-clandestinas en donde se combinaban los puntos de apoyo disponibles en la producción agrícola, en la industria y en el aparato de distribución mayorista y minorista con un sistema de crédito clandestino. La demanda atendida por ese sistema de distribución por un lado, los estratos de altos ingresos y, por otro, los países limítrofes, en especial Perú y Bolivia en donde los productos chilenos eran vendidos a precios fabulosos y aún así competitivos con los locales.

De esta forma la batalla de la producción y las importaciones de alimentos y bienes de servicios servían para desarrollar un capitalismo especulativo y para ligar en torno a estas redes a un amplio sector de los comerciantes. Este proceso -- contribuyó a generalizar el desabastecimiento de muchos productos y a suscitar críticas al gobierno de parte de las clases medias y alta. Lo más significativo fue que la protesta provenía de las capas altas impulsoras del mercado negro y, prefe--

(160) Smirnow, Gabriel, "La revolución desarmada, Chile, 1970-1973", Editorial Era, México, 1977., p. 70.

rentemente, abastecidas por medio de él. En efecto, desataron una campaña psicológica que a través de la prensa y radio anunciaba el hambre en Chile. Incluso se llegó a prevenir telefónicamente a los domicilios particulares de la escasez inminente de tal o cual producto para provocar compras de pánico en la población y se recurrió al pintado mural en los barrios populares con angustiadas inscripciones, tales como: ¿Señora, volverá usted a comer carne?

La extensión del mercado negro trajo consecuencias importantes en lo económico, social y político. Los comerciantes, grandes y pequeños, encontraron en el mercado negro o redes no oficiales de distribución nuevos y más amplios márgenes de ganancia. En las poblaciones marginales —donde vivían los sectores de más bajos ingresos— el monopolio y control de la clientela mediante el mercado paralelo ocasionó grandes daños a los consumidores y, en muchos casos, los volcó en contra del gobierno. Los sectores medios vieron con inquietud la desorganización de sus hábitos de consumo y magnificaron las dificultades reales del desabastecimiento existente. La mayoría de ellos se unió a la oposición --abierto de los partidos Nacional y Demócrata que en el Parlamento, medios de comunicación y manifestaciones callejeras, --protestaban por una situación que ellos mismos habían creado pero que atribuían al gobierno.

Ante estos hechos y sus consecuencias cada vez más agudas -- en la necesaria alianza de clases con sectores pequeño-burgueses y asalada--

riados, la Unidad Popular adoptó la política de atacar frontalmente la especulación y el mercado negro. El gobierno no podía reorganizar el aparato de distribución debido a la existencia de monopolios privados, en especial extranjeros, tales como CODINA, Agencias Graham, Duncan Fox que resistían su paso al área social. Tampoco podía enfrentar un sistema organizado de especulación y acaparamiento, como era el mercado negro, mediante los instrumentos tradicionales de control de precios y abastecimiento de la DIRINCO, a causa de sus escasos recursos en inspectores quienes, además, por lo general estaban poco dispuestos a ser agentes activos de una política popular que no apoyaban. Considerando estas limitaciones se lanzó desde el gobierno y desde los partidos de la Unidad Popular, la iniciativa de formar en todo el país las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), con el fin de agrupar a las organizaciones de masa existentes. (pobladores, juntas de vecinos, sindicatos, centros de madres, etc), de modo que tomaran en sus manos una serie de tareas para eliminar el mercado negro, hacer respetar los precios y normalizar el abastecimiento. El principal impulsor de las JAP. fue el Ministro de Economía Vuskovic quien, el 29 de julio de 1971, "reunió en el estadio Chile a miles de mujeres para dialogar con ellas sobre la escasez. Después de haber reconocido francamente las insuficiencias del

gobierno, explicó la falta de algunos artículos en el mercado como resultado de un mayor consumo de las masas populares, cosa que las auditoras sabían muy bien. Llamó a la vigilancia contra las campañas alarmistas y sugirió la formación de las JAP para controlar los precios y el abastecimiento."(161)

De esta forma se crearon las JAP como organismos encargados de asegurar el aprovisionamiento de los comercios de su ámbito; controlar la comercialización, precios y calidad de las mercaderías; organizar a los pequeños comerciantes y educar a los consumidores llevando una continua lucha ideológica para hacer comprender el sentido de los hábitos de consumo cotidiano en el contexto general de la lucha de clases. Así, - por ejemplo, proponiendo el consumo de alimentos producidos en Chile, como el pescado, con el fin de ahorrar la fabulosa suma de divisas gastadas en importar carne de vacuno perfectamente prescindible en términos dietéticos. La formación de las JAP, iniciada a mediados de 1971, adquirió una verdadera dimensión de masas a partir de enero de 1972 cuando la Unidad Popular y, en especial el Partido Comunista, se volcaron en la tarea de organizarlas realmente, procurando siempre su vinculación con los pequeños comerciantes y con el aparato del Estado para lo cual DIRINCO creó un departamento especial y formó inspectores ad-honorem entre los dirigentes de las JAP. Sin em--

(161) Labrousse, Alain, op. cit., p. 297.

bargo "pese a los efectos positivos de las JAP en los barrios populares y campamentos, éstas no llegaron a constituirse en los órganos de una política de masas en torno de la distribución. Su actividad quedó limitada a una acción defensiva en el nivel vecinal".(162)

c) El déficit fiscal excedió las previsiones del gobierno.

De acuerdo con la exposición de la hacienda pública del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal presupuestado "alcanzaría a 4,500 millones de escudos y resultó ser superior a los 10.000 millones de escudos, sobre un gasto fiscal total de 36.000 millones de escudos"(163). Las causas principales del déficit fiscal en el año 1971 fueron "los mayores gastos en remuneraciones, prestaciones sociales y transferencias al sector público".(164)

Sergio Bitar, integrante del Comité Económico de Ministros del gabinete del Presidente Allende y autor de uno de los ensayos en el cual nos basamos para la elaboración de esta parte de la tesis, nos brinda valiosos datos explicativos del desajuste económico comentado. Sostiene que en ese año: "Los gastos corrientes del fisco aumentaron en 72,5% en tanto los ingresos corrientes sólo crecieron en 29.1%, gestándose así un déficit fiscal en cuenta corriente. Agregando los gastos del capital

(162) de Riz, Liliana, op. cit., p. 133 .

(163) Bitar, Sergio, op. cit., p. 86 .

(164) Ibid., p. 86 .

el déficit total alcanzó el 30,9% del gasto total, cifra sin precedentes ...y al analizar el origen de este déficit, se concluye que el factor preponderante fue la expansión de los gastos corrientes que crecieron en 72,5% ...y que los tres factores determinantes en la explosión del gasto corriente fueron: sueldos y salarios, seguridad social y transferencias al sector público". (165) El Cuadro No. 16 ilustra la situación antes descrita.

CUADRO No. 16

Operaciones del Fisco *

(En miles de millones de escudos)

	1970	1971	Tasa de crecimiento %
Gastos corrientes	15,3%	26,4	72,5
Sueldos y salarios	6,0	9,0	50,0
Compra de bienes	1,1	1,5	36,4
Seguridad Social	2,7	5,7	111,1
Transferencias al sector público	4,1	7,8	90,2
Otros	1,4	2,4	71,4
Ingresos corrientes	18,9	24,4	29,1
Impuestos directos	7,1	7,7	8,5
Impuestos indirectos	10,8	14,4	33,3
Ingresos no tributarios	1,0	1,3	30,0
Otros	--	1,0	--

(165) Ibid, p. 92.

* Fuente: Ibid, p. 92.

Por otra parte los ingresos corrientes aumentaron escasamente debido "a la disminución en la tributación de la gran minería del cobre", (166) y el gobierno tampoco pudo acrecentar los ingresos fiscales por la vía de una reforma tributaria dada la oposición permanente en el Parlamento a legislar acerca de esta materia. Además la opción intentada por el Ejecutivo de financiar los reajustes de sueldos y salarios "con nuevos impuestos a la propiedad del capital o al consumo de bienes -- prescindibles fueron bloqueados por la oposición en el Congreso. El gobierno soportó así una fuerte presión sobre los gastos fiscales, mientras enfrentaba una situación de gran rigidez en los ingresos".(167)

d) Considerable déficit en la balanza de pagos. Como consecuencia de la disminución del precio internacional del cobre, principal producto de exportación chileno, disminuyeron considerablemente las disponibilidades de la balanza de pagos. Las estadísticas de la variación promedio anual de los precios de este metal entre los años 1959-1972, que aparecen en el Cuadro No. 17, comprueban este índice de descenso que, además, formaba parte del boicot norteamericano al gobierno de la Unidad Popular como veremos en otra parte de nuestro trabajo.

(166) Ibid, p. 93.

(167) Ibid, p. 93.

CUADRO No. 17Variación promedio anual de los precios del cobre*

		Precio medio, centavos dólar libra.
1959-1964	+ 10,5	31,8
1965-1970	+ 9,3	54.0
1971-1972	- 10,8	49.6

Es así como en el transcurso de 1971 "el déficit de la balanza de pagos llegó a 341 millones de dólares, provocando una fuerte reducción de las reservas internacionales con lo cual el margen de acción disponible para compras en el exterior se vio seriamente restringido"(168)

Los desajustes económicos sintetizados no fueron captados a cabalidad por el equipo económico del gobierno y "sólo comenzaron a preocupar cuando se manifestaron políticamente, como ocurrió con la llamada 'marcha de las cacerolas'(169), organizada en Santiago por la oposición a fines de 1971 y que coincidió con la visita de Fidel Castro al país, sucesos que trataremos en el punto siguiente.

* Fuente: Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, p. 178 .
 (168) Bitar, Sergio, op. cit., p. 86 .
 (169) Ibid, p. 86 .

3.5 Estrategia política de los partidos opositores al gobierno de la Unidad Popular.

Hemos visto que en esta etapa de gobierno la táctica de la Unidad Popular, coherente con sus planteamientos programáticos, fue concentrar su esfuerzo en la ofensiva económica — a la vez sobre las relaciones de producción, la batalla de la producción y el aumento del nivel de vida de las masas — manteniendo neutralizado el nivel ideológico y avanzando tímidamente en el plano político-institucional. Esto respondía no sólo a las limitaciones de la vía chilena al socialismo, sino también al esquema de alianzas que había llevado a Allende a la presidencia de la República.

Pero, como vimos, llevar a la práctica el programa del gobierno popular implicaba cuestionar, desde un principio y en profundidad, los intereses económicos estructuralmente dominantes analizados en los dos capítulos anteriores y con base a los cuales se habían generado las instituciones jurídico políticas del capitalismo dependiente chileno. La ofensiva que el gobierno popular planteaba en su programa sobre el núcleo de dominación formado por los intereses del imperialismo, la burguesía monopólica y los terratenientes, su objetivo de crear un área social dominante en el conjunto de la economía y la búsqueda de una participación real de las masas en la conduc-

ción del proceso, constituyeron un desafío abierto y tajante a toda la estructura de poder existente en Chile.

Durante la campaña electoral las fuerzas opositoras al candidato de la Unidad Popular, en especial la derecha tradicional y el sector freísta de la Democracia Cristiana, habían presenciado atemorizadas el auge del movimiento popular de adhesión a Allende. Tras la victoria electoral esos mismos grupos iniciaron una hábil campaña que fue desde el amedrentamiento ideológico a través de los medios de comunicación que anunciaban el fin de la libertad en Chile, la destabilización económica propiciada desde los propios círculos del gobierno de Frei, hasta el asesinato de Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, para evitar una votación favorable a la U P en el Parlamento e impedir el ascenso de Allende a la presidencia de la República.

Señalamos también que el sector progresista de la Democracia Cristiana influyó en el resto de su partido el cual aceptó plegarse a los resultados electorales votando en el Congreso, donde la U P era minoritaria, la ratificación del triunfo de Allende, contra la firma de un estatuto de garantía de las libertades democráticas que no hacía sino ratificar principios democrático-liberales ya establecidos en la Constitución Política de 1925. Y ello pese a que Ale---

ssandri ofreció dimitir y convocar a nuevas elecciones de inmediato, en caso de ser él designado por el Congreso, lo cual significaba restablecer el apoyo de la derecha al futuro candidato de la Democracia Cristiana a cambio de cerrar el camino a Allende. Pero esto, dada la efervescencia social que se vivía en Chile en esos momentos y el grado de organización y combatividad del movimiento obrero, al Partido Demócrata Cristiano le habría significado un enfrentamiento directo con un movimiento popular enardecido y una alianza, de hecho, con una derecha denunciada como enemigo principal durante la campaña electoral de Tomic. Por ello pese a las dudosas manio---bras del ala freísta desde el gobierno y del propio Presidente Frei, el sector progresista democristiano y el mismo Tomic se jugaron para permitir el acceso de Allende a la presidencia en condiciones de respeto a la institucionalidad burguesa.

De esta forma Allende al iniciar su gestión gubernamental tuvo que elegir entre dos opciones. Por una parte, el --desgaste político que habría implicado el incumplimiento de su programa con una apertura hacia el centro incorporando a los sectores progresistas de la Democracia Cristiana al go---bierno. O bien, la utilización de la legalidad burguesa a partir del gobierno recurriendo a los resquicios legales de esa

misma institucionalidad. La opción elegida fue esta última. Aprovechando la brecha decisiva abierta en el aparato estatal al disponer del Poder Ejecutivo, Allende, apoyado por los partidos que lo llevaron a la presidencia y por una movilización popular casi diaria en todo el país, inició una batalla político-institucional para aplicar su programa.

Ante la aplicación del programa de la Unidad Popular la burguesía y sus representantes políticos mantuvieron dos tácticas que fueron conjugándose recíprocamente. En un comienzo el sector frequista de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la Democracia Radical, trataron de utilizar también los recursos legales disponibles para detener las medidas económicas de expropiación de los medios de producción y su posterior traspaso al área de propiedad social. Espinosa y Zimbalist afirman que "así como el gobierno tenía recursos legales para expandir el área social, la oposición los tenía para impedir tal expansión"(170).

De esta manera, dado a que la oposición tenía mayoría en el Congreso, rechazaba las propuestas gubernamentales para la extensión del sector estatal. Otra forma de oponerse a las medidas decretadas por el gobierno era mediante la Contraloría General de la República, institución encargada de vigi--

(170) Espinosa y Zimbalist, op. cit., p. 68.

lar las acciones del Ejecutivo y juzgar su validez legal. El Contralor, funcionario que había sido nombrado durante la presidencia de Frei, declaraba que las requisiciones o intervenciones eran ilegales. Para superar las decisiones de la Contraloría, Allende dictaba decretos de insistencia los cuales debían llevar la firma de todos los ministros de su gábinete. También la oposición recurría a los tribunales de justicia donde obtenía decretos precautorios que volvían prácticamente imposible la administración de las empresas intervenidas. En efecto, estas medidas precautorias imponían a los interventores o administradores estatales un conjunto de restricciones tales como: la designación de un segundo administrador dotado de mayores facultades que el nombrado por el gobierno; el congelamiento de la cuenta bancaria de la empresa; la prohibición de contratar o despedir personal; la obligación de depósito de todos los ingresos en otra cuenta corriente; el requisito de que los propietarios avalaran los documentos comerciales de la empresa. En conjunto, durante esta fase se impusieron decretos precautorios en cerca de 40 empresas. (171)

Sin embargo, merced a la habilidad táctica del gobierno de la Unidad Popular en el manejo del frondoso arsenal jurídico existente, al uso de las vías administrativas y al empleo reiterado del decreto de insistencia se consiguió así actuar

(171) Cfr. con Espinosa y Zimbalist, op. cit., p. 68.

sin legislar a través del Parlamento y se logró constituir, en una parte importante de la economía, un área de propiedad social como vimos en los puntos anteriores.

Pero la verdadera táctica política de la burguesía fue desarrollada más tarde por la Democracia Cristiana a la que fue sumándose, progresivamente, la derecha tradicional. Representante de los intereses del sistema capitalista en su conjunto, desvinculado de lazos directos con la oligarquía y ligado a bases populares, el Partido Demócrata Cristiano planteó la táctica en términos de poder político más que en defensa de tal o cual situación económica, siempre reversible o transformable en función de una futura correlación de fuerzas desfavorable a la coalición de la U P

De acuerdo con las líneas generales señaladas, a la ofensiva económica del gobierno de Allende los democristianos opusieron una resistencia ideológica y política, en un primer tiempo, para pasar después a la contraofensiva incluso en el plano económico. Esta línea política fue denominada por uno de sus ideólogos, el dirigente frequista Claudio Orrego Vicuña, la estrategia de los mariscales rusos. Orrego sostenía que "para evitar el triunfo del marxismo era necesario aplicar lo que se llamara la táctica de los mariscales rusos frente a Napoleón y Hitler. Era necesario replegarse para defender Moscú. El Moscú que debía defenderse a toda costa era la institucionalidad vigente". (172)

(172) Toer, Mario, "La vía chilena, un balance necesario", Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1974, p. 105

Bruna cita parte de un artículo periodístico de Marta Harnecker, publicado en la revista "Chile hoy" No. 21, que transcribe lo formulado por los ideólogos democristianos "...el comienzo del gobierno encontró a la U P con fuerzas poderosas y, por el contrario, una oposición disminuida, desorientada, sin capacidad de respuesta. Representar el papel de 'duros' en ese momento significaba hacer un favor a la UP. Significaba de mostrar al país que la oposición se resistía a los cambios y que estaba lista para defender sus intereses.

La única cosa que valía la pena defender era la constitucionalidad chilena, el Moscú de nuestros ejércitos. Valía más ceder al enemigo todas las batallas que poner en peligro el -- triunfo final. A fin de cuentas, aquél avanzaba, pero tam--- bién se aproximaba el invierno de sus propios errores, cada -- vez más alejado de su mística, de su cohesión interna, de su capacidad de acción, de su propio prestigio ante el pueblo..." (173). Congruente con esta línea, la táctica política de la De mocracia Cristiana descansó en dos puntos fundamentales:

"a) en un primer tiempo sobre la defensa de la instituciona lidad, cuyo primer germen nació a propósito de la discu sión acerca de la independencia del Poder Judicial para progresar hacia la defensa de la democracia formal, abs tracta, y hacia la defensa de la libertad (la de expres sión, de reunión, de trabajo, etc.);

b) posteriormente sobre la defensa de la propiedad privada, a través del proyecto de ley sobre las áreas de la economía."(174)

Veamos los rasgos esenciales de este proceso. En la táctica de defensa de la institucionalidad la oposición oponía trabas al gobierno para revolucionar lo económico y, al mismo tiempo, le impedía tocar el resto de la sociedad. Por más que el gobierno se empeñó en que los cambios en la estructura económica fueran acompañados de cambios concordantes en la estructura jurídica y política, el bloqueo progresivo de los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Democracia Radical lo imposibilitó. Una demostración de esta defensa de la legalidad a ultranza, patrocinada por los partidos de la burguesía, fue su enconada oposición al proyecto de Tribunales Vecinales presentado por el gobierno a principios de 1971 y al proyecto de reforma constitucional para crear la Cámara Unica, a fines del mismo año, que debieron ser retirados por la UP del Parlamento. Del mismo modo cualquier iniciativa incluso indirecta respecto a los aparatos ideológicos (prensa; radio, televisión universidades, sistema educacional, etc.) encontró siempre una respuesta durísima en la prensa y televisión, en el Congreso como en la calle, por una oposición que hizo de la defensa institucional su punto fuerte.

(174) Ibid, p. 161 .

En una de sus obras el politólogo español Joan Garcés, principal asesor político del Presidente Allende, se refiere a esta táctica opositora: "Como en tantas circunstancias históricas, también ahora en Chile la estrategia de los sectores pro-capitalistas ha consistido en presentar las medidas que afectan al dominio económico, político o cultural de la clase dominante como un atentado a la libertad. Cualquiera medida que tienda a desplazar parte del poder económico o político detentado por la clase dominante, en provecho de los sectores populares, es denunciado como un paso hacia la dictadura". (175)

Garcés agrega una serie de argumentos esgrimidos por la oposición en aquellos años que ilustran la situación que estudiamos. No obstante su extensión nos parece interesante --- transcribirlos textualmente: "Nacionalizar los bancos significaría acabar con la libertad de trabajo de los empresarios medianos y pequeños. El gobierno, por su parte, ha aumentado la cantidad y condiciones de los créditos a medianos y pequeños empresarios. Nacionalizar las empresas monopólicas significaría acabar con la libertad de trabajo de los obreros, empleados y técnicos. La política del gobierno ha reducido la cesantía heredada.

Nacionalizar el monopolio de la Papelera de Puente significaría acabar con la libertad de prensa. El Presidente de

(175) Garcés, Joan, "Chile: el camino político hacia el socialismo", p. 172.

la República ha propuesto que los propietarios de periódicos nombren sus representantes en la dirección de la empresa distribuidora de papel y que se creen cuantas empresas privadas para fabricar papel de periódico se desee. Que los partidos populares que representan a la mayoría del electorado y gobiernan el país, dispongan de un 40 por ciento del tiraje periodístico y el 50 por ciento de las radioemisoras, representaría acabar con la libertad de información de medios de comunicación que pertenecen a un puñado de familias. Integrar las escuelas de Derecho y Economía, en una sola Facultad, supondría acabar con la ciencia jurídica y el imperio de la ley en el orden social. Aunque los que así argumentan no desconocen que hace muchos años la Universidad de París, y tantas otras, agrupa en una sola Facultad los estudios de Derecho y Ciencias Económicas. En último extremo, nacionalizar las empresas extractivas de minerales, en manos del capital norteamericano, podría comprometer la libertad de comercio internacional de Chile. Reemplazar el Parlamento bicameral actual por un Parlamento unicameral significaría el principio del fin de la democracia chilena, aunque el gobierno mantiene exactamente los mismos principios y mecanismos para elegir a los diputados... y así sucesivamente.

Los intereses capitalistas han intentado crear la imagen de que la real disyuntiva que enfrenta el país gira en torno a la libertad o a la dictadura."(176)

Dentro de esta estrategia, el Partido Nacional desde el diario "El Mercurio" y su cuantiosa red de periódicos a lo largo del país atacaba duramente al gobierno. Al interior del sector demócrata cristiano liderado por Frei se había constituido un grupo de sus incondicionales, entre los que se destacaban Patricio Aylwin, Rafael Moreno, Andrés Zaldívar, José Musalem, Eduardo Hamilton, Claudio Orrego, Juan de Dios Carmona y otros. Pugnaban por consolidar nuevamente su influencia en la DC y, con ese objetivo, habían creado el diario "La Prensa". Además su influencia en otros medios de comunicación era grande. Controlaban las radios Cooperativa Vitalicia, Balmaceda, Santiago, Cruz del Sur, y contaban también con la concesión de espacios televisivos por parte del gobierno, como los programas "A tres bandas" y "A esta hora se improvisa", desde los cuales los democristianos desprestigiaban a la Unidad Popular.

Hasta esos momentos, primer trimestre de 1971, aunque la oposición actuaba unida en el Congreso, en los medios de comunicación y en la movilización callejera, no se había logrado estructurar una alianza formal entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Esta situación comenzó a evolucionar hacia la concertación de acuerdos políticos entre ambas fuerzas partidistas a consecuencia de dos sucesos: las elecciones municipales de abril de 1971 y, más propiamente, el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic ocurrido a mediados de ese mismo año y que analizaremos a continuación.

Elecciones municipales de abril de 1971. Los éxitos iniciales de la política económica de la Unidad Popular ampliaron la base social de apoyo al gobierno. Esto se reflejó en los resultados de las elecciones para renovar los regidores de los municipios del país en las que el grado de avance registrado por la coalición gobernante, en particular de los partidos Socialista y Comunista, fue espectacular. En efecto "el conjunto de los partidos que había conseguido el 36% para la candidatura de Allende en 1970, reunió esta vez la mayoría absoluta de votos alcanzado el 50,8% de los sufragios". (177) El siguiente cuadro comparativo corrobora lo anterior y no sólo respecto a la elección presidencial de 1970, sino que también en relación a las elecciones parlamentarias de 1969.

CUADRO No. 18

Comparación entre las elecciones municipales de 1971,
presidenciales de 1970 y parlamentarias de 1969.*

	Elecciones municipales 1971		Elecciones presidenciales 1970		Elecciones parlamentarias 1969	
Socialistas	631,939	22.89%	ALLENDE		292,954	12.2%
Comunistas	479,206	17.36%	ALLENDE		380,721	15.9%
Radicales	225,851	8.18%	1.070,334		307,126	13 %
Soc.-demócratas	38,067	1.38%	36.3%		20,485	0.9%
Unión soc.-popular	29,123	1.05%			51,629	2.2%
Dem. cristiana	723,623	26.21%	TOMIC		716,000	29.8%
			821,801			
			27,8%			
Part. Nacional	511,669	18.53%	ALESSANDRI		477,112	20 %
Dem. radical	108,192	3.91%	1.031,151			
Dem. nacional	13,435	0.49%	34.9%		44,564	1.9%

(177) Labrousse, Alain, op. cit., p. 265 .

* Fuente: Ibid, p. 265 .

Otro reflejo del crecimiento de la adhesión popular al gobierno de Allende fueron los resultados de la elección senatorial complementaria, efectuada en la sureña provincia de Cautín en mayo de 1971, donde el candidato socialista Adonis Sepúlveda obtuvo la victoria con el "62% de los votos contra el 31% del ex-Ministro de Economía de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar".(178)

Labrousse afirma que "estos éxitos se debían en primer lugar a las medidas gubernamentales que habían permitido un importante aumento del poder adquisitivo de amplias capas de la población. Y además al hecho de que las transformaciones se desarrollaban en el país en orden y legalmente, lo cual daba confianza a la influyente clase media chilena.

La total ausencia de represión durante los meses precedentes demostraban un cambio que numerosos sectores supieron apreciar".(179)

En efecto si comparamos algunos indicadores en la evolución del orden público entre los dos años anteriores a la llegada del gobierno de la Unidad Popular y la etapa que abarcamos, observaremos que, por lo general, no se incrementaron las manifestaciones conflictivas como lo evidencian las estadísticas siguientes:

(178) Ibid, p.p. 265-266 .

(179) Ibid, p. 266 .

CUADRO No. 19 *

	1969	1970	1971	1972 (hasta 31 de may)
Atentados con explosivos	5	57	17	18
Hechos violentos de trascendencia pública y nacional	3	3	3	9
Civiles muertos y lesionados en incidentes con la fuerza pública	92	47	34	48
Carabineros muertos y lesionados en conflictos de carácter político gremial				
Muertos	1	0	0	0
Lesionados	161	140	53	11
Armas de fuego empleadas en alteraciones del orden público y conflictos urbanos y del agro	77	38	32	74

Fuente: Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende", p. 150.

Las cifras precedentes confirman la opinión de Labrousse respecto a la ausencia de represión y a la disminución de los hechos violentos en 1971. Además demostramos en el punto 3.2 que el aumento del nivel de vida de la población se incrementó en la primera fase del gobierno popular. Sin embargo nuestra apreciación difiere de la conclusión a la que el autor llega respecto a la clase media chilena. En efecto, los múltiples esfuerzos realizados por Allende y, en especial por el Partido Comunista para lograr el apoyo masivo de los sectores medios, éstos nunca cristalizaron en la medida deseada y buscada por el gobierno. Por esa razón, compartimos la opinión de Bruna quien señala que los resultados electorales de abril no fueron precisamente una victoria en los sectores medios pues si se comparan los votos de los diferentes partidos entre 1969 y 1971 por provincias y se relacionan con las características socio-económicas de las diversas regiones se concluye que:

"...La UP y el Partido Socialista en particular, avanzan decisivamente sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas (PS=+15,3% en Antofagasta: + 12,8% en Valparaíso y Aconcagua; +10,4% en Santiago; +12,9% en Concepción) y en las provincias agrarias tradicionalmente sometidas a los caciques locales, provincias movilizadas a partir de 1970.

En ese sentido es un hecho significativo el fuerte descenso del Partido Nacional en Cautín después de la gran movilización de los indios mapuches. Si añadimos el hecho

de que el Partido Radical encargado. en el seno de la UP de re presentar a las clases medias, retrocede en todas partes, se puede plantear la hipótesis de que la intensificación del apoyo al gobierno popular a causa de las medidas adoptadas en los primeros meses se produce entre los trabajadores, los pobladores y los campesinos anteriormente influidos por el populismo". (180)

Pero al sector derechista de la Democracia Cristiana le preocuparon tres demostraciones reveladoras de estas elecciones. El avance electoral importante de socialistas y comunistas y que su votación descendiera en casi cien mil sufragios en comparación con la obtenida en 1970. Además observó que dentro de la Unidad Popular el único partido que experimentó una baja de preferencias fue el Radical, representante de los sectores medios. Por consiguiente, para el ala freísta democristiana era evidente la necesidad de captar ese descontento de las clases medias y, de esta forma, impedir que la base social de apoyo al gobierno siguiera en ascenso. Los sucesos de junio de ese año contribuirían a la apertura de esa posibilidad.

Asesinato de Pérez Zujovic. La oposición al gobierno, si bien había actuado en bloque deteniendo las iniciativas legislativas del Presidente Allende en el Congreso, no había logrado una total convergencia para constituir un frente unido contra

la Unidad Popular. Pero después del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, en una emboscada similar a la que se ultimó al General Schneider y efectuada por elementos pertenecientes a un grupúsculo de extrema izquierda, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), esta situación sufrió un vuelco radical. En efecto, el 8 de junio de 1971 el país presenció atónito el segundo crimen político perpetrado después de la victoria popular del 4 de septiembre de 1970. Este atentado tuvo una intención política similar al anterior: se trataba de crear un clima de caos y terror político y producir la unidad entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional que hasta esa fecha, como hemos señalado, no se había logrado.

Según rumores que circularon con insistencia en Santiago, existía un plan para ser ejecutado en marzo e impedir las elecciones municipales de abril cuya "sugestiva denominación era 'Calvo Sotelo'... Todo indicaba que dicho plan había sufrido la prórroga de dos meses... La víctima también había sido muy bien elegida. Odiado por el pueblo por su responsabilidad en la matanza de Puerto Montt, era un hombre prominente de la derecha, empresario de la construcción, que abogaba por el estrechamiento de filas entre su partido, la Democracia Cristiana, y el Partido Nacional". (181)

Los diversos autores consultados en relación a este suceso coinciden en atribuirle la intención política de estrechar

(181) Toer, Mario, op. cit., p. 113.

los vínculos entre nacionales y demócrata cristianos.

Garcés, en una de sus obras, dice al respecto: "Esta acción en un país en que los magnicidios durante siglo y medio, se contaban con los dedos de una mano, afectaba a la izquierda en sus dos dimensiones más sensibles: sus relaciones con el P D C, eje de los sectores medios y del Parlamento, y la necesidad de contener los designios de la derecha y Estados Unidos de imponer el desarrollo de la lucha social por medios violentos". (182) El mismo autor, en otro de sus ensayos, sostiene: "El asesinato del ex-Ministro de la D C, Edmundo Pérez Zujovic, provocó la crisis más grave por la que ha atravesado el gobierno no popular hasta la fecha. Toda la oposición se unió para clamar con vehemencia la responsabilidad indirecta del gobierno en este crimen. Durante tres días, la invocación abierta de la intervención militar por unos, y el temor que ello ocurriera para otros, recorrió el ambiente político. No cabiendo al gobierno obra ni arte en la acción de un grupo de activistas paranoicos totalmente aislado, el gobierno superó la situación sin mayores consecuencias" .(183) Lamour, por su parte, también manifiesta que este hecho produjo el fortalecimiento de la oposición en contra del gobierno: "Un acontecimiento permite situar con precisión la fecha de este giro: la liquidación del ex-Ministro Pérez Zujovic a manos de un comando de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) grupúsculo de extrema izquierda evidentemente infiltrado por provocadores. Sin duda

(182) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", Editorial Ariel, Barcelona, 1976, p.p. 159-160.

(183) Garcés, Joan, "Chile: el camino político hacia el socialismo", p. 187.

alguna este atentado ha acelerado el acercamiento entre la de recha tradicional y la Democracia Cristiana".(184)

En efecto, el sector conservador o freísta del Partido Demócrata Cristiano encabezado por el Presidente del Senado Patricio Aylwin y los senadores del Partido Nacional Sergio Díez, Francisco Bulnes y Onofre Jarpa, iniciaron una intensa campaña de desprestigio en contra de Allende, su programa y sus colaboradores más directos. Exigían que la investigación del crimen fuera encargada a las Fuerzas Armadas, aduciendo que la policía civil no les merecía confianza. Por su parte, en Santiago, los partidarios de la Unidad Popular decidieron organizar una concentración pública de repudio al atentado y en apoyo al Presidente Allende. Pero el gobierno temeroso de un enfrentamiento callejero entre la oposición y la UP, decretó estado de emergencia en la provincia de Santiago a fin de resguardar el orden público mediante el control militar. Esta fue la primera ocasión en que el gobierno recurrió a la intervención militar.

Destacamos este hecho porque el Jefe de la Guarnición de Santiago, en esa época, manifestó al presidente Allende: "Presidente, el Ejército responde del control de la situación. Y puede usted estar seguro de su disciplina. Al primer Coronel que se mueva, yo mismo le pego un tiro. Quien así hablaba, en

el momento que tenía el control directo de la provincia de San tiago, era el General Augusto Pinochet".(185)

Menos de una semana después del crimen, los dirigentes de la VOP fueron descubiertos por un comando de Carabineros, Ejército, Aviación e Investigaciones y morían en un enfrenta--- miento armado con los militares y la policía. A propósito de esto, el 12 de junio de 1971, Patricio Aylwin pronunciaba en el Senado un discurso donde acusaba al gobierno como responsable de lo ocurrido por haber tolerado a los grupos armados ilegales y contribuido a crear un clima de odio en el país: "¿No es una interpretación valedera decir que Ronald Rivera Calderón,* hombre perteneciente a un movimiento de extrema izquierda disparó su metralleta... obedeciendo a la colonización mental que le produjo la idea que le metieron en la cabeza de que sólo desencadenado el enfrentamiento armado entre los chilenos iba a ser posible construir el socialismo en Chile?".(186)

Pocos días después la oposición empezó a exigir al gobierno la desaparición de los grupos armados denunciando "a la --- guardia personal de Allende por su status extra legal, y el Parlamento decidía no conceder el presupuesto para la incorpora--- ción de 1.000 nuevos carabineros, aduciendo razones de manipu lación política por parte del gobierno para cubrir esas pla--- zas".(187) Además la campaña de la prensa opositora arreme---

(185) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 163.

(186) Diario "El Mercurio", de 13 de junio de 1971.

(187) Toer, Mario, op.cit., p. 114

* Ronald Rivera Calderón era el principal dirigente de la VOP.

metfa en contra del gobierno popular, como observa una periodista europea: "El tono de la prensa de derecha no ha cesado de endurecerse. Las revistas 'Pec' y 'Sepa' y el diario 'La Tribuna' de orientación francamente fascista, emplean titulares de estilo: 'Un gobierno de incapaces para un país de cobardes', 'Con Allende estamos entre la espada y el paredón', 'Con la Unidad Popular se carece de todo salvo de idioteces', e incitaban abiertamente a la subversión. El diario "El Mercurio", el decano de la prensa de Iberoamérica (su primera edición apareció el 12 de diciembre de 1827) y portavoz del orden establecido, ataca todos los días a la Unidad Popular sin piedad con editoriales vengadoras. Más matizados y por eso más eficaces, los diarios de gran tirada 'La Segunda' y 'Ultimas Noticias' hacen un minucioso recuento de los enfrentamientos en el campo, de las huelgas y de las reservas de divisas del país.

Sin embargo la sorpresa mayor es la agresividad de los titulares y los artículos de 'La Prensa', órgano oficial de la Democracia Cristiana, que se caracterizó durante el mandato de Eduardo Frei por la medida y seriedad de sus escritores. Hoy día algunos periodistas escriben al mismo tiempo en la 'Prensa' y en 'Pec', lo que es un indicativo del cambio de tono del primer". (188)

Bruna nos aporta más datos acerca de esta campaña periodis

tica del vocero del Partido Demócrata Cristiano que en sus ediciones del 17 de junio de ese año afirmaba que "el país se encontraría en un estado de 'impunidad criminal', de 'división de los chilenos en dos grupos irreconciliables'; de 'descomposición social' porque el gobierno no utiliza la fuerza pública 'para mantener el orden', en fin, porque 'para requisar una empresa se pasa por alto al Parlamento' o basta con provocar o permitir una ocupación y una parálisis injustificada o ilegal."(189)

Las consecuencias políticas buscadas con lo antes descrito no tardaron en manifestarse. Cuando apenas la Unidad Popular llevaba siete meses de gobierno, el 29 de junio de 1971, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional lograron su primer acuerdo público y decidieron apoyar a un candidato único para las elecciones complementarias de un diputado en Valparaíso, que se realizaron el 18 de julio de ese año. En ellas Oscar Marín, candidato de la derecha unida, derrotó al socialista Hernán del Canto, abanderado de la UP.

Además se rompió el acuerdo existente entre la D C y la U P desde el 4 de septiembre de 1970, en virtud del cual habían convenido "confiar a la primera la presidencia del Senado y a la segunda de la Cámara de Diputados".(190). En agosto, la mesa de izquierda de la Cámara de Diputados -- fue derribada con el apoyo y respaldo de la Democracia Radi-

(189) Bruna, Susana, op. cit., p. 166 .

(190) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 56 .

cal y el Partido Nacional y se eligió presidente de aquélla a un demócrata cristiano.

El acercamiento abierto entre la Democracia Radical, nacionales y democristianos, germen de lo que más tarde sería la conformación de un frente cívico común en contra del gobierno de Allende, tuvo para el Partido Demócrata Cristiano un costo político pues "condujo al desprendimiento de un sector de su ala izquierda que, en julio de 1971, se constituyó en Movimiento de Izquierda Cristiana y posteriormente solicitó su incorporación a la Unidad Popular".(191) Este desplazamiento hacia la UP de un grupo del sector progresista democristiano repercutió en la representación parlamentaria del PDC, porque si bien con el triunfo de Oscar Marín en Valparaíso ganó un diputado, con esta fisura en sus filas perdió seis, entre ellos a la popular figura de Luis Maira, del total de 55 diputados que tenía. La división del Partido Demócrata Cristiano alcanzó también a sus cuadros jóvenes pues todos los dirigentes de su juventud ingresaron al nuevo movimiento, entre los --
cuales "figuraban los cuatro hijos de Radomiro Tomic... Sin embargo, en conjunto, este movimiento ha sido más limitado de lo que esperaba la Unidad Popular. En todo caso no ha afectado --
fundamentalmente a la Democracia Cristiana. Aunque esté ideológicamente cercano al grupo de disidentes, Radomiro Tomic no ha

(191) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 203.

franqueado el paso de la ruptura, afirmando que todavía se puede hacer algo útil en el interior de su partido".(192)

El surgimiento de la Izquierda Cristiana no contribuyó a reforzar por mucho tiempo a la Unidad Popular en el Parlamento, dado a que el bloque gobernante "...experimentó el mismo proceso en sentido opuesto. El mismo mes de julio, el Partido Radical se dividía y su ala más moderada se organizaba como partido autónomo bajo la denominación de Partido de Izquierda Radical".(193) La escisión del PIR se produjo en un Congreso del Partido Radical y contó con la adhesión de 7 senadores y 5 diputados. Aunque este nuevo partido se mantuvo dentro de la U P, diez meses después, "en abril de 1972, el PIR se retiró del gobierno y, en junio de 1972, se incorporaba plenamente a la oposición, agrupada tras la denominada Confederación Democrática, (CODE)" (194)

La evolución posterior del proceso político opositor al gobierno se inscribe dentro de la otra línea táctica de la oposición centrada en la defensa de la propiedad privada.

A partir de agosto de 1971 la ofensiva burguesa en el seno del aparato del Estado pasó al plano económico mismo. La oposición en estos momentos contaba con dos elementos a su favor. El deterioro del apoyo al gobierno, particularmente en los sectores medios, como consecuencia de los proble-

(192) Lamour, Catherine, op. cit., 191.

(193) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 203 .

(194) Ibid, p. 203 .

mas económicos que vivía el país: desabastecimiento de ciertos productos, auge del mercado negro, inflación y a los cuales hicimos referencia anteriormente. La alianza entre el PN, la DC y la Democracia Radical fue otro factor que facilitó la acción obstruccionista de la oposición en el Congreso, que ahora recurrió al procedimiento de la acusación constitucional de los ministros del gabinete de Allende.

La Constitución Política vigente, en sus artículos 39 y 42 cuyas disposiciones pertinentes transcribiremos a continuación, se refería a las facultades de la Cámara de Diputados y del Senado para acusar constitucionalmente a los Ministros de Estado.

"Artículo 39: Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1o. Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formulen en contra de los siguientes funcionarios:

a) De los Ministros de Estado por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

b) ...el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación.

Artículo 42: ...El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa.

Por la declaración de culpabilidad, queda el acusado destituido de su cargo" (195)

A fines de septiembre de ese año el Partido Nacional presentó a la Cámara de Diputados una acusación constitucional en contra del titular de Economía, Pedro Vuskovic, argumentando que: "El Ministro de Economía que acusamos ha hecho uso cons--tante de la arbitrariedad, la ilegalidad, el atropello a la --Constitución y la ley, el abuso y la desviación de poder, a lo largo de su gestión gubernamental".(196) La actitud de la Democracia Cristiana, entonces, fue amenazar al gobierno con sumarse a la acusación, con lo cual era evidente que ésta prosperaría si el gobierno no establecía una posición clara acerca de las delimitaciones definitivas de los sectores social, mixto y privado de la economía y si no enviaba al Congreso una ley de expropiación industrial que sustituyera al decreto-ley 520.

(195) Constitución Política del Estado de 1925.

(196) Selser, Gregorio, op. cit., p. 174.

El gobierno de la Unidad Popular accedió a tal petición y se comprometió a enviar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que definiría y reglamentaría las tres áreas de la economía con fecha 20 de octubre. Pero mientras Allende y su equipo de asesores preparaban el proyecto que se había ofrecido, los senadores democristianos Eduardo Hamilton y Renán Fuentealba se adelantaron y presentaron un proyecto de reforma constitucional el día 10 de octubre. Esta iniciativa del PDC, en esencia, perseguía "eliminar todas las vías utilizadas hasta entonces por el gobierno, y hacer reversibles las transformaciones económicas ya realizadas e ideológicamente estaba vinculada, en lo inmediato, a la amenaza de estatización del monopolio privado de papel 'La Papelera', propiedad de Jorge Alessandri, que se había convertido en símbolo ideológico de la libertad de prensa chilena"(197).

En efecto por esa época en la industria mencionada había estallado una huelga de sus obreros que exigía a Allende su expropiación. Además desde las esferas del gobierno se habían filtrado noticias que dentro de sus planes estaba el traspaso al área social del monopolio del papel. Debido a esta circunstancia el gobierno popular abrió un periodo de negociaciones con el sector progresista de la Democracia Cristiana, y en particular con Tomic el que, como vimos, no abandonó las fi-

las de ese partido después de la escisión del Movimiento de Izquierda Cristiana. Antes de referirnos al diálogo Tomic-Allen de trataremos tres hechos importantes acontecidos en lo que restaba de ese año: la visita de Fidel Castro a Chile, la manifestación callejera conocida como "marcha de las cacerolas vacías" y la acusación constitucional contra el Ministro del Interior José Tohá.

Visita del Primer Ministro de Cuba: La segunda semana de noviembre de 1971 arribó al país, en visita oficial, Fidel Castro, Primer Ministro y Secretario General del Partido Comunista de Cuba. Era la primera visita que Castro hacía a un país latinoamericano desde que Estados Unidos había impuesto el -- bloqueo a la isla, nueve años antes. No obstante que el gobierno popular reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba siete días después de su instalación, Allende había postergado una recepción a su amigo personal Fidel Castro en Chile hasta que no creyó consolidada la situación de su gobierno y garantizadas las buenas relaciones con los países sudamericanos. Meses antes Allende se había entrevistado con los presidentes de los países integrantes del Pacto Andino -- Colombia, Perú y Ecuador -- y con el primer mandatario argentino, General Lanusse. Sólo entonces la UP creyó oportuno reafirmar los lazos con la revolución cubana recibiendo a su princi

pal dirigente. Como afirma Garcés: "la presencia de Castro en el país austral simbolizaba el comienzo del fin del 'cordón sanitario' contra Cuba y el encuentro de los procesos revolucionarios más desarrollados del continente".(198)

Durante veinticinco días Castro recorrió Chile de norte a sur, visitando en las ciudades más importantes los centros de trabajo, poblaciones y universidades. Estuvo en Iquique, Tarapacá, Santiago, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, donde cientos de miles de personas se reunían para verle y escucharle. Mientras la derecha opositora daba muestras de indignación por la entusiasta acogida que se daba al visitante, la prensa y radio pertenecientes a los partidos de oposición dasató una campaña de denigración y denuestos contra Castro, su comitiva y la revolución cubana. Como una forma de empañar la solidaridad del pueblo chileno hacia Cuba y su principal dirigente la oposición organizó, por primera vez desde el acceso de Allende a la presidencia, una multitudinaria manifestación de masas para protestar en contra del desabastecimiento.

Marcha de las cacerolas vacías. En efecto, el 10. de diciembre, cuando faltaban tres días para que Fidel Castro abandonara el país "una organización semi-clandestina, financiada y

(198) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 163.

manipulada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, 'poder femenino', (199) convocó en Santiago a una manifestación de mujeres. En la tarde de ese día, desde los barrios residenciales acomodados de la capital, empezaron a desfilare hacia el centro miles de señoras con cacerolas vacías que golpeaban a su paso, a modo de protesta por la escasez de artículos que, en esa época, se dejaba sentir en el comercio regular. El gobierno, a fin de mantener el orden, dispuso que carabineros protegiera la marcha a través de su recorrido. Pero en los momentos en que las manifestantes se acercaban a las calles céntricas, grupos de activistas de derecha armados con instrumentos contundentes, surgidos de entre las damas, atacaron a los carabineros. La respuesta de éstos "provocó la situación buscada: golpes, cargas, bombas lacrimógenas, mujeres desvanecidas y, en pocos minutos, el centro de la capital era escenario de desórdenes, protagonizados por comandos masculinos derechos en torno a las excitadas señoras de los barrios elegantes... Esa noche, las agencias periodísticas de todo el mundo occidental recibieron despachos que les permitía decir que la visita de Fidel Castro a Chile terminaba en revuelta". (200) Ante estos sucesos el comité femenino de la Unidad Popular, por intermedio de su presidenta, la senadora María Elena Carrera, solicitó a Allende autorización para un desfile de mujeres de las poblaciones obreras que también estaban dispuestas a mar--

(199) Ibid, p. 164.

(200) Ibid, p. 165.

char hacia el centro. Allende se negó a tal autorización respondiendo: "lo que la derecha ansía es, precisamente, provo--car el enfrentamiento entre civiles, para legitimar ante las Fuerzas Armadas, su invocación de que intervengan por su propia cuenta y 'restablezcan el orden' contraponiéndolas al gobierno. Pues un choque entre decenas de miles de mujeres o--breras y burguesas daría la impresión de que el gobierno se hallaba desbordado o de que, deliberadamente, se abstenía de cumplir con su función ordenadora".(201)

Al día siguiente de estos desórdenes los barrios acomodados de Santiago se declararon en rebelión. Las radioemisoras de la derecha suspendieron sus programas para incitar a la movilización y protesta colectiva, por lo cual el gobierno decretó el estado de emergencia en la capital. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, interpretando el sentir de la oposición en momentos en que lo grave no era tanto el carácter de los incidentes del día anterior, sino el contexto en que se produjeron, declaraba: "Acu--samos al gobierno de transformar al Cuerpo de Carabineros en un aliado impúdico de las fuerzas marxistas y de quitarles -- los más elementales valores en que han sido formados... Por eso pedimos al Parlamento que destituya al Ministro del Inte--rior".(202)

(201) Ibid, p. 166.

(202) Diario "El Mercurio" de 4 de diciembre de 1971.

A propósito de estos hechos, cuando Fidel Castro partía de Chile, en su discurso de despedida afirmaba que se iba tras haber visto confirmado un supuesto general de todo proceso revolucionario: la acción del fascismo. En esa ocasión, Castro dijo: "Ahora bien, la cuestión que obviamente se plantea — vista por un visitante de este proceso — es si acaso se cumplirá o no la ley histórica de la resistencia y de la violencia de los explotadores. Porque hemos dicho que no existe en la historia ningún caso en que los reaccionarios, los explotadores, los privilegiados de un sistema social se resignen pacíficamente a los cambios... Y lo decimos con toda franqueza: que hemos tenido la oportunidad de aprender y de ver el fascismo en acción. Y sinceramente creemos que no habrá nada que pueda enseñarnos tanto a nosotros como esta visita... En Chile la reacción, la oligarquía, está mucho más preparada de lo que estaba en Cuba, mucho más organizada y mucho más equipada para resistir los cambios desde el punto de vista ideológico. Han creado todos los instrumentos para librar una batalla en todos los terrenos frente al avance del proceso. Una batalla en el campo ideológico, una batalla en el campo político, una batalla en el campo de masas contra el proceso. Esa es la diferencia fundamental. Hay otras. Pero no me refiero a otras porque eran caminos totalmente diferentes"(203)

(203) Discurso de despedida de Fidel Castro en el Estadio Nacional en "Cuba - Chile", Ediciones Políticas, Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1972, p.p. 476-477-479.

Acusación constitucional en contra del Ministro del Interior.

Afirmamos que la gravedad de los sucesos relatados residía en el contexto político que se enmarcaba . A doce meses de gobierno popular, con una alianza entre el Partido Nacional, el Demócrata y la Democracia Radical consolidada meses antes, que determinó una correlación de fuerzas en el Parlamento abiertamente desfavorable a la U.P , se iniciará el conflicto declarado entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Lo acontecido en la "marcha de las cacerolas vacías" fue el pretexto para que el Consejo Nacional del P D C, "por diez votos contra 8"(204), acusara constitucionalmente al Ministro del Interior, José Tohá y pidiera su destitución.

El libelo acusatorio fue presentado a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre y tenía por fundamento de cargo en contra de Tohá: "la limitación de las libertades públicas de expresión y de reunión, la renuncia a mantener el orden público, el apoyo gubernamental a la violencia política organizada y la negligencia ante situaciones que podían desembocar en la intervención militar, con grave perjuicio para la seguridad de la nación" (205)

Se trataba de solicitar la destitución de un Ministro del Interior que por jerarquía era la segunda autoridad del país - después del Presidente de la República, es decir, equivalía a

(204) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 165.

(205) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 61 .

un juicio político al mismo gobierno. Así lo reconocieron públicamente, el Partido Demócrata Cristiano al declarar: "La acusación presentada por nuestro partido no es en torno de la persona del Ministro Tohá... La acusación es contra el gobierno representado en este caso por el Ministro del Interior"(206); y el diputado Carmine del Partido Nacional, quien fue todavía más lejos y reveló los verdaderos alcances que tenía la acusación al afirmar: "Aquí es el gobierno de Allende el que está siendo juzgado. Hoy es el Ministro del Interior, pero si el gobierno no enmienda rumbos, mañana será el Presidente de la República a quien acusaremos constitucionalmente" (207).

La acusación prosperó en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero Allende designó a Tohá Ministro de Defensa, lo cual motivó que un tercio de los senadores impugnara esa designación ante el Tribunal Constitucional, órgano que apoyó la decisión del gobierno. Este veredicto fue desvirtuado, el 27 de enero de 1972, por el Segundo juzgado de Santiago al sentenciar que: "de los hechos imputados al Ministro del Interior no podía desprenderse responsabilidad penal alguna, no constituyendo delito ninguno los denunciados en la acusación"(208) Con este desenlace Tohá continuó en el gabinete

(206) Witker, Alejandro, "El compañero Tohá"(Esbozo biográfico, Testimonios y Documentos), Editado por Casa de Chile en México, México, 1977, p. 26.

(207) Ibid, p. 26.

(208) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p.p. 81-82.

como titular de Defensa y, lo más importante, el Ejecutivo no vió cercenada su facultad de nombrar a sus colaboradores directos por el Legislativo. Sin embargo esta atribución presidencial consagrada en la Constitución Política, de orientación presidencialista, en la segunda fase del gobierno popular que trataremos en el siguiente capítulo, se vería seriamente restringida por la oposición parlamentaria.

Diálogo Tomic - Allende. Pocos días después que la directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano decidiera presentar una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Allende entabló un diálogo con Radomiro Tomic, líder del ala progresista de ese partido. Garcés, el asesor político del Presidente estuvo presente en la plática que, el 17 de diciembre de 1971, sostuvieron quienes habían sido contrincantes en la campaña electoral del setenta. Garcés nos relata textualmente las respuestas de Tomic ante la inquietud de Allende por la trascendencia política que implicaba dicha acusación constitucional y ante la decisión presidencial de defender las prerogativas del Ejecutivo.

- "Es muy posible — dijo Tomic — que tengas razón desde el punto de vista jurídico. Pero cualquiera que sea el resultado de esta cuestión, lo que a mí me preocupa es que el problema no va a quedar resuelto para el futuro. Y se va a ir

agravando. Porque la U P está en el gobierno y tiene el respaldo electoral de alrededor de la mitad del país. Pero estáis en minoría dentro de las instituciones del Estado. Y para llevar a cabo vuestro programa necesitáis una mayoría institucional. De otro modo iremos de crisis en crisis, cada vez más grande.

- Por eso mismo — añadió Allende — te he invitado a conversar esta noche. El PDC viene adoptando una posición de creciente intransigencia hacia el gobierno, y ello puede entrañar consecuencias serias para vosotros, para nosotros y para el país entero. Busquemos el modo de interrumpir semejante evolución". (209). Tomic replicó a Allende que los militantes demócratacristianos eran objeto de discriminación en las fábricas, en las oficinas y en el campo por los partidarios de la Unidad Popular, a lo cual el presidente rebatió diciendo:

- "El caso es que contigo yo puedo discutir y buscar un punto de acuerdo. No tengo ningún inconveniente en incorporar a tí y a tu sector al gobierno. Pero no me pidas que haga lo mismo con Carmona o Frei, que tú sabes mejor que yo que fueron tus enemigos principales durante la campaña electoral. No lo fui tanto yo, que la gané, como el ala derecha de tu propio partido. Por lo demás, ni la UP ni yo podemos aceptar la incorporación al gobierno del sector del PDC militantemente antisocialista, cuando la D C por sí sola tiene casi tanto respaldo e-

lectual como el Partido Socialista y el Partido Comunista juntos. Ello provocaría la división de la UP y convertiría al PDC en la principal fuerza del gobierno. Y yo he sido nombrado candidato a la presidencia por la UP, no por la Democracia Cristiana.

- Yo conozco a mi partido - respondió Tomic -. No es la primera vez que sigue una línea conservadora. Y, sin embargo, en otras ocasiones hemos logrado modificarla en sentido contrario. Llegará el momento de que cambie, de nuevo, de orientación!"(210)

No obstante el infructuoso resultado de esta entrevista Allende volverá a buscar, más tarde y particularmente en junio de 1972 y en julio de 1973, puntos de acuerdo con los sectores de izquierda democristianos y con ese partido en conjunto. Pero siempre fracasarían.

La disyuntiva sería en que se encontraba Allende ahora, y que debería enfrentar con mayor urgencia en la siguiente fase de su gobierno, residía en que el problema de fondo de las relaciones del PDC con la Unidad Popular "era que ésta necesitaba superar la obstrucción creciente de aquél en el Parlamento y en otras instituciones representativas de sectores medios y populares. Es decir, estaba en juego la cuestión central del poder, en especial la dirección del Estado"(211)

Interrumpido el diálogo con el ala progresista de la Democracia Cristiana cuyo vocero era Tomic, la situación para el

(210) Ibid., p. 211.

(211) Ibid., p. 213.

gobierno revistió caracteres graves. Significaba, como señalamos en párrafos anteriores, que los caminos hasta ahora utilizados para efectuar las transformaciones económicas se clausuraban y que, incluso, peligraba la irreversibilidad de las transformaciones ya realizadas. El proyecto de reforma constitucional presentado por los senadores Eduardo Hamilton y Renán Fuentealba, siendo este último integrante del sector izquierdista de la DC al que también pertenecía Tomic, así lo pretendía.

En efecto, dijimos que en septiembre de 1971 el Partido Demócrata Cristiano amenazó al gobierno con sumarse a la acusación constitucional presentada por el Partido Nacional en el Parlamento en contra del Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, si Allende no delimitaba claramente las tres áreas de la economía y no derogaba el decreto-ley 520. El gobierno popular se comprometió a enviar un proyecto de ley en tal sentido el 20 de octubre. Pero los senadores Hamilton y Fuentealba antes de esa fecha, el 10 de ese mes, presentaron el proyecto mencionado y el gobierno, a su vez, envió el suyo el 20 de octubre acorde con lo pactado.

Veamos brevemente la trayectoria de estas leyes. El proyecto de ley de la Unidad Popular "delimitaba tres áreas de la economía: la social, mixta y privada y solicitaba al Le

gislative facultades para que el Ejecutivo nacionalizara 253 empresas, cada una de ellas poseedoras de activos evaluados en más de 14 millones de escudos al 31 de diciembre de 1969. Las empresas cuyos activos no alcanzaran ese valor permanecían en el sector privado"(212) Por su parte, el proyecto de ley de la oposición declaraba ilegales todas las intervenciones y requisas realizadas y ordenaba el regreso al sector privado de los bancos, las grandes empresas distribuidoras y otros monopolios estatizados a los que nos referimos en el punto 3.2. Además el proyecto de la DC estipulaba que todas las expropiaciones futuras requerirían leyes especiales del Congreso. Así se desprende de la parte esencial del proyecto de ley Hamilton-Fuentealba que textualmente decía: "Decláranse nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen a contar del 14 de octubre de 1971 para adquirir acciones o derechos de personas jurídicas de derecho privado, con el fin de nacionalizar o estatizar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizadas por ley dictadas en conformidad a lo prescrito en el No. 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado".

(213)

(212) Espinosa y Zimbalist, op. cit., p. 68.

(213) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 82.

Se inicio entonces en el Parlamento un intenso debate entre la Unidad Popular y la oposici3n que, al mismo tiempo, tuvo un eco en la sociedad chilena. Los medios de comunicaci3n y los partidos pol3ticos de uno y otro bando contribuyeron a acentuar las tensiones que reflejaban ya la polarizaci3n de la sociedad civil chilena. Las manifestaciones callejeras, sobre todo en Santiago, se sucedían a diario. El número de sus asistentes y las consignas que voceaban no dejaban dudas de que se abría en Chile un periodo de agitaci3n y de enfrentamiento clasista muy profundo.

Durante las discusiones parlamentarias de estos proyectos, "Allende delimitó el área social propuesta inicialmente y presentó una lista de sólo 91 empresas que entrarían al área de propiedad social, pero el Congreso no le concedió facultades para nacionalizarlas"(214). El 19 de febrero de 1972. el proyecto Hamilton - Fuentealba fue aprobado por las dos ramas del Parlamento, sin cumplir "con todas las formalidades para discutir y aprobar el proyecto de reforma constitucional"(215). Al día siguiente el Congreso se lo comunicó al Presidente Allende; el 6 de abril de 1972 el Ejecutivo lo vetó, el 10 de ese mes completó su veto y el 12 de ese mismo mes retiró el veto adicional (216). A continuaci3n se inici3 un debate en el Parlamento acerca de si se requería o no mayoría de dos tercios para superar el veto presidencial. La oposici3n, que contaba con

(214) Espinosa y Zimbalit, op. cit., p. 69.
(215) Bruna, Susana, op. cit., p.p. 183-184.
(216) Cfr. Bruna, Susana, op. cit., p. 184.

la mayoría pero no de dos tercios, sostuvo que "se requería una mayoría de dos tercios para superar un veto del Ejecutivo en el caso de los proyectos ordinarios, pero que en el caso de una reforma constitucional bastaba una mayoría simple"(217), es decir, la mitad más uno. La Constitución Política adolecía de una laguna jurídica al respecto lo cual permitió dejar la discusión en suspenso temporalmente.

Mientras estas discusiones se desarrollaban en el Congreso, la Unidad Popular sufrió una escisión en sus filas: el sector del Partido Radical que en el mes de julio de 1971 había formado el PIR, en el transcurso de los debates acerca de las tres áreas de la economía, se retiró del gobierno. Así a comienzos de abril de 1972, el bloque popular que gobernaba perdía "7 senadores y 5 diputados"(218). Por otra parte, en el seno de la UP, los sectores altamiranistas del Partido Socialista, la Juventud Radical y el MAPU, empezaron a presionar a Allende para que recurriera a una consulta plebiscitaria. La consigna del recurso al plebiscito, a mediados de mayo de 1972, era, además la que predominaba en las manifestaciones callejeras organizadas por la izquierda casi a diario en la capital y en las principales ciudades del país.

Ante esta situación cada vez más conflictiva la Unidad Popular hizo un balance político del proceso de gobierno hasta esos momentos y llegó a la conclusión que era necesaria una -

(217) Espinosa y Zimbalist op. cit., p. 69.

(218) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 203.

rectificación de la política seguida hasta entonces. Llegar a esta última decisión no fue fácil. Al analizar la vía chilena al socialismo, nos referimos a que al interior de los partidos que integraban la Unidad Popular no existía un criterio unánime respecto a la puesta en práctica de este camino al socialismo. Creemos que para una mejor comprensión de lo adoptado en el Cónclave de Lo Curro a mediados de junio de 1972 es necesario revisar cómo se perfilaron, durante esta primera fase del gobierno, esas diferencias ideológicas acerca de la estrategia a seguir en la transición al socialismo. A ello dedicaremos el punto siguiente.

Las resoluciones adoptadas en Lo Curro cronológicamente corresponden a la segunda etapa del gobierno popular y las veremos en el capítulo cuarto de nuestro trabajo.

3.6 Los partidos políticos de la izquierda en esta etapa.

Hasta aquí hemos visto la estrategia opositora de los partidos políticos de la derecha chilena contrarios al proyecto de gobierno de la Unidad Popular. Señalamos que al desconcierto inicial y a los intentos de impedir el ascenso de Allende a la presidencia del país siguió la organización de esos grupos políticos en una alianza opositora. Ahora trataremos las divergencias entre los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular y del que estando fuera de ella - el Movimiento de Izquierda Revolucionaria - manifestó, desde un comienzo, profundas diferencias con la línea política postulada por el bloque de la UP.

En el punto 3.1 dijimos que a pesar de la alianza socialista - comunista, en el seno de la Unidad Popular existían apreciaciones divergentes entre los dos partidos más importantes de esa alianza respecto a la aplicación de la estrategia de la vía chilena al socialismo y que emergerían en el transcurso del proceso de gobierno. A reseñar una síntesis de esas discrepancias dedicaremos los párrafos siguientes.

Una de las originalidades de la experiencia del gobierno popular residía en que dentro de la UP no había un solo partido marxista omnipotente como representante de la clase obrera. Existían dos partidos de esa filiación: el Comunista y el Socialista. Dentro de sus congéneres a nivel mundial, el PC chileno

es uno de los más obedientes a la línea política del Partido Comunista Soviético y contaba con "unos sesenta mil miembros activos"!(219) En las elecciones municipales de abril de -- 1971 había obtenido el 17,36% de los sufragios. El Partido Socialista no pertenece a la II Internacional y, a diferen-- cia del Comunista, no exigía una selección rigurosa para in-- corporarse a sus filas. Era uno de los pocos Partidos Socia-- listas del mundo en que básicamente su militancia provenía de sectores obreros pues estaba integrado "por un 50 por cien-- to de proletariados, aproximadamente, 30 por ciento de repre-- sentantes de las clases medias e intelectuales y un 20 por -- ciento de la pequeña burguesía"!(220) Después de la llegada al gobierno de la Unidad Popular, en las elecciones de regi-- dores antes mencionadas, había obtenido el 22,89% de los su-- fragios, convirtiéndose "en la segunda formación política -- del país después de la Democracia Cristiana y había triplica-- do, en un año, el número de sus adherentes que ahora pasaba de noventa mil. Ciertamente, hay que contar entre estos nue-- vos miembros un fuerte porcentaje de oportunistas ... Pero, el PS atraía también a todos aquellos que se adherían a la política de la Unidad Popular pero que estaban marcados por decenas de años de virulenta propaganda anticomunista"!(221)

(219) Lamour, Catherine, op. cit., p. 173.

(220) Ibid, p. 174 .

(221) Ibid, p.p. 173-174 .

Previo a desarrollar las diferencias ideológicas entre esos partidos relativas al ritmo que debería asumir el proceso de gobierno, es necesario referirnos al otro partido de izquierda mencionado pero que no formaba parte de la coalición gobernante: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El surgimiento del MIR en Chile coincidió con la aparición en Latinoamérica de organizaciones de extrema izquierda que, influidas por la revolución cubana, rechazaban la toma del poder por la vía electoral y preconizaban la estrategia revolucionaria armada. Entre ellas podemos mencionar al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, al Ejército Revolucionario Popular de Argentina y a los Tupamaros de Uruguay.

Hacia 1960 dentro de los sectores juveniles de los partidos de la izquierda tradicional chilena se produjeron luchas intestinas que impugnaban el camino electoral para llegar al poder y postulaban por la lucha armada. Es así como a fines de 1963, un grupo de militantes de las Juventudes Socialistas de Santiago y Concepción abandonaron el partido y crearon la Vanguardia Marxista Revolucionaria a la que se sumaron jóvenes expulsados del Partido Comunista por sus tendencias trotskistas y proquinas. Al año siguiente esta organización se escindió en Vanguardia Marxista Revolucionaria Vanguardia, integrada por los grupos pro - Pekín, y Vanguardia Marxista Revolucionaria Rebelde en la que permanecieron

los demás grupos mencionados y a la cual se unieron fracciones disidentes del Partido Socialista desilusionadas de la derrota electoral del FRAP en 1964. Entonces esta última organización adoptó el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

En agosto de 1965, el MIR publicó el documento "La conquista del poder por la vía insurreccional" donde sostenía que la conquista del poder no pasaría por una sublevación general de tipo insurreccional que permitiera en unas horas derribar a la burguesía, sino que la lucha armada tendría el carácter irregular y prolongado de una guerra revolucionaria(222) Además señalaba que dicho movimiento "rechazaba el concepto de revolución por etapas planteando que una vez derrocado el capitalismo, a través de una insurrección popular armada, el proletariado a la cabeza de los campesinos y demás capas pobres, -- realizaría las tareas democráticas no cumplidas por la burguesía (expulsión del imperialismo y revolución agraria) combinándolas en un proceso de revolución permanente con las tareas socialistas"(223)

Durante los dos años siguientes el MIR procuró captar nuevos militantes y se dedicó a realizar tareas de agitación política en el país. La efervescencia social debido a la ola de huelgas desatadas durante el gobierno de Eduardo Frei, contribuyó a que el MIR captara adherentes especialmente entre los

(222) Cfr. Lamour, Catherine, op. cit., p.p. 213 a 215.

(223) Vitale, Luis, op. cit., p. 189.

estudiantes universitarios. La Universidad de Concepción, don de se formaron los más destacados dirigentes miristas, los hermanos Miguel y Edgardo Enríquez, Luciano Cruz y Bautista van Schouwen, se convirtió en un núcleo de agitación permanente. Como relata Lamour, "el 16 de noviembre de 1966, uno de los -- principales líderes del MIR, Luciano Cruz, mantiene una violenta polémica con Robert Kennedy al que los estudiantes de Con--cepción le prohibieron la entrada en su universidad. Este incidente tendrá repercusión internacional!"(224)

En 1967 esta organización de extrema izquierda logró ma--yor arraigo popular pues, aparte de su audiencia en los medios universitarios, adquirió prestigio entre desempleados, habitantes de poblaciones marginales y campesinos pobres gracias a su participación y apoyo a las ocupaciones de terrenos urbanos y rurales que proliferaron durante el gobierno freísta. El año 1969 el MIR decidió recurrir a "la acción directa como el mejor medio de radicalizar la lucha de clases y de hacerla ma--durar y como una manera de permitir el paso ulterior a la lu--cha armada. Se trataba, a la vez, de golpear a la burguesía en su punto más sensible, rompiendo su legalidad, de demostrar que la lucha armada era posible y de alimentar financieramente al partido. Entonces comenzaron las 'expropiaciones bancarias' que llegaron a sucederse al ritmo de una por mes aproximadamente!"(225) Esto ocasionó que, en mayo de ese año, el gobierno

(224) Lamour, op. cit., p. 212.

(225) Ibid, p. 216.

de Frei decretara la persecución del MIR el cual ordenó a sus dirigentes y militantes más conocidos el paso a la clandestinidad. Aún así, en junio de 1970, se calculaba que las acciones miristas tipo comandos "siempre preparadas y ejecutadas con gran cuidado, a fin de correr el menor riesgo posible y evitar la pérdida de vidas humanas, habían permitido al MIR apoderarse de 2.500.000 escudos en menos de un año".(226)

Cuando se formó la Unidad Popular el MIR se negó a incorporarse a ella considerando errónea la estrategia de la transición pacífica hacia el socialismo y argumentando que "sólo un gobierno representativo de los trabajadores de las ciudades y del campo podía realizar una revolución social en Chile".(227) Sin embargo, tres meses antes de las elecciones presidenciales de 1970 decidió suspender los asaltos a los bancos para evitar que la propaganda electoral de la derecha utilizara estas acciones en desprestigio de la izquierda. Después del triunfo de Allende el MIR dio su apoyo crítico al gobierno de la Unidad Popular. Uno de sus dirigentes, Nelson Gutiérrez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en un discurso pronunciado en presencia de Allende, el 30 de mayo de 1971, resumía en una de sus partes la postura de los miristas ante el gobierno de la UP: "El control del gobierno y el uso de una parte del apar-

(226) Ibid, p. 216.

(227) Ibid, p. 204.

to del Estado y la neutralización de otra, generan condiciones favorables para la movilización de las masas y permiten ir cambiando la correlación de fuerzas para el momento del encuentro definitivo entre las fuerzas en pugna!"(228) El Presidente Allende, desde que asumió la primera magistratura de la nación, dio muestras de tolerancia al MIR y reconoció el valor del aparato político - militar que esta organización se había dado desde que decidió pasar a las llamadas acciones directas. Además, cuando el 24 de octubre de 1970 un comando sedicioso de sectores golpistas de las Fuerzas Armadas, en concomitancia con altos mandos del Ejército y Carabineros y de la dirigencia derechista del Partido Demócrata -- Cristiano, asesinó al General René Schneider, los servicios de inteligencia del MIR que habían previsto y denunciado la operación, cumplieron una eficaz labor en identificar a sus autores. Así, Allende, reconociendo el valor del aparato político - militar que esta organización tenía les demostró "su confianza cuando eligió a varios de ellos para formar -- parte de su guardia personal durante los primeros meses de su mandato"(229). Este grupo de defensa al que la derecha bautizó como GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente), como consecuencia de las ásperas críticas que la oposición hizo a los grupos armados de izquierda en junio de 1971, después del asesinato de Pérez Zujovic, Allende lo sustituyó

(228) Labrousse, Alain, op. cit., p. 436 .

(229) Lamour, Catherine, op. cit., p. 208.

"por miembros del Partido Socialista, convertidos en funcionarios de los Servicios Oficiales de Seguridad".(230)

Hasta la etapa que nos preocupa en este capítulo, el MIR había logrado constituir algunos frentes de masas tales como el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), la Junta Nacional de Pobladores Revolucionarios (JPR) y el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR).

Dijimos que transcurrida la primera fase del gobierno, empezaron a manifestarse divergencias respecto al ritmo que debía seguir el cumplimiento del programa de la Unidad Popular y al grado de participación de las masas en la aceleración del proceso de transformaciones iniciado en el país. En efecto, dentro de la Unidad Popular, un sector del Partido Socialista liderado por Carlos Altamirano, sectores de izquierda del MAPU y los sectores juveniles del Partido Radical reunidos en el grupo llamado Juventud Radical Revolucionaria eran coincidentes con la línea altamiranista que se pronunciaba por la profundización del carácter socialista del proceso y por la violencia revolucionaria como vía para realizarlo. Altamirano en aquella época manifestaba:

"El Partido Socialista concibe el proceso revolucionario como una marcha ininterrumpida — sin etapas ni consolidaciones prematuras dentro del actual sistema capitalista — dirigida a -

conquistar la totalidad del poder por los trabajadores para realizar en forma simultánea las tareas democráticas aún pendientes y las nuevas tareas socialistas. En esta forma el proceso asume, desde su inicio, un carácter socialista... Las reformas consideradas como un objetivo en sí, aisladamente, constituyen mero reformismo. La propia nacionalización del cobre, la reforma agraria, la estatización de la banca por importantes que sean, si tuvieran ese exclusivo propósito, no serían medidas revolucionarias. El carácter revolucionario se determina cuando estas reformas están insertas en una estrategia global revolucionaria, que apunta a la sustitución de una clase por otra en el manejo y control de la nueva sociedad... El gobierno de la Unidad Popular tendrá sentido en la medida que deje de apoyarse exclusivamente en la institucionalidad burguesa y contribuya a abrir paso a la nueva institucionalidad!"(231)

Esta postura de las alas más izquierdistas del Partido Socialista, del MAPU y de la Juventud Radical, era sostenida aún con más vehemencia, fuera de la Unidad Popular, por el MIR. Su Secretario General, Miguel Enríquez, en octubre de 1971 expresaba:

(231) Smirnow, Gabriel, op. cit., p.p.76-77.

"El gobierno de la UP ha golpeado los intereses de la clase dominante. Pero se ha vuelto cada vez más débil al no incorporar a las masas al proceso y no golpeando el aparato del Estado y sus instituciones. A pesar de las medidas positivas de este gobierno, de los progresos que la UP ha efectuado, las debilidades, las concesiones y las tentaciones de algunos de estos sectores de erigirse en árbitros de la lucha de clases no dejan a los trabajadores otra posibilidad que retomar una parte de la confianza entregada al gobierno y apoyando las medidas positivas del gobierno y combatiendo sus concesiones, definir ellos mismos una vía que les sea propia"(232)

Por su parte, el Partido Comunista se identificaba con la línea de entendimiento entre los niveles institucional y de masas. Era la posición, además, del otro sector del Partido So--cialista y del propio Allende y la cual dominará durante los tres años del gobierno popular. El Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán, resumía los planteamientos de la postura hegemónica dentro de la UP cuando afirmaba:

"El objetivo de la Unidad Popular es conquistar el poder y hacer la revolución. Para nosotros, marxistas, el contenido del nuevo poder y el carácter de esta -

revolución son determinados ante todo por la realidad. No se puede decidir subjetivamente, obedecer a esquemas artificiales, bajo pena de retardar la marcha del proceso. Este contenido, este carácter, están definidos por el tipo de contradicciones fundamentales propias de nuestra sociedad, por la significación concreta de los cambios revolucionarios a la orden del día, por los intereses comunes del conjunto de las clases comprometidas en la transformación de la sociedad, finalmente en el marco internacional en el cual se inscribe la revolución chilena. He aquí por qué el poder popular que nosotros queremos instaurar, la revolución que necesitamos, son en su esencia y objetivamente antimperialistas y antioligárquicos y desembocan en la perspectiva del socialismo. Es por esto también que ciertas afirmaciones tendientes a dar, inmediatamente, un carácter socialista al conjunto del proceso no nos parecen muy serias ni científicamente rigurosas."(233)

A casi año y medio de gobierno estas discrepancias al interior de la Unidad Popular se habían ido agudizando. Fuera de ella las continuas declaraciones y acciones concretas del MIR

(233) Ibid, p.p. 78-79.

en el campo, poblaciones y, en menor medida en las fábricas, aparecían como desvirtuando el proyecto político inicial de la UP y que Salvador Allende definiera como socialismo a la chilena, con sabor a vino tinto y empanada. Esto dio origen a que, como dice Rodríguez: "valiéndose de esa contradicción entre el programa inicial de la UP y las acciones prácticas de la izquierda revolucionaria en su conjunto, el oficialismo sugería que estos últimos sectores se encontraban fuera de la realidad chilena. Aún más se llegó a popularizar la fórmula de contraataque de referirse a la acción de la izquierda, como de provocadores de la ultra izquierda!"(234)

3.7 Luchas sociales en el periodo.

Hemos reseñado los aspectos medulares de la lucha política de la oposición al gobierno popular en los planos institucional y económico y los puntos centrales de las corrientes de opinión que, dentro y fuera de la Unidad Popular, revelaban la existencia de dos estrategias divergentes en la izquierda chilena en torno al proceso de cambios iniciado en Chile en 1970. Un análisis más exhaustivo de este periodo nos remite a la lucha de clases desarrollada en el país en la fase que nos preocupa. Ignorarla equivaldría a presentar una imagen del proceso de gobierno de la UP centrado exclusivamente en la lucha institucional dentro del aparato del Es-

(234) Rodríguez, Felipe, "Crítica de la Unidad Popular", Editorial Fontamara, Barcelona, 1975, p. 94.

tado y en los partidos políticos, olvidando las contradicciones que dicho proceso generó en el conjunto de la sociedad chilena. Por esa razón en los párrafos siguientes nos referimos a las luchas sociales de clase obrera, los campesinos y de los pobladores en esta etapa.

Lucha social de los trabajadores industriales y mineros. Recordemos que uno de los rasgos esenciales de la política económica del gobierno de Allende era constituir un área de propiedad social dominante como motor del desarrollo y reactivación de la economía y como fase preparatoria de la transición al socialismo. Al mismo tiempo se buscaba elevar el nivel de vida de las masas populares e incorporar a los trabajadores en la administración de las empresas del área social y mixta. Este último objetivo se logró, en gran parte, mediante el acuerdo CUT - Gobierno suscrito en diciembre de 1970.

El Convenio CUT - Gobierno aprobado semanas después que Allende llegó a la presidencia fue un complemento de las propuestas programáticas de la Unidad Popular respecto a la clase obrera. Afirmamos lo anterior porque nos hemos referido a los espectaculares avances en la redistribución del ingreso y en el mejoramiento de los niveles de vida de las clases populares alcanzados durante el gobierno popular.

Ahora bien, el mencionado Convenio perseguía ampliar y asegurar estas ventajas económicas para la clase obrera y, simultáneamente, materializar la participación de los trabajadores en la gestión económica de las empresas estatales y mixta como una forma de iniciar prácticas de democracia económica a nivel de las bases obreras.

En síntesis, el Convenio CUT - Gobierno incluía las disposiciones siguientes:

- "1) la necesidad de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas;
- 2) la representación de los beneficiarios en los directorios de los organismos de seguridad social;
- 3) la reforma de los Libros III y IV del Código del Trabajo que se referían respectivamente a las normas sobre organización sindical (número mínimo de membresía para constituir un sindicato, tipos de sindicatos, posibilidades de organizar federaciones y confederaciones) por un lado, y a las normas respecto al conflicto colectivo (huelgas, negociación colectiva, etc);
- 4) el reconocimiento legal de la CUT y el establecimiento de un sistema de cotizaciones obligatorio equivalente al 0.5 por ciento de los salarios pagados en las empresas, los cuales irían en beneficio de las federaciones y de la CUT;

- 5) un aumento general de salarios en proporción al número de salarios vitales ganados;
- 6) una asignación familiar equivalente para obreros y empleados;
- 7) una asignación de alimentación (especialmente de almuerzo para los empleados de las ciudades que no gozaban de comedores en sus lugares de trabajo);
- 8) un aumento general de las pensiones y jubilaciones en un 100 por ciento;
- 9) medidas para proteger el empleo y reformas a la ley de inamovilidad y
- 10) planes inmediatos para reducir el desempleo!"(235)

Es de interés destacar que, en gran medida, las disposiciones contenidas en este Convenio y que iban en beneficio directo de la clase trabajadora habrían requerido de una tramitación legislativa en el Congreso. Pero Allende, conocedor de la obstrucción parlamentaria que habría encontrado, prefirió obviar este trámite mediante el acuerdo directo con la CUT. Esto fue una prueba de la prioridad que el gobierno de la Unidad Popular confirmó a los derechos obreros. Así trató de eliminar, en parte, las diferencias existentes entre obreros y empleados. De acuerdo a lo establecido en el Cód-

(235) Zapata, Francisco, "Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende", El Colegio de México, México, 1976, p. 48.

go del Trabajo y demás disposiciones reglamentarias en relación a sueldos y salarios, derechos vacacionales y de salud, jubilación y asignación familiar existían diferencias entre ambos. Debido a la correlación de fuerzas desfavorable en el Congreso, Allende estaba impedido de reformar el Código para modificar esta situación por lo cual su política "se orientó a introducir estas reformas en los proyectos de reajuste, que eran presentados cada año, para legislar sobre mejoras en los niveles de sueldos y salarios afectados por la inflación"(236) Así en esos proyectos anuales de reajuste "se igualaban las prestaciones de obreros y empleados sin recurrir a reformas al Código y... éste fue uno de los mecanismos que permitió a la UP superar la oposición parlamentaria a muchas de sus iniciativas"(237)

En lo relativo a la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, el acuerdo CUT - Gobierno de fines de 1970, estableció la necesidad de dictar normas de participación obrera mismas que fueron definidas en julio de 1971. El frecuente recurso de la intervención de empresas privadas para su posterior transferencia al área social o mixta, el constante peligro de la concesión de medidas precautorias del aparato judicial en favor de sus antiguos propietarios y el propósito del gobierno de democratizar la gestión de las empresas involucrando a los obreros, crearon las

(236) Ibid, p. 49 .

(237) Ibid, p. 49 .

condiciones para que dicha participación fuera una realidad.

Efectivamente, a mediados de 1971, se acordó entre el gobierno y la CUT un reglamento denominado "Normas básicas de participación". Según él todas las empresas socializadas -- tendrían un Consejo de Administración como organismo superior encargado de la toma de decisiones en la empresa, integrado por 5 representantes de los trabajadores (3 obreros, 1 trabajador administrativo y un técnico o profesional) y por 5 representantes del gobierno, uno de los cuales presidía el Consejo de Administración. Todos los miembros del Consejo tenían derecho a voz y voto en las sesiones que cada dos semanas efectuaba este organismo de administración. Los representantes de los trabajadores se elegían por un periodo de 2 años en asamblea general de la empresa, pudiendo ser reelectos por una sola vez y podían ser removidos de su cargo por el voto de la mayoría de la asamblea general en cualquier momento.

Como señalan Espinosa y Zimbalist, no obstante que las "Normas básicas de participación" no tenían fuerza de ley, "se aplicaron en forma flexible y desigual en toda el área social de Chile. Para junio de 1972 se había iniciado su aplicación, en forma modificada o completa, en el 76% de las empresas socializadas"(238) Además, como los mismos auto-

(238) Espinosa y Zimbalist, op. cit., p. 74 .

res añaden, aunque no se disponen de cifras para la fase posterior a junio de ese año, hasta esa fecha funcionaban Consejos de Administración "en el 56% de las empresas del área social aunque el grado de funcionamiento variaba considerablemente entre las industrias. En las textiles, operaban Consejos de Administración en 20 de 22 empresas; en la metalurgia operaban en 21 de 37 empresas; en la gran minería, operaban en las 5 empresas existentes; en la agroindustria, en 8 de 14 empresas; en la industrialización y empackado de pescado, en 16 de 17; en la industria de madera, muebles y celulosa en 15 a 20; en la mediana minería en 9 de 42 empresas; en la industria química, operaban en 3 de 7; en materiales para la construcción, en 9 de 14; en electrónica y comunicaciones, 7 de 13; en los transportes, 3 de 13 y en otros servicios, operaban en 5 de 9 empresas"(239)

La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas socializadas durante el gobierno popular, no sólo fue un elemento nuevo que introdujo pautas democráticas en el funcionamiento de la producción en el área social. Tuvo, además, un rol importantísimo en la concretización de la política económica de Vuskovic en el periodo que estudiamos. Vimos que una de las medidas iniciales fue que el Estado adquiriera el control de las empresas motrices de la economía

(239) Ibid, p. 74-75 .

a fin de aprovechar al máximo su capacidad instalada. También dijimos que lo primero se materializó en las expropiaciones y nacionalizaciones y la posterior constitución del área de propiedad social y lo segundo en la llamada batalla de la producción. En este sentido, la participación de los trabajadores jugó un papel esencial en el aumento de la producción reseñado con cifras estadísticas en el punto 3.2.

Por otra parte, en el plano político, la participación de los obreros contribuyó a la defensa y apoyo de las socializaciones decretadas por el gobierno. A través de los órganos creados por las normas de participación en comentario, muchas veces, los trabajadores de la industria se unieron en torno a la defensa del carácter social de la empresa, incluso por encima de su filiación política. Un ejemplo de esto fueron los trabajadores demócrata cristianos de las textiles de Caupolicán - Chiguayante, en la provincia de Concepción, donde se unieron con los obreros partidarios de la Unidad Popular y rechazaron la entrega de la empresa, pese a un dictamen judicial favorable a sus dueños, en junio de 1972.

Creimos necesario aludir a los hechos anteriores porque ellos explican la madurez política y la conciencia de clase de los trabajadores industriales chilenos. Durante esta fase, como en las posteriores, dieron una magnífica muestra de comprensión al programa del gobierno popular. El esquema

combinado que Allende pretendía alcanzar de transformar las relaciones de producción y satisfacer las demandas reivindicativas por las cuales la clase obrera combatió por más de medio siglo, encontró un apoyo generalizado en los obreros. En el transcurso de todo el proceso de gobierno de la UP la lucha social se centró, más bien, en pugnar por acelerar el proceso de transformaciones pero nunca cuestionó al gobierno que sentían los representaba. Como señala Marini: "El movimiento de masas indudablemente tomó como suya la victoria del 4 de septiembre y se valió de las nuevas condiciones de lucha para resolver en su favor los conflictos sociales que le afectaban"(240) Así el número de conflictos sociales promovidos por el conjunto del proletariado en esta fase aumentó extraordinariamente. La nueva correlación de fuerzas permitió un desbordamiento de las luchas sociales proletarias y el número de huelgas subió "de 1819 en 1970 a 2709 en 1971 y alcanzó a 1763 tan sólo en el primer semestre de 1972... Son alzas de un 48% en 1971 y de un 30.1% en la proyección para 1972"(241) Sin embargo hay que precisar para no confundir el significado de esta lucha social obrera con la de gobiernos anteriores. En su mayoría, la oleada de huelgas de 1971 tenía como finalidad presionar al gobierno para que las empresas privadas fueran

(240) Marini, Ruy Mauro, op. cit., p. 165.

(241) Ibid, p. 165

transferidas al área social o mixta y no perseguían reivindicaciones salariales. A manera de ejemplo, pues esta situación era general, citaremos el caso de los obreros de la industria textil quienes, ya a comienzos de 1971, habían logrado prácticamente la intervención de la totalidad del monopolio existente en esa rama y esto lo consiguieron mediante la presión de la huelga y ocupación de las fábricas.

La lucha social y presiones huelguistas en las empresas privadas que acorde con el programa de gobierno de la Unidad Popular seguirían en el área privada, se radicalizó y extendió en forma extraordinaria en este periodo. Así como el acceso a la participación en las empresas del área social fue amplio, en las del sector privado fue restringido, ya que en ellas "se propició sólo la constitución de 'comités de vigilancia' con escaso poder y a cuya formación y estímulo se dedicó en la práctica muy poca atención" (242) En efecto, a comienzos del gobierno popular, se constituyen en las empresas privadas los comités de vigilancia de la producción que, como su nombre lo indica, tenían por objeto vigilar la buena marcha de la producción e impedir los sabotajes de los patrones. Su generación era democrática pues se elegían por votación en asamblea general de cada empresa. Dado a que sus funciones eran demasiado restringidas y por no poder influir en la gestión económica de la empresa, los comités de vigilancia aportaron poco en lo relativo a la batalla de la producción.

(242) de Riz Liliaua, op. cit., p. 131

Pero ello dio origen a que éstos "se transformaran en instrumentos más radicales de acción de los obreros y, en muchos casos, desembocaron en demanda de su incorporación al área social"(243) De esta forma los trabajadores de las empresas privadas crearon al gobierno un problema con la pequeña y mediana burguesía no monopolística. Esta situación, como veremos más adelante, se tornó especialmente crítica después del paro patronal de octubre de 1972.

El programa de gobierno de la Unidad Popular no contemplaba el traspaso de las industrias no monopolísticas o muy pequeñas al área social de la economía. Además Allende para contrarrestar la campaña ideológica de la derecha dirigida a a medrentar a los propietarios de esas empresas, desde el comienzo de su gobierno, fue enfático en declarar que no serían estatizadas. Pero en este aspecto la presión social desbordó los planes gubernamentales. Por otra parte, en la etapa que analizamos, trajo como consecuencia que la burguesía monopolística cuyos intereses habían sido lesionados por las medidas socializadoras, tuviera éxito en la aglutinación de los sectores propietarios. Así fue como a fines de 1971 logró constituir el Frente Nacional del Area Privada (FRENAP) donde "la resistencia de la burguesía monopolística encontró aliados entre los sectores no monopolísticos y la burguesía se unió en defensa de la propiedad privada"(244)

(243) Ibid, p. 131.

(244) Ibid, p. 132.

La actitud del proletariado descrita no varió en lo esencial en 1972, no obstante que el acuerdo entre el gobierno y los trabajadores, representados por la CUT, previó un tope de aumentos salariales del 22% en una coyuntura en que el desabastecimiento empezaba a ser un problema y que el exceso de liquidez había generado un alto porcentaje de inflación. Además, que la negociación de ese acuerdo, por lo delicado de la situación, se realizó a alto nivel sin consultar a la base, tal como lo señalaba Rolando Calderón, Secretario General de la CUT y militante socialista, en una entrevista concedida a la revista "Punto Final": "...Debemos ser más honestos que nunca y decir que se han cometido algunos errores políticos. Uno de ellos es que el porcentaje de reajuste no se discutió como era necesario hacerlo con los trabajadores. Se discutió con el Consejo Directivo Nacional de la CUT, con las directivas de las asociaciones y federaciones nacionales y por las organizaciones intermedias de la CUT, pero no por la gran masa de obreros y empleados. Esé fue nuestro pecado!"(245)

Las consecuencias fueron una intensificación de la lucha sindical, de las huelgas y ocupaciones de empresas exigiendo su estatización, pero no el estallido de conflictos por aumentos salariales. El incremento del índice de sindicalización en esta fase constituyó el efecto más demostrativo del grado de conciencia y politización de la clase obrera. Así, valiéndose de las nuevas disposiciones jurídicas contenidas en

(245) Revista "Punto Final" de 11 de abril de 1972, p. 29.

La actitud del proletariado descrita no varió en lo esencial en 1972, no obstante que el acuerdo entre el gobierno y los trabajadores, representados por la CUT, previó un tope de aumentos salariales del 22% en una coyuntura en que el desabastecimiento empezaba a ser un problema y que el exceso de liquidez había generado un alto porcentaje de inflación. Además, que la negociación de ese acuerdo, por lo delicado de la situación, se realizó a alto nivel sin consultar a la base, tal como lo señalaba Rolando Calderón, Secretario General de la CUT y militante socialista, en una entrevista concedida a la revista "Punto Final": "...Debemos ser más honestos que nunca y decir que se han cometido algunos errores políticos. Uno de ellos es que el porcentaje de reajuste no se discutió como era necesario hacerlo con los trabajadores. Se discutió con el Consejo Directivo Nacional de la CUT, con las directivas de las asociaciones y federaciones nacionales y por las organizaciones intermedias de la CUT, pero no por la gran masa de obreros y empleados. Esé fue nuestro pecado".(245)

Las consecuencias fueron una intensificación de la lucha sindical, de las huelgas y ocupaciones de empresas exigiendo su estatización, pero no el estallido de conflictos por aumentos salariales. El incremento del índice de sindicalización en esta fase constituyó el efecto más demostrativo del grado de conciencia y politización de la clase obrera. Así, valiéndose de las nuevas disposiciones jurídicas contenidas en

(245) Revista "Punto Final" de 11 de abril de 1972, p. 29.

en el Convenio CUT - Gobierno que agilizaron el reconocimiento de organizaciones sindicales, "el aumento de la tasa de sin dicalización, que había sido de 3,4% durante 1971, en el primer semestre de 1972 fue de 18,8%"(246)

Todas las circunstancias expuestas corroboran nuestra apreciación de que la lucha social desarrollada por el conjunto del proletariado en esta etapa del gobierno fue ejemplar y de extraordinaria comprensión del proceso que estaba viviendo. A demás ¿cómo reprochar el desbordamiento relatado cuando las ganancias de los capitalistas aumentaban, la especulación en el mercado negro se acrecentaba y se pagaban cuantiosas indemnizaciones a los dueños de las empresas expropiadas?

Una excepción al grado de conciencia política demostrado por el proletariado chileno fue la actitud adoptada por los mineros del cobre, mayoritariamente afiliados al Partido Demócrata Cristiano, quienes, como afirma Lamour "pagados en dólares, y muy bien, representaban innegablemente la aristocracia obrera de Chile"(247) Cuando a mediados de 1971 el gobierno adoptó la medida de no pagar más sueldos en dólares sino convertirlos en escudos, "al tipo de convertibilidad de 14 escudos por un dólar, en un momento en que el dólar se negociaba en el mercado negro entre 50 y 70 escudos"(248), los trabajadores del cobre manifestaron su descontento desencadenando varios movimientos huelguísticos. Así en la mina El Salvador, "interrum

(246) Diario "El Mercurio" de 17 de junio de 1972

(247) Lamour, Catherine, op. cit., p. 119.

(248) Ibid, p. 120 .

pieron el trabajo durante once días en el mes de agosto de -- 1971, reclamando un aumento salarial de más del 40%, sin tomar en cuenta que en realidad ganaban ya tres veces más que los mineros del carbón. Por otra parte, los llamamientos a la razón repetidos por Allende, utilizados también por Fidel Castro durante su visita en noviembre de 1971, no han hecho variar a los mineros de Chuquicamata de su postura de exigir un aumento salarial del 50%".(249)

Finalmente, otra prueba de la adhesión de los trabajadores al gobierno fueron los resultados de la elección para renovar el Consejo Directivo Nacional de la CUT, celebradas en mayo de 1972, que demostraron un predominio de los partidos del total de la izquierda en casi un 70% y del 56% contando sólo a socialistas y comunistas. El cuadro siguiente así lo demuestra.

CUADRO No. 20

Resultados de la elección del Consejo Directivo Nacional de la CUT de mayo de 1972*.

Tendencia política	%	Número de dirigentes elegidos.
1. Comunista	30.89	18
2. Socialista	26.44	16
3. Democracia Cristiana	26.33	16
4. MAPU	4.63	2
5. Radical	3.91	2
6. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.	1.81	1
7. Unión Socialista Popular	0.96	-
8. Izquierda Radical	0.63	-
9. Comunista Revolucionario (maofista)	0.59	-
10. Izquierda Cristiana	0.57	-
11. Social Demócratas	0.28	-
12. Independientes	0.28	-
13. Anarquistas	0.12	-
14. Blancos y nulos	2.49	-

*Fuente: Zapata, Francisco, op. cit, p. 58

Lucha social campesina. Las luchas sociales campesinas revis-
 tieron características diferentes a las de los obreros indus-
 triales y mineros. Los motivos de esta diferencia fueron do-
 bles. Por una parte, las contradicciones entre los diversos
 grupos de campesinos explotados en el campo eran muy fuertes
 y, como lo señalamos en el punto 3.2, la Ley de Reforma Agra-
 ria con base a la cual se realizaron las expropiaciones de
 los latifundios no sólo no resolvía sino que agudizaba esas
 contradicciones. Y por otra, las formas de organización cam-
 pesina propiciadas por el gobierno no solucionaron, a nivel
 político, el problema anterior.

Vimos que el límite de la inexpropiabilidad de la tierra
 eran 80 hectáreas básicas y que dada la calidad de los sue-
 los esta extensión variaba. Así, en algunas regiones del
 país, el latifundio expropiable se redujo a una proporción mí-
 nima de la tierra agrícola: "22% en Cautín; 37% en Valdivia;
 30% en Osorno; 30.5% en Llanquihue".(250) No es de extrañar,
 entonces, que en estas provincias del sur del país la lucha
 social campesina recrudeciera al máximo. El ataque al límite
 de las 80 hectáreas básicas que figuraba en el programa de go-
 bierno de la Unidad Popular, en particular en esa zona austral,
 fue la tónica general de los campesinos en esta fase. Ade-
 más, recordemos que también debido a las limitaciones de la Ley
 de Reforma Agraria se creaban tensiones entre los campesinos

(250) Revista "Punto Final" de 15 de mayo de 1972, p. 17.

del sector reformado y los trabajadores sin tierra y los propietarios grandes, medianos o pequeños. Todo esto influyó en la proliferación de enfrentamientos violentos en el campo y en el incremento de las tomas u ocupaciones de tierras. A sí, comparativamente: "En 1967 el número de tomas ascendió a 9; en 1968 llegaron a 20; en 1969 fueron 148; en 1970 llegaron a 456 y en 1971 habían llegado a la cifra de 1278"(251) Otro indicador que refleja el grado de agitación política reinante en el campo fue el aumento del número de hueigas en esta etapa pues "en 1967 éstas alcanzaron a 693; en 1968 fueron 648; en 1969 saltaron a 1401 y en 1971 alcanzaron 1758". (252)

Al mismo tiempo, al igual que en el caso del proletariado, la tasa de sindicalización campesina creció espectacularmente. Pero a diferencia de lo ocurrido en los sectores obreros que, en su mayoría eran militantes o simpatizantes, de los partidos de izquierda, la orientación sindical campesina, inicialmente bajo hegemonía demócratacristiana, pasó a afiliarse a la Unidad Popular como lo demuestra el Cuadro No. 21.

(251) de Riz, Lilitana, op. cit., p. 144.

(252) Ibid, p. 144.

Cuadro No. 21

Porcentaje de afiliados a cada Confederación*

C O N F E D E R A C I O N E S

Año	Provincias Agrarias Unidas (1)	Libertad (2)	Triunfo Campesino (3)	Unión Obrero Campesina (4)	Ranquil (5)
1970	1.15%	20,88%	46,26%	--	31,71%
1971	0.54%	15.15%	22,09%	16,13%	46,09%

(1) Bajo influencia del Partido Nacional

(2) Bajo influencia de la Democracia Cristiana

(3) Bajo influencia de la Democracia Cristiana

(4) Bajo dirección del MAPU

(5) Bajo dirección de los partidos Comunista y Socialista.

Este incremento de la organización campesina y de la radicalización de los trabajadores del campo estaba en directa relación con el aumento del número de huelgas y las tomas de tierras. En estas luchas los campesinos pasaban progresivamente de las reivindicaciones salariales, predominantes hasta 1970, a la exigencia de la tierra y a las expropiaciones de haciendas aprovechando la disminución de la represión durante el

*Fuente: Revista "Punto Final" de 15 de mayo de 1972, p. 19.

gobierno popular. Además, en algunos casos, los campesinos pedían la intervención del predio por mala explotación siguiendo una táctica paralela a la de la industria. Un ejemplo de esto fue "la ocupación del mayor complejo maderero del país, en el sector cordillerano de Panguipulli, en la provincia de Valdivia, por iniciativa de militantes del MIR. El complejo fue intervenido, expropiado y administrado por los propios obreros madereros, según un esquema de participación elaborado por ellos mismos y que les otorgaba muchas más atribuciones que las normas básicas en el área social industrial".(253)

Pero frente a tal movimiento también la gran burguesía agraria se organizó y atacó. Sus diferentes organizaciones se coordinaban, a nivel nacional, en la Confederación de Empleadores Agrícolas. El 12 de junio de 1971, despidieron obreros agrícolas masivamente, destruyeron siembras, formaron guardias blancas y organizaron verdaderas emboscadas y operaciones militares con abundante armamento. Fue así como, para no relatar más que un caso, la ocupación del rancho Chesque, en Cautín, el 22 de octubre de 1971, -- por un grupo de trabajadores mapuches "dio pretexto a los grandes propietarios no expropiados de la zona, a descargar sus fusiles contra los campesinos, matando a Moisés Huentelaf e hiriendo a varios. Por supuesto que la justicia de-

jó en libertad a los propietarios y encarceló a los ocupantes sobrevivientes"(254)

Esta agresividad de la burguesía agraria fue reforzada por el éxito obtenido al agrupar en torno a ella a la mayoría de los medianos y pequeños propietarios, alarmados ante el desbordamiento de los cauces de la Reforma Agraria y frente a algunas ocupaciones indiscriminadas de predios que efectuaban campesinos en su imposibilidad de encontrar una salida inmediata a su situación cada vez más desesperada.

Por otra parte, apenas Allende asumió el gobierno en diciembre de 1970, decretó la creación de los consejos campesinos a nivel local, regional y nacional. Estos consejos estaban integrados exclusivamente por campesinos pertenecientes "a organizaciones que tuvieran representación en el nivel correspondiente (sindicatos, federaciones de asentamientos, cooperativas, etc)" (255) Pero la limitación mencionada tuvo dos efectos negativos: "por un lado, excluía a los dos tercios del campesinado que no pertenecía a ninguna organización; -- por otro, dejaba sentir el peso político de los campesinos agremiados por la Democracia Cristiana"(256)

Ante los problemas ocasionados por esta modalidad organizativa, sectores campesinos pugnaron por cambiar la orienta--

(254) Ibid, p. 23.

(255) de Riz, Lilitana, op. cit., p. 142 .

(256) Ibid, p. 142 .

ción que la Unidad Popular había dado a los consejos. Así, en la provincia de Cautín, "los campesinos mapuches actuaron como detonante de una movilización que incluyó a los afuerinos no mapuches y que fue apoyada por un sector del P S y por el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización asociada al MIR. Los campesinos pidieron la creación de consejos de base. En estos consejos debían estar representados los campesinos no organizados. En Cautín se desarrolló un fuerte movimiento en enero de 1971 — el 'verano caliente' como se le llamó — que desembocó en la formación de un consejo comunal (el de Lautaro) elegido por la base. Este procedimiento se extendió a otras comunas y culminó con la realización de un Congreso de Consejos Comunales en Temuco en marzo de ese año".(257) Lo ocurrido en Cautín motivó que el gobierno aprobara esta modalidad en los consejos campesinos.

La situación explosiva existente en el campo antes descrita y, sobre todo, el continuo enfrentamiento entre la burguesía agraria y los campesinos sin tierras crearon un clima favorable para el surgimiento de bandas armadas derechistas. Grupos de choque del Partido Nacional encontraron, entonces, una base social entre los propietarios rurales acostumbrados a someter por la violencia cualquier insubordinación del campesinado. Esto dio origen a que en las zonas rurales, donde

(257) Ibid, p. 143.

el aparato represivo escapaba más ampliamente a la influencia del gobierno popular, imperara una justicia clasista sin ambages y un aparato judicial formado en la represión de las masas rurales.

Por otro lado, la incapacidad de la Unidad Popular para evitar la agudeza de estos enfrentamientos y para idear una estrategia que satisficiera económicamente a los sectores de campesinos más pobres y explotados, favoreció que el MIR lograra una gran influencia en esos sectores especialmente en la región sur del país. Las tesis miristas sobre la necesidad de acelerar el proceso de reforma agraria, dar importancia a los aspectos militares de la lucha de clases y profundizar la democracia en los Consejos Comunales Campesinos encontraron amplia acogida entre los trabajadores pobres del campo. Así el programa del MIR para el agro contribuyó a acentuar la movilización campesina y a crear fricciones dentro de la izquierda. debido al desbordamiento del programa que implicaba la intensa lucha social desatada en el campo. Dicho programa propone:

- "1) Expropiar rápida y masivamente todas las tierras de la burguesía agraria;
- 2) Rebajar la cabida de 80 hectáreas básicas a 40 hectáreas básicas;

3) Terminar con el derecho a reserva, expropiar los animales y las herramientas. Buscar condiciones favorables para no pagar indemnización por la expropiación de la tierra;

4) Establecer las formas de propiedad más avanzadas que permitan los niveles de conciencia alcanzados por los obreros agrícolas y los campesinos pobres. Usar formas de propiedad estatal para los obreros agrícolas y formas de propiedad cooperativa para los campesinos pobres u otras más avanzadas si éstos lo plantean;

5) Otorgar más atribuciones a los Consejos Comunales Campesinos para que estos problemas sean resueltos a través de estos Consejos por los propios trabajadores".(258)

Obviamente estos planteamientos y la audiencia que la extrema izquierda ganaba en el campo deterioró las relaciones entre el MIR y el gobierno. Miguel Enríquez, en una manifestación campesina organizada en Temuco, capital de la provincia de Cautín, a fines de 1971, respondía a las críticas gubernamentales justificando la posición de su partido en los términos siguientes: "No somos nosotros los que hemos inventado la lucha de clases en el campo... La política consistente en ha-

cer concesiones y sacrificar a las capas populares en aras de la legalidad, no refuerza en nada a la Unidad Popular. Lo que debemos ganar no es tiempo, sino fuerzas!"(259)

Lucha social de los pobladores. El término poblador se usa en Chile para designar a los habitantes de las poblaciones marginales, conocidas como callampas y cuyas homólogas son las ciudades perdidas de México, las favelas de Brasil o los cantegriles de Uruguay. Al igual que en estos países, las callampas chilenas existen en las ciudades grandes, especialmente, en la capital. Se originaron como consecuencia de la migración campo - ciudad y de la concentración industrial en las urbes que, en el fondo, es el reflejo de un fenómeno más profundo: el subdesarrollo latinoamericano. El hacinamiento y la promiscuidad, la carencia de los más elementales servicios como agua, luz, sanitarios, etc., el analfabetismo, el desempleo permanente o el trabajo eventual dada la escasa o nula calificación laboral son parte de la condición de los pobladores chilenos que, en su mayoría, decepcionados por las promesas incumplidas del gobierno de Frei, respaldaban a la Unidad Popular.

En el capítulo anterior mencionamos que durante la administración demócrata las tomas de terrenos urbanos se agudizaron. Por otra parte, la movilización urbana desata

(259) Lamour, Catherine, op. cit., p. 137.

da durante la campaña electoral de la UP "instaló en breves meses, sólo en Santiago, casi 60.000 familias en campamentos que eran focos de agitación reivindicativa en torno al problema"(260) De esta manera, Allende heredó un conflicto habitacional que databa de mediados de este siglo pero que en los últimos años se había profundizado.

El programa de gobierno prometía la solución del problema habitacional popular y, para ello, la construcción de --- 100.000 viviendas por año. Pero pronto pudo evaluarse que lo ofrecido había sido imprudente. En efecto, si bien el gobierno anuló desde que se instaló en La Moneda las cláusulas de pago previo de un número elevado de cuotas para la asignación de viviendas y dispuso inversiones masivas en este rubro, era necesario que el aparato de producción con sus características técnicas, económicas y políticas estuviera en condiciones de responder a las exigencias. Y no lo estaba.

Por un lado, hubo que enfrentar primero al problema en su base, la producción de materiales de construcción. La rápida intervención de las fábricas "Cemento El Melón" y "Polpaico", y de varias empresas de elementos prefabricados y metálicos permitió avanzar en este terreno. Además la estructura interna del Ministerio de la Vivienda legada del gobierno de Frei y planeada bajo las instrucciones directas de

(260) Bedrak, Moisés, "La estrategia de desarrollo espacial en Chile (1970-1973)", Ediciones Siap-Planteos, Buenos Aires, 1974, p. 52 .

los empresarios de la construcción de quienes Eduardo Hamilton era abogado, dificultaba cualquier tipo de intervención mayor. Pero el obstáculo fundamental que debió enfrentar el gobierno de la UP fue la Cámara Chilena de la Construcción que, desde el acceso de Allende a la presidencia, "se opuso al Programa Habitacional de Emergencia 1970-71 que estipulaba un trato favorable para las empresas pequeñas de construcción, su eventual ejecución directa de obras para el Estado y la formación de brigadas de trabajadores de la construcción que absorbieran la cesantía en las poblaciones y fueran responsables de sus propias viviendas. Durante los siete primeros meses del gobierno popular las empresas pertenecientes a esa organización no construyeron una sola vivienda".(261) La situación así creada no tenía salida, puesto que el gobierno no podía utilizar más del 20% del presupuesto del Ministerio de Vivienda para la ejecución directa de obras sino en virtud de una ley especial, que la mayoría opositora en el Parlamento no le aprobó.

A fin de resolver la premura del problema, el gobierno "recurrió a la denominada 'Operación Invierno' llevando a cabo un mínimo de equipamiento urbano en las poblaciones mediante la entrega de miles de 'mediaguas' consistentes en casas provisionales de madera, divididas en dos cuartos por un ta-

(261) Ibid, p. 63 .

bique con piso de madera y cemento"(262) Al mismo tiempo, gracias al financiamiento estatal se consiguieron algunos avances: "en 1971 se inició la construcción de 73.000 viviendas y casi se terminaron 43.000 durante ese año"(263)

La respuesta del movimiento de pobladores ante esta carencia fue diferente según se tratara de poblaciones de Santiago o de provincia. En la capital, desde que Allende llegó a la presidencia, cesaron por completo las tomas de terrenos y en provincias se produjeron tomas dirigidas por la propia Unidad Popular con el objeto de frenar la emigración a Santiago. Pero -- cuando a mediados de 1971 el gobierno empezó a entregar las -- primeras casas, se iniciaron los primeros conflictos entre los pobladores y la burocracia del Ministerio de la Vivienda lo cual motivó nuevas invasiones de terrenos. Además, los habitantes de las callampas de la capital, en octubre de ese año, organizaron una gigantesca manifestación pública que fue reprimida por carabineros. Al año siguiente, la Democracia Cristiana había conseguido incitar a algunos pobladores a nuevas tomas de terrenos sumándose a esto los Partidos Socialista y el MIR. De esta forma, en el primer semestre de 1972, tanto en la capital como en provincia, sobre todo en Concepción, el problema de la vivienda popular se había agravado.

(262) Ibid, p. 65.

(263) Ibid, p. 67.

3.8 El gobierno popular y las Fuerzas Armadas.

Desde la elección de Salvador Allende como Presidente de la República se especulaba en el país con la inminencia de un golpe militar. La experiencia histórica verificó tal afirmación. Sin embargo en esta fase del gobierno el golpe de Estado o un régimen de excepción de la burguesía que anulara las reglas institucionales que ella misma había establecido, se encontraban aún en germen. Es decir, no podríamos afirmar que en esta etapa toto el aparato armado chileno estuviera dispuesto a arriesgarse a derribar al gobierno por la acción de las armas. Cuando en septiembre de 1973 esta situación se produjo fue el resultado de un proceso en que se combinaron diversos factores, internos y externos, de cuya relación dependió que ocurriera entonces el golpe de Estado y no en la fase que analizamos.

Una de las circunstancias internas fue la actitud asumida - por sectores de las Fuerzas Armadas imbuidos de la ideología constitucionalista de respeto a las decisiones que se adoptaban de acuerdo a la Constitución y la ley. Para esos sectores las actividades políticas eran patrimonio de los civiles y la misión de las instituciones castrenses consistía en la defensa de la nación y la protección del orden público. Otros factores internos que influyeron en el proceso aludido fueron: la actitud del gobierno, en particular del Presidente Allende de evitar toda confronta--

ción con las Fuerzas Armadas; el conflicto entre las instituciones político-representativas, especialmente del Parlamento con el Ejecutivo y el peligro de desbordamiento de las masas en el transcurso del proceso de gobierno de la Unidad Popular. En el plano externo, el factor determinante lo constituyó la actitud adoptada por el gobierno de Estados Unidos ante las transformaciones sociales que se estaban desarrollando en Chile. En este acápite de nuestro trabajo nos referimos a los elementos señalados, deteniéndonos en aquellos cuya presencia fue más nítida en este periodo.

El primer proyecto organizado de golpe de Estado se gestó el mismo momento de conocerse los resultados electorales en septiembre de 1970, teniendo como objetivo crear un clima tal que impidiese al Congreso ratificar la elección de Allende. Alentado por las grandes empresas imperialistas, la International Telegraph Telephone (ITT) y Anaconda en particular, y por la oligarquía chilena, se apoyó en tres planos sucesivos y articulados. Uno de ellos fue un núcleo activista semimprovisado, dirigido por el ex-General Víaux que, como vimos en el capítulo 2.3, en octubre de 1969 dirigió el acuartelamiento de oficiales y soldados en el regimiento Tacna. Los otros fueron la aquiescencia de altos mandos militares y dirigentes políticos, entre ellos, el jefe de la Guarnición de -

de Santiago, el Almirante en jefe de la Armada y el Comandante en jefe de Carabineros y la permisividad de personajes del gobierno demócrata cristiano, incluido el propio Frei, quienes en conocimiento del complot nada hicieron para desmantelarlo.

Las características mismas del intento de golpe que le costó la vida al Comandante en jefe del Ejército General René Schneider, mostró su carácter de operación táctica de presión al Congreso el cual, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, debía elegir al Presidente para el periodo 1970-1976 entre los postulantes que habían obtenido las dos primeras mayorías de votos: Allende y Alessandri. En Chile, en esa época, se habló mucho del fracaso del golpe de Estado debido a su mala ejecución. El punto clave de este operativo consistió en la tentativa de secuestro del General Schneider, quien se oponía a toda intentona sediciosa. Los raptores iban a culpar al MIR y crear un ambiente de guerra civil en el país justo en las fechas en que debía votar el Congreso la ratificación de Allende. Se trataba, pues, de una operación más táctica que estratégica.

La torpeza de los secuestradores que los llevó a asesinar al General al no poder raptarlo, y la eficaz labor del servicio de inteligencia del MIR que había detectado la operación y pudo identificar a sus autores, descartó toda posibilidad

dad de que el Ejército se uniera a los asesinos de su General en jefe. Pero ese hecho, esa torpeza, no fue puro accidente, sino que era fruto del carácter subordinado del operativo que no formaba parte de una estrategia golpista de todas las Fuerzas Armadas. En efecto, sólo en tal interpretación puede entenderse que el secuestro, la parte clave de todo el proyecto, fuera entregada a una banda de aficionados recién reclutados y sin la mínima eficiencia militar. Además, fracasado este operativo, los militares implicados trataron de no aparecer mezclados en él.

Fue así como en esta fase del gobierno de la Unidad Popular, las Fuerzas Armadas llevaron a la práctica lo establecido en la Constitución Política en su artículo 22 el cual disponía que los institutos castrenses eran instituciones esencialmente profesionales, obedientes, jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes. Comprueba esta afirmación el hecho de que, en este periodo, las Fuerzas Armadas respetaron las atribuciones constitucionales del Presidente Allende que ejercía el Poder Ejecutivo de la nación. Sin embargo, es necesario reconocer también que "esto se debió a la relativa debilidad en que quedaron los sectores militares reaccionarios después del abortado intento golpista de octubre de 1970, que pretendió impedir precisamente la investidura de Salvador Allende como Presidente de la República"(264)

(264) Smirnow, Gabriel, op. cit., p.p. 196-197.

En los primeros capítulos vimos que los institutos armados chilenos no fueron nunca simple espectadores de las luchas sociales que se libraban en el país. Señalamos varias de las ocasiones en que salieron de sus cuarteles para intervenir directamente en política como ocurrió en el efervescente periodo comprendido entre 1924 a 1932; o para participar, por órdenes gubernamentales, en la represión de las luchas populares como aconteció en las huelgas mineras de principios de siglo, en la masacre de San Gregorio, La Coruña, Santa María de Iquique, siendo la última en 1969 en la represión de los pobladores de Puerto Montt bajo el gobierno de Frei y de acuerdo a -- instrucciones de Pérez Zujovic. Tampoco las Fuerzas Armadas eran una simple adición de los distintos componentes sociales de la sociedad chilena. Así como la tropa-- cuya posibilidad de influencia al interior de aquéllas era mínimo dada la gran jerarquización y concentración del mando en la alta oficialidad-- provenía de las clases populares o media baja, los oficiales de rango pertenecían predominantemente a las capas medias y, en menor medida, a la burguesía. Por lo mismo sus referentes ideológicos correspondían a estas diferentes extracciones de clase con el agregado de que en el caso de los altos mandos, desde mediados del presente siglo, recibían formación ideológico-política en institutos armados norteamericanos como vimos en capítulos preliminares.

Estos hechos explican que los cuerpos armados en la etapa previa a la llegada de Allende a la presidencia se dividieron en dos fracciones: una constitucionalista y otra denominada institucionalista que, a nuestro juicio, más bien correspondería al apelativo de golpista. La fracción constitucionalista "representada primero por el General Schneider y, después por el General Prats, era un sector de carácter reformista que esperaba la realización moderada de una política de transformaciones sin poner en peligro la paz social y la seguridad nacional".(265) El grupo institucionalista estaba integrado por sectores castrenses que "respondían a una concepción más definidamente reaccionaria; desconfiaban profundamente de las ideologías, tácticas y estrategias gobernantes, observaban con particular recelo la participación del Partido Comunista en el gobierno y entendían su dependencia de las instituciones del Estado no en la sujeción al Poder Ejecutivo sino en el mantenimiento de las estructuras económicas y sociales".(266) Como afirmamos anteriormente, en esta etapa del gobierno de la Unidad Popular, la fracción reaccionaria de los institutos militares se debilitó a raíz del asesinato del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, General Schneider. Además contribuyó a esta neutralización de los grupos golpistas la designación en ese cargo del General Prats por decisión de Frei en consulta con el entonces Presi-

(265) Ibid, p. 197.

(266) Ibid, p. 198.

dente electo, Salvador Allende.

Por otra parte, la actitud de Allende una vez en el gobierno también fue un factor importante para lograr la sujeción de los institutos castrenses a las normas constitucionales. La Unidad Popular en su conjunto y más propiamente el sector hegemónico dentro de ella, el Partido Comunista y el sector menos izquierdizante del Partido Socialista y el mismo Allende, tuvieron especial cuidado en evitar todo conflicto con los cuerpos armados que pudiera contribuir a que éstos se volvieran en su contra. Esta circunstancia obedecía a la forma en que la UP había llegado al gobierno y a la estrategia política postulada en su programa: la vía chilena al socialismo o transición al socialismo en democracia. Hemos reiterado en varias partes de nuestra tesis, que el bloque político que permitió la llegada de Allende a la presidencia del país buscaba conquistar la dirección del Estado sin previa guerra civil o enfrentamiento armado. Como sostiene Garcés, para ello se "requería, en primer lugar, de una forma de gobierno que no excluyera el acceso al mismo a las Fuerzas Armadas. En caso contrario, la crisis y quiebra del gobierno se interpondría con todas las consecuencias que de ello pueden derivarse".(267) Pero además, detrás de ese frente partidario que era la UP estaba un poderoso movimiento popular que perseguía conquistas sociales que, en el transcurso del proceso de

(267) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena" p. 137.

gobierno , se desbordaron y fueron más allá del programa básico con que Allende llegó a la primera magistratura de la nación. A este desfase ayudaron algunos sectores pertenecientes a la propia Unidad Popular : los grupos altamiramistas del Partido Socialista y el MAPU y, fuera de la UP, el MIR quienes siempre pugnaron por acelerar el proceso de cambios: extender más el área de propiedad social en lo económico—y en gran medida lo consiguieron. como señalamos en su momento— o profundizar y radicalar la participación de las masas en el campo, poblaciones, industrias y en la sociedad en general. Aún cuando en este primer periodo del gobierno. las presiones de esos sectores de la izquierda de la UP y de la extrema izquierda del MIR no tuvieron los ribetes álgidos de la etapa siguiente, como veremos en el capítulo posterior, sí contribuyeron a acentuar las divisiones entre constitucionalistas y golpistas dentro de las Fuerzas Armadas. Por estas razones los esfuerzos desplegados por Allende en esta etapa de su gobierno fueron hábiles y reveladores de su genio político y pudo arbitrar así este conflicto, todavía en germen, pero que no tardaría en emerger.

Si a lo anterior añadimos la escalada sediciosa que la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la Democracia Radi--cal unidas empezaban a desatar en el Parlamento, en las fábricas, en la calle, en sus medios de comunicación social y en la sociedad en general, lo cual orilló al movimiento popular a --

adecuar sus tácticas para defender las conquistas logradas y avanzar en la dirección de dirigir los centros de poder político, no es de extrañar que el conflicto aflorara en la fase siguiente.

La política de la Unidad Popular, y en especial de Allende, hacia los militares reposó en una táctica institucional que combinó los factores económicos y políticos de tal modo que las -- Fuerzas Armadas no pudieran interponerse en el proceso de transformaciones estructurales que el gobierno realizaba lo que, a la vez, implicaba evitar el desmoronamiento del aparato estatal existente mientras la clase obrera no hubiera acumulado fuerzas socioeconómicas suficientes para reemplazarlo por otro. En este sentido concordamos plenamente con lo sostenido por Garcés quien afirma: "En la medida que estas circunstancias estuvieron reunidas en 1970, 1971 y 1972, los aparatos coercitivos del sistema capitalista, en especial el militar, no pudieron ser activados por la burguesía y Estados Unidos contra el gobierno y el bloque social que lo sustentaba".(268)

De esta manera, la política de Allende en relación a las Fuerzas Armadas fue ideada y concretada procurando mantener el orden interno de acuerdo con la correlación de fuerzas internas y externas. El Presidente y su equipo gubernamental estaban concientes que la burguesía nacional y Estados Unidos que--

rían provocar una intervención de los cuerpos armados para interrumpir el proceso de cambios llevado a cabo por la Unidad Popular. En la primera fase del gobierno y parte de la segunda dicha política tuvo éxito. De ahí que el autor citado sostenga que: "Uno de los aportes más trascendentes de la experiencia chilena ha sido probar las condiciones de viabilidad de la táctica político-institucional. Durante todo el periodo de tiempo en que estuvieron reunidos los fundamentos sobre los que descansa esta última, el progreso del proceso de reemplazo de la estructura de dominación burguesa por la obrero-popular no pudo ser detenido. En términos globales, es la fase en que, entre septiembre de 1970 y mediados de 1972, tiene lugar la conquista del poder público por una clase que no lo había detentado nunca antes con el objeto de imponer al conjunto de la colectividad un nuevo orden socioeconómico y un nuevo código de valores. En estos dos años se encuentran reunidos los factores que hacían posible el nacimiento y desarrollo de esta vía"(269)

La política de Allende hacia las Fuerzas Armadas que, como dijimos se apoyaba en una táctica institucional, se demostró en el terreno práctico en cuatro ocasiones críticas de esta etapa. Algunas de ellas las analizamos en puntos anteriores. Tal es el caso de los sucesos de mediados de junio de 1971 en que, a raíz del asesinato de Pérez Zujovic por miembros del

grupúsculo de ultraizquierda, la VOP, el gobierno no sólo encargó el resguardo del orden público a las Fuerzas Armadas cuando decretó el estado de emergencia en la provincia de Santiago sino que, además, encargó a Carabineros, Ejército y Aviación la investigación misma del crimen. Ese mismo año como consecuencia de la "marcha de las cacerolas vacías" se desataron violentos desórdenes en la capital que hicieron temer un enfrentamiento mayor entre los partidarios de la Unidad Popular y los de la oposición. En esa ocasión, Allende procedió con idéntico sentido político. Prohibió la marcha hacia el centro de mujeres de los barrios populares como se lo solicitara la senadora María Elena Carrera, militante socialista igual que el Presidente y, también, decretó el estado de emergencia en Santiago en diciembre de 1971.

Nos resta mencionar otro ejemplo demostrativo de la atinada política de la Unidad Popular hacia los militares. Lo ocurrido en el caso de la acusación constitucional contra el Ministro del Interior, José Tohá. El 6 de enero de 1972 la Cámara de Diputados votó la acusación y por "81 votos contra 59 fue aceptada"(270) La indignación se extendió entre los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular que, en Santiago, se dirigieron al palacio de La Moneda bajo la consigna "armas quiere el pueblo"(271) Ese día Allende desde los balco-

(270) Ibid, p. 181.

(271) Ibid, p. 181.

nes de La Moneda les respondió en términos afirmativos, pero dentro de su propia línea táctica:

"¡Qué fácil es gritar hay que armar al pueblo!
¡Qué me costaría a mí decirlo si acaso me dejara arrastrar! Pero, compañeros, mediten la historia, vean los ejemplos, piensen que las revoluciones no se hacen en función de un verbalismo que no tenga como arraigo la fuerza consiente, la voluntad disciplinada... ¡Qué vale más: gritar algo que no tiene asidero, lanzar una consigna que no se puede cumplir, o hacer que sea ministro otra vez, en el gabinete de un gobierno del pueblo, el ministro a quien la Cámara — a nuestro juicio sin base jurídica — ha suspendido de sus funciones de Ministro del Interior? Yo creo que no hay nadie en Chile — que no esté afiebrado — que no entienda lo que eso significa y la proyección que tiene... Nosotros tenemos un instrumento que debemos usar. Hasta que ese instrumento, que es la Carta Fundamental, nos dé la validez que nos permita decir: mañana será Tohá ministro de nuevo".(272)

(272) Ibid, p. 183.

Entonces Allende ya sabía que esto último era verídico. Dio muestras de extraordinaria inteligencia para lograr, al mismo tiempo, preservar sus prerogativas como jefe del Ejecutivo en un sistema presidencialista como era el chileno defendiendo su facultad exclusiva para designar a sus ministros e involucrar a las Fuerzas Armadas en esa decisión, consultando las previamente. En la mañana del día 6 había celebrado una reunión con los altos mandos del Ejército, Marina y Aviación, adelantándose a los resultados de la votación en la Cámara que sabía de antemano serían desfavorables dado que en ella la oposición era mayoría. Garcés relata que esa mañana el Presidente Allende expresó a los militares:

"Señores comandantes, la oposición está negando mi facultad constitucional de designar secretarios de Estado y de mantenerlos mientras cuenten con mi confianza. El nuestro no es un régimen parlamentario y yo voy a hacer respetar el régimen legal. Esta tarde la Cámara de Diputados suspenderá a José Tohá como Ministro del Interior por razones exclusivamente políticas y no legales, pues Tohá no ha incurrido en ningún delito. Estamos ante un juicio político ilegal. Pero aunque yo no puedo interferir en lo que resuelve el Congreso, sí deseo impedir que éste interfiera en mis prerogativas. Por esta razón, sin esperar a que el

Senado resuelva la suerte de la acusación, yo me propongo mantener a Tohá en el gabinete. Mi intención es designarlo como Ministro de Defensa Nacional. Como va a ser el superior inmediato de las Fuerzas Armadas, he querido comunicárselo a ustedes antes"!(273)

La respuesta de los comandantes en jefe del Ejército, Carlos Prats; de Carabineros, Cesar Mendoza, y de la Marina, Almirante Raúl Montero fue positiva en forma unánime. A nombre de los tres el Almirante Montero respondió a Allende: "La designación del Ministro de Defensa es facultad exclusiva del Presidente de la República, y no es de nuestra competencia pronunciarnos sobre ella. Pero ya que ha tenido usted la deferencia de hacérselo saber antes, y si me lo permite, me gustaría manifestarle que su decisión me parece no sólo correcta sino también plenamente satisfactoria para las Fuerzas Armadas. Nosotros sentimos aprecio por don José Tohá, cuyas cualidades personales hemos podido observar como Ministro del Interior"!(274)

Similar demostración de respaldo al gobierno de parte de los institutos armados fue lo ocurrido en marzo de 1972. En esa fecha se descubrió un plan de la I.T.T. instrumentada por el Departamento de Estado norteamericano y la derecha chilena, en el cual resultó involucrado el General Alfredo Canales. Sin embargo la decisión de los aparatos militares en esos mo

(273) Ibid, p. 182 .

(274) Ibid, p. 183 .

mentos de no expulsar del Ejército al General Canales fue elocuente de cómo iba evolucionando la correlación de fuerzas favorables a la Unidad Popular en el seno de las instituciones castrenses.

A fin de brindar una imagen más completa de las relaciones del gobierno de Allende con las Fuerzas Armadas hay que mencionar las mejoras salariales concedidas a los militares, dentro de la política gubernamental de redistribuir el ingreso y mejorar el nivel de vida de todo el pueblo que tratamos en el punto 3.2. Además, congruente con la línea de incorporarlos a las tareas de gobierno, la Unidad Popular, como se señala Bitar: "las incorporó más activamente a las tareas de desarrollo económico, en particular en aquellas de claro contenido nacionalista, como la gestión de las grandes empresas del cobre y de otras consideradas estratégicas desde el punto de vista de la seguridad nacional"(275)

No obstante esta política de respeto y acercamiento a las Fuerzas Armadas del gobierno popular, al finalizar la fase abarcada en este capítulo, los sectores militares golpistas iban adquiriendo mayor influencia en los cuarteles en desmedro de los sectores constitucionalistas. Lo ocurrido con el General Canales es una demostración de este aserto.

(275) Bitar, Sergio, op. cit., p. 76.

Los inicios de ese cambio de posición en los institutos armados se combinaba, a la vez, con los otros dos factores que mencionamos al comienzo. A partir de marzo de 1972 el gobierno se concentró en la defensa de la Constitución, -- mientras la derecha opositora aumentó su antagonismo con la Unidad Popular en el Parlamento. Dentro del proceso hacia el golpe de Estado la acción del gobierno norteamericano para derrocar al Presidente Allende jugó un rol importante. A analizar los aspectos centrales de la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Chile. dedicaremos el punto primero del próximo capítulo.

Capítulo Cuarto: Segunda fase del gobierno de la Unidad Popular: mediados de junio de 1972 hasta el 11 de septiembre de 1973.

Ahora nos dedicaremos a la segunda fase del gobierno de la Unidad Popular. Iniciaremos el capítulo con aspectos relativos al bloqueo norteamericano al proceso de cambios inaugurado por el gobierno popular que si bien se inició apenas -- instalado Salvador Allende en la presidencia de la República, consideramos más conveniente tratarlo en esta parte de nuestra tesis porque las repercusiones más importantes de ese bloqueo económico se produjeron en este segundo período del gobierno de la UP. Luego nos referiremos a los intentos del gobierno para resolver la crisis económica que comenzó a manifestarse en el país a mediados de 1972, y que se concretó en la llamada política Matus-Millas. Trataremos también el diálogo fracasado entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano y los problemas de conducción política en la izquierda en esta etapa. Enseguida analizaremos la estrategia de la oposición unida y de los gremios patronales contra el gobierno popular, que provocaron una agudización de la crisis económica y del conflicto político desembocando en el derrumbe de la institucionalidad chilena vigente desde 1925 y con lo cual se preparó el camino para el golpe de Estado. Finalizaremos el capítulo con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende, clausuró una eta

pa de democracia política en la historia de Chile y abrió una nueva: la dictadura militar que hasta nuestros días impera en la que otrora fuera una de las democracias más avanzadas de América Latina.

4.1 El bloqueo de Estados Unidos al gobierno de la Unidad Popular.

Apenas unos días después de las elecciones del 4 de septiembre de 1970 el gobierno norteamericano hizo pública su hostilidad al candidato marxista triunfante. En efecto, el 16 de ese mes, al día siguiente de una reunión sostenida en la Casa Blanca con el Presidente Richard Nixon y el director de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA), Kissinger, en un informe a la prensa declaró: "Ahora es fácil predecir que si Allende gana en el Congreso, existe una buena chance de que establezca en algunos años una forma de gobierno comunista... Pienso que no debemos engañarnos con el ascenso al poder de Allende, pensando que no traerá problemas masivos para nosotros y para las fuerzas democráticas y pronorteamericanas en América Latina y, en definitiva, para todo el hemisferio occidental!"(276)

Los hechos acaecidos con posterioridad probaron que la ratificación de Allende por el Congreso como Presidente de la na-

(276) Ibid, p. 77.

ción y la concretización de su programa de gobierno no ocasionaron problemas al hemisferio occidental. En cambio, sí demostraron que las acciones entrelazadas de las corporaciones transnacionales y del gobierno norteamericano como su representante político contribuyeron a que un gobierno, elegido democráticamente y que contaba con el apoyo de más de la mitad de los chilenos, fuera derribado por un golpe militar.

Allende y su equipo de gobierno estaban conscientes que Estados Unidos por razones ideológicas y geopolíticas no reaccionaría favorablemente ante la instalación en La Moneda de una coalición de partidos en su mayoría marxistas. Pero creían que si llevaban a la práctica una política que no buscara el enfrentamiento con el Departamento de Estado de ese país sería posible evitar un bloqueo económico o una intervención armada norteamericana. Recién elegido Presidente, Allende manifestó su deseo de "mantener buenas relaciones con Estados Unidos, como con todos los países del mundo, a condición que sean respetados el derecho a la autodeterminación y los intereses del pueblo chileno"(277) Por su parte, Clodomiro-Almeyda, Canciller del gobierno popular, afirmaba en esa época: "Existía claridad en los círculos que diseñaron la política internacional del gobierno de la UP acerca de que la hostilidad de los Estados Uni-

(277) Lamour, Catherine, op. cit., p. 264.

dos hacia él estaba determinada por razones políticas profundas. Pero también existía claridad en cuanto a que una política razonable de nuestro país, exenta de todo tipo de provocaciones, hacía no viable no sólo la intervención armada norteamericana en nuestra contra, sino también la promoción exitosa de un bloqueo formal y declarado, financiero como comercial a Chile, semejante al que se impuso a Cuba"(278)

El Canciller Almeyda no se equivocó. El gobierno de Estados Unidos no invadió militarmente, ni estableció un boicót financiero y comercial abierto a Chile sino que promovió, como lo denominara Neruda, un bloqueo invisible. Esta política fue ideada por el Consejo Nacional de Seguridad norteamericano y tuvo como objetivo central impedir la transformación de Chile en una sociedad socialista y democrática. Los cambios estructurales contenidos en el programa básico de gobierno de la Unidad Popular no sólo restringirían la capacidad del capital de Estados Unidos para expandirse en la nación chilena, sino que amenazaban con desarticular los factores económicos y de trato en la región. Potencialmente, los cambios que se avecinaban en la sociedad chilena sentaban las bases para una modificación y una redefinición de las relaciones económicas externas de América Latina. Así lo entendía Henry Kissinger, asesor presidencial en el Consejo Nacional de Seguridad quien

(278) Bitar, Sergio, op. cit., p. 76.

desempeñó un papel clave en la planeación de la política norteamericana hacia el gobierno de la Unidad Popular. En una entrevista de prensa, el 24 de septiembre de 1970, Kissinger formuló declaraciones que comprueban esta aseveración: "Yo no veo por qué necesitamos apoyar y observar a un país que va al comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo... La presidencia de Allende señalará el fin de la apertura política electoral en Chile y tendrá un impacto directo en la dirección futura de Argentina, la cual está profundamente dividida, de Perú el cual ya se ha estado dirigiendo a posiciones que han hecho difícil el trato y Bolivia la cual también ha ido en una dirección anti Estados Unidos más izquierdista".(279)

La política norteamericana hacia Chile durante el transcurso del gobierno Popular fue formulada en forma sistemática y obedeció a un centro fijo de dirección que a su vez tenía tuición sobre una serie de organismos a los que comisionó para realizar las tareas complementarias. Así el Consejo Nacional de Seguridad elaboró dicha política y la transmitió a numerosos organismos gubernamentales (Departamento del Tesoro, CIA, Departamento de Estado y de Defensa), los cuales elaboraron medidas concretas que fueron puestas en práctica en el terreno: el Departamento del Tesoro dio órdenes a los bancos in

(279) Petras, James y Morley Morris, "La Conspiración yanqui para derrocar a Allende", Editorial Nuestro Tiempo, México, 1974, p. 46 .

ternacionales, la eficaz CIA se infiltró en los partidos chilenos, o los asesores militares se vincularon al alto mando chileno. Las múltiples dimensiones de la dependencia y la naturaleza permeable de los políticos chilenos y las instituciones sociales y económicas facilitaron la ejecución exitosa de muchas de las medidas negativas que formularon los órganos de Estados Unidos"(280)

De esta manera, la estrategia global norteamericana contraria al tránsito hacia el socialismo en un país pequeño y lejano del centro imperial pero que ponía en peligro, tanto en lo económico como en lo político-estratégico, los vínculos de dominación de más de medio siglo con Estados Unidos revisó las siguientes formas interrelacionadas:

- "1) presión política y diplomática dirigida al máximo aislamiento internacional de Chile;
- 2) agobio económico para provocar la dislocación y el conflicto social;
- 3) ayuda militar para ~~menoscabar~~ al Estado chileno, reforzamiento de los vínculos entre los militares chilenos y Estados Unidos;
- 4) mantenimiento de relaciones políticas y diplomáticas para recoger información, mantenimiento de lazos políticos con la oposición, facilidades

de afluencia de recursos financieros para los aliados"(281)

Durante el transcurso de los casi tres años del gobierno popular, Estados Unidos consiguió materializar todos los puntos de su estrategia intervencionista con la sola excepción del primero. En efecto, el Departamento de Estado norteamericano no logró aislar internacionalmente a Chile debido a dos razones. Una de ellas fue la amplia simpatía y apoyo con que el gobierno de Allende contó a nivel mundial desde sus inicios. La extraordinaria solidaridad recibida por los miles de exilados chilenos después del golpe militar de 1973 ratifican esta solidaridad internacional. La otra fue la política internacional propugnada por su programa de gobierno y que fue llevada a la práctica en total concordancia con él. Nos detendremos brevemente en estos aspectos.

La Unidad Popular desde que llegó a la presidencia del país anunció que su intención era mantener y establecer relaciones diplomáticas "con todos los países que quisieran mantenerlas con Chile sin distinciones políticas o económicas, de aquí se derivó pocos meses después el principio que se conoce como el de mantenimiento de relaciones dentro del pluralismo ideológico"(282)

(281) Ibid., p. 27.

(282) González Aguayo, Leopoldo "La estrategia externa del régimen chileno de Salvador Allende" en Teoría y praxis internacional del gobierno de Allende, Cuadernos No.3, Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1974, p. 14.

Este propósito lo concretaron los dirigentes de la Unidad Popular mediante la realización de una política internacional que integró los elementos señalados a continuación:

- "a) aumento sustancial de las relaciones con América Latina de donde se esperaban apoyos importantes particularmente dentro de los países del Pacto Andino;
- b) aumento sustancial de las relaciones con los países socialistas sin que ello implicara un cierto predominio económico-político de dicho bloque, a efecto de evitar la repetición de otros casos como el cubano;
- c) mantenimiento de las relaciones con Europa en alto grado de cordialidad y ampliación hacia otros países y regiones del mundo, especialmente con -- países de alta estrategia (Cuenca del Pacífico), o en los que se desarrollaron fenómenos revolucionarios o avanzados;
- d) los puntos de apoyo externos logrados bajo los -- tres puntos anteriores debían servir para disuadir o neutralizar a los Estados Unidos impidiendo le tomar acciones graves de represalias en el momento en que las reformas internas afectaran sus intereses;

e) paralelamente, la diplomacia chilena iniciaría acciones tendientes a democratizar la estructura de poder internacional que se revelaba virtualmente estratificada en favor de las grandes potencias dentro de diversos organismos internacionales, basándose en una doble estrategia: primero, puesta en duda de la estructura de los organismos financieros mal llamados internacionales; segundo, utilización en su favor de los organismos que, reuniendo a los países pobres del mundo o a los latinoamericanos, dieran muestras de recibir con satisfacción los propósitos chilenos"(283)

Fue así como en noviembre de 1970 se reanudaron relaciones diplomáticas con Cuba, en enero de 1971 se establecieron con la República Popular China y con la República Democrática Alemana, en abril de ese mismo año. Con Corea del Norte y Vietnam del Norte se establecieron relaciones diplomáticas en 1972. (284) Respecto a América Latina se reforzaron los vínculos con el Pacto Andino del cual Chile formaba parte y se manifestó una adhesión crítica a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y, en general, se estrecharon los lazos de amistad y acercamiento con todos los países latinoamericanos.

(283) Ibid, p. 43.

(284) Cfr. con Bitar Sergio, op. cit., p.p. 360-362.

El Presidente Allende viajó a Ecuador, Colombia y Perú entre fines de agosto y principios de septiembre de 1971. Se entrevistó con el presidente venezolano Rafael Caldera a fines de diciembre de 1972 y en febrero de 1973. Argentina dio muestras de su buena voluntad hacia Chile, cuando en marzo de 1971, apoyó a Santiago para obtener la sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), desbaratando las maniobras brasilero-norteamericanas para sabotear la candidatura de la capital chilena. Allende además asistió a los festejos de asunción a la presidencia de Héctor Cámpora en marzo de 1973 y se iniciaron pláticas para sentar las bases de una solución definitiva del viejo conflicto limítrofe entre ambos países respecto al Canal Beagle.

A Bolivia, mientras era Presidente el general Juan José Torres, el gobierno popular propuso la construcción conjunta de una carretera que atravesaría la provincia chilena de Antofagasta y daría salida al mar a ese país mediterráneo. Además se realizaron positivas pláticas para reanudar relaciones diplomáticas, interrumpidas por Bolivia en 1962, a causa del problema surgido con el aprovechamiento de las aguas del río Lauca.(285)

Los lazos con México tradicionalmente cordiales se estrecharon aún más. En este sentido la posición adoptada por

el Presidente Luis Echeverría fue determinante. Durante todo el gobierno de la Unidad Popular y posteriormente después de su caída tuvo una extraordinaria solidaridad y comprensión hacia el pueblo chileno. Quien escribe es testigo vivencial de la cálida acogida que gobierno y pueblo mexicano, entonces y ahora, han brindado al numeroso exilio chileno residente en estas asoleadas tierras aztecas.

Los chilenos apreciamos mucho que la esposa del Presidente mexicano, María Ester Zuno, viajara a nuestro país conduciendo una delegación de auxilio a las víctimas del terremoto que asoló la región central del país a mediados de 1971. Otra demostración de la solidaridad mexicana al proceso de cambios realizado en Chile por la Unidad Popular ocurrió en abril de 1972. En esa fecha el Presidente Luis Echeverría se presentó en Santiago en medio de la Conferencia de la UNCTAD para proponer un proyecto de Carta de Deberes y Derechos de los Estados y testimoniar de viva voz el apoyo de México al régimen de la Unidad Popular. Antes de esto, en octubre de 1971, el jefe del Estado mexicano había intervenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestando su posición de apoyo al gobierno popular chileno. A fines de noviembre y principios de diciembre de 1972 Allende efectuó una visita oficial a la capital mexicana y a la ciudad de Guadalajara que, a juicio de la prensa local, "fue un triunfo político

del Presidente chileno y del ala liberal del gobierno mexicano"(286) Más tarde, a fines de mayo de 1973, en una coyuntura especialmente crítica para el gobierno chileno, que se debatía entre el conflicto político externo y los efectos, cada vez más agobiantes, del bloqueo económico norteamericano al cual nos referiremos en el punto siguiente, viajaron a Chile Emilio Rabasa y Horacio Flores de la Peña. Ellos eran entonces los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Patrimonio Nacional, respectivamente, y en esa ocasión llevaron propuestas de créditos y de embarques de petróleo al gobierno chileno, como una forma de ayudante a paliar el bloqueo de Estados Unidos.

Respecto a las relaciones chileno-cubanas, aparte de la reanudación de las mismas como señalamos antes, se estableció una nueva ruta de las Líneas Aéreas Nacionales (LAN) chilena a Europa que hacía escala en La Habana, y una nueva ruta de la Cubana de Aviación a Santiago. En enero de 1971 el Canciller cubano, Raúl Roa, visitó la capital chilena y a fines de ese año, como vimos, Fidel Castro visitó Chile y recorrió sus principales ciudades.

En cuanto a los demás países del Caribe, salvo República Dominicana y Haití, Allende inició acercamientos con los gobiernos progresistas de los que habían sido colonias británicas: Jamaica, Trinidad Tobago, Guyana y Barbados.

(286) Ibid, p. 23.

Las relaciones con los países de Europa Occidental con los cuales Chile tenía amplias relaciones comerciales y de amistad desde su nacimiento como República independiente, se acrecentaron. No hay que olvidar que las tierras chilenas acogieron, en el transcurso del siglo pasado y en las primeras décadas del presente, una numerosa corriente de inmigrantes europeos que ayudaron a fortalecer los lazos tradicionales del país con el viejo mundo. Además "la opinión pública europea recibió con satisfacción el inicio de la experiencia chilena de izquierda, simpatía que fue en general compartida por los gobiernos, algunos de ellos deseosos de ver reducirse en el subcontinente la presencia aplastante - norteamericana. Sin embargo, las posibilidades de actuación europea en la experiencia chilena estuvieron determinadas — como en otros problemas dados en otras regiones del mundo — por una cierta ineficacia de actuación producto de la dispersión europea que le hace limitar mucho sus iniciativas políticas frente a las dos grandes potencias"(287)

Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, los países escandinavos, Suiza, la República Federal Alemana siempre manifestaron excelente disposición hacia el gobierno de Allende. Incluso España franquista de entonces propuso al gobierno popular "la posibilidad de la realización de inversiones conjuntas en territorio del país andino"(288) En mayo de 1972

(287) Farnsworth, Elizabeth, Feinberg Richard y Leenson Eric, "Chile: el bloqueo invisible", Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1973, p. 101.

(288) González Aguayo, Leopoldo, op. cit., p. 32.

el Canciller chileno, Clodomiro Almeyda, se reunió en París con los embajadores de Chile ante los principales países de Europa Occidental a fin de refinanciar la deuda externa que el país tenía con ellos.

Respecto a los países de la órbita socialista el gobierno de la U P tuvo especial cuidado en no dar pábulo a actitudes que pudieran interpretarse como un alineamiento en favor de las posiciones pro-soviéticas o pro-chinas en que se divide el campo socialista. Por otra parte, para calmar los temores de Estados Unidos y la campaña interna de la derecha que nunca aceptó la cordialidad de las relaciones del gobierno de Chile con los países del bloque del Este, Allende fue enfático en declarar que: "Nunca prestaría su territorio para acciones en contra de otro país, en especial contra Estados Unidos, respondiendo con ello a las afirmaciones de la derecha en el sentido de la llegada a ciertos puntos de las costas chilenas de 'misteriosos submarinos', declaración que le valió al mandatario chileno el elogio del New York Times"(289)

Dentro de la política de acercamiento al mundo socialista se encuentran las misiones encabezadas por el Canciller Almeyda, entre abril y mayo de 1971 y la del Subsecretario de Relaciones Exteriores al año siguiente a los ocho

(289) Ibid, p. 28.

países de Europa Oriental: URSS, Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, Rumania, República Democrática Alemana, Hungría y Yugoslavia. En esas giras el gobierno popular logró concertar acuerdos financieros y comerciales específicos. Así se establecieron convenios para la compra de cobre chileno por la URSS y para que este país asistiera técnicamente a Chile en materia pesquera y agrícola. Además se concertaron acuerdos crediticios que, en conjunto, durante los años del gobierno de Allende, no sobrepasaron los 300 millones de dólares(290)

En términos generales, la Unidad Popular nunca obtuvo de la URSS una ayuda financiera de gran envergadura como la brindada a Cuba, por ejemplo. Los países socialistas europeos y la URSS, en particular, "mostraron algo más que reticencia para no verse nuevamente embarcada en un caso de dudosa rentabilidad (mucho más difícil de resolver que el caso cubano), dada la mayor importancia de la economía chilena sobre la de la isla, la situación y dispersión geográfica interna, las distancias, entre otros factores, además del riesgo real de una nueva confrontación directa con los intereses norteamericanos que los soviéticos no estaban en la mejor situación para afrontar". (291)

Congruente con su programa de relaciones internacionales, el gobierno de Allende inició la apertura hacia naciones afri-

(290) Cfr. con Bitar, Sergio, op. cit., p. 193.

(291) González Aguayo, Leopoldo, op. cit. p. 28.

canas y de Oceanía, postergadas por la diplomacia tradicional de los gobiernos anteriores. Procuró establecer vínculos con los países que habían conocido experiencias revolucionarias en África, tales como Argelia, Nigeria y Tanzania. Con Australia firmó un acuerdo para establecer líneas aéreas y navieras entre los respectivos territorios ubicados geográficamente a la misma latitud. Finalmente se le concedió particular importancia a los lazos comerciales y diplomáticos con Japón; gracias a ello los japoneses brindaron asistencia técnica en materia siderúrgica cuando Estados Unidos la había interrumpido y compraron minerales, en especial, cobre.(292)

En lo referente al apoyo otorgado a los organismos internacionales integrados por países pobres, el gobierno de la UP estimuló la extensión de las atribuciones de la Organización de Países Productores de Cobre (CIPEC) del cual Chile formaba parte con Zambia, Zaire y Perú. Como una manera de acallar la campaña interna de la derecha opositora y del Departamento de Estado norteamericano de que el país se convertiría en una base soviética en Sudamérica, el Canciller Almeyda manifestó en la tribuna de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 1971, que Chile se adhería a la agrupación de naciones no alineadas. A partir de entonces siempre hubo una delegación chilena en las conferencias de Georgetown y Guyana que cele--

(292) Cfr. González, Aguayo Leopoldo, op. cit., p. 35.

braron los países no alineados. A la reunión de esos países efectuada en Argel, a comienzos de septiembre de 1973, Allen de no pudo concurrir debido a la seria situación que enfrentaba el país internamente. Entre los acuerdos aprobados en Argelia, hubo una "resolución de apoyo al régimen chileno de la Unidad Popular en su lucha contra los enemigos internos y externos, texto que le fue entregado a la delegación del país andino, uno de cuyos principales enviados era el General Augusto Pinochet" (293)

El resumen anterior comprueba que la política norteamericana para aislar a Chile durante el gobierno de la UP no fructificó, y que el éxito obtenido por la Cancillería chilena en materia internacional fue rotundo. Las múltiples resoluciones condenatorias aprobadas en diversos organismos internacionales después del golpe de Estado de 1973 a la Junta Militar integrada por los generales Pinochet y Mendoza y por el Almirante Merino, también lo corroboran.

Sin embargo no se puede afirmar lo mismo respecto de los demás puntos relativos a la estrategia desestabilizadora diseñada por el gobierno norteamericano para interrumpir el proceso de cambios iniciado por la Unidad Popular. A reseñar sintéticamente esta política de bloqueo comercial-finan-

(293) Ibid, p. 37.

ciero subrepticio, llamado bloqueo invisible, dedicaremos el resto de este capítulo.

Política de bloqueo comercial y financiero del Departamento de Estado al gobierno popular.

En noviembre de 1970, por decisión de Richard Nixon, el Consejo Nacional de Seguridad norteamericano ideó el plan de agobio económico y financiero para provocar la dislocación del gobierno de la Unidad Popular y el conflicto social en Chile. Aprovechando los lazos entre las compañías transnacionales Anaconda, Kennecott y la ITT iniciará las presiones económicas y los actos sucesivos de esas compañías, como fueron por ejemplo los embargos de cobre por la Kennecott. Bloqueó los créditos internacionales a Chile no sólo por parte de organismos norteamericanos como el Eximbank, sino de entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial también bloqueó las fuentes de financiamiento bancario privado norteamericano. Presionó a países europeos como lo revelaron los Documentos de la ITT para que no invirtiesen en Chile. Interfirió, en los momentos adecuados, en la renegociación de la enorme deuda externa chilena; entorpeció el envío de repuestos y piezas de equipos industriales; impidió la renovación del parque industrial y todo el flujo de tecnología al país. Buscó la paralización progresiva de los medios de transporte aéreo impi

diendo su compra. Hizo caer el precio del cobre e introdujo clandestinamente dólares a Chile para financiar las acciones de los grupos de oposición al gobierno de la Unidad Popular, en particular durante el paro de octubre de 1972 y en los paros de los gremios que se empezaron a suceder a partir de --- abril de 1973. Mantuvo e incrementó los suministros de arma--- mento a las Fuerzas Armadas chilenas y profundizó los contactos institucionales con ellas mediante las Operaciones Unidas, que son ejercicios conjuntos entre los cuerpos armados chilenos y la Marina Norteamericana. Esos operativos se realizan anualmente en Chile, en virtud de pactos militares acordados entre ambos países desde 1946 y durante el gobierno de Allen de no fueron anulados, ni modificados.

En la práctica el gobierno de Estados Unidos adaptó su estrategia a la vía chilena al socialismo. En efecto, la Casa Blanca pretendía desestabilizar económicamente a Chile para restarle apoyo popular y obligar a Allende a salirse de -- los márgenes de la institucionalidad y con ello provocar un golpe militar. Los supuestos en que se basaba la estrategia del Departamento de Estado norteamericano eran los siguientes: "El bloqueo económico haría difícil mantener el crecimiento económico del país, la escasez de dólares asustaría a los miem bros de la clase media que en el pasado consumían la mayoría de los artículos importados. Un bloqueo financiero invisible pero efectivo haría que el gobierno de la UP pareciera irres-

ponsable, incapaz de servir a los intereses del pueblo. Si el bloqueo por el dólar podía impedir que la UP construyera la base política que necesitaba, le impediría aplicar su programa. Si no, se vería forzada a colocarse al margen de la Constitución, lo que movería a los militares a intervenir. Preparándose para esa eventualidad, el gobierno de Estados Unidos continuaría su asistencia a los militares chilenos. (294). Sin embargo como lo evidenció el desenlace de la experiencia popular chilena estos supuestos norteamericanos no se cumplieron a cabalidad. Si bien el bloqueo causó enormes problemas económicos a Chile, y en lo político logró que importantes sectores de las capas medias radicalizaran su oposición al gobierno, no pudo impedir, como veremos mas adelante, que el gobierno popular lograra ampliar su base social de apoyo. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 darían a la Unidad Popular un respaldo electoral que lo dejaba en posibilidades de impedir que el Parlamento la acusara constitucionalmente. Además el apoyo obtenido le aseguraba que una consulta al pueblo, mediante el plebiscito, la ganaría el gobierno. De ahí que el gobierno de Nixon y la oposición de la burguesía interna para evitar esto último, a partir de marzo de 1973, aceleraron las operaciones destinadas a preparar el golpe militar que finalmente se produjo en septiembre de 1973.

El factor estructural interno que más ayudó al éxito del -

(294) Farnsworth, Elizabeth, et. al., op. cit., p. 98.

bloqueo económico norteamericano a Chile fue nuestra dependencia económica respecto de Estados Unidos. Aparte del hecho de que Chile tenía una pesada deuda externa contraída antes que Allende llegara al poder, nuestra dependencia económica en relación a Estados Unidos se mantuvo como un elemento importante durante todo el periodo del gobierno de Allende. Como señalan Petras y Morley: "en 1970 la inversión norteamericana en Chile ascendía a 1672 millones de dólares. A pesar de la diversificación de la inversión durante los sesenta — alejamiento en la industria extractiva e industrias de servicios conexos y acercamiento en manufacturas, comercio y banca — el grueso de la inversión privada norteamericana persistió en los sectores de la minería en arriba del 50 por ciento. A fines de 1970 Estados Unidos y las corporaciones extranjeras controlaban la mayoría de las áreas — más dinámicas y críticas de la economía: maquinaria y equipos — (50 por ciento); hierro, acero y productos metálicos (60 por -- ciento); productos petroleros y su distribución (más del 50 por ciento); otros productos industriales y químicos (60 por ciento) productos de hule (45 por ciento); ensamble de automóviles (100 por ciento); radio y televisión (cerca del 100 por ciento); pro ductos farmacéuticos (cerca del 100 por ciento); equipos para - oficina (cerca del 100 por ciento); fabricación de cobre (100 -- por ciento); tabaco (100 por ciento) y publicidad (90 por cien to). Además las corporaciones norteamericanas controlaban el - 80 por ciento de la producción de cobre: el único material de - exportación chileno impprtante que da lugar a fuertes entradas de divisas. Por lo tanto, el gobierno de Allende se enfrentó a

una situación de control externo sobre la producción de cobre, tecnología, piezas de repuestos y manufacturas, lo que hacía a la economía chilena externa extremadamente vulnerable a las presiones financieras y comerciales"; (295)

El bloqueo económico norteamericano durante el gobierno de Allende revistió tres formas entrelazadas o interrelacionadas en tre sí que trataremos por separado: la suspensión de créditos ex ternos, el conflicto cuprífero y el embargo de las remesas de co bre chileno en el extranjero y el entorpecimiento de la renegocia ción de la deuda externa de Chile. Vinculada a ellas estuvo el plan de 18 puntos de la ITT para intentar un golpe de Estado, en marzo de 1972 .

Bloqueo y suspensión de créditos externos.

La política de bloqueo financiero al gobierno popular para provocar su dislocación económica siguió tres tácticas: "restric ción del crédito internacional, vía movilización del apoyo hacia las posiciones de Estados Unidos dentro de las instituciones fi nancieras internacionales y entre los acreedores internacionales de Chile; elaboración de una ideología sobre falta de méritos pa ra recibir crédito basada en las condiciones internas (inflación, desinversión, etc.) creadas, en gran parte, por el bloqueo credi ticio norteamericano; y la identificación del deterioro económico gradual con la política gubernamental interna, creando así las bases para la polarización de la sociedad chilena de un modo fa vorable a los grandes grupos de propietarios. Estos esfuerzos

fueron paralelos a la profundización de los vínculos entre Estados Unidos y los sectores críticos del Estado chileno (militares, policía) y las instituciones privadas (asociaciones patronales)." (296)

Las presiones para negarle créditos a Chile se iniciaron inmediatamente después de la elección presidencial de Allende, lo que prueba que la táctica norteamericana de bloqueo y suspensión crediticia no fue tanto respuesta a las nacionalizaciones efectuadas por la Unidad Popular, sino que fue una represalia a un país que pretendía realizar profundas transformaciones socialistas. Es decir, formó parte de una política regional más vasta de oposición oficial a los esfuerzos del gobierno de la UP para que Chile alcanzara un desarrollo autónomo que podría haber sido ejemplo para países de la región o de otras latitudes.

Para ilustrar el bloqueo financiero en comentario recurriremos a cifras comparativas: "Entre 1964 y 1970, más de mil millones de dólares en asistencia económica ingresaron a Chile procedentes de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID (norteamericana) del Banco de Exportación e Importación (norteamericano), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante el mismo periodo, de 200 a 300 millones de dólares en líneas de crédito comercial a corto plazo estuvieron a disposición de Chile, continuamente, procedentes de los bancos privados de -

Estados Unidos. Casi el 80 por ciento de todos los créditos a corto plazo procedieron de abastecedores y bancos norteamericanos. Durante todo el gobierno de Allende la ayuda a Chile procedente de AID, el Banco de Exportación e Importación, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fueron inexistentes o insignificantes, mientras que las líneas de crédito a corto plazo descendieron a alrededor de 30 millones de dólares". (297)

Esta suspensión de préstamos para el desarrollo económico a largo plazo de los organismos financieros mencionados, aunada a las presiones para el pago inmediato de las obligaciones de la cuantiosa deuda externa contraída antes que Allende fuera Presidente, por los gobiernos de Alessandri y de Frei, no solo anuló las posibilidades de inversión, planificación y desarrollo a largo plazo sino que creó al gobierno una gran escasez de divisas para mantener el normal funcionamiento de la producción. De esta manera, la falta de créditos de Estados Unidos ocasionó una drástica reducción de las importaciones cuyo efecto más inmediato lo constituyeron "los cuellos de botella en la producción, -- causados por la falta de repuestos y de piezas de maquinarias lo que causó inevitablemente una seria caída de la producción chilena". (298)

Cuando el conflicto con las empresas transnacionales del co-

(297) Ibid, p. 98 .

(298) Farnsworth, Elizabeth et. al., op. cit. p. 109 .

bre había estallado, en agosto de 1971, sirvió de pretexto para -
condicionar la concesión de créditos a Chile. En esa fecha "el
Banco de Importaciones y Exportaciones informó al embajador chile
no en Washington que cualquier préstamo ulterior o garantía de es
ta institución estaría dependiendo de una resolución satisfacto--
ria del conflicto cuprífero... Así como todas las garantías de --
préstamos por parte de los bancos comerciales y de exportación com
prometidos en actividades comerciales en Chile... y los desembol-
sos de créditos directos que hayan sido negociados previamente por
el gobierno de Frei". (299)

Citaremos únicamente un caso, a modo de ejemplo, de esta sus
pensión crediticia. El 15 de agosto de 1971, el presidente del -
Eximbank, Henry Kearns, negó a Chile un préstamo para financiar -
la compra de tres aviones Boeing norteamericanos para pasajeros,
destinados a la compañía de aviación nacional LAN. Esto creó al
gobierno de la Unidad Popular una difícil situación pues, la urgen
cia de resolver este problema en un país en donde la configura--
ción geográfica y el aislamiento continental dan a las comunicacio
nes aéreas una importancia fundamental, debía lógicamente llevar
al gobierno de Santiago a volverse hacia los soviéticos para nego
ciar la compra de aviones Ilyuchin, pese a sus preferencias por -
los Boeng. Esta decisión del Eximbank ocasionó protestas de los
círculos liberales norteamericanos en contra de la política de la
Casa Blanca. El New York Times publicó un artículo denunciando una
política corta de miras que identificaba los intereses de los Es-

tados Unidos con los de un pequeño grupo de grandes firmas privadas... Los parados de la industria aeronáutica de Seattle apreciarán muy poco las maniobras de Washington contra Chile, que conducen a dar trabajo a los obreros soviéticos en las fábricas de Llyrchin, puesto que se fuerza a los chilenos a aprovisionarse en la URSS". (300) Por su parte, el progresista Washington Post afirmaba respecto a lo mismo que: "con desastrosa diplomacia no es sólo lo contra Chile hacia donde Estados Unidos agita su garrote, sino hacia toda Iberoamérica". (301)

El Departamento de Estado además influyó en los círculos directivos del BID y del Banco Mundial para suspender todo flujo de dólares al gobierno popular. Salvo la concesión de dos préstamos que alcanzaron "11,6 millones de dólares para las universidades - Austral y Católica - ambas baluarte de la oposición en el medio educativo - el BID no otorgó préstamos a largo plazo al gobierno - de Allende". (302) Algo semejante realizó el Banco Mundial que "no concedió un préstamo de 300 millones de dólares solicitado para la construcción de un complejo petroquímico... y canceló, a pedido del Departamento de Estado, una misión que iba a evaluar un proyecto de procesamiento de frutas en planta (parte del programa de reforma agraria y considerado crucial para mejorar la situación de la balanza de pagos de Chile)". (303) La actitud del Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación a Chile fue menos drástica. El FMI sólo suministró a Chile préstamos para propósitos muy específicos y limitados. Los créditos de ayuda al desarrollo a

(300) Lamour, Catherine, op. cit., p 267.

(301) Ibid, p. 267.

(302) Petras y Morley, op. cit., p. 101.

(303) Ibid, p. 101.

largo plazo "seguan dependiendo de los austeros acuerdos de sometimiento del FMI los cuales habrían limitado la autonomía económica interna del gobierno de Allende y tenido un impacto negativo sobre el nivel de vida de la clase obrera, la mayor base social de apoyo al gobierno". (304)

Los esfuerzos combinados y mutuamente reforzados de los organismos crediticios norteamericanos y bancos internacionales redujeron en forma aguda la inversión, el comercio y las oportunidades de crédito de Chile a tal grado que los problemas económicos internos del país, en el transcurso de 1972 y 1973, sólo pueden ser evaluados concretamente midiendo el impacto económico del bloqueo financiero. Así, la producción de cobre que dependía de repuestos, maquinaria y tecnología norteamericanos requería de créditos a corto plazo "por valor de 20 a 30 millones de dólares anuales para su importación" (305) y que Estados Unidos no otorgó. En lo relativo al sector de transportes el bloqueo crediticio produjo graves perjuicios pues la mayoría de los camiones y omnibus eran de marca Ford o General Motors. Hacia mediados de 1972 "alrededor del 30 por ciento de los omnibuses privados, el 21 por ciento de los taxis y el 33 por ciento de los omnibuses de propiedad estatal estaban paralizados debido a la falta de repuestos". (306) La Empresa Nacional del Petróleo chilena (ENAP) también sufría en esa época los efectos del bloqueo económico en comen-

(304) Ibid., p.p. 102-104.

(305) Farnsworth, Elizabeth, op. cit., p. 107.

(306) Ibid. p. 107.

tario, dado a que dependía de los repuestos de fabricación nortea
mericana y tenía serios problemas para obtenerlos. Lo mismo ocu-
rría con la Compañía Chilena de Electricidad, la Compañía de Ace-
ro del Pacífico y la fábrica de Cemento El Melón (307).

El impacto del fin brusco de fondos externos debido a la de
pendencia de la economía chilena del financiamiento internacional
apuntado en párrafos anteriores desorganizó la producción chile-
na. Esta situación comenzó a manifestarse a mediados de 1972 y -
en 1973 adquirió características muy graves. Dentro de este cua-
dro, la oposición burguesa interna al gobierno popular desató su
campaña de desprestigio al régimen acusándolo de incapaz de resol-
ver los problemas de desabastecimiento de productos, repuestos in
dustriales y automotrices y medicamentos que no se podían importar
a causa del bloqueo financiero. El paro patronal de octubre de -
1972 esgrimió, entre otros, este argumento como veremos en capítu-
los posteriores. Una demostración de las repercusiones de la sus-
pensión de créditos a Chile se refleja en el cuadro siguiente que
ilustra la tendencia descendente de la producción industrial en -
1972 en comparación con 1971, año en que ya vimos alcanzó incremen-
tos considerables.

(307) Cfr., Farnsworth, Elizabeth, op. cit., p.p. 108-110.

CUADRO No. 22Producción Industrial en 1972 *(Porcentaje de cambio en relación a 1971).

Enero	21.7
Febrero	15.9
Marzo	13.0
Abril	17.1
Mayo	14.4
Junio	5.3
Julio	5.3
Agosto	3.6
Septiembre	8.7
Octubre	7.8
Noviembre	8.1
Diciembre	11.1

El conflicto del cobre. Hemos visto que el gobierno de la -
 Unidad Popular en julio de 1971 expropió los grandes yacimientos
 de cobre pertenecientes a las coporaciones norteamericanas Anacon-
 da y Kennecott y que ello fue posible en virtud de una reforma -
 constitucional aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional.
 También nos referimos a que por decisión de la Contraloría Gene-
 ral de la República y del Presidente Allende el monto de las de-
 ducciones efectuadas de acuerdo a la ley de reforma constitucio--

* Fuente: Petras y Morley, op. cit., p. 25.

nal, en especial debido al monto de las deducciones por beneficios excesivos de esas compañías durante los últimos quince años, no se pagó ninguna indemnización a las corporaciones expropiadas. De esta medida ambas empresas reclamaron ante el Tribunal Especial Chileno del Cobre quien ratificó las resoluciones adoptadas previamente por el gobierno popular, ante lo cual la Kennecott y Anaconda decidieron pasar a la estrategia de los embargos.

La trayectoria cronológica seguida por estas corporaciones en sus reclamos por la expropiación sin compensación revela, como lo señala Uribe, que el gobierno de Nixon necesitaba que la cuestión del cobre estuviese pendiente. Era "su única cobertura para los actos de agresión mucho más graves que estaba ejerciendo y continuaría escalando contra Chile". (308) En efecto, vimos que la ley de reforma constitucional que autorizó la expropiación de las minas de cobre se aprobó el 11 de julio de 1971; en octubre de ese año la Contraloría respaldó la decisión gubernamental acerca del no pago de indemnización y ese mismo mes las empresas norteamericanas reclamaron de este fallo ante el Tribunal Especial del Cobre. Pero dejaron pasar casi un año para iniciar la estrategia del embargo, pues sólo en septiembre de 1972 amenazaron con los embargos de los cargamentos de cobre chileno con destino a puertos extranjeros. (309) Por esta razón concordamos con el criterio de Uribe, quien fuera funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno

(308) Uribe, Armando "El libro negro de la intervención norteamericana en Chile", Siglo XXI Editores, México, 1974, p. 147.

(309) Cfr. con Bitar, Sergio, op. cit., p.p. 363, 364 y 368 .

en tiempos de Frei, Ministro Consejero de la Embajada de Chile en Washington entre 1968 y 1970 y el primer Embajador de Chile en Pekín, y que sostiene que el gobierno norteamericano deliberadamente dejó esta cuestión pendiente: "El gobierno de Nixon en suma no encontró más justificación internacional contra Chile que el cobre nacionalizado. No era una buena causa formal, ni daría demasiado motivo de agresión por sí misma. Pero no disponían de otro terreno formal de disputa; concentraron públicamente su conflicto con Chile en el cobre. Pero esta elección necesaria era puramente táctica. En el conflicto del gobierno de Estados Unidos, en el de Nixon y Kissinger con Chile, no era el cobre el objeto sino un pretexto. El objeto del conflicto era Chile mismo"(310)

No era una buena causa formal porque desde el punto de vista jurídico la naturaleza de la expropiación era intachable. Fue adoptada por la unanimidad del Congreso y contó con el aval de la Contraloría para el descuento de las utilidades excesivas percibidas por las compañías durante los últimos quince años. Dado el monto de éstas "la fórmula jurídica de la deducción de las utilidades excesivas era difícilísima de atacar internacionalmente en teoría y en la práctica ante tribunales extranjeros y otros foros políticos"(311)

(310) Uribe, Armando, op. cit., p.p. 149-150.

(311) Ibid, p. 148.

En este sentido las cifras son muy elocuentes de que la pérdida de esas propiedades constituía para esas corporaciones enormes pérdidas económicas. Así para sólo mencionar el caso de la Kennecott, ésta "en 1970, el 13 por ciento del total de sus inversiones extranjeras estaba en Chile, pero de sus posesiones de Chile provenía el 21 por ciento de sus ganancias totales. La corporación obtenía inmensas ganancias de su mina El Teniente. Según el Presidente Allende, la Braden (la subsidiaria de la Kennecott en el país) obtenía utilidades sobre el capital invertido que alcanzaban un promedio de 52,8 por ciento anual desde 1955, hasta las tasas increíbles de 106 por ciento anual en 1967, 113 por ciento en 1968 y 205 por ciento en 1969"(312) Por lo mismo la expropiación no podía ser calificada de "despojo arbitrario, discriminatorio, con denegación de justicia, ajeno al derecho público internacional"(313)

Además, el gobierno de la Unidad Popular era legítimo, "Chile era una democracia, había separación de poderes, imperaba la regla de derecho, se reconocían las libertades de las personas jurídicas y naturales y se respetaban - más que en otras democracias - los restantes derechos civiles, había igualdad ante la ley y la justicia para extranjeros y nacionales, y las facultades de las compañías como las de todos

(312) Farnsworth, Elizabeth, et. al, op. cit., p. 88-89.

(313) Uribe, Armando, op. cit., p. 148.

estaban garantizadas conforme a la ley y al derecho internacional. De ahí que Estados Unidos no osó nunca llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya".(314)

Por consiguiente, cuando Estados Unidos inició los trámites de embargo de cobre chileno, en septiembre de 1972, lo que perseguía "era crear la apariencia de que el cobre chileno no era cosa en litigio y perturbar su compraventa... y distorsionar el mercado del metal rojo chileno".(315). El 30 de septiembre de 1972. la Kennecott interpuso, ante los tribunales franceses, una acción legal de embargo que impidiera el pago a Chile del cobre de la mina El Teniente que había sido vendido a ese país. El dictámen de los tribunales franceses fue que Chile "depositara en un sobre sellado una cantidad que pueda ser pagada a Kennecott en el caso que se demuestre que Chile debe dinero a la compañía".(316) Como el gobierno chileno no hizo ese depósito y "para evitar el embargo de 1,3 millones de dólares, los obreros portuarios franceses de Le Havre se negaron a descargar el cobre chileno del barco Birte Ollendorf, en una demostración de solidaridad con Chile. El barco zarpó a Holanda, donde otra vez se vio envuelto en una serie de controversias legales... La odisea terminó el 21 de octubre de 1972, cuando el barco volvió a Le Havre. Los pagos franceses a Chile sobre el cobre se depositaron

(314) Ibid, p. 148.

(315) Ibid, p. 149.

(316) Petras y Morley, op. cit., p. 123.

en una cuenta hasta que se resolviera la legalidad de la expropiación; Chile se vio forzado a suspender temporalmente sus envíos de cobre a Francia"(317)

Como señalan Farnsworth, Feinberg y Leenson la elección para iniciar las primeras acciones de embargo del cobre chileno en Francia no fue simple coincidencia: "Se eligió a Francia como campo de ensayo porque ese país no sólo era uno de los principales consumidores del cobre chileno, sino por algo más importante: ha promulgado leyes desacostumbradamente enérgicas en defensa de la propiedad privada como resultado de su propia experiencia en Argelia. Para que las cortes francesas reconocieran la transferencia de propiedad en una nacionalización, Chile debía demostrar que había indemnizado adecuadamente a la Kennecott"(318)

Después, esta corporación norteamericana extendió el procedimiento legal de los embargos de embarques del metal cuprífero chileno a casi todos los puertos de Europa Occidental. Así la batalla legal por el cobre se generalizó en los tribunales de Suecia, Alemania Federal, Italia e Inglaterra . (319) La estrategia de embargo de la Kennecott se prolongó durante todo el lapso de tiempo siguiente que duró el gobierno de la Unidad Popular, lo cual obligó a Chile a suspender, en muchos casos, varias ventas con la consiguiente pér-

(317) Farnsworth, Elizabeth, et. al., op. cit., p. 90.

(318) Ibid, p. 91.

(319) Cfr. con Petras y Morley , op. cit., p.p. 123-124 y Farnsworth, et. al. op. cit., p. 90,91 y 92.

dida de ingreso de divisas al país. Además estas maniobras de bloqueo económico de la Casa Blanca se realizaron en el periodo más crítico del proceso de gobierno de Allende, buscando crear el caos económico y social para erosionar las bases sociales de apoyo a la UP, en concomitancia con la oposición de la burguesía interna y, alentar así, el golpe militar. Petras y Morley sostienen que una fuente cercana a las compañías cupríferas llegó a expresar que "la escalada legal de Kennecott simplemente podía ser parte de un mayor movimiento para derrocar al sedicente gobierno marxista de Allende"(320)

Aparte de los perjuicios económicos y políticos provocados por esos embargos ya mencionados, Chile debió además sufrir los efectos del temor de sus compradores de cobre que disminuyeron o anularon sus pedidos futuros; la reducción de sus posibilidades crediticias basadas en las ventas futuras de ese metal y un dispendio de divisas extraordinario a causa de los gastos legales que los juicios europeos originaron. Pero lo que provocó más daños "fue el impacto en las negociaciones para la apertura de líneas de crédito por 220 millones de dólares que Chile estaba tratando con bancos europeos. Como resultado de los embargos esas líneas de crédito nunca se abrieron. Además líneas de crédito de Holanda y Canadá

(320) Petras y Morley, op. cit., p. 125 .

se suspendieron porque Chile se había convertido en un riesgo mayor. Finalmente Chile se vio forzado a gastar 150 mil dólares para financiar su batalla legal contra el embargo"(321) Como una manera de presionar al mercado cuprífero mundial y evitar perjuicios más grandes al país los miembros del CIPEC, organización de las naciones pobres exportadoras de cobre que producían "el 44 por ciento del cobre mundial"(322) y como una muestra de solidaridad al pueblo chileno, se reunieron en diciembre de 1972 y acordaron una resolución "de que se abstendrían de vender el metal a los mercados normalmente abastecidos por los chilenos"(323)

Otra represalia económica del Departamento de Estado norteamericano contra el gobierno de la UP fue la manipulación del precio internacional del metal rojo, principal fuente de ingresos del presupuesto nacional de Chile hasta la fecha. Las cifras aquí también son reveladoras. Durante el último bienio del gobierno de Frei el precio en que se cotizó el cobre a nivel mundial superó al de cualquier otro año en la década de los sesenta "al menos por 10 centavos de dólar por libra . En 1969, el cobre se vendió a 66,56 centavos de dólar por libra. En 1970 hubo un ligero descenso a 64,20 centavos por libra. Durante los dos primeros años del gobierno de Allende, el precio del cobre en el mercado internacional bajó

(321) Farnsworth, Elizabeth, et. al., op. cit., p. 92.

(322) Ibid, p. 93.

(323) Ibid, p. 94.

fuertemente: a 49,27 centavos por libra en 1971 y a 48,20 centavos de dólar por libra en 1972⁽³²⁴⁾. De acuerdo a estimaciones del organismo estatal chileno encargado de todo lo relativo a esta materia prima básica, CODELCO, "por cada centavo de baja en el precio mundial del cobre, el país perdía cerca de 15 millones de dólares por año".⁽³²⁵⁾

Obstaculización de la renegociación de la deuda externa chilena.

Cuando Allende llegó a la presidencia de la República, Chile tenía una gran deuda externa, para aquella época, y que ascendía a "aproximadamente a 3830 millones de dólares".⁽³²⁶⁾ De ellos, más de la mitad correspondían a agencias de gobierno de Estados Unidos y a prestamistas privados norteamericanos y el resto a bancos europeos occidentales.

En el capítulo de nuestro trabajo relativo a los desajustes económicos del primer periodo del gobierno popular, señalamos que en esa fase el déficit fiscal superó las previsiones del gobierno. Debido a esto, a fines de 1971, la UP se vio obligada a solicitar la renegociación de su deuda externa. Fue así como "solicitó una renegociación de las deudas pendientes hasta 1971 y de los 414 millones de dólares que se estimaba debía pagar en 1972".⁽³²⁷⁾

(324) Petras y Morley, op. cit., p. 121.

(325) Ibid, p. 121.

(326) Ibid, p. 130.

(327) Farnsworth, Elizabeth, op. cit., p. 78.

Cuando la comisión chilena se reunió en el Club de París a principios de 1972 con los acreedores norteamericanos y europeos, Estados Unidos trató de bloquear los acuerdos presionando mediante el reclamo de las indemnizaciones para las compañías cupríferas Anaconda y Kennecott y exigiendo una supervisión formal de los acuerdos por el Fondo Monetario Internacional. Afortunadamente la posición de las naciones europeas occidentales fue favorable a Chile como consecuencia de los tradicionales vínculos de amistad, de la simpatía y buena disposición que esos países demostraron hacia el gobierno de Allende. Aunque al principio Inglaterra y Alemania parecieron apoyar a Estados Unidos, Francia adoptaba una postura neutral y España e Italia se inclinaban hacia Chile, se llegó finalmente a un acuerdo. Se acordó "renegociar el 70 por ciento de la deuda... no se incluyó la supervisión del FMI... y se procedió a ultimar los detalles en forma bilateral con cada uno de los países acreedores"(328) Sin embargo, en marzo de 1973, Estados Unidos era el único que no había firmado los acuerdos bilaterales de negociación. Se llegó así a las postrimerías del gobierno de la Unidad Popular pues, no obstante los múltiples esfuerzos desplegados por la comisión chilena encargada de lograr un arreglo, la posición de la Casa Blanca insistió en que "Chile tiene que reconocer la conexión entre el cobre y la pos

(328) Ibid, p. 79.

posición de los plazos de deuda como temas ligados"(329)

El Plan de la ITT-Casa Blanca para derrocar a Allende. Aunque el Plan de 18 puntos de la ITT-Casa Blanca se extendió entre los meses de octubre de 1971 y febrero de 1972, para culminar con el intento frustrado de golpe el 25 de marzo de 1972, lo incluimos en esta sección de la tesis por considerar que también formó parte del bloqueo invisible impuesto a Chile por Estados Unidos. Cuando analizamos las relaciones entre el gobierno de la Unidad Popular y las Fuerzas Armadas chilenas, mencionamos el plan de la ITT y que su desenlace, el descubrimiento del plan golpista del General Canales en marzo de 1972, demostraba que el sector constitucionalista de los militares daba muestras de deterioro en favor de los grupos castrenses proclives al golpe militar.

En los meses de agosto y septiembre de 1971 el gobierno de Allende estaba negociando comprar "por 92 millones de dólares la participación mayoritaria de la International Telephone en la Compañía de Teléfonos de Chile, mientras que la ITT pedía por su activo cerca de 120 millones de dólares".

(330) Esto motivó a que su vicepresidente Merriam escribiera a Peterson, asesor del Presidente Nixon para Asuntos Económicos Internacionales, planteando una intervención de Esta

(329) Petras y Morley, op. cit., p. 135.

(330) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena" p.254.

dos Unidos en Chile para deponer a Allende. El Plan de 18 puntos de la ITT para derribar a Allende antes de abril de 1972, entre sus propuestas principales incluía:

- "1) Continuar con las restricciones de préstamos en los bancos internacionales, tal como ya lo había hecho el Eximbank
- 2) Silenciosamente hacer que un gran número de bancos privados norteamericanos hagan lo mismo.
- 3) Conversar con fuentes extranjeras con el mismo propósito.
- 4) Aplazar compras en Chile dentro de los próximos seis meses. Usar el stock de cobre norteamericano en vez de comprarlo en Chile.
- 5) Provocar una escasez de dólares en Chile.
- 6) Discutir con la CIA cómo puede cooperar en este apretón de seis meses.
- 7) Tomar contacto con buenas fuentes entre los militares chilenos. Retrasar la entrega de combustible a la Marina y de gasolina a la Fuerza Aérea. (Esto tendría que ser manejado cuidadosamente, de otra forma podría ser peligroso).
- 8) Probablemente será necesario dar ayuda en dólares a los medios de comunicación....

- 17) El mayor número posible de mercados norteamericanos deben ser cerrados para Chile. De la misma manera, cualquier exportación norteamericana para Allende debe ser retrasada o detenida.
- 18) Estados Unidos debe consultar con otros gobiernos. Esto debe incluir a los países a quienes Chile debe dinero. Las reservas monetarias de Allende están bajando rápidamente y ha propuesto ya una renegociación de los pagos de la deuda exterior"(331)

El Plan, además, se refería a los agentes internos que podían servir de apoyo en los términos siguientes: "Hay un comienzo de preocupación por parte de los militares. Ven el escenario chileno derrumbándose lentamente y se dan cuenta de que, antes de que el caos económico tenga lugar, las Fuerzas Armadas tendrán que dar el paso y restablecer el orden. También hay signos de ansiedad dentro de la Armada chilena que tradicionalmente ha sido un grupo de élite. Las posibles fuerzas disuasivas que pueden frustrar los planes de Allende y que siguen intactas son: . . .

- 1) los militares
- 2) el aparato judicial
- 3) la administración pública
- 4) los mass-media
- 5) un fragmento del poder legislativo"(332)

(331) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena" p.p. 254 a 256.

(332) Ibid, p. 256

El Plan que comentamos fue puesto en práctica en los meses de octubre de 1971 a marzo de 1972 y coincidió con los sucesos referidos en el capítulo 3.5. Dentro de ellos destacan la marcha de las cacerolas vacías y la acusación constitucional al Ministro del Interior, Jose Tohá. Recordemos que las manifestaciones callejeras organizadas por la oposición burguesa fueron varias y que la prensa opositora se caracterizó por su artera crítica al gobierno. Garcés afirma que los artículos periodísticos de el diario "El Mercurio", en estos meses, revelan una perfecta correspondencia con el diseño del plan subversivo: "Limitándonos a la primera página, entre octubre y marzo, se destina un total de 111 artículos a crear la imagen de 'desorden económico y social' y 66 a glosar actuaciones de la extrema izquierda que permitieran mostrar al gobierno como 'desbordado por su base'; otros 50 comentarios denuncian pretendidos 'atentados contra la legalidad' por parte de la izquierda y 36 se destinan a supuestas manifestaciones de 'desorden público'. En el momento culminante, en marzo, inventa una supuesta 'infiltración comunista' dentro de las Fuerzas Armadas"(333) A continuación Garcés agrega "que el 11 de abril siguiente, el gobierno de Estados Unidos retribuyó este trabajo con 965.000 dólares, subvención decidida por el Comité de los Cuarenta en favor del diario El Mercurio"(334) El Comité

(333) Ibid., p. 262 .

(334) Ibid., p. 263 .

de los Cuarenta es un órgano secreto de espionaje de la CIA y, en esa fecha, estaba presidido por Henry Kissinger.(335)

4.2 Política Matus-Millas: un intento de respuesta a la crisis económica.

A mediados de junio de 1972 pese al aumento de la producción industrial, que en el primer semestre había alcanzado su punto más alto en todo el periodo del gobierno de la Unidad Popular, la economía chilena presentaba serios problemas: desabastecimiento y especulación en el mercado negro, la falta de excedentes en las empresas del área social, alzas de salarios, déficit fiscal y de la balanza de pagos y, sobre todo, el agotamiento de la capacidad de importación que, junto con el bloqueo económico de Estados Unidos, amenazaban con estrangular el desarrollo económico de Chile.

¿Qué había ocurrido?

En primer lugar las demandas por alzas de sueldos y salarios a comienzos de este año empezaron a proliferar y los reajustes de remuneraciones acordados superaron el alza de los precios. Además, los trabajadores de las grandes empresas del área social lograron obtener beneficios adicionales no incluidos en el porcentaje de aumento de salario sugerido por el gobierno, que fue de 22%. Dentro de estos beneficios se incluían: participación de utilidades, estímulos

por antigüedad, becas para hijos estudiantes, aguinaldo navideño etc, los cuales implicaron desembolsos extraordinarios (336). La demanda reivindicativa salarial tenía varias explicaciones. Una de ellas era que la política económica de carácter redistributivo de la fase inicial del gobierno no era tan fácil de detener bruscamente. Al contrario, había despertado más expectativas especialmente en el sector privado de la economía.

Por otra parte, desde los inicios de 1972, la Democracia Cristiana exacerbó su oposición al gobierno aprovechando el ascendiente que tenía en sectores obreros y capas medias asalariadas y el MIR, para acelerar la marcha del proceso, hizo lo mismo entre los grupos más desposeídos. Como apunta Bitar: "Con el propósito de obtener mayor respaldo entre obreros y empleados, la Democracia Cristiana apoyó las demandas más desorbitadas, rechazando las ofertas del gobierno. La extrema izquierda se sumó a esta tarea, movilizándose de preferencia a sectores urbanos marginales y campesinos cuyas necesidades eran aún más apremiantes. Estos sectores comenzaron a tener gravitación creciente y se manifestaron activamente en pos de más viviendas, más servicios y más tierras"(337)

(336) Cfr. con Bitar Sergio, op. cit, p. 138 .

(337) Ibid, p. 138 .

En esta época también empezaron a aflorar factores causantes de inflación. Así como en el periodo anterior el -- proceso inflacionario no se desarrolló debido a que el au-- mento de la demanda se satisfizo con el aumento de la pro-- ducción y, en menor medida, de las importaciones, ahora, la situación cambió. Durante los primeros meses de 1972 la capacidad instalada ociosa de las empresas se copó pues se esta produciendo al máximo de la capacidad instalada exis--tente. Además, como consecuencia del bloqueo económico norteamericano al país las disponibilidades de divisas para importar productos extranjeros se agotaron. El extricto - control estatal sobre los precios pudo lograr contener mo-- mentáneamente las alzas de precios pero el exceso de demanda provocó escasez de artículos. Así, a fines de mayo de 1972, "el control de precios se fue volviendo cada vez me-- nos eficaz y terminó cediendo. Crecieron entonces las so-- licitudes para mejorar sueldos y salarios. El elemento propulsor de la inflación pasó a ser la secuencia precios-salarios-precios"(338)

Los incrementos de remuneraciones al sector público a crecentaron el déficit fiscal y que el gobierno no pudo reponer a través de impuestos a los sectores de altos ingre-- sos. En efecto, el déficit fiscal "entre enero y julio de

(338) Ibid, p. 139.

ese año llegó a 9.000 millones con lo cual en siete meses había alcanzado el 90% de lo programado para todo el año".

(339) Smirnow señala que la Unidad Popular esperaba captar ingresos fiscales "mediante nuevos impuestos a la venta y al consumo de grupos altos y medios propuestos al Parlamento. Pero el Congreso no aprobó estas propuestas dejando un presupuesto desfinanciado. Al mismo tiempo restringió el financiamiento de aquellas instituciones públicas responsables de la reforma agraria y de la creación del área social. Ante esta obstrucción parlamentaria el gobierno de Allende debió optar entre reducir las alzas de remuneraciones, disminuir el ritmo de reforma agraria y de las compras de acciones para conformar el área social, o proseguir a costa de un mayor déficit. Se decidió este último camino".(340)

Finalmente, aunque entre enero y junio de 1972, el índice de la producción industrial "acusó un alza de 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior, la industria estaba trabajando al máximo de su capacidad instalada y, a partir de este punto, todo aumento significativo requería un esfuerzo de inversión apreciable".(341) Esta inversión no podía realizarse debido al bloqueo económico de Estados Unidos al gobierno analizado en el punto precedente. La

(339) Ibid, p. 139 .

(340) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 86 .

(341) Bitar, Sergio, op. cit, p. 142 .

baja del precio del cobre en los mercados internacionales y la suspensión de créditos norteamericanos al país, empezaban a provocar los efectos distorsionadores en la economía chilena que el Departamento de Estado buscaba producir. Una opción para morigerar este problema podría haber sido la ayuda financiera de los países socialistas. Pero tal como vimos en el punto 4.1, el bloque socialista y en especial la URSS, nunca se mostraron dispuestos a brindar una asistencia económica masiva a Chile durante el gobierno de Allende. No obstante, las misiones comerciales enviadas por la Unidad Popular a esas naciones habían obtenido la concesión de créditos para maquinarias, materias primas y recursos de libre disponibilidad. Chile requería fundamentalmente este último tipo de créditos para comprar refacciones y repuestos para su planta industrial y superar el déficit de la balanza de pagos del país. Así, "la URSS otorgó un crédito por 102 millones de dólares y China otro por un monto de 52 millones. Agregando a ellos los créditos proporcionados por países de Europa Oriental, Chile obtuvo en 1972 un volumen total de 226 millones de dólares" (342)

Pero como observan Farnsworth, Feinberg y Leenson, basándose en cifras de un estudio de la CORFO que detallaba los créditos de que se disponía al mes de junio de 1972,

(342) Ibid, p. 140 .

"el 92% de los créditos otorgados por los países socialistas no habían sido utilizados. Esto se debía, en parte, a que los créditos de los países socialistas son en su mayoría créditos a largo plazo para la importación de bienes de capital o de transportes y Chile necesitaba, en forma inmediata, créditos para bienes de consumo y para los repuestos y partes de maquinaria fabricada en Estados Unidos".(343)

Todos los problemas económicos mencionados se traducían, en el plano político, en una ofensiva sostenida y cada vez más dura de la alianza opositora del Partido Nacional y Demócrata Cristiano, en un avance de la oposición en las masas de la izquierda mirista y en la definición y progreso de una línea más a la izquierda de la línea hegemónica al interior de la Unidad Popular.

Tal situación motivó que, a mediados de junio de 1972, se efectuara una reunión de los dirigentes de los distintos partidos de la Unidad Popular en una hostería ubicada en Lo Curro, un lugar cordillerado cerca de Santiago, a la que por su carácter secreto, la prensa la calificó de "cónclave".

Reunión de Lo Curro: En ella se enfrentaron dos posiciones en torno a la redefinición de las tareas tácticas y estratégicas planteadas. Para presentar esquemáticamente las concepciones divergentes respecto a las opciones de po-

(343) Farnsworth, Elizabeth, et. al., op. cit., p.p. 83-84.

lítica económica de los dos partidos más importantes dentro de la Unidad Popular, podemos decir que se expresaron a través de dos consignas: "consolidar para avanzar" (Partido Comunista) y avanzar sin transar" (Partido Socialista)"(344) Más allá de los juegos de palabras, a continuación veremos las medidas concretas planteadas en Lo Curro y los análisis subyacentes detrás de las posiciones de cada partido.

Las discrepancias respecto a las tácticas alternativas a adoptar se debían a la crítica situación por la que atravesaba el gobierno popular, pero no se presentaban por primera vez en el seno de la UP. Hemos señalado a lo largo de nuestra tesis que el bloque popular carecía de homogeneidad ideológica en lo referente a la interpretación de la estrategia política de transición al socialismo en democracia o vía chilena al socialismo. Así lo consignamos al iniciar nuestra exposición acerca del gobierno del Presidente Allen de en el punto 3.1 y reiteradamente después insistimos en estas divergencias que se fueron manifestando en el transcurso del proceso gubernamental. Veremos cada una de ellas a continuación.

La caracterización de la situación coyuntural hecha por el Partido Comunista está perfectamente reflejada en un texto presentado en la reunión de Lo Curro por su dirigente,

(344) de Riz, Liliana, op. cit, p. 149.

Orlando Millas, que decía: "Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de -- fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del gobierno popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del gobierno popular, su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de sus enemigos, y por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a las capas medias y de terminados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos. En estas condiciones, en nada ayuda al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro, cuando haya condiciones más desarrolladas. Esos asuntos, en su momento deberán estudiarse mejor y abordarse adecuadamente. No obstante, ahora pueden contribuir a que desperten suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias... podemos y debemos completar la Reforma Agraria en los términos de la ley vigente e igualmente completar la constitución del área de propiedad social de la economía en los marcos del programa básico de gobierno, o sea, respecto de las grandes empresas de importancia estratégica. Ello requiere aislar a los sediciosos, afianzar el gobierno, conso-

lidar su obra, y modificar en su favor la correlación de -
fuerzas".(345)

En esencia, la posición expuesta en Lo Curro por los dirigentes comunistas y que fue definida por Millas en los términos señalados anteriormente, consistía en una rectificación de la política anterior y de sus efectos. De esta forma, el Partido Comunista proponía:

- a) En lo referente al área de propiedad social, era necesario limitarse a un conjunto de empresas fundamentales para la economía del país y no abarcar otras por el momento, lo cual no crearía conflicto y problemas de entendimiento con el Partido Demócrata Cristiano.
- b) Conseguir que las empresas del área social produjeran utilidades y lograr así una reducción del déficit presupuestario. Para alcanzarlo era preciso realizar una planificación eficaz y elaborar una política de salarios y precios.
- c) Mantener la redistribución del ingreso mediante reajustes jerarquizados de salarios y, de ser posible, igual al alza del costo de la vida.
- d) Dar garantías a los pequeños y medianos empresarios contra toda eventualidad de estatización y garantías

(345) Ibid, p. 150.

para obtener utilidades razonables. Con esto se pretende restablecer la confianza de los empresarios en el gobierno y, de esta manera, invertirían en la producción en vez de invertir en el mercado negro y en la especulación.

- e) Fijar ciertos límites a la inflación y al déficit presupuestario a fin de sanear la economía para obtener la concesión de créditos externos importantes y, con el mismo objeto, adoptar una política de relativa conciliación con Estados Unidos.
- f) Estas medidas propuestas debían permitir un descenso de la inflación, una disminución de la escasez de artículos y así reconquistar a las capas medias, modificando de esta manera la correlación de fuerzas sociales favorables al gobierno(346)

Por su parte, el Partido Socialista expuso su posición a través de su Secretario General, Carlos Altamirano quien, en aquella reunión, manifestó que: "Es necesario un readecuamiento de la política económica... ahora había que ir a un aumento de la inversión, un reordenamiento del comercio exterior desde el mercado norteamericano al de los países socialistas y del resto del mundo capitalista. En suma, es ne

(346) Cfr. con Bruna Susana, op. cit, p.p. 173-174 .

cesario entrar en una nueva etapa, no de consolidación, sino de profundización y desarrollo del proceso. Creemos que ambas posiciones no son contradictorias. Es perfectamente posible avanzar, pero sin descuidar el manejo eficiente de las empresas, la capacidad de los funcionarios y la planificación de la economía"(347)

Arnoldo Camú, otro dirigente del Partido Socialista, refutaba la tesis de Millas evidenciando así las discrepancias con los comunistas. Camú afirmaba: "La correlación de fuerzas no podrá mejorarse en favor de las fuerzas revolucionarias si el gobierno vacila y se lanza a una política de concesiones destinada a lograr la neutralidad política de los sectores medios. La ampliación de las bases de apoyo popular debe descansar, en esta perspectiva, en la transformación de las relaciones de propiedad y de trabajo. Para ello, se impone acelerar el avance coordinado del programa económico apoyándose en una política revolucionaria de masas"(348) Esta postura no era mayoritaria dentro del Partido Socialista, correspondía más bien al sector altamirana de aquél y era compartida, dentro de la Unidad Popular, por el MAPU y fuera de ella, por el MIR.

Estos sectores más izquierdistas del bloque de gobierno proponían, en materia económica, la concesión de reajus-

(347) de Riz, Liliana, op. cit, p. 150-151.

(348) Ibid, p. 151.

tes de sueldos y salarios superiores al alza del costo de la vida para las clases asalariadas e inferior para las clases favorecidas; una política tributaria elevada para la burguesía y una disminución de los impuestos indirectos para mejorar el nivel de consumo popular; una política de importaciones para servir a la producción de bienes esenciales al consumo popular; una política de distribución discriminatoria de los bienes de consumo que favoreciera a las masas(349). Como sostiene Bruna, obviamente estas medidas no podían aplicarse sino por medio de la creación de canales de distribución controladas por los trabajadores lo cual implicaba el fortalecimiento y multiplicación de las organizaciones de control popular como las JAP. Es decir, "no era posible sin los mecanismos de control de masas, pero relacionados con los mecanismos de control del gobierno como DIRINCO, DINAC, etc. Tampoco era posible llevar adelante la política de precios, de salarios, de producción, de importaciones, de impuestos y de abastecimientos discriminatorios, sin el control de los trabajadores sobre las empresas, incluidas aquellas del sector privado"(350)

Ante los planteamientos económicos de los sectores más izquierdizantes de la Unidad Popular, Millas oponía el argu

(349) Cfr. con Bruna, Susana, op. cit, p. 175 .

(350) Ibid, p. 175 .

mento de que el control obrero en la industria privada no estaba contemplado en el Programa Básico de gobierno de la UP. Así, afirmaba: "Lo que representa una negación absoluta de la política de la UP es la proposición de una administración que se constituya unificando las organizaciones populares en consejos de trabajadores que mediante asambleas de base resuelvan cuestiones de interés inmediato para ellos, como la del abastecimiento por medio de las JAP... Todo esto es anarquismo puro". (351)

Por otra parte no está demás precisar que, al margen del cónclave de Lo Curro, los grupos de la extrema izquierda del MIR planteaban en esos momentos, junto con las mismas posiciones del Partido Socialista y del MAPU en la reunión, la necesidad de desconocer la deuda externa, liberando así a Chile de un pesado fardo; permitir el control obrero en las industrias privadas y reducir así las presiones economicistas de los proletarios en las fábricas del área privada e inscribir estas medidas en el marco de la lucha por el poder político.

Las distintas posiciones descritas traslucían una estrategia distinta de alianza de clases y sus correspondientes corolarios en el plano político.

(351) Ibid, p.p. 175-176 .

En las medidas económicas propugnadas por el Partido Comunista estaba el esfuerzo de reconstruir el esquema de alianzas del programa electoral de la Unidad Popular, preservando por tanto los intereses económicos del gran capital no expropiado y de gran parte de los sectores de las clases medias -- que se habían ubicado en franca oposición al gobierno. El precio a pagar era el riesgo de no poder sellar la alianza con los grupos de campesinos y pobladores descontentos y deteriorar el gran apoyo del proletariado.

Los comunistas creían que valía la pena sacrificar a los primeros en esta etapa y confiaban que la clase obrera se mantendría agrupada en torno a los partidos de su clase y a su gobierno por razones político-ideológicas. Claro está que estaban conscientes de que la intransigencia de la burguesía y del imperialismo norteamericano continuarían y de que con la política de austeridad que proponían se dificultarían las posibilidades de ganar el Parlamento en marzo de 1973. Por eso, la lógica de la política económica propuesta por el Partido Comunista tenía un contenido concreto: el aislamiento de la izquierda revolucionaria representada por el MIR y el acuerdo estratégico con la Democracia Cristiana sin la cual la alianza de clases buscaba por los comunistas no podría concretarse políticamente. Pero la debilidad de esta línea, en esos momentos mayoritaria pues la compartían, además, los sectores

de la izquierda moderada del Partido Socialista y el propio Allende, residía en las dificultades para reconstruir esa alianza en esta coyuntura. Las huellas que habían dejado las luchas sociales referidas en el capítulo anterior y la acción del bloqueo y desestabilización económica del Departamento de Estado norteamericano, hacían muy difícil construir aquella alianza. Lo demostraría el fracaso de las conversaciones emprendidas con los demócratacristianos después de la reunión de Lo Curro.

La posición sostenida por la fracción altamirana del Partido Socialista y el MAPU se negaba a poner en peligro la unidad del proletariado y el subproletariado, es decir, campesinos y pobladores, y en cambio se pronunciaba por endurecerse con la mediana y pequeña burguesía. Esta línea implicaba deteriorar aún más la posibilidad de atraerse a las clases medias quienes ya se encontraban mayoritariamente volcadas en contra del gobierno.

Por último, la debilidad fundamental de la postura de la extrema izquierda mirista era su exterioridad a la UP y, por tanto, al eje del movimiento popular lo que la conducía a hacer formulaciones políticas generales fuera de las condiciones concretas de aplicación. Debido a ello, en esta fase final del gobierno, se limitó a exacerbar lo que ya había venido rea

lizando casi desde que Allende asumió la presidencia de la nación. A través de sus organizaciones de masas, el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), el Movimiento de Campesinos Revolucionarios, el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) y la Junta Nacional de Pobladores Revolucionarios, desbordó el marco de la política económica del gobierno como una manera de presionar por reformas más radicales que, en última instancia, se reducían a la toma del poder político por el pueblo.

En el conclave de Lo Curro triunfó plenamente la política propuesta por el Partido Comunista. El ministro de Economía Vuskovic, blanco de ataques de la burguesía y considerado como sometido a las tendencias izquierdistas fue reemplazado por el socialista Carlos Matus. El centro de la decisión económica se le asignó a Orlando Millas, quien asumió el Ministerio de Hacienda a mediados de junio de 1972. Se inició así una nueva etapa del gobierno que en los círculos oficiales se llamó la Nueva Economía política o NEP chilena, aludiendo a la implantada, medio siglo antes, por la revolución soviética.

Como apunta Bruna "estos acontecimientos marcan una coyuntura que calificará aún más diferentemente el proceso de la 'vía chilena'. Por lo que concierne a la UP, será el enfrentamiento entre las dos tácticas preexistentes y ahora manifiestamente opuestas. Por lo que concierne a la burguesía, será

la prosecuci3n a3n m3s profunda de una t3ctica de bloqueo econ3mico que, a juicio de esta clase, desembocaría en una reconquista legal del poder".(352)

A reseñar los aspectos m3s importantes que revisti3 este proceso dedicaremos los capítulos siguientes. La reanudaci3n del di3logo con la Democracia Cristiana y la respuesta del -- sector m3s izquierdista de la Unidad Popular y del MIR a la polític a Matus-Millas, simbolizada por la Asamblea Popular de Concepci3n iniciada el 26 de julio de 1972 ser3n, entonces, los temas que desarrollaremos a continuaci3n.

4.3 Di3logo UP-DC y los problemas de conducci3n polític a en la izquierda.

Una semana despu3s de finalizado el c3nclave de Lo Cu-- rro se iniciaron las pl3ticas con el Partido Dem3crata Cristiano y se prolongaron hasta los primeros días de julio de 1972. A prop3sito de esas conversaciones, el 17 de junio de ese a3o, el senador democristiano Ren3n Fuentealba, manifes-- taba al diario "El Mercurio" en su condici3n de presidente del PDC: "Hay sectores de izquierda y derecha que desean el enfrentamiento. Esto no favorece a nadie. Nuestro partido ha actuado dentro de su 3tica polític a y est3 defendiendo

(352) Ibid, p. 177.

sus ideas con todas sus fuerzas. El Presidente de la República nos llamó para conversar sobre el proyecto demócratacristiano. No variaremos nuestra posición. Seguimos y seguiremos en nuestra oposición y en tal sentido denunciaremos y condenaremos todo hecho por el cual el gobierno se aparte de sus compromisos de las garantías institucionales, para conducir a un proceso de estatización que sólo tiende a desembocar en la dictadura".(353)

Lo manifestado por el que entonces era presidente de la Democracia Cristiana al principal periódico de la oposición al gobierno, era el reflejo de que Fuentealba "se sentaba a la mesa de las conversaciones con la obligación de responder a los sectores más reaccionarios que lo presionaban dentro de su partido y por tanto endureciendo su actitud frente al gobierno anticipadamente".(354)

Días después, el 20 de ese mismo mes, la totalidad de senadores democristianos publicaba en aquel periódico una declaración que, en su parte medular, puntualizaba: "Los senadores manifestamos que las proposiciones que haga el gobierno serán analizadas con la mayor profundidad y serán defendidos intransigentemente los puntos de vista que ha tenido la Democracia Cristiana para plantear la reforma constitucional".(355)

(353) Smirnow, Gabriel, op. cit, p. 94 .

(354) Ibid, p. 94 .

(355) Ibid, pp. 94-95 .

Dentro de ese clima de intransigencia se celebraron las pláticas UP-PDC y, naturalmente, fracasaron. El tema central de ellas fue la definición del área de propiedad social que, como vimos en el punto 3.5 había polarizado a la sociedad chilena. La dilucidación de este problema era crucial para el gobierno pues la falta de acuerdo acerca del mismo había convulsionado la vida política del país. En efecto, por un lado, había provocado un deterioro aún mayor de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento. Por otro, había ocasionado la aglutinación entre los medianos y pequeños propietarios, que al comienzo del gobierno si bien estaban expectantes ante las expropiaciones de los monopolios, ahora eran adversos a ellas y hacían causa común con los dueños de las grandes empresas.

El resultado final del diálogo UP-PDC fue negativo. Así como los demócratacristianos insistieron en no retirar del Parlamento el proyecto de ley Hamilton-Fuentealba, el gobierno tampoco cedió e insistió en las 90 empresas destinadas a pasar al área social de la economía que aparecen en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 23

Resumen de las 90 empresas destinadas al Area Social*

Sector	Número de empresas	% de capital total del sector	% de la producción total del sector	% del empleo total del sector	% de participación de los diez accionistas principales del sector
Industria	74	42,4	14,6	9,9	59,7
Comercio	6	15,5	8,6	1,1	52,5
Transporte y Comunicaciones	6	75,7	*	*	81,8
Electricidad, Gas y Agua	4	8,0	*	*	26,4

* Sin datos confiables.

Mientras se desarrollaban las conversaciones referidas la agitación social en el país se agudizaba y, cuando se conoció el fracaso de esas pláticas, la movilización de la izquierda contraria al diálogo con el PDC y que había vaticinado lo infructuoso del mismo se materializó en iniciativas populares que representaron un intento de desarrollar una fuerza política

(*) Fuente: Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 230.

propia fuera de los cauces de la institucionalidad burguesa vigente. El desarrollo de esas iniciativas constituyó, en la práctica, la hegemonía progresiva de otra línea del movimiento popular que, como veremos más adelante, a partir de entonces y más propiamente en el año 1973, se harían más evidentes. Los dirigentes del sector altamiranista del Partido Socialista, el MAPU y, en especial, del MIR concluyeron que se había llegado al máximo de acumulación de fuerzas bajo una dominante vía legal, es decir, a través del gobierno y que para seguir avanzando era necesario un camino extralegal. Esto no quería decir que se debía intentar la insurrección armada, sino que desarrollar una fuerza política de masas fuera de los cauces de la institucionalidad burguesa para romper el círculo vicioso en que estas reglas del juego tendían a encerrar a la Unidad Popular deteriorando progresivamente sus facultades para gobernar. La iniciativa más clara en este sentido fue la Asamblea del Pueblo celebrada en Concepción.

Asamblea Popular de Concepción. Concepción es la tercera ciudad del país con medio millón de habitantes; es una zona industrial de larga tradición, que integra a la vez a los mineros del carbón, a la industria más avanzada (siderúrgica de la CAP, química, textiles, loza, pizarreño) y una se-

rie de industrias ligeras o intermedias (cemento, en particular) que hacen de ella una gran y deversificada concentración proletaria. Tiene una importante Universidad laica, cuna del nacimiento del MIR. Sus estudiantes y maestros tenían un alto grado de politización. En esa época tenía como Rector al Doctor Edgardo Enríquez Froedden, padre de los hermanos Enríquez, fundadores del MIR, pero no pertenecía a esa organización sino al Partido Radical que integraba la Unidad Popular, y su Vice Rector era el maestro Galo Gómez, antiguo militante socialista. Ambos gozaban de gran prestigio entre el estudiantado universitario y en la zona en general. En Concepción la oligarquía era casi inexistente ya que la mayoría vivía en Santiago y la burocracia mucho menos significativa que en el resto de las ciudades importantes del país. Los partidos obreros, en particular el Socialista y Comunista, contaban con un importante apoyo en la región. El MIR gozaba de la adhesión de vastos sectores de estudiantes universitarios y de pobladores. El MAPU disponía allí con su mayor Regional política y orgánicamente.

Dentro de este contexto, frente a la escalada de la oposición en la capital y en la misma ciudad, donde la oposición al gobierno anunció la realización de una "marcha de cacerías vacías", la izquierda unida: Partidos Comunista y Socialista, MAPU, juventud Radical y MIR decidieron contramanifestar.

Allende y el P.C. nacional se opusieron a ello y pocas horas antes de las marchas el Intendente de Concepción, militante comunista, prohibió ambas. Pero ambas se hicieron. En efecto la izquierda, pese al retiro del Partido Comunista, no quiso desistirse en el último momento. Miles de militantes de la UP llenaron las calles ensordeciendo los gritos de las escasas fuerzas derechistas. Pero la represión de carabineros por orden del Intendente de la ciudad fue violenta, resultando muerto el estudiante de izquierda Eladio Camaño, decenas de heridos graves y cientos de detenidos. El conjunto de la izquierda, salvo el Partido Comunista, reaccionó dando a conocer estos hechos criticando la represión y la postura del gobierno. Por primera vez se hacía pública la divergencia seria entre las dos líneas existentes en el seno del movimiento popular: la de Allende, el Partido Comunista y sectores de izquierda moderada del Partido Socialista y la del ala altamiranista de este último, el MAPU y el MIR.

Sin embargo las condiciones locales de Concepción y el desarrollo de la lucha social en esa zona, en especial, los problemas suscitados a raíz de un intento de devolver una gran empresa textil al capital privado, originaron exigencias para materializar la línea que planteaba la necesidad de crear nuevas plataformas políticas de lucha de las masas y

fuera de la institucionalidad burguesa, allí donde existieran las condiciones políticas para hacerlo.

De esta forma se reunió en Concepción, el 26 de julio de 1972, la Asamblea del Pueblo de Concepción convocada por el Partido Socialista local, el Partido Radical, la Izquierda Cristiana, el MAPU, el MIR y los más importantes sindicatos obreros, campesinos y estudiantes de la provincia, así como los campamentos de pobladores, juntas de vecinos, JAP y centros de madres.

La convocatoria a esta iniciativa la hizo el MAPU regional de esa ciudad en los siguientes términos: "De la realización y el éxito de dicha Asamblea depende en una medida muy grande que el proceso revolucionario en nuestra región se desarrolle, no por cauces burocráticos o paternalistas, sino en conformidad a una correcta línea de masas"(356)

Por otra parte el MIR regional afirmaba: "Desde esta Asamblea popular y democrática los trabajadores volverán a las fábricas y fundos, los pobladores a los comités y juntas de vecinos, las mujeres a sus centros de madres, los estudiantes a sus centros de enseñanza a impulsar vigorosamente la constitución de los Consejos Comunales de Trabajadores. Desde estos consejos trabajarán incansablemente por conquistar la representación, la voluntad y el apoyo de las

(356) Toer, Mario, op. cit, p. 159-160.

inmensas mayorías que constituyen los pobres del campo y la ciudad. En cada comuna poniendo a los Consejos Comunales de Trabajadores a la cabeza de las luchas de las masas contra la burocracia, al Parlamento y la Justicia de los patrones"(357)

Miles de personas llenaron el Teatro de la Universidad de Concepción y debatieron durante horas las formas concretas de organizar de inmediato el poder popular de las masas al margen del gobierno. Al final se votaron dos declaraciones, una de los partidos de la Unidad Popular y otra del --MIR, coincidentes en la necesidad de emprender tareas políticas más allá de las iniciativas gubernamentales pero sin desligarse de éstas, en especial, organizando Consejos Comunales de Trabajadores que coordinasen e impulsasen la dirección y el control popular en los diferentes frentes de masa (fábricas, escuelas, asentamientos campesinos, poblaciones, etc). La representatividad indiscutible de la Asamblea, su carácter masivo, el representar el inicio de una estrategia de conjunto desvirtuaron la campaña del Partido Comunista quien pretendió presentar el hecho como "una maniobra de la ultraizquierda"(358) Tuvo que ser el propio Presidente Allende quien redactase una carta pública de desaprobación a la Asamblea en la cual reafirmaba la primacía absoluta del

(357) Ibid, p. 160 .

(358) Ibid, p. 160 .

gobierno en la conducción del proceso y donde "exigía que los Comités Centrales de los respectivos partidos tomaran medidas frente a sus regionales de Concepción". (359)

Las directivas nacionales del MAPU y del Partido Comunista acataron la decisión presidencial y desautorizaron la iniciativa de la Asamblea Popular. El Partido Socialista en cambio no pudo reprobar un acto que se ajustaba, de hecho, a los planteamientos de su Secretario General, Carlos Altamirano. El Secretario Regional de este partido en Concepción, Rafael Merino, afirmaba en esa ocasión refiriéndose a las críticas que el Partido Comunista había hecho a la mencionada Asamblea: "Creemos que es grave que un partido de la UP desautorice a la Asamblea del Pueblo con un lenguaje que lo confunde con el Partido Nacional".(360) En efecto, la prensa derechista de Santiago y de la ciudad de Concepción, desataron una intensa campaña en contra del gobierno por permitir lo que calificaron como el desbordamiento de sus bases para la concertación de acuerdos extra legales y ultra izquierdistas.

En el fondo la Asamblea Popular de Concepción no representó tanto, como lo interpretó el Presidente Allende y el Partido Comunista, un intento de crear un Parlamento al margen de la institucionalidad vigente. Fue más bien un acto de propaganda impulsor de nuevos órganos de poder popular que,

(359) Ibid, p. 160 .

(360) Ibid, p. 160 .

en la práctica de la gestión cotidiana, fueran dando a las masas la responsabilidad de sus propios asuntos, coincidiendo o no, oponiéndose o no a la acción del gobierno, según ésta tuviese el viejo o nuevo sello: la dominante burguesa o las marcas de la brecha abierta en el Estado por el movimiento popular. Pero sabiendo que tal estrategia no podía conducir a una utópica autogestión por las bases sin condiciones políticas generales sino a la obtención de nuevas posiciones que, desde fuera del aparato del Estado, se fueran convirtiendo en trincheras de lucha o en intereses políticos concretos que defender y desarrollar por parte de las masas.

En cualquier caso, los partidos de la provincia siguieron adelante en los hechos con la línea así publicitada. Desarrollaron los Consejos Comunales en los que con frecuencia se integraban los trabajadores demócratacristianos. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en la industria textil Caupolicán-Chiguayante de esa ciudad sureña. Los sucesos de Concepción que comentamos tuvieron también su repercusión en la capital y en todo Chile. De hecho, los Consejos Comunales de Trabajadores, con nombres y organizaciones diversas, fueron creados en todo el país y, en particular en Santiago, como órganos coordinadores e impulsores de todas las iniciativas populares en un ámbito dado, sin depender de las instrucciones del gobierno y, por tanto, sin estar limitados por las reglas de juego impues-

tas por la legalidad burguesa vigente. Así se acumularon - fuerzas en los dos planos a la vez. sabiendo que, conforme se radicalizara el proceso y el enfrentamiento de clases, ha bía que desplazarse cada vez más del plano institucional al nuevo espacio político de poder creado en el seno mismo del pueblo. Una demostración de esta aseveración y de la impor tancia de esos órganos populares en la defensa del gobierno de la UP fue el papel que asumieron durante el paro patronal de octubre de 1972 que trataremos más adelante.

Aparte de los Consejos Comunales de Trabajadores mencionados se constituyeron Cordones Industriales cuyo inicio, a fines de julio de ese año, estuvo en el Cordón Cerrillos-Maipú en Santiago. Estaba integrado por trabajadores de Maipú, la región centro-occidental de la capital, y "representaba la ma yor concentración industrial del país: 46.000 obreros traba-- jando en 250 fábricas de diferentes ramas: textil, electrodomésticos, neumáticos, etc. También era el centro de distribución de combustibles para toda la capital".(361) En esa fecha, "cortaron las rutas de acceso de la costa a Santiago pro testandò por la tramitación de que eran objeto en el traspaso al área social de varias industrias de la comuna de Maipú". (362) Sin embargo la creación del Cordón Cerrillos y de otros que se fueron conformando en el transcurso del segundo

(361) de Ríz, Liliana, op. cit., p. 153.

(362) Rodríguez, Felipe, op. cit., p. 108.

semestre de 1972 era "atacada por el Partido Comunista y no recibe reconocimiento oficial de la alta jerarquía del Partido Socialista, sino varios meses más tarde cuando los gre-- mios patronales del transporte y del comercio amenazan la es tabilidad misma del gobierno en octubre del mismo año"(363)

4.4 Estrategia política de la oposición unida y de los gre-- mios patronales contra el gobierno popular.

En las semanas siguientes a la toma de posesión del equipo económico Matus-Millas se observó el desarrollo de un pro ceso contrario al buscado por los sectores dominantes del go bierno en la reunión de Lo Curro. Aparte del fracaso de las pláticas UP-Democracia Cristiana ya referidas, el país empe zó a vivir el incremento de las luchas sociales llegando a veces a enfrentamientos frontales y violentos. Las manif estaciones de masas, sobre todo en Santiago, se sucedían casi a diario con los consiguientes desór denes callejeros entre los partidarios del gobierno y de la oposición a la Unidad - Popular. Ahora se evidenciaba que los mi litantes democrist tianos masivamente salían a la calle junto a los del Partido Nacional, lo cual reflejaba que la Democracia Cristiana se i ba acercando, cada vez más, a las posiciones abiertamente se

diciosas de los nacionales. El 28 de julio de 1972 ambos partidos y la Democracia Radical, acusaron constitucionalmente al Ministro del Interior, el militante socialista Hernán del Canto, a quien responsabilizaron de no detener las acciones desarrolladas por los obreros del Cordón Cerrillos que vimos en el punto precedente. Al mismo tiempo, el Partido Demócrata Cristiano se unía al Partido Nacional y a la Democracia Radical en una Confederación Democrática (CODE) de tendencia derechista, con vistas a enfrentar candidatos opuestos a la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 (364).

Además en el mes de agosto se observó otro fenómeno contrario al que se pretendía llegar en Lo Curro. En efecto, se produjo una aceleración brusca del proceso inflacionario como consecuencia de la devaluación del escudo en "85% promedio para las importaciones y en 33% para las exportaciones y del establecimiento de una política de cambios múltiples llegando a diferenciar cinco mercados: de corredores, de alimentos y combustibles, de materias primas, de bienes de capital y de productos suntuarios. De esta forma la tasa de cambio para alimentos varió en 58,2%; bienes de capital 110,5% y suntuarios 220%".(365) Paralelo a esto el gobierno decidió alzar los precios de algunos artículos alimenticios, agropecua

(364) Cfr. con Bruna, Susana, op. cit., p. 147

(365) Bitar, Sergio, op. cit., p. 158

rios e industriales "en porcentajes que oscilaron entre el 30 y el 150%. Así en aquel mes se alzaron, entre otros, los precios de los cigarrillos en 100%; productos agrícolas, entre 36 y 110%; textiles, entre 60 y 90%; café y té, en 100%; pan, en 78%; azúcar en 100%; leche, en 105%. En septiembre se otorgaron nuevos precios a la harina, vidrios, detergentes, vestuario, calzado y otros".(366)

Como una forma de evitar que el incremento de los precios de productos esenciales deteriorara en exceso el poder adquisitivo del pueblo, el Presidente Allende decretó "una bonificación en dinero igual para todos los trabajadores y resolvió otorgar un reajuste de remuneraciones a partir de octubre que compensara los aumentos de precios verificados desde enero de ese año".(367)

El alza brutal de precios produjo un gran desconcierto popular e incluso entre militantes y dirigentes de la Unidad Popular. El MAPU se mostró en desacuerdo con alzar productos como el pan, la leche, azúcar y reclamó alzas y reajustes discriminados según producto y nivel de ingresos. El MIR denunció la medida como una política antipopular. Los socialistas, la Izquierda Cristiana y algunos comunistas, se mostraron extrañados por la falta total de una discusión previa de las alzas en el seno de las masas. Económicamente sí

(366) Ibid, p. 158 .

(367) Ibid, p. 158 .

se lograron ciertos efectos: algunos productos, celosamente acaparados por los comerciantes, salieron a la venta y, otros, que se vendían en el mercado negro debido a la nivela ción de su precio empezaron a venderse en los centros comer ciales regulares.

Pero políticamente se produjo la mas grave crisis - desde la elección de Allende. Las JAP se disgregaron en su mayor parte. Recuerdo que el comentario unánime de sus integrantes era ¿para qué controlar si había decaído tanto el poder adquisitivo? La derecha opositora, en especial la Democracia Cristiana, utilizaron a fondo la ocasión llevando su demagogia al extremo inusitado de a la vez, acusar al go bierno de hambreador del pueblo, pedir que hubiera otro rea juste en enero además del de octubre, y de obstruir en el Parlamento el proyecto de reajuste para el 1o. de octubre (368) con el fin de bloquear al gobierno y ampliar la crisis.

En ese clima se desarrollaron las asonadas fascistas de septiembre y se crearon las condiciones para el intento de golpe de Estado, conocido como Plan Septiembre que, al mismo tiempo coincidían con la amenaza de la Kennecott de embargar los envíos de cobre chileno a Europa, como señalamos en el capítulo anterior.

(368) Cfr. con Bruna, Susana, op. cit, 151.

A partir de entonces la estrategia de la oposición unida en la Confederación Democrática (CODE) pasó a un abierto desafío al gobierno con miras a su derrocamiento. Como apunta el periodista Gregorio Selser, en agosto "se suceden demostraciones de estudiantes, trabajadores de la D C y amas de casa - que se unen en su protesta por las alzas de precios y la escasez de alimentos intencionalmente provocados para desabastecer a la población... Se desata una huelga opositora nacional de 48 horas de duración del comercio minorista. Estudiantes derechistas de colegios privados realizan paros y manifestaciones y queman barricadas en las comunidades del barrio alto de Santiago!"(369)

Otro autor, refiriéndose al abierto desafío que la oposición desató contra el gobierno consigna como hechos demostrativos de ella los intentos de mujeres, pertenecientes al Partido Nacional o Demócrata Cristiano, de asaltar las residencias del Ministro de Economía, Carlos Matus y del General -- Carlos Prats y los golpes propinados a la Ministra del Trabajo, Mireya Baltra(370). Sin embargo lo más grave fue lo ocurrido en una población marginal de Santiago pues evidenciaba que las instituciones armadas, en este caso carabineros, comenzaban a adoptar una actitud concordante con la violencia que nacionales y demócrata cristianos promovían en la capi--

(369) Selser, Gregorio, op. cit., p. 200-201 .

(370) Cfr. Toer, Mario, op. cit., p. 166 .

tal y en todo el país. En efecto, el periodista Selser que se encontraba realizando un reportaje en Santiago se refiere "al asesinato de uno de los pobladores del campamento Lo Hermida durante una incursión policial nocturna realizada presuntamente para buscar delincuentes armados"(371)

A estos hechos acaecidos en el mes de agosto se unieron otros en las primeras semanas de septiembre. Así el 6 de este mes la violencia estudiantil en contra del Ministro de Educación, Aníbal Palma, promovida por la Federación de Estudiantes Secundarios controlada por la Democracia Cristiana y por estudiantes de la Universidad Católica de Santiago, "termina con un ataque a pedradas al edificio del Ministerio de Educación, hiriendo a algunas de las empleadas de secretaría... Además, en esos incidentes, un cartucho de gases lacrimógenos disparado por los carabineros hiere a un manifestante joven, estudiante, y provoca su muerte horas más tarde"(372) Dos días después se realizaron "actos de depredación en manifestaciones céntricas, promovidas por elementos derechistas. Ahora son adultos que han reemplazado en las calles a los estudiantes, secundados en los barrios residenciales altos y aún en los populares por mujeres que otra vez hacen sonar estrepitosamente sus caceras, como protesta por la falta de abastecimiento de artículos esenciales"(373)

(371) Selser, Gregorio, op. cit. p., 200.

(372) Ibid, p. 202.

(373) Ibid, p. 202.

El 11 de septiembre Allende decretó la suspensión de las clases durante diez días para evitar así nuevos enfrentamientos estudiantiles. Además ese día el Presidente Allende entregó a los partidos de la Unidad Popular y a la CUT las bases de una nueva Constitución para que éstos la discutieran, y que tenía planeado proponerla al país si la UP ganaba en las elecciones de marzo de 1973. En ese proyecto constitucional figuraba el reemplazo del Parlamento bicameral por una Cámara Unica o el establecimiento de una Cámara de Diputados junto a otra de trabajadores e incluía la delimitación de las áreas privada, social y mixta de la economía y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las industrias y servicios estratégicos de la nación(374).

En el contexto de agitación y desorden social descritos en párrafos precedentes se produjeron dos sucesos indicadores de que la ofensiva política legal de la oposición burguesa al gobierno pasaba, a la vez, a una ofensiva sediciosa vinculada con el bloqueo económico a Chile del gobierno de Estados Unidos. A continuación nos referiremos a aquellos sucesos: el Plan Septiembre y el paro patronal de octubre de 1972.

(374) Cfr. *ibid*, p. 203.

Plan Septiembre de 1972. Este intento sedicioso tuvo como punto de partida el paro nacional de comerciantes minoristas de agosto, las movilizaciones de estudiantes de instituciones educativas privadas de ese mes y de septiembre antes mencionadas. También se apoyó en una serie de revueltas callejeras en el centro de Santiago, donde los grupos de choque del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana mostraron un alto nivel de organización, y en los conciertos de cacerolas que, sistemáticamente, todas las noches de agosto se tocaban en los barrios residenciales acomodados del sur de la capital.

Tal campaña no era sino la preparación material, psicológica y política de un intento más serio que involucraba a las Fuerzas Armadas basándose en la existencia de varias de las condiciones referidas. En especial, el apoyo de las mujeres burguesas y de las clases medias, que eran las orquestadoras de los ruidos con las cacerolas y de donde provenían los estudiantes de colegios particulares, la desorganización económica a causa de la inflación y desabastecimiento y un cierto descontento popular en las poblaciones.

La seriedad del Plan Septiembre denunciado por el gobierno se reveló cuando en la celebración del 18, día del aniversario de la independencia colonial, se anunció el --

llamado a retiro obligatorio del General Alfredo Canales, instructor Jefe del Ejército, denunciado por el Almirante Justiniano con quien se había puesto en contacto para el desarrollo de los preparativos de un golpe de Estado. Dicho plan pretendía llevar a cabo, en una coyuntura particularmente tensa como la que se vivía, "una provocación que sería la gota que desbordara el vaso, así, por ejemplo, en septiembre de 1972, grupos fascistas disfrazados de miristas y que dirían pertenecer a esa organización efectuarían una masacre de familias de militares en un bloque de viviendas del Ejército. Mientras que otros, disfrazados de carabineros, harían lo propio en poblaciones y campamentos populares... El gobierno descubrió el complot y lo denunció con anticipación"(375)

El General Canales implicado en el intento subversivo era el mismo que, en marzo de ese año, se había sorprendido comprometido en la intentona golpista propiciada por la ITT y descubierta por el Servicio de Inteligencia del Ejército. En esa oportunidad, debido a que la correlación de fuerzas entre los militares constitucionales y golpistas había variado en favor de los últimos, Canales no fue destituido de su cargo. Entonces, este General "se sentía con fuerza suficiente dentro del Ejército para manifestar: A mí no me sacan así no más. Yo no soy Viaux, yo arrastro conmigo a la mitad del

(375) Toer, Mario, op. cit., p. 169.

Ejército. Y, en efecto, más bien que provocar una crisis militar inmediata con la expulsión del General Canales, el sector del alto mando leal al gobierno prefiere postergar esta decisión y desplazarlo a un puesto secundario, al tiempo que presta atención a sus movimientos. Descubierto seis meses más tarde in fraganti organizando la subversión, el Comandante en Jefe del Ejército, general Prats, lo pasa a retiro forzoso no sin problemas internos y la agresiva resistencia del afectado!"(376)

El fracaso del Plan Septiembre se debió a tres factores coyunturales interrelacionados: la respuesta masiva del pueblo apoyando al gobierno; el contraataque de los partidos de la Unidad Popular organizando comités de autodefensa en barrios y fábricas; la actitud de los altos mandos del Ejército y, en particular, de su Comandante en Jefe, General Prats, totalmente legalista e incluso tomando posición pública y explícita contra los intentos sediciosos de las Fuerzas Armadas. Además influyó en el fracaso de aquel plan la posición asumida por el dirigente demócratacristiano de la CUT, Ernesto Vogel, quien hizo causa común con la Unidad Popular ante la agresión de la Kennecott y el embargo del cobre chileno en Francia y rechazó, en una gran manifestación de la oposición, todo intento golpista, no obstante las pifias y críticas de que Vogel fue objeto de parte de la muchedumbre opositora en

esa ocasión.

El primer gran factor determinante fue la respuesta popular, expresada en particular en una gran marcha en el aniversario del triunfo de Allende, el 4 de septiembre de 1972, en que "800.000 adherentes"(377) y otras tantas personas en el conjunto del país desfilaron agitando consignas durante horas y horas con impresionante disciplina y combatividad. Una demostración así de fuerza, en plenas dificultades económicas, mostró el grado de politización alcanzado por el pueblo chileno y cómo sabía discernir, en los momentos decisivos, cuáles eran sus verdaderos enemigos por encima de las contingencias de la política del gobierno. Este hecho invalidó uno de los supuestos del golpe: el descontento popular. Particularmente reveladora en este sentido fue la energía del Partido Comunista en la organización de la lucha antifascista. Esto también permitió a dicho partido lograr reunificar en torno suyo a ciertos sectores de la Unidad Popular inclinados a hacer críticas de izquierda a la política económica de Orlando Millas.

La actitud de las Fuerzas Armadas, en esos momentos, no ofrecía dudas en cuanto a que los grupos dominantes eran los constitucionalistas. Pero esta afirmación requiere de una explicación. La explicación de tal actitud legalista y

(377) Selser, Gregorio, op. cit, p. 201.

profesional, a nuestro juicio, no puede buscarse en una virtud propia de los militares chilenos o de su tradición de no intervencionismo en la política del país. Hemos visto reiteradamente que varias veces se inmiscuyeron en la vida política de la nación. Creemos que es necesario remitirnos a causas ligadas a la situación social y a la ideología de sectores de los militares chilenos en esa época.

Esto no quiere decir que asumamos una interpretación simplista de que hayan sido neutralizados por el gobierno popular mediante ventajas materiales. Es cierto que su nivel de vida real había subido con la Unidad Popular más que el de ningún otro grupo social, y también que el Presidente Allende mantenía una deferencia especial en su trato con los militares, no sólo a través de constantes reuniones y consultas con ellos, sino, ante todo, respetando estrictamente las reglas internas de la institución en todo lo que se refería a organización y carrera. Pero todo esto, pensamos, no explica una actitud de legalidad irrestricta de esos sectores, si no se añade a la inexistencia de contradicciones entre su carácter de preservadores en última instancia de la institucionalidad burguesa y la línea dominante en la Unidad Popular. Es decir, hasta estos momentos, existían dos circunstancias que explican la actitud de ciertos grupos de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos era que no veían en pe

ligro las bases políticas del sistema y, por otro, apreciaban y valoraban el absoluto respeto de Allende por la institucionalidad y legalidad vigente.

La posición de la Democracia Cristiana se entiende perfectamente. Mientras la Unidad Popular no llegara a un punto de crisis total en el seno de las masas, un intento golpista no podía ser sino de extrema derecha, siendo este partido uno de los perjudicados. Mientras que el desgaste progresivo del gobierno, de acuerdo a su estrategia que los mismos ideólogos democristianos denominaran "de los mariscales rusos" y analizada en el punto 3.5 del capítulo tercero, le permitiría ser de nuevo la fuerza hegemónica de un centro derecha unificado. El único obstáculo a esta posición provenía, ahora, de la importancia que tenía en el aparato del partido el ala derechista dirigida por Frei la cual, en estos momentos, asumía cada vez posturas más proclives a un golpe de Estado. Este sector, por los intereses que representaba, trataba de impulsar la línea golpista para crear desorden social y propiciar una intervención de las Fuerzas Armadas. Pero, todavía en este año, no tanto como para dejar la hegemonía al Partido Nacional, quebrando así el sistema de dominación estable que significaba para una fracción de la burguesía la Democracia Cristiana.

El Paro Patronal de octubre de 1972. Las afirmaciones formuladas en el párrafo precedente explican el apoyo demócrata cristiano a un nuevo y grave intento golpista que se desarrolló en Chile a partir del 9 de octubre en el que un paro nacional de los dueños de camiones de transporte, que planteaban reivindicaciones políticas, desorganizó la economía del país y obligó al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional. Trataremos este suceso desde su génesis y para ello será necesario remontarnos en el tiempo.

La tradición gremialista de la alta burguesía chilena data de mediados del siglo pasado. Sin embargo sus organizaciones gremiales siempre estuvieron vedadas para los pequeños y medianos propietarios y sólo, hacia la década de los sesenta del presente siglo, iniciaron una apertura hacia esos sectores. Como afirma Bitar: "Ya durante el gobierno de Frei y re pe ntinamente en el gobierno de Allende, absorbieron a contingentes significativos de la mediana y pequeña burguesía. Así por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura (creada en 1839) agrupaba a los latifundistas. Pero, al advenir la re for ma agr aria, iniciada en 1965, comenzó a abrirse a propietarios medianos. La Sociedad de Fomento Fabril (creada en 1883), sólo reunía a las grandes empresas y a principios de la década de los 60 apenas contaba con 2200 miembros... En 1858 sur gió la Cámara Central de Comercio, que congregaba a los comer

cientes mayoristas y a las grandes tiendas de Santiago. Todas estas asociaciones se unieron en 1935 formando la Confederación de la Producción y del Comercio. A ella se agregó, en 1953, la Cámara de la Construcción, también exponente de las grandes empresas constructoras. Los empresarios pequeños se organizaron con posterioridad. Sólo en 1953 se creó en Chile la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria y Artesanado, que a principios de los sesenta contaba con 7500 miembros. En 1955 surgió la Confederación de Dueños de Camiones y en 1965 la Confederación del Comercio Detallista, ambas representativas de sectores de la pequeña burguesía. Hasta 1970 subsistieron disparidades entre grandes y pequeños empresarios. Sin embargo, durante el gobierno de Allende las divergencias se desvanecieron y a fines de 1971 se creó el Frente Nacional del Sector Privado (FRENAP) que aglutinó por primera vez a todas las asociaciones antes mencionadas"(378)

En lo relativo a la aglutinación de los gremios de profesionistas ocurrió algo semejante. En 1970 existían en Chile nueve colegios cuya función era vigilar el correcto desempeño profesional y la fijación de honorarios por los servicios que se prestaban. Así los colegios existentes y el número de sus afiliados era el siguiente: "Colegio Médico (6000 miembros), Colegio de Abogados (6000), Colegio de Inge

nieros (7000), Colegio de Contadores (19.000), Colegio de Técnicos (4700), Colegio de Dentistas (3500), Colegio de Agrónomos (2700), Colegio de Arquitectos (2100) y Colegio de Periodistas (1900)"(379). En mayo de 1971, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana lograron constituir la Confederación de Profesionales de Chile y, en julio de 1972, avanzaron un paso más en este sentido al agrupar no sólo a profesionistas aislados, como ocurría con esa confederación, sino que los captaron unidos a través de sus respectivos colegios en una Confederación de Colegios Profesionales.

Hemos hecho esta detallada referencia a las organizaciones gremialistas chilenas debido a la importancia que tuvieron en el paro de octubre y al trascendente rol que siguieron jugando durante 1973 hasta la caída del gobierno de Allende. Aún más, en el transcurso de los últimos cinco años los gremios chilenos, por intereses diferentes, se han sumado a la oposición de las fuerzas populares de la izquierda que la actual dictadura ha debido enfrentar desde el mismo 11 de septiembre de 1973.

Dijimos que en la política integradora de los gremios de la burguesía y de las capas medias no estuvieron ausentes los partidos que las representaban. En efecto, gran parte de la bibliografía consultada para nuestra tesis nos habla

de este fenómeno aglutinador de los gremios de los propietarios de medios de producción y de los profesionistas. Dentro de esa bibliografía nos han parecido más ilustrativos los datos aportados por Vázquez Montalbán quien nos relata la trayectoria y la red de enlaces del gremialismo en Chile durante 1972. El autor afirma que, el 4 de marzo de ese año, se efectuó una reunión de destacadas personalidades pertenecientes a la oposición al gobierno de la Unidad Popular. Así, por los gremios patronales, estuvieron: "Orlando Sáenz y Domingo Arteaga, dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA); Jorge Fontaine, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio; Manuel Valdés, presidente de la Confederación Nacional de Empleados Agrícolas; Eduardo Arriagada, presidente del Colegio de Ingenieros, y Alejandro Silva Bascuñán, presidente del Colegio de Abogados"(380).

Luego Vázquez Montalbán agrega una lista de otros nombres tales como: el Ministro de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre que representaba al Poder Judicial; el que entonces era el Presidente del Senado, Patricio Aylwin, que representaba al Poder Legislativo. Por el Partido Demócrata Cristiano estaban los ex ministros de Frei y destacados integrantes del ala derechista de ese partido: Máximo Pacheco, William Thayer, Andrés Zaldívar, Eduardo Hamil

(380) Vázquez Montalbán, Manuel, Editorial Los Libros de la Frontera, Barcelona, 1973, p. 71.

ton y Jaime Castillo Velasco. Por el Partido Nacional participaron, el senador Francisco Bulnes Sanfuentes y el diputado Sergio Dfiez. Además estaban los sacerdotes José Miguel Ibañez Langlois y Eduardo Lecourt; Jaime Guzmán, publicista de la organización fascista Patria y Libertad; el ex ministro de Jorge Alessandri, Julio Filippi jefe en Chile del Opus Dei y el Rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger(381).

En esta reunión las personas citadas acordaron que -- quienes como ellos consideraran que la libertad, la democracia y los derechos humanos estaban seriamente amenazados tenían el deber de actuar con valentía y decisión. Era hora de pasar a la acción. Por tanto decidieron que: "La táctica a emplear era generar un movimiento de masas de la burguesía que culminara con un paro nacional. Este paro debía realizarse en el mes de septiembre, pero la denuncia del gobierno y la enorme movilización popular de apoyo al gobierno, el 4 de septiembre, obligaron a retrasar los planes. Finalmente el paro programado se realizó en octubre"(382)

La fecha fue oportunamente elegida porque desde el punto de vista económico empezaban a manifestarse en forma crítica los efectos del bloqueo norteamericano a Chile. De esta manera se entrelazaban las maniobras de Nixon y Kissin

(381) Cfr. con Vázquez Montalbán, Manuel, op. cit., p. 71.

(382) Ibid, p. 72 .

ger desde la Casa Blanca con las de la burguesía interna. Pero ahora ya no se trataba tanto de impedir el proceso de transformaciones iniciado por el gobierno de la Unidad Popular, sino que se perseguía desarticular la economía del país, provocar un descontento generalizado y el caos social a fin de que las Fuerzas Armadas intervinieran para derribar al Presidente Allende.

Hemos visto que los meses de agosto y septiembre se caracterizaron por una gran efervescencia social, en particular por la agudización de las manifestaciones opositoras a la UP. Paralelamente, "la derecha apoyó su acción política con una estrategia propagandística y guerra psicológica astutamente diseñada, magnificó la escasez y los problemas económicos, amplificó los conflictos y la imagen de anarquía y de desorden público, que sus grupos de activistas se encargaban de estimular, con lo cual los ánimos se exacerbaron. El papel de los medios de comunicación fue vital y la oposición dominaba en ese terreno, en calidad y cantidad"(383) Para darnos una idea del dominio que la oposición tenía entonces en la prensa y radio las cifras siguientes pueden ayudar:

"... los seis diarios de circulación nacional editados por la oposición son comprados diariamente por 540.000 personas, en tanto que 812.000 adquieren los cinco periódicos que se

(383) Bitar, Sergio, op. cit, p. 163 .

publican en provincias... De 155 radioemisoras de onda larga, 115 pertenecen a la oposición y en consecuencia la izquierda tiene influencia variada sólo sobre 40"(384).

Dentro de este clima, unido al sabotaje exterior, se inició el conflicto a través de los gremios que el Partido Nacional y la Democracia Cristiana controlaban. Vimos que, a esa fecha, los gremios estaban articulados y ello se completó con la creación de un frente de colegios profesionales denominado Confederación de Colegios Profesionales. A comienzos de octubre, se agregó el Comando Unico de Camioneros, Taxistas y Autobuseros, conocido también como Frente Nacional del Transporte (FRENAT), dirigido por León Vilarín con lo cual las asociaciones gremiales de la burguesía, grande, pequeña y mediana, abarcaron la totalidad de las actividades productivas y de servicios del país.

Todo empezó cuando a comienzos de octubre, el Comando Unico del Transporte (FRENAT) hizo pública una demanda al Presidente Allende solicitando alza de tarifas, más abastecimiento de refacciones y de vehículos. Hasta ese momento la petición parecía razonable dado a que, desde mediados de año, existía una creciente escasez de piezas y refacciones. Días más tarde esta solicitud que parecía ser exclusivamente gremial adoptó otro cariz. Se desató entonces una ofensiva más

amplia pues la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) pidió un alza del precio del papel para la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa monopólica del área privada, cuya transferencia al área social era defendida por la derecha opositora con el pretexto de que su estatización atentaría contra la libertad de expresión. La petición de aumento del precio del papel fue apoyada por todas las asociaciones gremiales existentes en Chile: las de dueños de camiones, del comercio y pequeña industria, de agricultores, aparte de la SOFOFA patrocinante de la solicitud inicial. Entretanto, los camioneros habían recibido una respuesta favorable del gobierno, pero "en esos mismos días, aprovechando la coyuntura interna, de Kennecott presentó querrelas en los países de Europa pidiendo el embargo del cobre chileno, pues según ella le pertenecía, por cuanto no reconocía la nacionalización. Un tribunal francés acogió la petición en octubre. El gobierno chileno ordenó suspender temporalmente los embarques de cobre a Francia"(335).

El 9 de ese mes los camioneros, pretextando que un proyecto gubernamental para la creación de una empresa de transporte del Estado en la provincia austral de Aysén coartaba la libertad de trabajo, iniciaron un paro nacional del transporte. El Presidente Allende tratando de negociar ci-

tó a los dirigentes del gremio, pero éstos rechazaron el diálogo a lo cual el Ejecutivo respondió con un decreto de reanudación de faenas, y delegó en las Fuerzas Armadas sus atribuciones para hacerlo cumplir. Esto originó el desencadenamiento de paros de solidaridad por tiempo indefinido de todos los gremios de Chile. Dos días antes, los representantes de la CODE, agrupación política constituida recientemente para unificar la acción de todas las Fuerzas opositoras al gobierno de la Unidad Popular, formularon declaraciones a la prensa que evidenciaban la insurrección de la burguesía que se avecinaba. El senador Bulnes San-fuentes decía: "Un gobierno que nace legítimo pero que viola la Constitución sistemática y planificadamente, se convierte en un gobierno ilegítimo; la posición del Partido Nacional es que este gobierno se ha constituido en ilegítimo"(386) Por su parte, el senador Julio Durán de la Democracia Radical, afirmaba: "Allende se ha salido de la Constitución"(387) y el senador demócrata cristiano Patricio Aylwin acusaba al Presidente "... de llevar a cabo una farsa democrática y de no respetar la Constitución Política como se había comprometido el 4 de noviembre de 1970"(388). El 10 de octubre la CODE efectuó una gigantesca manifestación en Santiago donde Sergio Díez, el orador del Partido Nacional, sostuvo: "No quere-

(386) Diario "El Mercurio", de 8 de octubre de 1972.

(387) Ibid, 9 de octubre de 1972.

(388) Ibid, 8 de octubre de 1972.

mos más declaraciones. Está bueno de quejas y diagnósticos. Se han empleado demasiadas palabras en cada denuncia. De ahí que ha llegado la hora de la acción!"(389)

El día 13 de ese mes decretaron un paro nacional indefinido, en apoyo al gremio del transporte, la Confederación de Comercio Detallista y Pequeña Industria, el Sindicato de Choferes de Taxis, la Confederación de la Producción y el Comercio y la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y el Artesanado. A continuación los partidos de la oposición agrupados en la CODE declararon públicamente su apoyo al movimiento huelguístico de los gremios patronales e instruyeron a sus militantes para que participaran en la escalada reaccionaria. El diario "El Mercurio", en su editorial del 15 de ese mes, expresaba "... si la legalidad está siendo usada para sacar al país de los quicios constitucionales y para implantar la dictadura del proletariado en forma paulatina, se daría la paradoja de que los actuales defensores del orden público estarían del lado de la revolución marxista, esto es, por definición contra el orden vigente, mientras que los que desobedecen a esa autoridad revolucionaria estarían del lado del orden público y de las garantías constitucionales"(390) Era evidente que el diario vocero de los intereses de la burguesía opositora a la UP hacía un

(389) Ibid, 11 de octubre de 1972.

(390) Ibid, 15 de octubre de 1972.

llamado a las Fuerzas Armadas que, en esos momentos, obedeciendo al Presidente Allende, se encargaban de impedir que el paro de los transportistas — "las arterias de Chile"(391) como los llamaba Allende — paralizara al país. Ese mismo día se sumaba a la huelga la Sociedad de Fomento Fabril que agrupaba a los dueños de la mediana y gran industria, acordando "instruir a los industriales para que procedieran a paralizar sus actividades en forma indefinida"(392) Enseguida se unían a esta oleada de paros los estudiantes de la Universidad de Chile y Cato'lica, un sector de los empleados bancarios, los colegios de los médicos, dentistas, ingenieros, abogados, oficiales de la marina mercante, sectores de estudiantes secundarios y profesores de la Universidad de Chile y se incorporaban a las violentas manifestaciones contra el gobierno que se organizaban en la mayoría de las ciudades del país.(393)

Al mismo tiempo, en el Parlamento, la oposición acusaba constitucionalmente a Alfredo Joignant, Intendente de la provincia de Santiago (394) y el diario "El Mercurio" proseguía con sus publicaciones sediciosas. El 20 de octubre en sus columnas aparecía un comunicado de la CODE que decía: "El único responsable de las causas que han originado el conflicto huelguístico que los chilenos estamos padeciendo, es el gobierno que preside el señor Salvador Allende que ha atropellado per-

(391) Toer, Mario, op. cit., p. 175.

(392) Smirnow, Gabriel, op., cit., p. 105.

(393) Cfr., Smirnow, Gabriel, op., cit. p.p. 105 y 108.

(394) Cfr., Bruna Susana, op. cit., p. 147.

manentemente los compromisos contraídos y cuya nefasta política económica ha creado un caos total y un descontento general ... Los partidos confederados, fieles a su tradición democrática, lucharán sin vacilaciones en el cumplimiento de sus deberes, aunque ello los conduzca hasta las consecuencias más extremas"(395)

Efectivamente, los partidos de la CODE buscaban el cambio del gobierno, o bien, su redención. Pero, a casi dos semanas de paro patronal, no parecían estar cerca de lograr sus objetivos. Afirmamos esto porque el acatamiento del paro indefinido no fue total. Así, el comercio obedeció a la huelga en un 65%; en las Universidades Católica y de Chile se consiguió el apoyo de las facultades controladas por la derecha, pero algunas seguían funcionando aunque, a veces, con la mitad del alumnado; los bancarios pararon parcialmente al igual que algunos colegios secundarios.(396)

Pero lo más trascendental para el gobierno fue la actitud asumida por la clase obrera que respondió a la SOFOFA haciéndose cargo directamente de la marcha de la producción del país. Smirnow, con mucha razón, afirma: "Cuando los patrones agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril, organismo que reunía a los dueños de las empresas industriales de Chile, llamaron a sus afiliados a paralizar sus actividades en forma inde

(395) Diario "El Mercurio" de 21 de octubre de 1972 .

(396) Cfr, Toer, Mario, op. cit., p. 175-176 .

finida, desataron un movimiento de consecuencias insospechadas para sus intereses"(397) Fue así como los dueños de las fábricas se encontraron con una respuesta unánime y consciente de los trabajadores quienes decidieron hacer producir las industrias con prescindencia de empresarios y gerentes.

En contados días "la gran mayoría de las industrias del país estaban en manos de sus obreros, que demostraban en los hechos, frente al lock-out patronal, que los empresarios no eran necesarios en el proceso de producción... Todas las discusiones sobre la cantidad de empresas que deberían pasar al área de propiedad social parecieron ridículos y estériles, ahora eran todas las fábricas las que se encontraban en poder de los trabajadores... También las divisiones que existían al interior de la clase obrera se vieron inmediatamente borradas, superadas: socialistas, comunistas, mapucistas se encontraron hombro a hombro al lado de miristas e incluso de demócrata cristianos, luchando todos por impedir el triunfo patronal, unidos en la ocupación de las industrias, con la misma preocupación por obtener las materias primas y distribuir la producción de 'su' fábrica"(398) Además en estos días de octubre se multiplicaron en todo Chile los Cordones Industriales, "organizados sobre la base de la representación obrera directa de las unidades productivas de los distintos barrios

(397) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 109 .

(398) Ibid, p.p. 109-110 .

urbanos industriales"(399) y los Comandos Comunales de Trabajadores, organizados "sobre la base superior de reagrupamiento de tareas y objetivos en zonas mucho más amplias y como resultado de la convergencia de representantes de los cordones industriales, sindicatos, JAP, centros de estudiantes, comités de pobladores, centros de madres, partidos populares".(400) Las juntas de abastecimiento y precios, JAP, también se formaron por cientos en los barrios populares; en ellas las mujeres se preocuparon por asegurar el abastecimiento de productos esenciales, ya fuera en colaboración con comerciantes que no acataron el paro, o sin ella, denunciando y requisando los acaparamientos, ayudando a abrir los comercios cerrados u obligando a sus dueños a vender a la población.

Toer afirma que "fueron semanas que equivalieron a años. Los obreros, muchas veces debiendo concurrir a pie hasta las fábricas, se hicieron cargo de la producción y organizaron comandos de defensa... Decenas de miles de estudiantes universitarios y secundarios de izquierda formaban brigadas de carga y descarga en los puertos y estaciones ferroviarias... Los médicos y demás profesionales de izquierda se prodigaban para la continuidad de sus servicios. Los Cordones Industriales configuraban nuevas formas de democracia y organización obrera que se coordinaba con otras organizaciones populares formando Comandos Comunales de Trabajadores. Se creaban vín-

(399) Ibid, p. 111.

(400) Ibid, p. 112.

culos directos con el campesinado para permitir el intercambio de las mercaderías. Brigadas populares contrarestaban a los grupos de choque derechistas y obligaban a la apertura de diversos comercios, requisando también camiones en varios puntos del país"(401)

Hacia fines de octubre los hechos descritos hicieron palpar a la burguesía que no sólo el gobierno se había fortalecido con el paro, sino que, comprobaba con espanto que perdía, día a día, nuevas fábricas y, por lo tanto, poder económico; la influencia demócrata cristiana se debilitaba entre obreros y pobladores y no lograba su objetivo declarado de paralizar el país. Evidentemente la insurrección burguesa estaba derrotada y, al finalizar ese mes, casi todos los sectores que se habían plegado al paro durante 26 días deseaban terminar la huelga y llegar a un acuerdo con el gobierno.

En esos momentos al gobierno de la Unidad Popular se le presentaban dos caminos cualitativamente diferentes, sobre la base de la nueva relación de fuerzas que el paro patronal había originado. En octubre los Comandos Comunales de Trabajadores, los Cordones Industriales, las JAP, las Brigadas de Defensa de la Producción eran gérmenes de poder popular que se habían organizado como respuesta popular a los intentos de la burguesía de paralizar el país. Por ello, un camino era seguir impulsan

(401) Toer, Mario, op. cit., p. 176.

do el desarrollo del poder popular con la perspectiva, a corto plazo, de destruir la institucionalidad vigente y crear nuevas leyes revolucionarias. La otra opción era insistir en el modelo programático: buscar nuevamente la alianza con las clases medias y continuar sujetándose al régimen jurídico y político establecido. Uno de los autores consultados sobre este tema, Smirnow, partidario del primer camino, señala que: "En octubre de 1972 se reunían tres condiciones que no se volverían a repetir y que hacían extremadamente factible un desarrollo revolucionario para una conducción audaz y resuelta: extrema debilidad de la burguesía como clase y de las instituciones del Estado en que estaba atrincherada; un movimiento popular en ascenso, cohesionado, en actividad intensa y con embriones de poder alternativos a las instituciones tradicionales; división e indecisión en las filas militares, que se encontraban maniatadas por el desarrollo concreto de los hechos"(402) En cambio, Garcés, postula por la segunda opción y afirma que: "Retener la parte importante del poder político que es el gobierno, es esencial para la continuidad del proceso revolucionario, significa estar al lado del régimen institucional. El rompimiento de éste, equivalía a la división de las Fuerzas Armadas. Y ningún dirigente revolucionario puede exponer a un baño de sangre a los trabajadores sin saber cuál va a ser el desenlace"(403)

(402) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 117.

(403) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", p. 220.

El camino seguido por el gobierno fue este último incluyendo en su política un nuevo elemento: las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con la línea hegemónica al interior de la UP, permitirían continuar llevando a cabo la estrategia de la vía chilena al socialismo. De esta manera, el paro patronal terminó con la incorporación de tres militares en el gabinete ministerial. El 10. de noviembre de 1972 renunciaron todos los ministros y el 3 de ese mes se constituyó un nuevo gabinete con la presencia del General Prats como Ministro del Interior, del Contralmirante Ismael Huerta en el Ministerio de Obras Públicas y del General de Brigada Aérea Claudio Sepúlveda a cargo del Ministerio de Minería. Pocos días después el conflicto con los gremios se resolvía y como un demostración del carácter eminentemente político del paro "los huelguistas habían aceptado las mismas condiciones ya propuestas por el gobierno semanas antes"(404)

Liliana de Riz al referirse al poder popular y el paro patronal de 1972 se pregunta: "¿Había perdido la Unidad Popular una ocasión histórica al rechazar una política de masas y optar por una solución centrista, aceptable por los militares y la Democracia Cristiana?"(405)

(404) Bitar, Sergio, op. cit., p. 165.

(405) de Riz, Liliana, op. cit., p. 155.

Dentro de los sectores opositores la formación del nuevo ministerio fue acogida con alivio y optimismo. El senador Renán Fuentealba declaraba al día siguiente a "El Mercurio": "Deseo manifestar que el general Carlos Prats reúne las condiciones requeridas para el desempeño de las delicadas funciones del Ministro del Interior. Más aún, por tratarse de un hombre de armas, creemos que está en inmejorables condiciones de dar seguridad de una actuación imparcial!"(406) Otro senador demócrata cristiano, Rafael Moreno, perteneciente al sector freísta de la DC a diferencia de Fuentalba integrante del ala tomicista, sostenía: "La conformación del nuevo gabinete constituye una derrota para los sectores más duros del gobierno y del Partido Socialista!"(407) El senador Bulnes San-fuentes del Partido Nacional afirmaba: "Los ministros de las Fuerzas Armadas justificarían plenamente su ingreso al gabinete si su labor se orientara a tres grandes finalidades: restablecer la paz social, volver al gobierno a la legalidad y asegurar que las elecciones de marzo se realicen dentro del imperio irrestricto de las libertades cívicas!"(408) El General Prats, por su parte, expresaba: "Se trata de colaborar con el gobierno en la tarea que se ha impuesto de asegurar la paz social, gravemente amenazada por las dramáticas proyecciones del movimiento de paros, y contribuir a que el proceso e-

(406) Diario "El Mercurio", 4 de noviembre de 1972.

(407) Ibid.

(408) Ibid.

lectoral que culmina en marzo próximo se realice dentro de las más amplias garantías para todos los sectores de opinión".

(409) En su editorial del 5 de noviembre "El Mercurio" apuntaba: "Las últimas expresiones del Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, Ministro del Interior, dan satisfacción al anhelo más sentido del país y particularmente a la mentalidad democrática de la mayoría de los chilenos".(410) Finalmente, Rafael Cumsille, presidente de la Confederación Nacional del Comercio y la Pequeña Industria, declaraba: "Creemos que el gran vencedor de este movimiento es Chile porque se han logrado metas importantísimas, como, entre otras, de que el chileno sabe ahora qué puede hacer con su protesta".(411)

El 6 de noviembre todas las asociaciones gremiales finalizaron el paro dejando una secuela de pérdidas económicas enormes para el país. Así, "el intento insurreccional de octubre estaba derrotado. Transitoriamente".(412) La NEP chilena, que había sido una política de mano tendida a la burguesía y a las clases medias, en el paro patronal recién terminado había recibido una sediciosa respuesta. Lo extraordinariamente positivo fue la reacción de los obreros, de los estudiantes, amas de casa, del pueblo chileno que cerraron sus filas ante el peligro fascista y pasaron por

(409) Ibid.

(410) Diario "El Mercurio", 5 de noviembre de 1972.

(411) Diario "El Mercurio" 4 de noviembre de 1972.

(412) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 120.

alto las medidas económicas de la política Matus-Millas, para movilizarse en forma unánime contra la burguesía. Pero esa misma movilización estaba planteando nuevas tareas y objetivos políticos que desbordarían, de nuevo, en la práctica, el primitivo esquema de alianzas buscado por la Unidad Popular.

Y es que tal vez lo decisivo en las contradicciones de la NEP chilena fue que sus promotores olvidaron que cuando Lenin propuso su NEP, los trabajadores soviéticos habían aplastado a la burguesía rusa e internacional tras una cruenta guerra civil y ya habían implantado, aún en su primera fase, la dictadura del proletariado.

Ahora veremos cómo la lucha económica de clases desembocará ineluctablemente en la lucha por el poder político.

4.5 Agudización de la crisis económica y del conflicto político.

Terminado el paro patronal de octubre, que había enfrentado a la clase trabajadora con la burguesía en su conjunto, las condiciones sociales de Chile cambiaron sustancialmente. La organización y movilización popular impidieron que la estrategia de la oposición unida y de los gremios, aunada al bloqueo económico del Departamento de Estado, tuviera éxito.

Pero, al mismo tiempo, a partir de entonces la Unidad Popular careció de una política económica que le permitiera consolidar el proceso. El gobierno, desde fines de 1972, asumió una política general "vacilante y defensiva, orientada a solucionar los problemas cotidianos más que a crear las condiciones que se había propuesto para revolucionar la sociedad" (413)

En gran medida contribuyeron a esta situación las enormes pérdidas materiales derivadas de la huelga gremial, el carácter de los acuerdos entre el gobierno y los gremios patronales, la agudización del conflicto político entre el gobierno y la oposición burguesa y el cerco económico que Estados Unidos había impuesto al país.

El paro de octubre acentuó los desequilibrios económicos pues a pesar del esfuerzo productivo desplegado por obreros, empleados y numerosos profesionales y técnicos para contrarrestar la huelga, la producción se afectó notoriamente. Las estimaciones parciales hechas por el gobierno destacaron como grave la situación en la agricultura, el comercio y el transporte. En efecto, de acuerdo a cálculos efectuados por la Corporación de Reforma Agraria, "las pérdidas totales en la agricultura alcanzaron cerca de los doscientos noventa y dos millones de escudos. Ello se reflejó en el retraso de la llegada de materias primas como abonos, semillitas, etc. a la zo-

(413) de Riz, Liliana, op. cit., p. 203.

na agraria; la mortalidad de miles de aves, etc. La paralización del transporte produjo el retraso en la distribución de semillas, abonos y otros para las siembras de primavera, cuyas cosechas se realizan entre febrero y marzo (época de las elecciones), produciría desabastecimiento y afectaría el costo de los productos al cosecharse muchos de ellos después de las primeras lluvias. A causa de la falta de transporte y asimismo por los atentados perpetrados por los latifundistas, se perdieron alrededor de 10 millones de litros de leche. Muchos productores se vieron imposibilitados de llevar su leche a las plantas. En otros casos fueron los mismos productores los que botaron el vital alimento. La misma deficiencia en el transporte produjo abarrotamiento en los puertos lo cual retrasó la llegada de productos perecibles dejando una pérdida de cincuenta millones de escudos".(414)

El paro, además, repercutió en la caída de los rendimientos para la cosecha de 1973, consecuencia que Millas en su exposición acerca del estado de la Hacienda Pública había vaticinado. El 15 de noviembre de 1972, el Ministro de Hacienda "expresaba ante el Congreso Nacional que la producción agrícola bajaría 3% por efecto del paro".(415)

Por otra parte un estudio de la Oficina de Planificación Nacional calculaba "en más de 5646 millones de escudos

(414) Vázquez Montalbán, Manuel, op. cit., p.p. 73-74.

(415) Bitar, Sergio, op. cit., p. 170.

las pérdidas arrojadas por el paro de los sectores del comercio y el transporte. La misma oficina desglosa las cifras de la manera siguiente: Comercio: pérdidas por concepto de disminución de ventas: 5384 millones de escudos, disminución por concepto de fletes: 241 millones de escudos; buses y taxis (menos los de la Empresa de Transporte Colectivo), pérdi da por menor recaudación: 17 millones de escudos, y pérdidas por concepto de menor pago de peajes: 4 millones de escudos. A esta cantidad hay que agregar otros 900 millones de escudos por menor recaudación del impuesto a la compraventa a rafz del cierre del comercio. Estas cifras y las referentes a otros servicios hacen un total de cerca de los 300 millo- nes de dólares y 3000 millones de escudos lo que costó el paro patronal. Esta cifra supera en mucho los daños sufridos por las últimas catástrofes naturales. El paro fue tan devas tador como el peor de los terremotos para la economía nacio- nal, pero con consecuencias a mucho más largo plazo y que -- van engrosando estas cifras progresivamente"(416) Además la producción industrial también se resintió debido a la falta de materias primas y se perdió producción de cobre por la interrupción del transporte de concentrado en las fundicio- nes. Millas, en la exposición al Congreso mencionada, señaló "una pérdida de cerca de 5000 toneladas de cobre"(417)

(416) Vázquez Montalbán, Manuel, op. cit., p. 74 .

(417) Bitar, Sergio, op. cit., p. 171 .

Hemos visto que la asonada patronal de octubre terminó con la incorporación de tres militares al gabinete presidencial que representaban a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Aviación y Marina. Esto permitió que el gobierno popular continuara gobernando de acuerdo con las normas institucionales y, de esta forma, se desechara el camino de incorporar a las masas en las tareas del poder.

El hecho de que Allende y los sectores partidarios hegemónicos en el seno de la Unidad Popular adoptaran esa vía se debió, en gran parte, a la carencia de vinculación entre el proyecto revolucionario en germen que subyacía tras el poder popular emergido durante el paro y el accionar real de los partidos de la Unidad Popular. A estas alturas del proceso de gobierno era notorio que los sectores más izquierdistas existentes dentro de la UP y fuera de ella no habían logrado resolver, ni superar sus propios problemas orgánicos y, por consiguiente, menos podían constituirse en interlocutores de un diálogo propositivo con el gobierno.

El MIR que desde el exterior a la Unidad Popular presionó por una solución radical, tenía una organización partidaria interna que difícilmente podría haber transformado de la noche a la mañana para llegar a convertirse en un par

tido realmente de masas. En efecto, el MIR desde tiempos de Frei se había organizado "como un grupo que se prepara para la guerra. De allí que predominen sus estructuras armadas y de inteligencia. En esas perspectivas la parte del partido que se dedica al trabajo de masas era menor en número. Por eso, el ascenso de la lucha social hacía que existiera un re cargo excesivo en el frente de masas. La compartimentalización entre ambos frentes de trabajo recargaba aún más el tra bajo de los militantes dedicados a las tareas en el frente de masas. La definición del MIR no era precisamente la de un partido de masas, de manera que los cuadros dirigentes di fícilmente podían mantener por largo tiempo la actividad en ambos niveles a menos que un trabajo se hiciera en desmedio del otro. Al no escogerse esa alternativa, la compartimenta l ización comienza a romperse, mezclándose ambos trabajos y bajando notablemente los niveles de seguridad en el trabajo militar y de inteligencia. Eso era lo que sucedía realmente en los últimos dos años del gobierno de la UP... Estas prácticas en el seno del MIR conducían a un diálogo sin representatividad con los partidos de la UP" (418)

Aparte de estos métodos semiclandestinos del MIR, las otras tendencias más izquierdizantes que existían al interior del bloque de la Unidad Popular, tampoco estaban en condiciones de imponer su línea al gobierno para conducir

el proceso por cauces extra institucionales. En efecto, "las tendencias revolucionarias dentro de los partidos de la UP desarrollaban acciones propias de fracciones, especialmente dentro del Partido Socialista, agotándose muchas veces en luchas caudillistas"(419)

Las circunstancias señaladas, además de la importancia que tenía el Partido Comunista partidario de una vía más moderada en la conducción del gobierno, explican que la única solución viable al paro de octubre era la institucional. No debemos olvidar que la Unidad Popular comenzó a gobernar con un proyecto, y que en lo esencial no había cambiado durante todo el transcurso del proceso, basado en la transformación gradual de las estructuras del país evitando los enfrentamientos violentos. Con mayor precisión, un proyecto fundamentalmente dirigido por el Partido Comunista. Allende sabía que la institucionalidad vigente "era el único instrumento seguro que tenía en sus manos y estaba en situación de controlar. Por eso... maniobró hábilmente atrayéndose a algunos militares y al Comandante en Jefe del Ejército, el General Prats, llamando a parlamentar por separado a los dirigentes de los gremios patronales y ofreciéndoles la garantía política de los generales en su gabinete. Sin embargo, todos entienden que se ha logrado un acuerdo transitorio y basado en el cumplimiento de los acuerdos que los generales avalan"(420)

(419) Ibid, p. 113 .

(420) Ibid, p. 115 .

Los acuerdos del gobierno con las asociaciones gremialistas, en cierta medida, significaban que la política general de transformaciones estructurales iniciada a fines de 1970 debería detenerse. Así, entre los puntos esenciales convenidos nos parece importante destacar los siguientes:

"El gobierno esta dispuesto a declarar que CENADI* sea excluida de la llamada lista de 91 empresas monopólicas-industriales y comerciales, pues la Confederación del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria y el Artesanado declara haber asumido el control de esta empresa. Esto altera los planes primitivos del gobierno; sin embargo, atendiendo a las razones de que esta organización representa a muchos pequeños comerciantes y pequeños industriales, y ha perdido su carácter monopólico en los términos que el gobierno lo ha definido en su programa se le asegurará a CENADI un abastecimiento oportuno y no se le privará de su representación actual. CENADI deberá comprometerse a coordinarse con las empresas del área social para atender al comercio detallista y se integrará a la Comisión Nacional de Abastecimiento, la que, con participación de estas empresas y los consumidores, se creará en el plazo de treinta días... Las juntas de Abastecimiento y control de Precios (JAP) no tienen como función realizar

* CENADI era una empresa monopólica de distribución de bienes de consumo cuyo nombre era Centro Nacional de Distribución.

la venta directa de productos al público. Es criterio categórico del gobierno que toda comercialización y venta directa al público debe ser realizada por el comercio detallista inscrito en el Registro Nacional de Comerciantes o por las cooperativas, y de acuerdo a este criterio se reprimirá toda manifestación de mercado negro y de clandestinaje... En cuanto a las tomas de empresas, el gobierno rechaza las que no corresponden a claro abandono de sus funciones por parte de sus propietarios y/o ejecutivos. Por lo tanto, asegura la protección de los propietarios que se sientan amenazados y dispondrá medidas administrativas para la restitución de sus derechos en caso de haber sido objeto de tales tomas infundadas. Asimismo actuará con energía contra el sabotaje patronal contra la producción... El gobierno nunca ha tenido dentro de sus planes la estatización del transporte terrestre caminero, que hoy día se encuentra en manos de empresarios particulares. En este sector de la economía no existe el control del capital extranjero y no existen empresas monopólicas, sino una gran cantidad de camioneros propietarios de uno o dos camiones, y un número reducido de empresas medianas. De tal manera que los intereses legítimos

de los transportistas privados han sido y serán respe
tados por el gobierno, pues coinciden con los intere-
ses de la mayoría del pueblo de Chile"(421)

Estos acuerdos causaron gran descontento en los sectores
que habrían preferido la opción de acelerar el proceso de --
transformaciones estructurales como veremos más adelante.

El nuevo gabinete UP-Generales, que duraría sólo cinco
meses pues se reorganizó en marzo de 1973, incluía, además, a
dos representantes de los trabajadores en la CUT: Luis Figue-
roa de filiación comunista como Ministro del Trabajo y Rolan-
do Calderón, socialista, en el Ministerio de Agricultura. Am-
bos eran el Presidente y Vice-presidente de la CUT respectiva
mente. Con este apoyo, el Presidente Allende buscó normali-
zar al país después de los sucesos de octubre. En esa tarea
el General Prats fue uno de sus principales colaboradores.

Sin embargo, si bien en el transcurso de noviembre la U-
nidad Popular en su conjunto se mostró solidaria con los mi--
nistros militares, pronto afloraron las divergencias. El Co-
mité Central del Partido Socialista hizo saber que no había
sido consultado para la conformación del gabinete con inclu-
sión de las Fuerzas Armadas; la Izquierda Cristiana también
público su desacuerdo. Sólo el MAPU apoyó tal decisión..

(421) Ibid, p.p. 116 a 121.

Dentro del socialismo chileno las mayores voces de protesta se alzaron en los regionales que habían tenido durante la huelga gremial de octubre una destacada participación en defensa del gobierno. Así, los regionales Centro y Cordillera de Santiago y el de Concepción cuyas bases habían jugado el papel preponderante en el desarrollo de los cordones industriales empezaron a actuar con una política propia, enfrentándose y criticando abiertamente al gobierno. El MIR, por su parte, fue la organización que más duramente atacó al Presidente Allende. A mediados de noviembre llamó al pueblo y a la clase obrera a rechazar el gabinete aduciendo que: "La incorporación de algunos generales en el gabinete ha cambiado en una importante medida el carácter que el gobierno hasta aquí tenía: los partidos tradicionales dejan de ser el eje político del gobierno. Ahora deben ceder parte importante de ese papel a las Fuerzas Armadas. El gobierno, aunque no pierde propiamente el apoyo del pueblo, indudablemente debilita aún más su ya deteriorada relación con el impulso y la voluntad de lucha de los trabajadores. Por otra parte, aunque obtiene en cambio el apoyo de las Fuerzas Armadas queda también sometido a sus presiones... Nace por tanto una nueva relación entre el gobierno y el movimiento de masas. A partir del cambio de gabinete, con dificultad los trabajadores podrán aspirar y luchar para que el gobierno sea un instrumento

al servicio de sus luchas y una palanca de apoyo a la construcción de nuevas formas de poder popular"(422)

En medio de este clima, el General Prats trató de disminuir el conflicto político pensando que la aminoración del antagonismo exigía la concertación de un acuerdo político con la Democracia Cristiana y para lo cual era previa una solución de las divergencias respecto al área social que existían con ese partido. Para lograrlo se entrevistó con los dirigentes democristianos quienes, como lo señalamos, habían manifestado su opinión favorable a la incorporación de militares a las tareas de gobierno por considerar que garantizarían el respeto al orden constitucional. No obstante, pronto esta posición varió y sus militantes se dividieron en tres grupos: "Para el sector más progresista, los militares aseguraban la continuidad constitucional y podían proyectar una influencia moderadora sobre el programa de la UP. El sector conservador de la DC, en cambio, vislumbrió la posibilidad de un progresivo entendimiento entre el Presidente Allende y los mandos constitucionalistas. Para los grupos golpistas de la DC, tal eventualidad debía evitarse, para lo cual era necesario distanciar al gobierno de los militares y a estos últimos del General Prats"(423)

Los partidos de la derecha tradicional, Democracia Radical y Partido Nacional, optaron por "aislar al General Prats con el

(422) Toer, Mario, op. cit., p. 181.

(423) Bitar, Sergio, op. cit., p. 205.

argumento de que comprometía a las Fuerzas Armadas con la Unidad Popular. Uno de sus voceros, Sergio Díez, manifestó: "Lamentamos que un gobierno marxista haya colocado a las Fuerzas Armadas en esta triste situación".(424)

La situación imperante al interior de las Fuerzas Armadas tampoco dejaba al General Prats mucho margen de acción. El número de oficiales constitucionalistas en esa fecha era cada vez menor y el aumento de los militares partidarios de un golpe de Estado se incrementaba. Por lo mismo, "la posibilidad de que los constitucionalistas impusieran sus puntos de vista dependía del éxito de su gestión en el gabinete. Este éxito se mediría por la autonomía de los representantes militares frente a los partidos políticos, y por su capacidad de conseguir una mayor normalidad económica y política. Pero a medida que los acontecimientos fueron dificultando esta tarea, el General Prats perdió posiciones y debió justificar su presencia en el gabinete sólo como garante de un normal desenvolvimiento de las elecciones parlamentarias, abandonando su objetivo inicial de crear condiciones para un acuerdo político". (425)

En efecto, las posturas adoptadas por el Partido Socialista y la Izquierda Cristiana en el seno de la UP y la del

(424) Ibid, p. 206.

(425) Ibid, p. 205.

MIR fuera de ésta, y de la Democracia Cristiana, nacionales y Democracia Radical antes referidas, impidieron un avance político. En el plano económico la situación de crisis se había agudizado en forma extrema. Por consiguiente no fue extraño que las gestiones de Prats casi se limitaran a esperar los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo del año siguiente.

De esta manera el año 1972 finalizó con un cuadro político de expectación ante la consulta electoral de marzo, pero con una grave crisis financiera. Las estimaciones del gobierno respecto al déficit fiscal para ese año habían sido de 9000 millones de escudos. Sin embargo "el resultado al 31 de diciembre fue de 20.000 millones de escudos, de los cuales 15.000 millones correspondieron a las empresas del área de propiedad social, excluida la minería del cobre"(426) Lo anterior fue la resultante del gran número de empresas que el Estado se vio obligado a transferir al área social por circunstancias laborales o políticas y que arrastraban fuertes pérdidas. No obstante, hacia fines de 1972, el gobierno popular casi había alcanzado su meta programática de elevar el bienestar de los más desposeídos. Así, "la enseñanza básica en 1970 acogía a cerca del 93% de la población escolar, en 1972 alcanzó casi al 100%; la enseñanza media logró una cobertura del 40,3% de la población escolar en 1972, comparada

(426) Ibid, p. 183.

con un 30.5% de 1970; las matrículas universitarias crecieron en 51% entre 1970 y 1972. En materia de salud, los indicadores acusaron rápidas mejorías: la mortalidad infantil, que alcanzaba el 88 por mil en el periodo 1965-70, se redujo al 71 por mil en 1972; el abastecimiento de leche a la población aumentó un 50% en 1972 con respecto al año anterior; las consultas de urgencia crecieron en 60% y las consultas médicas al Servicio Nacional de Salud, en 13% en el periodo 1970-1972"(427)

Pero los problemas de abastecimiento y mercado negro subsistían a causa de que la oferta de productos era menor que la demanda de los mismos. La oferta de artículos, a su vez, no podía incrementarse debido a la situación deficitaria del área social, a la falta de refacciones y piezas esenciales de la planta industrial cuya importación requería de préstamos que el bloqueo crediticio externo impedía obtener. Además la inversión privada, a esta fecha, se había paralizado como consecuencia del temor y desconfianza de la burguesía ante la situación que vivía el país. Por estas razones, para evitar la intensificación del desabastecimiento y del mercado negro, era necesario tomar medidas de control directo en la comercialización de bienes de consumo esencial. Pero esta política requería de una correlación de fuerzas más fa-

(427) Ibid, p. 187.

vorable al gobierno que la existente en aquel momento.

Mención especial merecen los efectos distorsionadores provocados en la economía chilena por el bloqueo norteamericano al cual hicimos referencia en el punto 4.1 de este capítulo. Hacia fines de 1972, el descenso de las exportaciones e importaciones a Estados Unidos y la disminución de los préstamos a corto plazo agudizaban los problemas internos de abastecimiento de materias primas, repuestos, maquinaria y bienes de consumo. La gran dependencia de la economía chilena de los préstamos norteamericanos se evidenció con toda claridad en ese año y, más aún, cuando Estados Unidos se valió de ella para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular. Las cifras siguientes son una muestra elocuente de la disminución de esos rubros: "Las exportaciones a ese país que representaban el 14,7% del total en 1970, bajaron al 8,8% en 1971 y al 5,7% en 1972. Con las importaciones de productos norteamericanos ocurrió otro tanto, pues del 25,8% del total en 1970 bajaron al 17% en 1971 y al 9,8% en 1972. En cuanto al financiamiento de corto plazo de origen norteamericano, descendió de un 78,4% del total en 1970 a sólo 6,6% en el primer semestre de 1972".

(428)

El Presidente Allende, a comienzos de diciembre de 1972, en un largo discurso pronunciado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas denunció las presiones ejercidas en contra de su gobierno. A conti--

nuación citaremos algunos fragmentos de esa alocución: "Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un Parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la Constitución Política y sin que ésta prácticamente haya jamás dejado de ser aplicada. Un país de cerca de diez millones de habitantes que en una generación ha dado dos Premios Nobel de Literatura, ambos hijos de modestos trabajadores. Historia, tierra y hombre se funden en un gran sentido nacional. Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida, e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras; ha sido conducido a un endeudamiento externo de casi cuatro mil millones de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus exportaciones... Hoy vengo aquí porque mi país está enfrentado a problemas que son objeto de la permanente atención de esta Asamblea de Naciones: la liberación social, el esfuerzo por el bienestar y el progreso inte-

lectual, la defensa de la personalidad y dignidad nacionales... La voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de impulsar el proceso revolucionario dentro de los marcos de un estado de Derecho altamente institucionalizado y que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad socioeconómica... El pueblo de Chile ha conquistado el gobierno tras una larga trayectoria de generosos sacrificios, y se encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica, para que la actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales y no a intereses de lucro personal... Hemos nacionalizado las riquezas básicas. Hemos nacionalizado el cobre. Lo hemos hecho por decisión unánime del Parlamento, donde los partidos de gobierno están en minoría. Queremos que todo el mundo lo entienda claramente: no hemos confiscado empresas extranjeras de la gran minería del cobre. Eso sí, de acuerdo a disposiciones constitucionales, reparamos una injusticia histórica al deducir de la indemnización las utilidades excesivas por ellas percibidas... Estas mismas empresas que explotaron el cobre chileno durante muchos años, sólo en los últimos cuarenta años se llevaron en ese lapso más de cuatro mil millones de dólares de utilidades, en circunstancias que su inversión inicial no subió de treinta millones de dólares... Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a

denunciar que mi país es víctima de una grave agresión"(429)

El Presidente Allende, además de denunciar hechos concretos de intervencionismo norteamericano como las maniobras de la ITT y la Kennecott, el bloqueo de préstamos a Chile de -- fuentes de crédito internacional, agregó: "No pretendemos que esos préstamos sean restablecidos. Estados Unidos es soberano para otorgarlos o no. Sólo queremos señalar que estamos conscientes de que cuando denunciamos el bloqueo económico financiero con que se nos agrede, tal situación parece difícil de ser comprendida con facilidad por la opinión pública internacional, y aún por algunos de nuestros compatriotas. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Por el contrario, es un ataque oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile... Aquellos que imposibilitan la revolución pacífica, hacen que la revolución violenta sea inevitable. La frase no es mía. Pero la comparto. Pertenece a John Kenedy..."(430).

A su regreso al país Allende y su equipo de gobierno se dedicaron a elaborar un proyecto que pretendía redefinir las tres áreas de la economía con la perspectiva de buscar, nuevamente, un entendimiento con la Democracia Cristiana que había hecho de esta materia el centro del conflicto institucional

(429) Allende, Salvador "Discursos" p.p. 531-540.

(430) Ibid, p.p. 541 y 558.

UP-oposición. El 24 de enero de 1973 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley, conocido como Proyecto Millas-Prats, que establecía "el paso de 49 empresas al área social asegurando los derechos de los propietarios a una adecuada indemnización, incluso mediante la creación de un tribunal de apelación en el cual participarían miembros designados por los tribunales. Más importante que lo anterior, el Proyecto Millas-Prats planteaba la devolución de una cantidad de 123 empresas que estaban en manos de los trabajadores desde octubre!"(431)

Esta medida repercutió negativamente dentro de los sectores más izquierdistas de la UP que de inmediato se movilizaron en contra del gobierno y desató una intensa polémica al interior del bloque gubernamental. Al mismo tiempo, debido a que en los últimos meses la burguesía había iniciado una campaña de acaparamiento de productos básicos que vendía en el mercado negro a precios desorbitantes que, en ocasiones, alcanzaban hasta cinco veces su precio oficial, el gobierno creó una Oficina Nacional de Distribución para ordenar y regular la distribución de esos artículos al mayoreo y al menudeo. Además el gobierno completó esta iniciativa con la dictación de normas que establecían que toda la producción del área de propiedad social y del sector reformado del

(431) Smirnow, Gabriel, op, cit., p. 150 .

campo pasarían a distribuidoras estatales. Al mismo tiempo decretó la distribución racionada de 30 productos de acuerdo a las necesidades de la población y facultó a las JAP para apoyar la puesta en práctica de estas medidas.(432)

Ahora, la reacción de la oposición burguesa no se hizo tampoco esperar. En plena campaña electoral para los comicios de marzo, la prensa opositora acusaba al gobierno de que ponía al país en "el umbral de la dictadura y que el racionamiento arrasa las garantías democráticas"(433)

Esto contribuyó a aumentar la efervescencia social de la etapa pre-electoral. A diario se organizaban marchas de los partidarios de los candidatos de la UP o de la CODE, en casi todas las ciudades del país, finalizando muchas de ellas en violentos enfrentamientos entre uno y otro bando. Además, debido a que las críticas al Proyecto Prats-Millas relativo a la delimitación del área de propiedad social a 49 empresas se habían extendido a la mayoría de los regionales del Partido Socialista del país, Allende debió retirar ese proyecto de ley del Parlamento.

Dentro de este contexto de gran agitación y enfrentamiento de posiciones se celebraron las elecciones parlamentarias de marzo. Las dos corrientes de opinión política en el país le confirieron a la consulta electoral un carácter

(432) Cfr. Bitar, Sergio, op. cit., p. 213 .

(433) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 164 .

plebiscitario. El esquema tripolar en que se había dividido la ciudadanía en 1970 ya no existía. Ahora la sociedad chilena estaba escindida en dos polos antagónicos. Por un lado, la Unidad Popular como el bloque que apoyaba al gobierno y, por otro, la CODE que agrupaba a los partidos de oposición: Nacional, Demócrata Cristiano, Democracia Radical y el Partido de Izquierda Radical (PIR). Ambas alianzas presentaron candidatos que cada una apoyaba como frente unido. Por consiguiente no había duda que el número de votos que obtuviera la UP y la CODE reflejaría la adhesión de la ciudadanía a una u otra posición, es decir, si estaba a favor o en contra del gobierno.

En efecto, toda la campaña electoral de los partidos afiliados a la CODE se basó en la creación de un clima político y psicológico de sabotajes, terrorismo y el sistemático descrédito de las autoridades del gobierno, en especial, del Presidente Allende. Esto perseguía un objetivo que no fue ocultado durante la campaña previa a los comicios de marzo: obtener los dos tercios de las bancas en el Congreso Nacional. Estimando erróneamente que el deterioro de la Unidad Popular era considerable, plantearon la destitución del Presidente de la República mediante una acusación constitucional para lo cual requerían de esos dos tercios en el Parlamento.

Presentada así la batalla electoral, a través de dos bloques bien definidos - gobierno y oposición - la Unidad Popular obtuvo un resultado espectacular que sorprendió a la burguesía opositora y que tampoco era esperado, en esa magnitud, por la propia UP. Después de dos años y medio de gobierno, con una economía desarticulada por las transformaciones estructurales, el sabotaje de la burguesía y por el bloqueo financiero de Estados Unidos, con un régimen de libertad que permitía a la oposición expresar públicamente su designio de derrocar al régimen popular y con la prescindencia electoral del gobierno, garantizada por el Ministro del Interior, General Prats, la ciudadanía dio un respaldo político impresionante a la Unidad Popular.

Los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas el 4 de marzo de 1973 arrojaron un 44% de votos para la UP, porcentaje superior al 36% obtenido en las elecciones presidenciales de 1970. La oposición unida en la CODE "conquistó el 56% con lo que mantiene la mayoría parlamentaria pero no la cifra de legisladores indispensables para destituir como Presidente a Allende quien, por lo tanto, objetivamente ha triunfado, especialmente entre la juventud que por primera vez ha votado. Entre la elección de abril de 1971 y la de marzo de 1973 el cuerpo electoral se amplió de 3.660.000 votantes

a 4.542.000, por la reducción de la edad mínima para votar de 21 años a 18 años de edad".(434) Un análisis de las cifras reflejaba además que "desde la elección de Allende, el potencial electoral de la izquierda ha aumentado significativamente y se mantiene firme; que dentro de la UP son los partidos marxistas los que más han crecido, especialmente en las zonas rurales, por ejemplo, en las provincias de Colchagua, Curicó, Maule, Linares, Ñuble, Malleco, Cautín y Chiloé, la suma del P C , P S y MAPU que daba un 12,6% en 1970, salta a un 23,6% en 1973; mientras que la Democracia Cristiana ha recuperado apenas lo perdido desde los años 1970-1971, el Partido Nacional ha crecido en todos los grupos de provincias, pero aún su mado a otros grupos derechistas, sigue muy lejos del porcentaje obtenido por Alessandri en 1970".(435)

¿Cómo explicar una votación tan elevada de la Unidad Popular en medio de la crisis económica? Durante los dos años y medio del gobierno de la UP se habían producido importantes progresos en el nivel de organización y en la conciencia política de los trabajadores chilenos. Fueron ellos, en especial la clase obrera junto a los jóvenes, quienes se volcaron masivamente por los partidos Socialista y Comunista, así como el bloque gobernante perdía votación en las capas medias. El conflicto por la propiedad de los medios de producción y por

(434) Selser, Gregorio, op. cit., p. 214.

(435) Vázquez Montalbán, Manuel, op. cit., p. 78 .

la distribución del ingreso, la hostilidad de Estados Unidos contra el proceso de transformaciones radicales que se había iniciado en Chile en 1970, mostraron con nitidez la lucha de intereses. En el periodo de gobierno el número de organizaciones populares se habían extendido con gran rapidez. En las fábricas (comités de producción, comités de vigilancia, participación en la administración); en el campo (consejos campesinos, cooperativas, formas colectivas de administración, tomas de predios); en las poblaciones (JAP, organizaciones comunales para la salud, ampliación del trabajo en centros de madres y juntas de vecinos) y en la Central Unica de Trabajadores (CUT) (ampliación del número de sindicatos y sindicalizados, organización por sector de actividad y por área geográfica en Cordones Industriales y Comandos Comunales de Trabajadores.

Fue la mayor conciencia política de los trabajadores desarrollada en el conflicto mismo, sobre todo durante el paro de octubre de 1972, la que permitió ubicar los problemas coyunturales de crisis económica que se vivían en esos momentos en la perspectiva más general del cambio estructural inaugurado por el Presidente Allende en 1970. Para los obreros, los campesinos, pobladores y jóvenes chilenos la oposición de intereses con los grupos dominantes lucía diáfana, sin mediaciones.

4.6 Del derrumbe institucional al golpe militar.

Para una mejor comprensión de lo acontecido a partir de marzo de 1973 hasta septiembre de ese año creemos necesario recapitular acerca de algunas constantes que hemos remarcado a lo largo de nuestra tesis.

En 1970 había sido posible iniciar un proceso de transformaciones estructurales que abrían el camino para la construcción del socialismo en Chile por la vía democrática o instucional. Esto fue factible porque tras el programa básico del gobierno de la UP estaba el apoyo de poco más de un tercio de la ciudadanía y porque había un sector de las Fuerzas Armadas comprometida con el régimen democrático formal imperante en Chile desde 1830. Para la izquierda, en esos momentos, era imposible optar por una revolución por la vía violenta ya que se carecía de una fuerza militar que la respaldara. Pero a partir de marzo de 1973 hasta septiembre de ese año las circunstancias objetivas que permitieron la permanencia del gobierno de Allende cambiaron. En el capítulo tercero en el punto 3.8 hicimos referencia a la política de la Unidad Popular en torno a las Fuerzas Armadas que, en esencia, se orientó a evitar, desde el primer momento, el surgimiento de condiciones que facilitarían una insurrección cívico-militar de la oposición de la derecha con apoyo de las capas medias. En la aplicación de esta línea neutralizadora hacia los insti

tutos castrenses el Presidente Allende, en octubre de 1972 cuando se produjo la primera insurrección general de la burguesía contra el régimen democrático, intentó una mayor cohesión de la Unidad Popular con los militares e integró en su gabinete a tres representantes de las Fuerzas Armadas y a dos de la CUT. Uno de ellos, sin embargo, el Contralmirante Ismael Huerta* renunció a su ministerio antes de las elecciones de marzo.

Así como en el transcurso de dos años y medio la burguesía opositora —representada por los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Democracia Radical— no pudo provocar un enfrentamiento abierto de los aparatos armados con el gobierno, en la fase a que ahora nos dedicaremos logró que los militares se insubordinaran y salieran de sus cuarteles. Los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo desbarataron las esperanzas de la oposición de derribar al Presidente Allende mediante una acusación constitucional. Ante tal realidad los partidos de la CODE aceleraron una definición que combinó la agudización del conflicto institucional latente en el Parlamento, Contraloría y Poder Judicial haciéndolo explotar cada vez más seguido con la extensión del terrorismo que llevó al país al borde la guerra civil para presentar, finalmente, como única alternativa el golpe militar.

* El Contralmirante Huerta desde entonces ya estaba comprometido con el sector golpista de las Fuerzas Armadas. En septiembre de 1973 la Junta Militar de Gobierno lo designó Ministro de Relaciones Exteriores.

De esta forma, en esta etapa, el papel de la burguesía - quedó circunscrito a preparar las condiciones políticas y sociales que ofrecieran una coartada al golpe de Estado por las Fuerzas Armadas. Con este propósito la oposición desencadenó, a través de los gremios patronales y profesionales, la organización fascista Patria y Libertad y con el financiamiento invisible del gobierno norteamericano, un nuevo paro patronal y una escalada terrorista en todo Chile. Además, en el Parlamento, la oposición cerró todas las puertas para un entendimiento político que el Presidente Allende buscó hasta el último momento, apoyado incluso por el propio Cardenal de la Iglesia Católica, Alfredo Silva Henríquez, provocando así la ruptura definitiva del Estado de derecho que decía defender.

Como afirma Smirnow, refiriéndose a la situación imperante en el país después de los comicios parlamentarios: "Los resultados de las elecciones de marzo de 1973 demostraron claramente que la dirección de la sociedad se corresponde con las relaciones de fuerza entre las clases, y que los votos sirven para contabilizar numéricamente la influencia respectiva en un momento dado, pero no para decidir el curso de los acontecimientos. Esto fue inmediatamente comprendido por la reacción, y en particular por los representantes directos de las asociaciones patronales que, inmediatamente después del fracaso del proyecto 'parlamentario' de la burguesía, intensifican sus llamados a las Fuerzas Armadas y cuestionan con mayor énfasis y de-

terminación la legalidad del gobierno". (436) A su vez, la Unidad Popular desde la presidencia de la República asumía - una posición más bien defensiva e insistió en buscar un acuerdo en tantas otras ocasiones perseguido con la Democracia -- Cristiana como una forma de evitar un deterioro mayor en su - relación con las clases medias. Para lograr este acuerdo --- Allende designó el 27 de marzo un nuevo gabinete con prescindencia de los militares liberando así a Prats del Ministe-- rrio del Interior en el cual designó a un socialista. El General Prats reasumió la Comandancia en Jefe del Ejército, en cuya función le había estado subrogando Augusto Pinochet durante los cuatro meses anteriores. Garcés sostiene que la reincorporación de Prats al mando efectivo del Ejército fue una - decisión destinada a lograr los siguientes objetivos:

"a) Mantener la unidad interna del aparato militar en torno al alto mando constitucionalista, privando a los oficiales conservadores de la posibilidad de atacarlo so pretexto de que había comprometido a las Fuerzas Armadas en funciones políticas contingentes.

b) Fortalecer el sector militar resueltamente partidario de no negar su apoyo al gobierno, reponiendo al frente del Ejército a su principal exponente.

c) Hacer del General Prats que acababa de desempeñar las funciones de Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, el hombre políticamente fuerte dentro de las Fuerzas Armadas.

d) Aumentar la unidad interna de la UP, uno de cuyos sectores se oponía a la permanencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno.

e) Sustentar al gobierno popular en sus propias fuerzas sociales". (437)

Garcés refiriéndose al regreso de Prats al Mando efectivo del Ejército agrega: "Sin que nosotros nos apercibiéramos en ese momento del hecho, esta decisión comportaba que la conspiración militar perdía el puesto clave de la Comandancia en Jefe del Ejército. Aunque Pinochet asumía la Jefatura del Estado Mayor, el sector golpista tuvo que proceder en lo sucesivo con renovadas dificultades y en un contorno en que se hallaba en minoría. El mismo Pinochet meses después, el 29 de diciembre de 1973, corroboraría esta participación en los preparativos del golpe cuando en esa fecha declaraba al periódico norteamericano 'Los Angeles Times'... 'el 20 de marzo se firmó un documento donde llegábamos a la conclusión de que era imposible una solución constitucional. Todo se mantuvo en secreto. Porque si no, no estaríamos aquí. Fuimos ocho, los oficiales que planificamos y obedecimos la planificación'. De los veinticinco generales del Ejército, ocho complotaban en secreto". (438)

Entretanto el gobierno encontraba en la oposición unida una actitud que claramente evidenciaba que ésta había entrado

(437) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", pp.289-290.

(438) Ibid., p. 290.

en la fase insurreccional. Para el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional las posibilidades de derrocar a Allende por la vía institucional se clausuraron en marzo. Sin embargo continuaban controlando el Parlamento lo cual impedía a la Unidad Popular establecer nuevas formas estatales ordenadoras de la realidad socioeconómica. Así, el gobierno se vio encerrado en la institucionalidad vigente como en una camisa de fuerza.

El 10 de abril Allende envió a la Contraloría un decreto de insistencia para dar curso a las resoluciones de requisición que afectaban algunas importantes industrias contempladas en el programa inicial del área social. Esto desató de inmediato una enérgica protesta de la Sociedad de Fomento Fabril que declaró a "El Mercurio": "Un paso más en la escalada del marxismo desde que salieron del gabinete los militares. La medida es típicamente totalitaria por cuanto se impone por un abuso de poder sin tomar en cuenta la opinión del Congreso, de la Contraloría y de las mayorías nacionales". (439) El presidente de la Democracia Cristiana, René Fuentealba, por su parte, expresaba ese mismo día: "El gobierno está adoptando una serie de medidas que significan una verdadera agresión, una guerra entablada por él contra la democracia. Estas medidas son los ataques contra el Congreso Nacional y la utilización de los resquicios legales, como los decretos de insisten

(439) Diario "El Mercurio" de 11 de abril de 1973.

cia, para pasar industrias al área social". (440) El Partido Nacional, en una postura más decididamente insurreccional, declaraba: "Ha llegado el momento en que el Congreso declare -- que el gobierno ha perdido definitivamente su autoridad y la legitimidad de su mandato, nadie está obligado a respetar ni a continuar obedeciendo a una autoridad que no respeta ni obedece las leyes del país".(441)

Articulada con la estrategia de la burguesía para provocar la caída del gobierno, el 10 de abril estalló una huelga de los trabajadores del cobre de El Teniente entre los cuales la Democracia Cristiana contaba con un gran número de adherentes. La huelga duraría tres meses. Se inició a causa de un problema de interpretación jurídica respecto a la aplicación del porcentaje de reajuste, otorgado en octubre de 1972, equivalente al 100% de los sueldos y salarios vigentes. Como -- sostiene Zapata, el conflicto contribuyó a profundizar el enfrentamiento entre la UP con la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, pues por primera vez ambos partidos disponían de bases obreras en quienes apoyarse en contra del gobierno. Además con la paralización de tan importante actividad pro-ductiva para el país ocasionaban enormes pérdidas económicas. El autor citado señala que cuando los mineros de El Teniente decidieron ir a la huelga lo hicieron interesados en provo-car una abierta confrontación con el gobierno y, de paso, di-

(440) Ibid.

(441) Ibid.

vidir a la CUT donde la polarización UP-DC alcanzó niveles -- muy altos. Sin embargo el paro minero de El Teniente no fue acatado por todos los trabajadores. Los empleados se plegaron mayoritariamente, en cambio, una gran parte de los obreros asistían al trabajo aunque protegidos de los ataques de los empleados en huelga. Pero también hubo obreros que la -- apoyaron. Sólo en la fundición y en la mina propiamente tal, los obreros siguieron trabajando durante toda la huelga produciendo cobre blister hasta que se les acabó el concentrado para fundir.(442)

Mientras tanto la agitación callejera en Santiago y las principales ciudades de Chile recrudecía, en particular, protagonizada por estudiantes liceanos y universitarios nacionales y democristianos que unidos a miembros de Patria y Libertad se enfrentaban con estudiantes de la Unidad Popular. En varias partes de nuestro trabajo hemos hecho mención a la organización fascista Patria y Libertad por lo cual nos parece pertinente deternos brevemente en algunas de sus características.

Se autodefinía como un frente nacionalista y fue fundado en septiembre de 1970, bajo la dirección del abogado Pablo Rodríguez. Dentro de sus filas reunía "a los elementos más -- reaccionarios del Partido Nacional y de la Democracia Radical,

(442) Cfr., Zapata, Francisco, op. cit., p.p. 62 a 65.

hijos de familias de la alta burguesía, de latifundistas, de ex fascistas y de elementos del lumpen utilizados como masa de maniobra. Está lejos de ser un movimiento de masas, pero conseguía, al distribuir armas y multiplicar las provocaciones, ganarse a los pequeños propietarios del sur del país... Anárquico en sus comienzos, el movimiento se fue poco a poco estructurando. Infiltraba militantes en los servicios públicos, los sindicatos, organizaciones estudiantiles, en los barrios de pobladores. Además se beneficiaba del apoyo financiero de los grandes industriales y latifundistas expropiados y del apoyo económico de la CIA la cual mediante canales clandestinos le hacía llegar remesas de dólares. Se podía medir su dinamismo con la multiplicación de su emblema por todos los muros de Santiago una mezcla entre una araña negra y una cruz gamada". (443)

Como una forma de alertar a la clase obrera ante las provocaciones de la derecha, el 28 de abril, la CUT llamó a la clase trabajadora a una manifestación para celebrar el 1º de mayo, dar un apoyo masivo al Presidente Allende y "protestar en contra del asesinato de un joven obrero comunista desde las ventanas de la sede central del Partido Demócrata Cristiano". (444)

El Cardenal Silva Henríquez el año anterior había participado en la concentración de la CUT del 1º de mayo. Pero en

(443) Lamour, Catherine, op. cit., p. 252.

(444) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 210.

esta ocasión se excusó de asistir aduciendo en una carta personal al Presidente Allende: "...la división se ha creado en el corazón del mundo obrero lleno de injurias y de odio y lanza a los hombres los unos contra los otros... Mi presencia sólo reportará radicalizar aún más esta división y darle una interpretación partidista, lo que no aceptaría jamás." (445) --- Aquel Día del Trabajo, Allende, en su discurso, se refirió a la amenaza de guerra civil que se cernía sobre el país y acusó a los gremios patronales y a los partidos de la CODE de -- sus intentos de tratar de hacer intervenir a los cuerpos armados para derrocar al gobierno. Y agregó: "No le tememos, sabemos que las fuerzas del pueblo y la lealtad de las Fuerzas Armadas y de Orden nos permiten mirar con tranquilidad". (446)

Pocos días después el sector frefta de la Democracia -- Cristiana pasó a dirigir el partido. En Junta Nacional se renovó su dirigencia y Fuentealba fue reemplazado como presidente de esa organización por Patricio Aylwin quien apenas elegido manifestó: "Ante el recrudecimiento de la violencia en nuestro país, la Junta Nacional del PDC reitera la necesidad de que se dé estricto cumplimiento a la Ley de Control de Armas y representa a las Fuerzas Armadas la conveniencia de que se usen todos los instrumentos contemplados en ese cuerpo legal para impedir la existencia o proliferación de grupos armados". (447)

(445) Vázquez Montalbán, op. cit., p. 84.

(446) Smirnow, Gabriel, op. cit., p. 210.

(447) Diario "El Mercurio" de 14 de mayo de 1973.

Desde el paro de octubre del año anterior, tanto de parte de la UP como de la CODE, los enfrentamientos con armas se habían transformado en hechos casi cotidianos en el país. Durante la campaña electoral para las elecciones de marzo las brigadas juveniles Ramona Parra del Partido Comunista y Elmo Catalán del Partido Socialista eran diariamente agredidas por los miembros de Patria y Libertad. A mediados de este año la violencia se había extendido a los Cordones Industriales y poblaciones. En el campo la situación era más extrema aún, ya que los ex-latifundistas se habían organizado en bandas paramilitares y desalojaban a los campesinos de los asentamientos y Centros de Reforma Agraria.

A fines de junio la huelga de los mineros del cobre de El Teniente continuaba y los enfrentamientos callejeros en la capital y en las ciudades más importantes de Chile eran cada vez más violentos. El Colegio Médico decretaba un paro durante 48 horas dejando parcialmente sin atención a la población durante dos días, pues se formaron brigadas sanitarias entre los médicos de la UP y estudiantes universitarios de izquierda para hacer frente a la situación. En la mina El Teniente 13500 trabajadores seguían en huelga y en Chuquicamata un sector de los empleados se había adherido al paro en apoyo a los primeros. En Antofagasta, provincia donde se encuentra ubicado el yacimiento minero de Chuquicamata, dirigentes sindicales demócrata cristianos intentaron paralizar la planta

de energía eléctrica de esa mina a fin de interrumpir las fae
nas productivas pues en ella trabajaba un 87% del personal -
que no se había sumado al paro. Pero los enfrentamientos en-
tre los mineros se sucedían a diario, había ya un muerto y de
cenas de heridos y detenidos. Los mineros de El Teniente in-
tentaron realizar una marcha a Santiago pero fueron conteni-
dos por carabineros lo cual justificó nuevas acusaciones de -
ilegalidad en contra del gobierno.(448) Entretanto en el Par
lamento la oposición destituyó mediante acusaciones constitucio
nales a tres ministros: Orlando Millas de Economía, Luis Fi-
gueroa del Trabajo y Sergio Bitar de Minería. (449)

Dentro de este ambiente de agitación social extrema se
produjo un intento frustrado de golpe de Estado, conocido co-
mo el Tancazo porque fue una unidad de un regimiento de la ca
pital al mando de varios tanques la que se sublevó.

Intento de golpe de Estado de 29 de junio de 1973. La mañana
de ese día un grupo de tanques del Regimiento Blindados No. 2
de Santiago salió del cuartel en dirección al palacio presi-
dencial de La Moneda con intenciones de sitiario. A las nue-
ve de la mañana las radios de la Unidad Popular comenzaron a
"transmitir en cadena que el pueblo se organizara; a esa mis-
ma hora, el Presidente Allende, por cadena nacional de radio,
llamó a la población de Santiago a marchar con precauciones y

(448) Cfr. con Selser, Gregorio, op. cit., p. 216-217.

(449) Cfr. con Bruna, Susana, op. cit., p. 148 .

con lo que tengan, hacia el centro de la ciudad para defender al gobierno. Veinte minutos después, volvió a hablar Allende solicitando que no se marche al centro y se permanezca en los lugares de trabajo pues el levantamiento se restringe a un regimiento y tropas leales al gobierno se dirigen a sofocarlo. La CUT ratifica un llamado previo de ocupación de los lugares de trabajo." (450) A mediodía el Regimiento sublevado se --rendía ante el General Prats que salió a su encuentro.

En todo el país, en especial en Santiago, la movilización popular fue extraordinaria. En las fábricas, en el campo, colegios, oficinas, universidades los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular se organizaron para un enfrentamiento. --Así: "Las direcciones de los distintos Cordones Industriales imparten directivas para transformar en armas cuanto recurso pueda ser utilizado en cada fábrica. De esta forma se fabrican decenas de miles de artefactos, fundamentalmente explosivos. Comienzan a formarse brigadas y a elegirse responsables, al mismo tiempo que se imparten instrucciones elementales de carácter militar."(451) Esa tarde, en forma espontánea, el -pueblo santiaguino se congregó frente al palacio de gobierno gritando consignas que llamaban a cerrar el Congreso Nacional, clausurar el diario "El Mercurio", a solicitar un referéndum y a armar al pueblo. El Presidente Allende pronunció un discurso desde los balcones de La Moneda en el cual ratificó -

(450) Toer, Mario, op. cit., p. 209 .

(451) Ibid., p. 210 .

la estrategia política que no variaría durante todo su gobierno. Así, manifestó:

"Ya sabe el pueblo lo que reiteradamente he dicho: el proceso chileno tiene que marchar por los cauces propios de nuestra -- historia, nuestra institucionalidad, nuestras características, y por lo tanto, el pueblo tiene que comprender que yo tengo - que mantenerme leal a lo que he dicho: haremos los cambios re volucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual - no significa, ni significará tolerancia con los antidemócratas, tolerancia con los subversivos y con los fascistas.

Yo sé que lo que voy a decir es posible que no le guste a muchos, pero tienen que entender cuál es la real posición - de este gobierno, no voy a cerrar el Congreso, porque sería - absurdo. Pero si es necesario enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie". -- (452) Cuando finalizó su discurso leyó ante la multitud te legramas de solidaridad del Presidente argentino Cámpora, de Vietnam del Norte, de Fidel Castro y del Presidente de México, Luis Echeverría. El cable de este último decía: "Sé que uste des van a vencer. Tenemos plena confianza en el pueblo de -- Chile y en tí, compañero Allende". (453)

Al día siguiente fueron dados de baja los oficiales que participaron en la asonada aunque ellos y el jefe de Patria y -

(452) Ibid., pág. 211.

(453) Ibid., pág. 212.

Libertad, Pablo Rodríguez, en la noche anterior se habían -- asilado en la Embajada de Ecuador junto a otros líderes civiles del movimiento. (454)

Como sostiene de Riz, "el Tancazo había cumplido con éxito su misión de constituirse en un ensayo de lo que ocurriría en septiembre. Los militares defendieron la continuidad institucional pero al hacerlo pasaron a dominar abiertamente la situación. Todas las fuerzas sociales quedaron a su merced". (455) Pero el intento de golpe del 29 de junio había despertado en las masas un fenómeno colectivo de autodefensa. Vieron que el Ejército salió a la calle con tanques y mató a pacíficos ciudadanos*por lo cual, a partir de ese día, sectores de la clase obrera buscaron crear una fuerza militar propia. Esto a su vez repercutió en el sentimiento corporativo de los institutos armados que se aglutinaron, con excepción de los militares que hasta el mismo golpe se mantuvieron constitucionalistas, para la intervención militar y derrocar al gobierno. Simultáneamente al proceso preparatorio de las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado se producía la articulación ofensiva de la burguesía opositora en los aparatos del Estado que dominaba.

El centro del conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Parlamento, el proyecto de reforma constitucional acerca

(454) Cfr., Selser Gregorio, op. cit., p. 218.

(455) de Riz, Liliana, op. cit., p. 192.

* Hubo 22 muertos civiles. Cfr. con Bruna Susana, op. cit. p. 226.

de las tres áreas de la economía, seguía latente, Vimos en el capítulo tercero que, a comienzos de 1972, el Congreso --- aprobó el proyecto de ley Hamilton Fuentealba pero, a su vez, el Presidente Allende lo vetó y como se suscitó una discusión a raíz de la mayoría requerida en el Parlamento para superar el veto presidencial, y que la Constitución no resolvía, el asunto se suspendió temporalmente. También señalamos los esfuerzos desplegados por Allende para lograr un acuerdo con la Democracia Cristiana acerca de esta materia. Debido a que to dos ellos resultaron infructuosos, en mayo de 1973, el Ejecutivo sometió el conflicto a la consideración del Tribunal Constitucional pero, a fines de ese mes, éste se declaró incompetente para solucionar el diferendo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo con lo cual el proyecto de ley de reforma -- constitucional patrocinado por la oposición quedó definitivamente aprobado por el Congreso. (456)

Con lo anterior quedaba demostrado, en la práctica, que con la obstrucción del Parlamento y del Tribunal Constitucional al gobierno y la imposibilidad de éste para superarla, la fase político-institucional del proceso de cambios iniciado - en Chile en 1970, estaba clausurada en el mes de junio. Los sucesos de ese mes, particularmente el intento subversivo y ensayo del golpe del 29 de junio, no hicieron sino corroborar lo. A partir de entonces, la aceleración del proceso de des-

(456) Cfr. Bruna, Susana, op. cit., p. 185.

gaste del gobierno sería progresivo.

Consideramos que una reseña de los acontecimientos posteriores más relevantes desde julio de 1973 constituyen la mejor forma de ilustrar cómo se precipitaron los hechos para culminar en el golpe de Estado de septiembre ese año.

3 de julio: terminó la huelga de los mineros del cobre de El Teniente, que se prolongó durante 93 días. El gabinete renunció en pleno y el Presidente Allende designó nuevos ministros, todos ellos civiles. (457)

8 de julio: el Partido Comunista llamó a sus bases a una concentración en un teatro de Santiago donde su Secretario General, Luis Corvalán, advertía: " Hay que estar preparados para todas las circunstancias, dispuestos a combatir en todos los terrenos. Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud. En una situación tal, que no deseamos, que no buscamos, que queremos evitar, pero que se puede dar, no quedará nada, ni siquiera una piedra que no usemos como arma de combate". Ese mismo día, Miguel Enríquez, Secretario General del MIR se había dirigido por cadena radial al país. Algunos de los fragmentos de su alocución fueron: " Los niveles de actividad, organización, conciencia y disposición de lucha que la clase obrera ha alcanzado son (457) Cfr. Selser, Gregorio, op. cit. , p. 218.

inmensos..... La clase obrera y el pueblo, desde las fábricas y fundos, desde los Comandos Comunales y desde los Consejos Campesinos, ya han notificado a sus direcciones políticas que la lucha salió de los pasillos del Congreso y que no permitirán retrocesos ni concesiones.....Los mismos que el 29 de junio escondidos aplaudían el asesinato de civiles ametrallados por los tanques, hoy vociferan y gritan acusando a los miles de obreros que ocupan centenares de fábricas de constituir grupos armados, exigiendo su represión". Por su parte, Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, manifestaba: " El Partido Socialista no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile, del gobierno popular de los trabajadores. En este momento cualquier fórmula de transacción con la derecha sólo sirve para alentar a los grupos facciosos que operan en su seno. Hay quienes pretenden insinuar diálogos democráticos con la Democracia Cristiana. Los socialistas planteamos que es posible el diálogo con todas las fuerzas políticas que se definen claramente en contra de los explotadores, en contra del imperialismo. Impulsamos y desarrollaremos el diálogo a nivel de la masa, con los trabajadores, militen o no militen, pero rechazamos categóricamente todo diálogo con directivas contrarrevolucionarias. El gobierno tiene la obligación de atenerse a la nueva legalidad surgida como producto genuino de las profundas transformaciones sociales y económicas del país y como fruto forzado de la conducta sediciosa e ilegítima de los grupos reaccionarios, y de una fracción minoritaria refugiada en

la unidad militar... El Partido Socialista no sólo reclama el derecho a la legítima defensa del pueblo chileno... sino que además llama a ampliar y fortalecer las organizaciones de masas, consolidar sus posiciones estratégicas en industrias y predios ocupados, y prepararse para una gran ofensiva de masas"(458)

15 de julio. El senador demócrata cristiano, Juan de Dios Carmona, formuló un llamado a la población para que colaborara con las autoridades en la requisa de armas que desde este mes las Fuerzas Armadas venían efectuando de acuerdo a la Ley de Control de Armas, dictada en octubre de 1972. En efecto, los registros se habían sucedido rápidamente. El 8 de julio el cementerio metropolitano fue registrado en busca de armas en las tumbas, así como las poblaciones marginales aledañas; el 10 de este mes allanaron los almacenes DINAC de Valparaíso, los hospitales de Santiago por delación del Colegio Médico, la oficina de Dirección de Carreteras en Puerto Montt y domicilios de militantes de la Unidad Popular en todo Chile. El Almirante Merino, en Valparaíso, había ordenado tirar a matar contra todo sospechoso de actos violentos. Ese día 15 de julio, Carmona invitó a "... la comunidad nacional a colaborar con el Ejército en la aplicación de la Ley... No hay una fábrica, un taller,

(458) Cfr. los textos de los discursos de Corvalán, Miguel Enríquez y Altamirano en Toer, Mario op. cit., p.p. 213 a 216.

una oficina, una escuela, un local en donde se ocultan armas ilícitas en los cuales no haya al mismo tiempo una persona que más allá de toda consideración no quiera servir hoy a la causa de Chile. La información, la denuncia ante los alcaldes y los parlamentarios quienes están autorizados para advertir a las autoridades judiciales y militares es actualmente un acto de patriotismo!"(459)

17 de julio. El Cardenal de la Iglesia Católica chilena, Raúl Silva Henríquez, en carta pública dirigida a la Unidad Popular y a la oposición solicitó la reiniciación del diálogo UP-DC y a "desarmar los espíritus y las manos"(460) La Democracia Cristiana lo aceptó con fecha 25 de ese mes pero para concretarlo el día 30 de julio.

26 de julio. Se inició un paro indefinido del gremio del transporte terrestre. Leon Vilarín presidente de esa asociación gremial instruyó a sus asociados que, en previsión de su requisa por el gobierno, despojen a los camiones de sus piezas esenciales e impedir así la incautación y utilización por el gobierno.

27 de julio. El Edecán Naval del Presidente Allende, Arturo Araya Peters, fue asesinado en una operación tipo comando. Diez días más tarde fue detenido el estudiante de

(459) Bruna, Susana, op. cit., p.p. 233-234.

(460) Toer, Mario, op. cit., p. 219.

ingeniería electrónica Mario Rojas Zeghers quien confesó haber formado parte del comando terrorista, integrado por ocho personas, que ultimó al Edecán presidencial. Admitió pertenecer a Patria y Libertad y que los demás eran miembros del Partido Nacional. (461)

30 de julio. Se reanudó el diálogo UP-DC, a instancias de la Iglesia Católica trece días antes, a fin de encontrar una solución a los gravísimos problemas que vivía el país. Entre tanto el mercado negro y desabastecimiento se habían generalizado y los allanamientos de fábricas, escuelas, oficinas y domicilios de militantes de los partidos de la Unidad Popular eran algo cotidiano en todo Chile. En el diálogo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, al cual el Partido Nacional rehusó públicamente, los democristianos condicionaron el acuerdo a lo siguiente: "a) La aplicación sin restricciones de la Ley de Control de Armas; b) la promulgación de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía tal como fue aprobada por el Congreso y c) la devolución a sus antiguos propietarios de las empresas ocupadas por los trabajadores" (462)

Para el Presidente Allende aceptar estas condiciones habría significado enfrentarse con la clase trabajadora pues

(461) Cfr. Selser Gregorio, op. cit., p. 219-220.

(462) Bruna, Susana, op. cit., p. 244.

implicaba renunciar al Programa Básico de gobierno de la UP y, dada la radicalización y grado de combatividad del pueblo en esos momentos, el Presidente habría tenido que recurrir a la represión de sus propias fuerzas de apoyo. Sin embargo Allende inició un periodo de gran actividad para llegar a al gún acuerdo con el PDC: "se reúne con los Comandantes en Jefe del Ejército, con el Cardenal Silva Henríquez y no menos de siete veces con los dirigentes de los partidos de la UP. Al mismo tiempo los contactos informales entre portavoces de la DC y del gobierno se multiplican. Incluso parecen haber alcanzado a sectores del ala progresista del PDC: Leighton, Tomic, Fuentealba, Huepe con el objetivo de asegurar el proceso democrático impidiendo una dictadura militar o un conflicto armado. Por esta razón, Aylwin, el Presidente del PDC se ve forzado a declarar que toda especie de entendimiento debería hacerse solamente con los dirigentes, es decir, con el ala dura". (463)

A medida que las pláticas entre el gobierno se van desarrollando, la Democracia Cristiana plantea nuevas exigencias: disolución de las JAP, una administración conjunta del Canal 7, que era el canal estatal de la televisión, sometimiento i rrestricto a los dictámenes del Poder Judicial, Parlamento y Controlaría rectificación sustancial de la política económi

ca. Como afirma Toer, aludiendo a la estrategia de oposición al gobierno diseñada por el Partido Demócrata Cristiano cuyos ideólogos denominaron de los mariscales rusos; "Se trataba de exigencias para la rendición, de quienes, tras defender 'Moscu', se encontraban a las puertas de Berlín". (464)

10. de agosto. El Secretario General del MIR, Miguel Enríquez, emitió un dramático comunicado al país denunciando actividades conspirativas dentro de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Enríquez hizo una detallada descripción de hechos que involucraban a altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas y a órganos de inteligencia militar norteamericana y brasileña. Entre estos hechos se refirió "a las actividades de un miembro de la Embajada de Estados Unidos en Chile en el puerto de Arica, a bordo de un crucero de la Armada, el día 20 de mayo. Ese día tal personaje se reunió con todo el Alto Mando Naval y varios oficiales de alta graduación de la Primera División del Ejército y luego en los meses de junio y julio en cada barco de la escuadra chilena, se embarcó un oficial de la inteligencia naval norteamericana" (465) Además el líder del MIR agregó otras informaciones relativas a la conspiración militar ya en marcha acelerada: "En los últimos días, la acción de la oficialidad reaccionaria colmó el vaso. Los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en Punta

(464) Toer, Mario, op. cit., p. 220

(465) Rodríguez, Felipe, op. cit., p. 139

Arenas primero, declararon que los Cordones Industriales son ilegales y luego con un dispositivo militar masivo, con participación de helicópteros, aviones y tanques, como un ejército de ocupación en país extranjero, allanaron varias fábricas, injuriaron y golpearon a centenares de trabajadores, hirieron con bayoneta a un obrero y finalmente ametrallaron al obrero Manuel Gómez Bustos, de 27 años".(466)

Al mismo tiempo Miguel Enríquez se pronunció en contra del diálogo UP-DC, argumentando que la exigencia democristiana de aplicación sin restricciones la Ley de Control de Armas por las Fuerzas Armadas sólo garantizaba que éstas siguieran adelante en la conspiración. Mencionó varios nombres de oficiales comprometidos en la subversión que, a la vez, mantenían contactos con Patria y Libertad y el Partido Nacional: el Capitán de Fragata René Gajardo Alarcón en Talcahuano; el Coronel Cristian Aechernecht en Rancagua, el Coronel Luciano Díaz y el General Washington Carrasco en Concepción y los Generales Nicanor Díaz Estrada y Germán Esquivel en Santiago.(467)

3 de agosto. Se inició un paro indefinido de autobuses de transporte colectivo y taxis en todo el país. Si consideramos que sólo el 20% del transporte colectivo de Chile era estatal, significaba que esta huelga paralizaba el 80% de

(466) Ibid, p. 139-140.

(467) Cfr. Rodríguez, Felipe, op. cit., p. 140.

los vehículos dedicados a prestar este vital servicio.

6 de agosto. Patricio Aylwin, Presidente de la Democracia Cristiana, anunció que daba por finalizado el diálogo con el gobierno en los siguientes términos: "El Presidente Salvador Allende no aceptó las condiciones mínimas expuestas por el PDC para iniciar puntos de convergencia. Por lo tanto, el diálogo no continúa"(468)

8 de agosto. La Marina arrestó a un gran número de suboficiales y marinos en dos naves de guerra en Valparaíso y Talcahuano, en las que detectó conatos de sublevación para el caso que las Fuerzas Armadas se lanzaran a un golpe de Estado. Al mismo tiempo que se les reprimió brutalmente, se acusó a Carlos Altamirano, Miguel Enríquez y a Oscar Garretón, este último Secretario General del MAPU, de estar en vinculación con los marinos constitucionalistas. La Armada solicitó al gobierno el desafuero del senador Altamirano y del diputado Garretón y el procesamiento de ambos junto a Miguel Enríquez por el delito de infiltración en las Fuerzas Armadas.,(469)

9 de agosto. Allende designó un nuevo gabinete al cual se incorporaron el General Prats como Ministro de Defensa y un representante de la Armada y otro de la Aviación en otros puestos ministeriales.

(468) Selser, Gregorio, op. cit., p. 220.

(469) Cfr., Selser, Gregorio, op. cit., p. 233.

14 de agosto. El Ministro del Interior declaraba que desde que se inició el paro de los transportistas se han producido 263 actos de terrorismo antigubernamentales. Mientras el Presidente Allende se dirigía a la nación para advertir que Chile se encontraba al borde la guerra civil, un atentado dinamitero contra torres de alta tensión dejó sin energía eléctrica a Santiago y cinco provincias del país. El gobierno dispuso que ante la falta de transporte colectivo las vacaciones escolares se prolongarían indefinidamente. Al día siguiente debían retomar los estudiantes a clases pues finalizaban las vacaciones de invierno. Pero dada la crítica situación que se vivía, Allende prefirió impedir regreso a las aulas.(470)

20 de agosto. Renunciaron al gabinete y a sus cargos de Comandante en Jefe de la Armada y el Ejército, el Almirante Raúl Montero Schmidt y el General Carlos Prats, respectivamente. El día anterior había dimitido a su cargo ministerial el General de Aviación Carlos Ruiz Danyau.

El General Prats* en su carta de renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército y al ministerio de Defensa expresó: "He estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebra de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de derecho, ni de ser-

(470) Cfr. Selser, Gregorio, op. cit., p.p. 223 a 225.

* El General Prats y su esposa fueron asesinados en Buenos Aires donde se había exiliado voluntariamente el 30 de septiembre de 1973.

vir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional". (471). El Presidente Allende le dirigió una respuesta a esa carta que, en una de sus partes, decía "... su lección moral lo mantendrá como una meritoria reserva ciudadana, es decir, como un colaborador de la Patria con el cual, es toy seguro, ella contará cuando las circunstancias se lo deman den".(472) Con la renuncia de Prats a su cargo de Comandante en Jefe del Ejército, le correspondió sucederlo en ese puesto al General de más antigua gradación y ése era Augusto Pinochet.

Este mismo día "el Comité de los Cuarenta del gobierno de Estados Unidos aprobó una subvención de un millón de dólares para entregar a los partidos y organizaciones gremiales chilenas que estaban en huelga insurreccional. Al tipo de cam bio del dólar en el mercado negro en ese momento, semejante in yección de moneda tenía entonces un valor de mercado superior a cinco millones de dólares". (473)

23 de agosto. Mientras el paro de los transportistas con tinuaba, los allanamientos en busca de armas persistían, el Co legio Médico decretaba un paro de 48 horas; el gremio de co mer ciantes anunciaba que solidarizaría con el gremio de camioneros y la mayoría de la Cámara de Diputados formada por los -- partidos de la CODE aprobó una resolución, por 81 votos contra 47, en la que declaraba la inconstitucionalidad e ilegalidad

(471) Prats González, Carlos, op. cit., p. 265.

(472) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena" p. 327

(473) Ibid, p. 325.

del gobierno y llamaba a las Fuerzas Armadas a que intervinieran para poner término a esa situación que ponía en peligro el régimen de Derecho establecido en la Constitución.

Las asociaciones gremiales y de los colegios profesionales apoyaron de inmediato la resolución de la Cámara de Diputados. Incluso el Colegio de Abogados presentó al Senado una demanda para declarar la incapacidad del Presidente Allende para proseguir su mandato. En las calles de Santiago estu--diantes y mujeres de la oposición organizaron manifestaciones para pedir la renuncia del Presidente.(474)

24 de agosto. El Presidente Allende se dirigió al país para responder a los diputados de oposición que habían aprobado un acuerdo carente de validez jurídica pues para acusar constitucionalmente al Ejecutivo se requería de la mayoría de los dos tercios del Congreso Pleno, es decir, de ambas cáma--ras reunidas en sesión plenaria. Ese día Allende expresó: "En el día de ayer los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a las que estan subordinadas por mandato de la Carta Fundamental. Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal

(474) Cfr. con Selser Gregorio, op. cit., p.p. 234-235 y Bruna, Susana, op. cit., p. 252.

del gobierno existe un solo camino: la acusación constitucional según el procedimiento contemplado por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de obtener dos tercios de los senadores para poder a cusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello. Por eso ahora pretenden, mediante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación constitucional. El inmérito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia... La mayoría parlamentaria pretende destruir el basamento institucional del Estado y del gobierno republicano, democrático y representativo. El acuerdo aprobado más que violar, niega la subsistencia de toda Constitución... La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico establecido en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados cuarenta y siete años!"(475)

Sin embargo con esa declaración de la Cámara de Diputados la vía chilena al socialismo quedaba clausurada. El supuesto esencial de este camino para construir el socialismo: la utilización de la legalidad vigente para generar en su seno la nueva institucionalidad socialista se había a-

(475) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende", p. 11, 12 y 13

gotado. Las condiciones previas para que las Fuerzas Armadas dieran el golpe de Estado ya habfan sido provocadas.

4.7 El golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Si después del ensayo de golpe militar del 29 de junio los sectores sociales que apoyaban al Presidente Allende tomaron plena conciencia de que la situación había cambiado, ahora, en el transcurso de las tres semanas anteriores al golpe militar la convicción generalizada era que la línea legalista o institucional de la UP había llegado a su fin. Lo que más claramente apareció entonces fue la desorientación porque la única línea coherente que había podido ir siendo desarrollada; la del Partido Comunista, dejó de corresponder al nivel de la lucha de clases y a la coyuntura precisa en que se encontraba Chile a fines de agosto de 1973. Es cierto que el MIR y, en cierta medida, un sector del Partido Socialista intentaron preparar política y militarmente para un enfrentamiento armado. Los Cordones Industriales, en general bajo la hegemonía socialista, se convirtieron en destacamentos avanzados del proletariado y, en algunos casos, acumularon depósitos de armas y organizaron incipientes milicias obreras.

Pero nunca se pensó seriamente en la posibilidad de construir un aparato militar popular capaz de enfrentarse y derrotar a un ejército dotado de los medios técnicos más modernos.

Los grupos armados de los cordones y de los partidos de izquierda, entre los cuales probablemente era el Partido Comunista quien contaba con la mejor organización militar, no estaban en condiciones de ser sino grupos de apoyo a una fracción leal del Ejército.

En esas circunstancias las tendencias fascistas de la oposición, ante la impotencia popular, pudieron dedicarse durante las semanas siguientes al 23 de agosto a terminar de preparar el terreno antes del golpe militar. Caos social provocado por los paros indefinidos de los gremios del transporte y del comercio y de los Colegios profesionales, terrorismo de Patria y Libertad, atentados dinamiteros a puentes y a torres de alta tensión, asaltos a radioemisoras y locales partidarios de la UP, allanamientos de poblaciones y fábricas y sistemática campaña de ataques al gobierno por los medios de comunicación. Así se llegó al 11 de septiembre.

El 28 de agosto el Presidente Allende designó nuevo gabinete. Sería su último equipo ministerial. Estaba integrado por: Clodomiro Almeyda, socialista, Relaciones Exteriores; Interior, Carlos Briones, socialista; Economía, José Cardemártori, comunista; Educación, Edgardo Enriquez, radical; Justicia, Sergio Inzunza, comunista; Obras

Públicas y Transporte, General de Aviación, Humberto Magliocchetti; Agricultura, Jaime Tohá, socialista; Tierras, General de Carabineros, José María Supúlvada; Hacienda, Contralmirante, Daniel Arellano; Trabajo, Jorge Godoy, comunista; Minería, General de Ejército, Rolando González; Salud Pública, Mario Lagos, radical; Defensa, Orlando Letelier, socialista; Vivienda, Felipe Ramírez, Izquierda Cristiana y Secretario General de Gobierno, Fernando Flores, MAPU. (476)

Esa noche Allende pronunció un discurso en el cual dio a conocer al país su nuevo gabinete cuya misión sería, según sus propias palabras, "atajar la guerra civil y afianzar la seguridad nacional".(477) Además comunicó que no asistirá a la Conferencia de Países No Alineados que, en breve se realizaría en Argelia, debido a la situación que se vivía en Chile. Al mismo tiempo en ese discurso Allende afirmó: "No habrá golpe de Estado, no habrá guerra civil, porque la inmensa mayoría de los chilenos, fieles a las tradiciones democráticas, rechazan tales alternativas por patriotismo y por tradición histórica... En cuanto a ciertas peticiones para que dimita, yo no estoy aquí ocasionalmente, he sido elegido democráticamente en elecciones libres, ratificadas por el Congreso. No pueden exigir mi dimisión quienes están en contra del movimiento popular. Yo represento y estoy encargado de un proceso revolucionario que no será detenido ni por el terrorismo, ni

(476) Cfr., Selser, Gregorio, p. 248 .

(477) Ibid, p. 249.

por la amenazas fascistas... Hoy día las negociaciones con los camioneros se terminan en forma definitiva. Si no aceptan las proposiciones del gobierno, tomaremos todas las medidas necesarias para sacar a Chile de la asfixia económica y para hacer cesar definitivamente el terrorismo".(478)

Arribamos a los primeros días de septiembre y la situación nacional era cada día más tensa. Los paros de las asociaciones gremiales del transporte y del comercio continuaban y la ola de terrorismo y caos social imperaba en todo el país. Un comando del Ejército, el día 10., tomó por asalto a la sede de la Universidad Católica de Valparaíso a petición de su Rector. En ella se encontraron enormes cantidades de armas de fuego y se arrestó a 250 estudiantes, todos de derecha, que opusieron resistencia. Hubo dos heridos a bala y muchos heridos. Los estudiantes se habían posesionado del local 10 días antes y desde él diariamente disparaban tiros y bombas molotov hacia la calle. Los pilotos de la Línea Aérea Nacional decretaron un paro de tres días en solidaridad con el gremio del transporte, afectando así los vuelos nacionales y al exterior. El Partido Socialista declaraba oficialmente su desaprobación al nombramiento de Carlos Briones como Ministro del Interior por considerarlo un moderado que "no representa al Partido y en consecuencia deslinda toda responsabilidad en torno de sus actuaciones. Si el desempeño de Briones se aparta de

los lineamientos de la Unidad Popular, el socialismo adoptará las medidas del caso". (479)

El 4 de septiembre se celebró el tercer aniversario del gobierno con una manifestación gigantesca en la capital y otras de iguales proporciones en provincias. En Santiago aquel día desfilaron casi un millón de personas portando pancartas y voceando consignas de apoyo al gobierno. Toer señala que "quizás ésta haya sido la más grande concentración de la historia de Chile, cerca de un millón de personas desfilaba por la Alameda exigiendo una dirección política bajo la consigna: parar el fascismo". (480)

Un observador del proceso, el sociólogo francés Alain -- Touraine, describe la situación imperante en esos momentos: "La vida material se hace cada vez más difícil; el país está asfixiado por la ausencia de transporte y por la inflación en el mercado negro... De todos lados se anuncia, se espera la caída. Se extiende la impresión de que los hechos decisivos están en otra parte: la ausencia de pan, en los atentados, en el odio y en el miedo, en las armas escondidas por la derecha como por la izquierda... La crisis política se agrava. La huelga de transportistas se eterniza; los gremios siguen sosteniéndola... El ataque de los gremios, las declaraciones del Parlamento revisten una gravedad excepcional, porque es-

(479) Ibid, p. 251.

(480) Toer, Mario, op, cit., p. 235.

tán dirigidas contra un Estado debilitado, agotado, que ha -
 sorteado muchos escollos, pero que no parece tener fuerza
 propia. No dudo que tenga un fuerte apoyo popular, pero la
 crisis es ante todo una crisis de poder... Ya hemos entrado
 en la gran crisis, crisis del régimen y del Estado, cuyo de-
 sarrollo es imprevisible ya que uno de sus actores se mantie
 ne oculto.

¿Cuál es la capacidad real de la movilización popular?
 ¿Cuáles son los sentimientos del ejército?"(481)

El día 5 el Presidente Allende convocó al Comité Polític
 co de la Unidad Popular a fin de que conociera un informe
 del Ministro de Defensa, Orlando Letelier, quien el día an-
 terior había tenido una reunión con el Comandante en Jefe del
 Ejército que sucedió al General Carlos Prats, Augusto Pino-
 chet. Aquella reunión puede decirnos cuál era el sentimien-
 to del Ejército en esos momentos ya que Pinochet manifestó
 al Ministro de Defensa: "Aquí hay una tropa de locos plante-
 ando que las Fuerzas Armadas deben adoptar una definición --,
 ahora, aun a costa de cien mil muertos, más bien que no un
 millón después de una guerra civil. Hago lo posible por pa-
 rarlos, según las instrucciones que antes me diera mi Gene-
 ral Prats y que me ha reiterado el Presidente, y estoy visi-
 tando las unidades a este efecto. He encontrado en ellas un

(481) Touraine, Alain, "Vida y muerte del Chile popular",
 Siglo XXI Editores, México, 1974, p.p. 120 y 123.

ambiente difícil... Pasar de inmediato a retiro a los oficiales que así se expresan puede violentar las cosas. Necesito un mínimo de tiempo para afianzar la gente de confianza en las unidades. Si se produce ahora un levantamiento, corremos el riesgo de que esta vez sea del conjunto de las Fuerzas Armadas, no de una unidad aislada como el 29 de junio..."(482)

En la reunión con el Comité Político de la UP Allende, que conocía este informe, planteó la gravedad de la situación y la necesidad de optar entre recurrir al plebiscito, un acuerdo con la Democracia Cristiana o formar otro gabinete integrado esencialmente por militares. Por último, en caso de que los partidos del bloque de gobierno no se pusieran de acuerdo sobre alguna de las opciones anteriores, Allende solicitó que durante un periodo máximo de tres meses aceptaran que él adoptara decisiones, según su discreción, acerca del camino a seguir, pues el gobierno no podía permanecer semiparalizado en medio de la insurrección existente en el país. Además el Presidente pidió respuesta por escrito de esta solicitud para el día siguiente (483). Los partidos políticos de la Unidad Popular se retiraron a discutir sin llegar a un acuerdo. Llegó el día 7 y Allende no recibía contestación alguna.

(482) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 332

(483) Cfr. con Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena" p.p. 332-333.

Entretanto, el 6 de septiembre, había llegado a las costas de Chile una escuadra norteamericana con el pretexto de participar en maniobras conjuntas con la chilena e iniciar ejercicios náuticos en alta mar el 10 de ese mes.(484) El 7 de septiembre Allende se reunió con varios generales, entre ellos estaba Pinochet. El Presidente les hizo partícipes de su intención de anunciar la semana siguiente la convocatoria a un plebiscito para resolver democráticamente el agudo conflicto con el Congreso. Garcés relata: "Los generales no pueden ocultar su sorpresa y le preguntan si su resolución está ya tomada. Allende les confirma: 'Sí, señores, la semana próxima daré a conocer al país mi decisión'. Me llamó la atención lo contento que vi salir a Allende de esta reunión"!(485)

El día 9 de septiembre el Partido Socialista realizó un mitin en el Estadio Chile bajo la consigna de crear poder popular, para denunciar las maniobras golpistas de la derecha opositora al gobierno y solidarizar con los suboficiales y marineros de Valparaíso y Talcahuano, sometidos a proceso por subversión y que eran torturados en ambas bases navales por oficiales de la Armada. Touraine se refiere a Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, quien habló en esa concentración: "Con pasión, arrebatado por la indignación... Rechaza el diálogo con la oposición: quiere que la Unidad Po-

(484) Cfr. con Selser Gregorio, op, cit., p. 261.

(485) Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende", p. 51

pular se dé como consigna el poder popular, se refiere a los marinos torturados, a los allanamientos brutales en las fábricas, a las acusaciones lanzadas contra él mismo, contra Garretón y Enríquez. Afirma la voluntad del Partido Socialista de luchar por todos los medios contra los ataques de la oligarquía y del fascismo. Habla de la solidaridad con Cuba. Todos estos temas son conocidos, pero el tono es más duro que otras veces; la negativa al compromiso marca claramente la distancia con Allende... El tono es fuerte, pero no oigo ninguna consigna precisa. No hay análisis ni estrategia. Habla y actúa como un militante de base llegado a la cumbre del aparato del partido sin haber cambiado de papel. No es hombre de gobierno. Me figuro que en los consejos de la Unidad Popular, convence sobre todo cuando se opone a una medida, rara vez cuando propone una" (486)

El Lunes 10 de septiembre el Presidente Allende citó a La Moneda al Ministro del Interior, Carlos Briones, a Sergio Bitar, ex Ministro de Minería, a José Tohá ex Ministro de Defensa, a Orlando Letelier que era el Ministro de esta última cartera en esos momentos y a su asesor político Garcés. En aquella reunión les comunicó que al día siguiente daría a conocer al país, por red nacional de radio y televisión, la convocatoria a un plebiscito a fin de que la ciudadanía se

pronunciara para dirimir el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento. También les manifestó que dirigiría el mensaje al país al día siguiente a mediodía, antes que se reuniera el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano que tenía una junta esa tarde con el objeto que ese partido conociera su decisión y la discutiera el martes 11. Al finalizar la reunión Garcés se informó por la Secretaría de Prensa de la presidencia de la República, Frida Modak, que René Fuentesalba le había encargado transmitir al Presidente Allende que no se fiara del Partido Demócrata Cristiano porque su presidente, Patricio Aylwin, sólo se proponía derrocar a Allende lo más pronto posible y con el menor costo.

El día 11 a las seis y media de la mañana las autoridades del gobierno de la Unidad Popular se percataron de que las Fuerzas Armadas se habían sublevado. La noche anterior habían tenido conocimiento de movimientos sospechosos de tropas en la capital, en Valparaíso y en Punta Arenas. Los acontecimientos del día siguiente no harían sino confirmar que los institutos armados chilenos se lanzaban a derribar al Presidente constitucional electo tres años antes.

El Presidente Allende, inmediatamente después de conocer la noticia del golpe militar en marcha, se trasladó al palacio de La Moneda donde comprobó que la insurrección abarcaba

a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada, Aviación y Carabineros.

En efecto, a las 8:30 de la mañana, por red nacional - de radioemisoras que, desde las 7 horas transmitían exclusivamente marchas militares, se emitió un comunicado que decía: "El Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile... La prensa, radio y canales de televisión a dictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas, a partir de este instante, de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre... Firma: Junta Militar de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros"(487)

De este comunicado se deducía que por la Aviación y el Ejército eran los propios Comandantes en Jefe, Gustavo Leigh y Augusto Pinochet quienes habían sido designados como tales por el Presidente Allende en agosto de ese año, los que integraban la Junta Militar. En el caso de Leigh no hubo mayor sorpresa pero sí con Pinochet pues era el hombre "que se hacía pasar por 'leal hasta las últimas consecuencias', el confidente que revelaba al gobierno las intrigas de los conspiradores, el que en el mayor secreto discutía con Prats y con Allende de las medidas para controlarlos y eliminarlos del Ejército, el que apenas dos días antes había escuchado al Presidente decir que iba a convocar a un referendun para

(487) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p.382.

resolver los principales dilemas político-económicos del país y, ahora, era el que dirigía el levantamiento".(488) Respecto a Carabineros y la Aviación cuyos representantes en la Junta eran el General César Mendoza y el Almirante José Toribio Merino, era evidente que un golpe interno había desplazado a sus altos mandos. De esta manera, el Presidente Allende no contaba con ningún cuerpo armado leal.

Las organizaciones populares, partidos y sindicatos se encontraron a merced de sus propios recursos. Como no habían llegado al gobierno mediante un enfrentamiento armado, ni tampoco en los mil días anteriores se habían preparado para un combate que defendiera sus conquistas, su lealtad al gobierno popular y al proyecto de sociedad que subyacía tras él sólo pudo demostrarse en aislados combates, heroicos, pero todos acallados por la enorme superioridad bélica del enemigo.

Poco después de las nueve de la mañana en medio del ruido ensordecedor de los vuelos rasantes de la Aviación sobre el palacio de La Moneda, Allende intentó dirigirse al país a través de las radios Corporación y Portales. Pero ambas habían sido bombardeadas. Mediante radio Magallanes pudo pronunciar su último mensaje a Chile:

(488) Ibid, p.p. 382-383.

"Compatriotas: es posible que silencien las radios, y me despidan de ustedes. Quizá sea ésta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio Portales y radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron, soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autoproclamado, el general Méndez, general rastrero que sólo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros.

Ante estos hechos sólo me cabe decirles a los trabajadores yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil; es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.

Es éste el momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les señaló Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena conquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días están trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha, me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya

estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortado las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará.

Seguramente radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, me seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco debe humillarse.

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición."(489)

A las nueve y media el Presidente Allende salió de su gabinete desde donde pronunció su última alocución y organizó la defensa del palacio de La Moneda, el cual ya era asediado con disparos de ametralladoras, artillería pesada y tanques. Desde el interior de la sede de gobierno se empezó a responder con algunos fusiles y metralletas. Comenzó, así, un combate que tenía más sentido político que militar.

Después de hora y media de intercambio de fuego llegó la noticia de que la Aviación había bombardeado la residencia presidencial de la calle de Tomás Moro. Al mismo tiempo por red nacional de emisoras de radios se anunciaba que la Aviación bombardearía el palacio de gobierno si el Presidente Allende no se rendía.

Las personas que estuvieron con el Presidente durante el combate de La Moneda antes del bombardeo aéreo, además de los integrantes de la guardia presidencial y los miembros del Servicio de Investigaciones todos militantes de izquierda, fueron:

Aníbal Palma, ex-Secretario General de Gobierno

Augusto Olivares, periodista, Director del Canal 7 de televisión

Arsenio Poupin, Subsecretario General de Gobierno

Arturo Girón, médico, ex-Ministro de Salud Pública

Carlos Briones, Ministro del Interior

Carlos Jorquera, periodista y asesor de prensa

Claudio Jimeno, sociólogo, técnico del Departamento de Di
fusión de la Secretaría General de Gobierno

Clodomiro Almeyda, Ministro de Relaciones Exteriores

Daniel Vergara, Subsecretario del Interior

Danilo Bartulín, médico

Eduardo Paredes, Director de Chile Films

Enrique París, asesor en política universitaria

Fernando Flores, Secretario General de Gobierno

Jaime Barrios, asesor económico

Jaime Tohá, Ministro de Agricultura

Joan Garcés, asesor político

Jorge Klein, técnico del Departamento de Difusión de la
Secretaría General de Gobierno

Jorge Uribe, periodista de la Presidencia

José Tohá ex-Ministro de Defensa

Oscar Soto, médico

Oswaldo Puccio, Secretario Privado del Presidente

Oswaldo Puccio, hijo, estudiante de Derecho

Patricio Arroyo, médico

René Largo Farías, periodista de la presidencia

Ricardo Pincheira, militante socialista

Un oficial de carabineros

Lautaro Ojeda, Subsecretario de Tierras.(490)

(490) Cfr. con Timossi, Jorge, "Grandes Alamedas.El combate del Presidente Allende", Editorial Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, 1974, p.p. 80-81 .

En La Moneda había alrededor de una docena más de hombres afirma Timossi, el testigo ocular de estos hechos, "pero no los enumero porque desconozco su destino posterior y no quiero facilitar los fusilamientos, torturas o confinamientos de la junta"(491). Además de estos hombres valerosos y responsables también estuvieron con el Presidente un grupo de mujeres igualmente admirables: Beatriz e Isabel Allende, hijas del Presidente; Frida Modak, Secretaria de Prensa; Verónica Ahumada, periodista; Miriam Contreras, Secretaria Privada y Nancy Julien, esposa del economista Jaime Barrios que cayó en la batalla de La Moneda"(492)

Ante el rechazo del Presidente Allende de la oferta de rendición, a las doce y veinte de la mañana se inició el ataque aéreo y terrestre del palacio de La Moneda. Minutos antes el Presidente conminó a las personas que lo acompañaban a abandonar el palacio presidencial. Varias de ellas lo hicieron. La mayoría fueron apresadas a la salida.

Después de unos quince minutos de bombardeo el recinto de La Moneda "ardía por los cuatro costados; en su interior, el aire tóxico y el humo dificultaban la respiración. Allende y sus colaboradores se distribuyeron las pocas máscaras antiguas disponibles, y se aprestaron a continuar el combate. Tropas de infantería comandadas por el General Javier Pala--

(491) Timossi, Jorge, op. cit., p. 92.

(492) Cfr. con Timossi, Jorge, op. cit., p. 93.

cios iniciaban el asalto mientras los tanques disparaban sobre las ventanas. Las dos docenas de civiles alcanzaron a resistir en su interior una hora más, en medio de las llamas y del derrumbe de techos y pisos. Hacia las 13:45 los primeros soldados entraban en el ala donde se habían concentrado los sobrevivientes, la de la calle Morandé, donde se encontraba el comedor. El gabinete presidencial, la sala del Consejo de Ministros, la secretaría privada eran pasto del fuego. Poco antes de las dos de la tarde, moría Allende. Tenía entre las manos el fusil con que había combatido. No alcanzó a convocar el plebiscito". (493)

De esta forma, el 11 de septiembre de 1973, se puso fin a un largo periodo de normalidad institucional en Chile iniciándose una etapa histórica radicalmente distinta y contraria a las tradiciones políticas chilenas.

Las Fuerzas Armadas le declararon la guerra a su propio pueblo y decidieron gobernar el país a través de los mismos medios violentos con que derrocaron a Salvador Allende, el Presidente constitucional de Chile por el período 1970-1976. Establecieron una dictadura militar a cargo de una Junta de Gobierno integrada por el General de Ejército Augusto Pinochet, el General de Aviación Gustavo Leigh, el Almirante José Toribio Merino y el General de Carabineros César Mendoza quienes emi--

(493) Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", p. 396.

tieron la Declaración del 11 de septiembre cuyo texto es el siguiente:

"Teniendo presente:

Primero, que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho, en general, a una digna y segura subsistencia.

Segundo, que el mismo gobierno ha quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos ~~evu~~enta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria y llevando a una lucha fratricida y ciega tras ideas extrañas a nuestra idiosincracia, falsas y probadamente fracasadas.

Tercero, que el mismo gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar ni hacer cumplir el Derecho gravemente dañado en reiteradas ocasiones.

Cuatro, que, además, el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, o en forma flagrante en otras, las que, por distintos motivos, han quedado sin sanción.

Quinto, que asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado "resquicios legales", se han de jado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen.

Sexto, que también, reiteradamente, ha quebrado el mu tuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones.

Séptimo, que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y deliberada, - procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país.

Octavo, que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y de directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asigna, y, por tanto, el carácter presidencial del gobierno.

Noveno, que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso, y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean indicios siquiera de preocupación por esos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el gobierno que aparece como un mero espectador de ellos.

Décimo, que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico y, en el gobierno, una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile impidiendo llevarla al puesto que por vocación le corresponde dentro de las primeras naciones del continente.

Decimoprimer, que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del gobierno es inconveniente para los altos intereses de la república y de su pueblo soberano.

Decimosegundo, que estos mismos antecedentes son, a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención en deponer al gobierno ile

gítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir, pues, para lograr esto, no hay otros medios razonablemente exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, la tranquilidad y seguridad perdidas.

Decimotercero, por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y, por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se propone cumplir.

Decimocuarto, en consecuencia, de la legitimidad de estas normas se colige su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país y especialmente por las autoridades.

Firmado: Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, Santiago, 11 de septiembre de 1973." (494)

Y a partir de entonces se cerró una etapa en la historia de Chile y se abrió una nueva: la dictadura militar que hasta hoy se prolonga. Desde ese momento se suprimieron todas las formas de expresión democrática que se habían venido desarrollando en el país desde 1830. Se inició, así, la larga noche de exterminio que vive el pueblo más politizado de América Latina, con las excepciones del de Cuba y Nicaragua. Se inició también la destrucción de toda la obra económica y social del gobierno de la Unidad Popular: la devolución de empresas socializadas y de predios rurales expropiados; la indemnización a las compañías cupríferas norteamericanas nacionalizadas; la inflación desatada; la humillación y represión continuas a los partidos políticos de la izquierda y del movimiento popular; el exilio forzado y la constante violación de los derechos humanos.

(494) Witker, Alejandro, "Chile: Sociedad y Política", Antología, Lecturas Universitarias No. 30, UNAM, México, 1978, p.p. 403 a 405.

C O N C L U S I O N E S

1.- La temprana conformación de un Estado nacional fuerte, impersonal y ajeno a todo caudillismo, pero subordinado a la oligarquía es una de las características de la sociedad chilena poscolonial que tiene repercusiones en todo el proceso histórico posterior. En efecto, a partir de entonces el Estado se erigió como un factor clave del proceso de conformación de las clases sociales y de la evolución de una institucionalidad que permitió que las contradicciones sociales y la lucha de clases se desarrollaran al interior del aparato estatal sin desbordar, por regla general, sus límites.

La lucha entre las diversas fracciones de la clase dominante por la hegemonía en el Estado se desarrolló en el seno del mismo. En las coyunturas que se produjeron revoluciones, guerras civiles o golpes de Estado (1859, 1891, 1924) el Estado como tal no sólo salió indemne, sino fortalecido por nuevas alianzas y nuevas formas institucionales que le permitieron seguir constituyendo el núcleo fundamental de la sociedad chilena.

2.- A lo largo del desarrollo histórico, las distintas fracciones de la burguesía chilena lucharon por la hegemonía, se

desplazaron unas a otras de los centros fundamentales de poder, e incluso, recurrieron en algunos casos a las Fuerzas Armadas para imponer sus concepciones políticas y sus intereses corporativos. Sin embargo, de su trayectoria histórica como clase dominante emergió una característica esencial: su extraordinaria solidaridad interna y capacidad para resolver sus conflictos por la vía de la negociación política. Las luchas, inclusive los escasos enfrentamientos armados entre sus diversas fracciones (terratenientes, burguesía minera, industrial y comercial) sólo produjeron reacomodos al interior del aparato del Estado que no amenazaron el rol dominante de la burguesía sobre el conjunto de la sociedad nacional.

Dos factores son determinantes, a nuestro juicio, para explicar dicho fenómeno: la subordinación de las diversas fracciones burguesas al modelo económico primario exportador y al Estado como organizador del proceso de sustitución de importaciones, por una parte, y el temor compartido al desarrollo del movimiento obrero, por la otra. Es decir en tanto que todas las fracciones de la burguesía obtenían beneficios del modelo económico que ponía en práctica el Estado, también dichas fracciones estaban unidas por la necesidad de impedir-hasta donde fuera posible-la organización políti

ca del proletariado, o de permitirle a esa clase social una participación subordinada en la instancia política de modo que no amenazara el rol dominante de la burguesía.

Todo parece indicar que esto que pudiéramos llamar la conciencia de clase de la burguesía chilena es un rasgo característico de su historia como clase social. Una buena demostración contemporánea de la misma fue su determinación de apoyar la candidatura de Eduardo Frei en 1964, ante la inminencia de un triunfo electoral de la izquierda. Ello no ocurrió en 1970 debido a que las contradicciones en el seno de la burguesía, avivadas por la gestión gubernamental de la Democracia Cristiana, pasaron a primer plano y a que los sectores dirigentes de la derecha estaban convencidos del triunfo de su propio candidato. Pero debido a la victoria electoral de la Unidad Popular en 1970 y el curso de la política nacional en los años posteriores, la burguesía volvió a cerrar filas en torno a su proyecto estratégico: liquidar, por cualquier medio, la posibilidad de que Chile se transformara en una nación socialista.

3.- El rol que desempeñaron las Fuerzas Armadas en la evolución histórica de Chile es otro de los factores distintivos que es necesario considerar para comprender la actitud de aquéllas durante el gobierno de la Unidad Popular y

en el golpe de Estado de 1973.

Desde la constitución del Estado chileno las Fuerzas Armadas fueron subordinadas al poder civil. Los distintos sectores de la burguesía que, a lo largo de la vida política del país, fueron ocupando los lugares claves del aparato estatal compartieron la concepción de que las Fuerzas Armadas deberían ser órganos obedientes y no deliberantes, ajenos al manejo del poder y de la política. Sólo cuando hubo enfrentamiento abierto entre las fracciones burguesas, es decir, conflictos a los cuales no se pudo encontrar soluciones negociadas, una u otra fracción burguesa recurrió a las Fuerzas Armadas para resolver el conflicto. En ocasiones, los propios institutos castrenses se dividieron, al igual que la burguesía, como en la guerra civil de 1891. En otras, las Fuerzas Armadas intervinieron para imponer soluciones políticas que implicaban modernizar el aparato del Estado, favoreciendo a las fracciones más dinámicas y progresistas de la clase dominante, como aconteció en 1924.

En realidad éstas se mantuvieron al margen del manejo directo del poder, pero jamás al margen de la política. Imbuidas de una ideología nacionalista, pragmática y legalista, las Fuerzas Armadas eran, al mismo tiempo, una eficaz garantía del control del movimiento obrero dentro de los límites que decidía la clase dominante, como queda demostrado por el nutrido prontuario de represión popular del aparato militar del Estado,

La ideología legalista, basada en el respeto a la Constitución y al gobierno elegido por el pueblo, se combinaba contradictoriamente con el anticomunismo y el temor al movimiento obrero que introdujeran en los cuarteles chilenos la guerra fría y los programas norteamericanos de ayuda militar y de formación de oficiales. De esta forma, a medida que la lucha social se intensificaba en el país, los militares fueron privilegiando o el legalismo y el respeto a la Constitución —una minoría, aunque influyente de los altos mandos— o el anticomunismo y el odio al movimiento popular, en el caso de la mayoría.

Dado el carácter vertical y jerárquico de las Fuerzas Armadas chilenas, los oficiales constitucionalistas se negaron a impedir el acceso de Allende al gobierno y los oficiales golpistas no se atrevieron a quebrar la unidad del mando militar, a pesar de su fuerza interna. Un hecho coyuntural — el asesinato del General Schneider — los inhibió aún más, iniciándose el gobierno de la Unidad Popular en este conflictivo contexto.

4.- El sistema político institucional chileno fue el medio en el cual se expresaron e integraron las diversas fuerzas sociales hasta 1973. Dicho sistema — que inicialmente era cerrado y poco representativo — se fue abriendo a medida que las clases sociales que se iban constituyendo a lo largo del proceso histórico imponían su participación ya sea en virtud de su importancia económica o de organización y capacidad de movilización, como en el caso de la clase obrera.

El gradual proceso de democratización política del país fue producto de las luchas del movimiento popular, principalmente. Permitió que las elecciones presidenciales y parlamentarias se convirtieran en mediciones bastante aproximadas de la importancia y peso de las fuerzas sociales fundamentales, que fueron perfilando proyectos políticos alternativos los cuales se enfrentaron en las campañas electorales a partir de 1958. Las reformas legales del sistema electoral, por una parte, y la unidad y fuerza de masas de la izquierda, por la otra, convirtieron las elecciones chilenas en expresiones fieles de las luchas sociales que agitaban el país.

La estructura institucional cuya flexibilidad había permitido mantener la lucha de clases dentro de los marcos de la democracia representativa y la hegemonía burguesa empezó entonces a resquebrajarse. Subsistió, sin embargo, hasta permitir el triunfo electoral de la Unidad Popular y la gestión gubernamental de Salvador Allende durante poco menos de tres años, quebrándose sólo cuando se hizo evidente que la clase dominante no podía impedir el avance popular por medios legales.

5.-El movimiento obrero chileno y su expresión política, los Partidos Socialista y Comunista, son sujetos históricos fundamentales en la historia de Chile del siglo XX. A partir de la explotación del salitre y de la incipiente industrialización del país, el movimiento obrero chileno empezó a desarrollarse en enfrentamiento

to directo con el capital extranjero y con una clase dominante que intentaba por todos los medios impedirle su organización. Consciente de la debilidad de los sindicatos que lo conformaban, el movimiento obrero se estructuró muy pronto a nivel nacional en federaciones de sindicatos y, posteriormente, en grandes centrales sindicales nacionales. Paralelamente a su consolidación en organismos representativos de su base social, los trabajadores chilenos adquirieron, en el curso de la dura lucha por mejores condiciones laborales y por convertirse en actores de la sociedad nacional, un elevado grado de conciencia política que los llevó a constituir el Partido Comunista, primero, y el Partido Socialista, poco tiempo después. Estos dos referentes políticos del proletariado chileno pasaron entonces a dirigir las luchas sociales y al movimiento sindical y popular en su conjunto.

La situación descrita permitió que Chile fuera el único país latinoamericano en que se constituyó un gobierno de Frente Popular en 1938, en el que los dos partidos de la clase obrera apoyaron y se integraron al gobierno de centro encabezado por el Partido Radical. Desengañados de esa experiencia, recuperaron su autonomía política estratégica que convirtió a la izquierda en una de las tres grandes fuerzas políticas del país, junto a la derecha y centro. Ello influyó en que ya en 1958 la izquierda perdiera la elección presidencial por un margen mínimo de votos, logrando el triunfo en 1970.

6.- Las características antes mencionadas y la forma que asumieron las luchas sociales en Chile antes de 1970 explican el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de la República en 1970. Nos parece importante destacar de lo analizado con anterioridad la tradición de organización y de lucha de la clase trabajadora chilena

El triunfo de la Unidad Popular en 1970 fue la culminación de un esfuerzo por formar conciencias y de organización y combatividad del pueblo chileno, cuyos orígenes datan de comienzos de este siglo. Fue entonces cuando se organizaron las primeras mancomunales, inspiradas a menudo en una ideología que aún no era proletaria pero que sirvió de catalizador de las inquietudes obreras. La primera década del siglo XX está por eso marcada por una serie de movimientos reivindicatorios de carácter masivo que se expresaron en huelgas como las de los trabajadores portuarios de Valparaíso en 1903 o la del proletariado de la zona minera del norte en 1907. Vimos que fueron sanguinariamente reprimidos por el Ejército, mas no por ello el proletariado declinó en su lucha. En 1912 se fundó el Partido Obrero Socialista que diez años después se convirtió en el Partido Comunista de Chile. Si multáneamente, las organizaciones sindicales se fueron robusteciendo y se creó en 1909 la Federación Obrera de Chile que, a comienzos de los años veinte, al postular la supresión del sistema capitalista empezó a orientarse por una vía socialista.

Por otra parte, las repercusiones en el país de la crisis de 1929 contribuyeron a la radicalización de importantes sectores populares que, en 1933, fundaron el Partido Socialista el cual, desde sus inicios, se constituyó además en otro representante de la clase obrera. Ambas agrupaciones partidarias a través de la Central de Trabajadores de Chile, en 1936, conformaron la unidad socialista -comunista que, a partir de entonces, será uno de los signos distintivos del proceso histórico chileno.

En 1938 comunistas y socialistas unidos eran ya una poderosa fuerza de izquierda. Aliados con las clases medias progresistas, cuyo referente político era el Partido Radical, articularon el Frente Popular que llevó a la presidencia a Pedro Aguirre Cerda quien designó como a uno de sus ministros a Salvador Allende. Esta marcha ascendente de la izquierda no dejó de preocupar a la burguesía local y el imperialismo norteamericano. La derechización del Partido Radical y la llegada de la política de guerra fría determinaron la ilegalización del Partido Comunista y la ruptura del Frente Popular. Después de algunos años de decadencia de la CTCH, en 1953, fue reemplazada por la CUT que afianzó la unidad sindical clasista y de socialistas y comunistas. A partir de esos años los partidos de la izquierda chilena no hicieron más que consolidarse en todos los niveles. No olvidemos que en 1958 la izquierda unida estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales: Jorge Ales-

sandri, candidato de la derecha, apenas logró superar por un margen de 35 mil votos a Salvador Allende candidato del FRAP.

Estos antecedentes nos explican la victoria de la Unidad Popular en 1970 como la exitosa culminación de una prolongada lucha política mediante la cual la clase trabajadora no sólo había ido forjando su conciencia y perfeccionando sus organizaciones políticas, sino también aglutinando en torno suyo a otras fuerzas progresistas de la sociedad chilena: intelectuales, campesinos, sectores de las capas medias y aun de la pequeña burguesía que llegaron a incorporarse a la UP a través del Partido Radical, el MAPU, el Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente. Es cierto que en las elecciones presidenciales de 1970 la burguesía se presentó dividida y que tal división facilitó el triunfo de la Unidad Popular, pero ello no fue fruto de la simple casualidad y algo ajeno a la lucha política del proletariado chileno.

7.- El hecho de que la burguesía estuviera representada por dos candidatos fue, en primer término, un resultado de sus propias contradicciones internas. Es indudable que hacia 1970 en el seno de la clase dominante básicamente burguesa y en conjunto ligada al imperialismo norteamericano, se dibujaban claramente dos fracciones. Por un lado, la representada por el Partido Nacional, que era la más conservadora puesto que tenía como centro de gravedad a los latifundistas y a ciertos grupos de la burguesía monopólica asociada a las modalidades más antiguas de asociación con el imperialismo norteamer-

ricano. Y, por otro, la representada por el Partido Demócrata Cristiano cuyo eje era la burguesía industrial moderna que pugna por imponer un modelo más dinámico de desarrollo y redefinir su asociación con el capitalismo norteamericano. Además la Democracia Cristiana tenía en sus filas a importantes sectores de las clases medias y del campesinado y, en menor medida, a obreros que como consecuencia del fracaso del gobierno de Frei exigían en 1970 un candidato y un programa que garantizara cam bios al sistema económico y político y no habrían aceptado apoyar a la derecha tradicional. Esta, a su vez, se había distanciado notoriamente del PDC como consecuencia el programa reformista de Frei y de la aplicación de algunos de los postulados de la llamada revolución en libertad, en particular la Reforma Agraria.

En efecto, si bien es cierto que el proyecto demócrata cris tiano de 1964 respondía en lo fundamental a los intereses de una burguesía industrial empeñada en llevar adelante un proyecto desa rollista, no lo es menos que tal proyecto no flotaba en el vacío social, sino que necesariamente se hallaba inserto en una coyuntu ra caracterizada por la movilización y des contento popular a causa de la crisis económica y social con que finalizó el gobierno de Jorge Alessandri. Por eso las reformas de Frei no se presenta ron como un conjunto de medidas destinadas a modernizar el capita lismo en Chile, cancelando sus formas más atrasadas, ni tampoco - como una mera política redistributiva encaminada a alcanzar la jus

ticia social dentro del sistema vigente, sino que se ofrecieron al país como una revolución en libertad. Según sus teóricos, se trataba de la alternativa revolucionaria que los cristianos prometían a cambio de la revolución sin libertad supuestamente propugnada por los sectores marxistas que apoyaban a Allende en las elecciones presidenciales de 1964.

Este entusiasmo del Partido Demócrata Cristiano por la revolución no era más que la demagogia encubridora de un proyecto reformista de un sector de la burguesía para modernizar el capitalismo dependiente chileno con el apoyo del Departamento de Estado norteamericano interesado en detener en Chile e impedir en el resto de Latinoamérica la creciente influencia de la Revolución Cubana. Ello explica el marcado sello anticomunista que tuvo la campaña electoral de Eduardo Frei y que el curso posterior de los acontecimientos se encargaría de demostrarlo al ubicarse la Democracia Cristiana y el propio Frei, entre 1970 y 1973, junto al Partido Nacional y la Democracia Radical en la oposición abierta y declarada al gobierno de la Unidad Popular.

El hecho de que el PDC se presentara ante la ciudadanía como una alternativa revolucionaria frente a los partidos de la izquierda marxista y que su aparente radicalismo se fuera acentuando hacia 1970, tiene su explicación en la búsqueda de si no un apoyo, sí de una neutralización de un proletariado organizado y consciente que amenazaba con extender su influencia al campesinado, pobladores y

a sectores de la clase media. Sin embargo esto trajo consecuencias políticas. Así, con la derecha tradicional, esta línea - - prácticamente reformista pero verbalmente revolucionaria de la - Democracia Cristiana profundizó la brecha entre esa colectividad y el Partido Nacional hasta el punto de volverla insalvable en la coyuntura electoral de 1970. Además fue evidente que la demagogia democristiana no sólo produjo efervescencia en los sectores populares que la apoyaban, en especial en los campesinos y pobladores, sino que también desencadenó en ellos una peligrosa dialéctica de aspiraciones y frustraciones. Esto le originó al gobierno de la DC un difícil problema pues, por una parte, el grupo freísta no estaba dispuesto a ir muy lejos en sus reformas y, por la - otra, las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Frei - - acentuaron la dependencia del capital norteamericano y la concentración monopólica de la economía ya existente en el país. Al mismo tiempo, en el interior del Partido Demócrata Cristiano, el verbalismo seudorevolucionario fue produciendo efectos radicalizadores, en especial, entre su juventud y grupos de intelectuales para quienes la revolución en libertad empezó a ser considerada como un simple instrumento de manipulación. La escisión que llevó a la - formación del MAPU en 1969, al programa electoral de Radomiro Tomic en 1970 y la disidencia que, en 1971, dio origen a la Izquierda - Cristiana no dejan de ser significativas como lo serían también las constantes vacilaciones de Tomic y del sector progresista de la DC a lo largo de todo el proceso de gobierno de la Unidad Popular.

Pero la radicalización verbal del proyecto demócrata Cristiano en 1970 significó también la izquierdización relativa - del contexto político chileno en general. El beneplácito con que el sector progresista del PDC recibió el triunfo de Allende del 4 de septiembre demostró que les importaba más haber vencido a Alessandri, postulante de la derecha a la presidencia, que su candidato Radomiro Tomic hubiera sido derrotado. Tomic, además, esa misma noche reconoció el triunfo de la Unidad Popular, todo lo cual contribuyó a crear un clima antigolpista y democrático que indudablemente favoreció el ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Esto, aunado a la movilización popular en todo Chile en defensa del triunfo electoral y que el conjunto del PDC, presionado por su ala progresista, se pronunciara por Allende en el Congreso Pleno, permitieron que la coalición - de la U P llegara al gobierno el 4 de noviembre de 1970.

8.- Consideramos también que la ideología legalista y constitucionalista que permeaba las relaciones políticas y sociales chilenas - fruto que casi un siglo de continuidad institucional - explican el advenimiento de la Unidad Popular a la presidencia y las características que asumió el proceso de gobierno. La forma en que fue cancelada la vía chilena al socialismo: la insurrección de la burguesía y de las Fuerzas Armadas que apoyadas por Estados Unidos dieron un golpe de Estado y establecieron una dictadura militar que se prolonga hasta hoy día constituye, a nuestro juicio, una distorsión de ese peculiar modo de relación política entre las cla-

ses sociales chilenas que, a su vez, generaron esa ideología. Ella permite comprender que sólo un sector verdaderamente aventurero de la burguesía haya intentado una acción desesperada, - ejecutando un complot que culminó con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider y que como todo hecho que desbordaba la legalidad vigente ocasionara efectos más bien contraproducentes. En efecto, reforzó la adhesión popular a la UP y permitió que el sector progresista de la Democracia Cristiana consiguiera que su partido apoyara la ratificación de Salvador Allende en el Congreso.

No obstante pensamos que no debemos perder de vista dos hechos significativos. Por una parte, la desesperación de una fracción de la clase dominante que se sabía amenazada por una alianza de clases y un programa de gobierno que cuestionaba sus privilegios e intereses económicos. Y, por otra parte, el hecho de que el Partido Demócrata Cristiano exigió a la Unidad Popular, como condición previa a la ratificación de Allende en el Congreso Pleno, la suscripción de un Estatuto de Garantías Constitucionales - destinado, en apariencia, a evitar la instauración de un régimen totalitario pero que en el fondo perseguía evitar la transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales del país.

A la luz de los acontecimientos desarrollados entre 1970 y 1973 y de la responsabilidad que tuvo en ellos la Democracia Cristiana, ponemos en tela de juicio esa concepción legalista y - constitucional. Nos interesa destacar no tanto el aspecto moral

de la actitud de este partido, en especial de Frei y del sector - derechista que él encabezaba, sino las implicaciones que tuvo dentro de la estrategia de la oposición democristiana. Las garantías constitucionales estaban obviamente destinadas a mantener en las bases del PDC la ilusión de que su partido no se oponía en modo alguno a las transformaciones sociales propugnadas por la Unidad Popular, pero que sí permanecía vigilante ante la eventualidad de que la vía chilena al socialismo se realizara con menoscabo de la libertad, que desde ese momento fue ya definida como sinónimo de legalidad e institucionalidad. Dada la heterogeneidad de su composición social, el Partido Demócrata Cristiano hizo todo lo posible por presentarse desligado de los intereses capitalistas internos y externos, acorde con la realización de los cambios estructurales que su propia base popular exigía y, sobre todo, garante de las libertades y derechos individuales tan estimados por las clases medias que militaban en él. La consigna que los democristianos pintaron en los muros de las ciudades más importantes del país fueron una prueba elocuente de esta afirmación: "Chileno, no estás solo, la Democracia Cristiana te defiende". Esta leyenda, además, tuvo el refuerzo de una masiva campaña de prensa, radio y televisión en la que se aseguraba que esta colectividad política únicamente buscaba defender al profesional, al obrero, al técnico, al ama de casa ante la ola de sectarismo e ilegalidad de la UP.

Además la estrategia opositora al gobierno de Allende ideada

por el PDC que, como se recordará, ellos mismos denominaron de los mariscales rusos, fue una de las partes fundamentales de la acción de la Democracia Cristiana en contra del proceso de cambios estructurales iniciado por la Unidad Popular. Incluso, cuando esa estrategia se desencadenó, en el segundo semestre de 1971, la ofensiva frontal de ese partido en el Parlamento tuvo el buen cuidado de centrarse ideológica y políticamente en la defensa de la institucionalidad. Sólo más tarde, en 1972, la DC pasó a la táctica política de defensa de la propiedad privada a través del proyecto de ley Hamilton-Fuentealba sobre las tres áreas de la economía.

En todo caso, la estrategia opositora del PDC que ponía en un primer plano la institucionalidad o legalidad violada, no fue más que el inicio de una forma de lucha muy sutil y que a la larga se reveló muy fructífera para derribar al gobierno popular mediante la intervención de las Fuerzas Armadas con un golpe militar: presentar al Ejecutivo, es decir al Presidente Allende y a la Unidad Popular, como irrespetuoso de la ley o por, lo menos, de su espíritu. Esto era nada más que el pretexto para cercenarle sus facultades legales e impedir la aplicación del Programa Básico de Gobierno de la UP, en el entendido de que la más mínima resistencia a tal cercenamiento habría de considerarse, a su vez, como una prueba adicional de que el gobierno popular buscaba instaurar una dictadura. La estrategia era, pues, inequívoca: se trataba de llevar a la Unidad Popular hacia una encrucijada sin más salidas que la claudicación de su programa o la supuesta ilegalidad. Más tarde, después de las

elecciones parlamentarias de marzo de 1973, ante la imposibilidad de acusar constitucionalmente al Presidente, la oposición unida relegando aquella institucionalidad que decía defender, aprobó en la Cámara de Diputados una resolución que pretendía producir los mismos efectos de una acusación constitucional al Ejecutivo y que la oposición estaba impedida de aprobar, dado los resultados favorables a la izquierda en esa consulta electoral. Sin embargo aquel acuerdo, al paso que desmascaró la ideología legalista e institucional que había impregnado el accionar político chileno, clausuró la vía chilena al socialismo. El supuesto básico de esta vía para la transición a una sociedad socialista: la utilización de la legalidad vigente para generar en su seno la nueva institucionalidad socialista se agotó. Y aún más, se dejó abierto el camino para que las Fuerzas Armadas dieran el golpe de Estado.

9.- El sector hegemónico de la Unidad Popular y el propio Presidente Allende estaban conscientes de que la transición al socialismo en democracia tendría dificultades serias para su puesta en práctica. Así como suponían que deberían hacer frente a la oposición de Estados Unidos, sabían que el éxito del proceso dependía del apoyo o confianza que le brindarían las clases medias y de la actitud que asumirían ante el proceso de cambios el Partido Demócrata Cristiano y las Fuerzas Armadas. No obstante, en nuestra opinión, ese sector de la UP erró en sus cálculos estimativos respecto al eventual apoyo de esas fuerzas sociales internas indispensables para la materialización del proyecto político popular, considerando la forma cómo se

llegó al gobierno. Además consideramos que sobrevaloró la flexibilidad del sistema institucional vigente en Chile hasta 1970. Esa misma legalidad que hizo posible el triunfo electoral de 1970 y permitió, en cierta medida, llevar a cabo el programa de socialización de las riquezas básicas, de estatización de los monopolios de la industria y parte del comercio y de expropiación de los latifundios, utilizada hábilmente por la oposición, se volvió en contra del gobierno y cuando, en septiembre de 1973 Allende se decidió a recurrir al plebiscito, era demasiado tarde porque el golpe militar se lo impidió. Creemos que la Unidad Popular habría ganado la consulta plebiscitaria pero, sin duda, se habría desatado la guerra civil y la intervención de las Fuerzas Armadas se habría producido igual.

Afirmamos lo anterior porque así interpretamos el combate de Allende en La Moneda. Su último discurso es un reconocimiento de que el imperialismo norteamericano unido a la oposición interna crearon el clima para que las Fuerzas Armadas dieran el golpe de Estado lo cual determinó que una etapa de la historia de Chile fuera superada mediante lo que el Presidente llamó traición. Pero que, en realidad, fue la dramática muestra de que el régimen democrático formal imperante hasta 1973 se había agotado porque era la expresión de una correlación de fuerzas y de un sistema de dominación que se había resquebrajado ante el avance del movimiento popular. Por lo mismo la burguesía, representada por la CODE y de

fendida por el sector golpista mayoritario en los institutos armados, prefirió terminar con esa legalidad que ya no servía a sus intereses económicos y políticos.

10.- Hemos visto que la UP estaba preparada para concretar su programa de gobierno y pudo, al menos en la primera fase de su gestión gubernamental, utilizar la legalidad vigente a su favor y sortear así los obstáculos que el Parlamento le habría puesto a la materialización de aquél. Disponía además de la confianza y la elevada conciencia de las bases populares que la apoyaban, lo cual permitió no sólo el acceso de Salvador Allende a la presidencia de la República, sino también avanzar con relativa celeridad en la aplicación de su programa.

Para un país dependiente como Chile, de cuyas riquezas básicas se había apropiado hace mucho tiempo el imperialismo norteamericano, la tarea principal y más urgente consistía obviamente en recuperarlas. Por esa razón ésta fue una de las primeras medidas adoptadas por la Unidad Popular. En julio de 1971 los propios partidos burgueses tuvieron que dar su aprobación a la ley de reforma constitucional propuesta por el Presidente Allende que permitía nacionalizar la gran minería, particularmente la del cobre que era la más importante. Esta decisión, por cierto, no fue del agrado de la burguesía chilena pero, dada la coyuntura política de ese entonces, le era difícil oponerse sin graves consecuencias políticas. Un plebiscito sobre este punto habría concitado el apoyo práctica-

mente unánime de la ciudadanía, habría puesto al descubierto el carácter antinacional de la burguesía local y aislado socialmente a ésta, incrementando así el apoyo del pueblo a la Unidad Popular. Riesgo que incluso obligó posteriormente a la Contraloría General, donde los partidos de la derecha eran mayoría, a pronunciarse a favor del no pago de indemnizaciones a las empresas cu - príferas norteamericanas expropiadas.

El Programa Básico de la UP contemplaba además una acción enérgica contra la burguesía interna representada por los grandes monopolios, la banca y el latifundismo y, consecuentemente, se avanzó en este sentido. Hacia fines de 1971 sectores importantes de la industria monopólica y la banca privada, en lo sustancial, habían sido incorporadas al área social de la economía y el latifundio fue erradicado, expropiándose en un lapso breve muchos más predios rurales que durante toda la administración de Frei. Es decir, se aprovechó el amplio apoyo y la movilización de las masas y el repliegue momentáneo de la burguesía para avanzar por un camino que no era todavía el socialismo, pero que sí constituía un paso en esa dirección, como la propia burguesía criolla y el gobierno de Estados Unidos no dejaron de advertirlo. Esta orientación estaba clara en la letra del programa de la Unidad Popular y en la práctica concreta del gobierno de Allende.

Además a lo antes mencionado debemos agregar los logros alcanzados en la primera fase del gobierno de la UP. Así la producción del

país creció a un ritmo extraordinario, se redistribuyó el ingreso, el desempleo descendió y se materializaron otras importantes medidas de justicia social.

Tras este cuadro bastante alentador se escondían, sin embargo, múltiples problemas de la más diversa índole. En el mismo terreno económico la burguesía chilena consiguió por lo menos uno de sus propósitos cual era el de producir un desabastecimiento que, aunque todavía no alcanzó las proporciones del segundo semestre de 1972 y 1973, se hizo ya sentir en algunos rubros y fue utilizado como uno de los mejores argumentos contra el gobierno. Desabastecimiento ocasionado, en parte, por el aumento masivo del consumo derivado de una redistribución de ingresos que favoreció prácticamente a todos los sectores asalariados. Pero sobre todo generado por el acaparamiento de productos por parte de los sectores burgueses y la creación de un consiguiente mercado negro o paralelo que, por lo demás, anulaba en parte los beneficios de dicha redistribución, transfiriéndolos nuevamente hacia las clases propietarias con perjuicios no sólo para el proletariado sino también para las capas medias asalariadas. De esta manera, casi todo lo que la burguesía había perdido a nivel de la producción comenzó, pues, a recuperarlo en el campo de la circulación o comercialización, en el que el gobierno popular apenas había intervenido a través del control de precios que el mercado negro se encargaba de burlar.

Esta situación no tardó en provocar fuertes presiones inflacionarias que a mediados de 1972 eran ya notorias. Además en esta fecha las medidas de reactivación económica habían llegado a su límite debido a que se estaba produciendo al máximo de la capacidad instalada de la planta industrial existente y a la paralización de la inversión privada. Incluso una de las tareas políticas definidas para esta primera fase del gobierno, la de la "batalla de la producción", empezó a dejar de tener la importancia que había tenido en los momentos iniciales del proceso ya que empezó a ser cuestionada por los sectores altamiranistas del Partido Socialista y, fuera de la UP, por el MIR.

11.- Por otra parte, el avance relativamente rápido en la aplicación de las medidas de orden económico contempladas en el Programa Básico de la Unidad Popular contrastaba con el bloqueo total de las transformaciones jurído-políticas previstas en el mismo. Así, por ejemplo, el proyecto de ley de creación de los Tribunales Vecinales y el de la Cámara Unica, destinados a permitir una mayor y más directa participación del pueblo en los niveles judicial y legislativo, fueron rechazados por el Parlamento donde la oposición al gobierno era mayoría.

Desde que la Unidad Popular llegó al gobierno debió enfrentar un problema que no puede ser comprendido sin la dilucidación previa de la especificidad del periodo histórico en que había entrado Chile a partir de noviembre de 1970. No se trataba, como lo seña

lamos al analizar la vía chilena al socialismo, de una etapa de construcción del socialismo propiamente dicha, etapa que comienza desde el momento en que el proletariado toma el poder, esto es, desde que posee el control omnímodo de esa instancia decisiva que es el Estado, lo cual le permite realizar de manera unívoca su proyecto de clase. No era éste el caso de Chile gobernado por la Unidad Popular. Sin embargo, la llegada al gobierno de una coalición de fuerzas con hegemonía de dos partidos marxistas, el Comunista y Socialista representantes a su vez del proletariado, tampoco podía considerarse como una situación normal dentro de una formación social capitalista y dependiente como la chilena en aquella época. Pensamos que en 1970, de hecho, Chile había entrado en una situación prerevolucionaria en la que el propio Estado—institución que se había encargado hasta los años setenta de regular las contradicciones sociales— con el acceso de Allende a la presidencia reprodujo esas contradicciones al interior del aparato estatal convirtiendo al Estado en uno de los puntos cruciales de la lucha de clases. Así esta lucha comenzó a expresarse, entre otras formas, como una contradicción entre las prácticas gubernamentales orientadas hacia la transformación del capitalismo, modo de producción dominante, y una superestructura jurídico-política encargada de reproducirlo y perpetuarlo.

Esta superestructura no era un conjunto totalmente homogéneo. Estaba impregnada, de alguna manera, de los efectos históricos de la lucha de clases y por la ambigüedad inherente a la doble función

de expresión y enmascaramiento y por lo mismo ofrecía unas cuantas brechas o resquicios por las que pudo abrirse paso la acción del gobierno popular sin transgredir la legalidad. El traspaso de las industrias privadas al área de propiedad social, por ejemplo, se hizo aprovechando el Decreto-Ley 520 promulgado durante los trece días de la República Socialista de 1932 que facultaba al Ejecutivo para requisar empresas y a designar interventores en caso de paralización de actividades y la banca fue estatizada mediante la simple compra de acciones, procedimientos legítimos pues estaban contemplados dentro de la legislación vigente.

Pero los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Democracia Radical se opusieron a estas medidas y acusaron al Presidente Allen de apartarse y vulnerar el espíritu de la Constitución y las leyes, acusación que sólo cobraba sentido a condición de reconocer que en una sociedad capitalista ese espíritu no puede ser otro que el burgués, pero que no por ello dejó de producir efectos ideológicos desfavorables al gobierno en ciertos sectores medios y pequeño burgueses.

Y la acción de los partidos políticos representantes de la burguesía no quedó circunscrita al terreno puramente ideológico, sino que pronto se situó también en el nivel jurídico concreto con el propósito de negar al Presidente Allende las atribuciones legales que le permitían avanzar en la aplicación del programa de la UP. Con el pretexto de encauzar el proceso por las vías jurídicas y defender los intereses de pequeños y medianos propietarios, los sena-

dores Hamilton y Fuentealba presentaron, a mediados de octubre de 1971, un proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, derogaba todas las normas que permitían al Ejecutivo comprar acciones, realizar intervenciones, requisiciones u otras injerencias en empresas industriales y comerciales siendo necesario, en adelante, la promulgación de una ley particular para cada uno de estos actos.

Como era natural, Allende y la Unidad Popular se opusieron a esta maniobra de los partidos de la derecha con lo cual quedó planteado, desde ese momento, un virtual conflicto de poderes entre el Ejecutivo en manos de las fuerzas populares, y el Legislativo en un Congreso controlado por la burguesía. Los sectores burgueses, en especial la Democracia Cristiana, supieron sacar provecho hasta de la nacionalización del cobre. Señalamos que los partidos de la oposición, temerosos de enfrentar al pueblo movilizado en favor de esta medida, se vieron obligados a aprobar tal nacionalización y aparecieron como coautores de la misma. Pero con este punto a su haber, los demócrata cristianos muy pronto iniciaron sus ataques al gobierno mediante el estímulo y apoyo a las huelgas de los trabajadores mineros, en especial, a las de los empleados de las minas de cobre nacionalizadas cuya situación antes y durante el gobierno de la UP fue siempre privilegiada en comparación con el resto de la clase trabajadora. Lograron así no sólo poner obstáculos al aumento de la producción de este metal—principal fuente de divisas del país—sino, además, crear un serio conflicto en el seno de la CUT al intentar dividir al organismo representante de los obreros y empleados chilenos

cuyas buenas relaciones con el gobierno eran indispensables para la continuidad del proceso de cambios.

De modo que si la primera fase del gobierno de la Unidad Popular apareció, en muchos sentidos, como una etapa de avance del pueblo, al mismo tiempo fue el de la generación de la mayor parte de los problemas que tendría el bloque gobernante en el período posterior cuando la contraofensiva de los partidos burgueses se planteó en profundidad y en todos los ámbitos. La primera manifestación del conflicto se evidenció con la "marcha de las cacerolas vacías", de mediados de diciembre de 1971, que constituyó también la primera movilización de corte fascistizante con la presencia ostensible de grupos de choque de la organización de ultraderecha, Patria y Libertad. Tal marcha, a la cual la oposición llamó "marcha del hambre", tuvo como protagonistas importantes a las mujeres burguesas de los barrios residenciales de Santiago a donde el hambre estaba lejos de llegar. Pero lo más grave de esa manifestación residió en que en ella participaron mujeres de la clase media quienes ya comenzaban a manifestarse en contra del gobierno debido al desabastecimiento, aún incipiente, de artículos de consumo y a la imagen de caos y desorden del proceso magnificada por la oposición a través de los medios de comunicación social.

La oposición femenina al gobierno de la Unidad Popular, en particular de las mujeres de la burguesía y de la clase media, merece un comentario especial. Debido al rol que desempeñan -

como consumidoras y amas de casa e imbuidas de su papel de guardianes del orden y la seguridad del hogar que la ideología dominante les atribuye, esos sectores femeninos fueron presa fácil de la campaña de la derecha opositora al gobierno de Allende.

12.- En la primera fase del gobierno popular se generaron algunos problemas económicos que, hacia mediados de 1972, provocaron una degradación de la situación económica del país en términos generales. La producción no dejó de crecer pero lo hacía con notables desequilibrios y cuellos de botella. Estos fueron notorios sobre todo en el agro lo cual, unido a la baja del precio del cobre en el mercado internacional y al bloqueo económico y crediticio norteamericano, aumentó el desabastecimiento ya existente y desató la inflación. Aunque la UP, por iniciativa del Ministro Vuskovic, había creado las JAP que adquirieron bastante eficacia en las colonias populares y en las poblaciones marginales, las posibilidades de acción de esos organismos fueron insuficientes para impedir el desabastecimiento y la carestía.

En estas condiciones fue necesario que en junio de 1972 se realizara un balance de la crítica situación puesto que una nueva coyuntura se había generado, con problemas graves para la Unidad Popular, aunque también con signos alentadores. En efecto, el bloque gobernante tenía a su favor dos factores muy importantes: las expropiaciones ya realizadas a la burguesía nacional y extranjera y una acumulación de fuerzas extraordinaria a nivel

del proletariado chileno. Pero tenía también en su contra dos hechos fundamentales: el problema económico ya referido y el aislamiento social del proletariado que en estos momentos del proceso contaba ya con la oposición de casi la totalidad de la pequeña burguesía y obviamente con la abierta y tajante oposición de la gran burguesía.

¿Convenía entonces consolidar lo avanzado y llegar a un acuerdo táctico con el Partido Demócrata Cristiano como lo propuso el Partido Comunista, el propio Allende y sectores de su partido, o convenía más avanzar para consolidar, rechazando todo compromiso como era la tesis de las otras agrupaciones políticas de la izquierda dentro y fuera de la Unidad Popular? Recordemos que éstas fueron las posturas que se debatieron en la reunión de Lo Curro en junio de 1972.

En un plano exclusivamente abstracto, desde luego, era mucho más atrayente la segunda fórmula que la primera. Pero en la realidad lo importante era saber lo que era objetivamente posible en las circunstancias históricas de Chile en esa época. De todas maneras la discusión sobre si se debía consolidar lo avanzado o avanzar para consolidar desembocó en un pronunciamiento por la opción del sector hegemónico en el seno de la UP, es decir del Partido Comunista, sectores del Partido Socialista y el mismo Allende. Aunque en la práctica la política que a la postre se aplicó representó más bien un compromiso

pragmático entre ambas tesis. Esta solución que tal vez fue la más adecuada para preservar la base de existencia de la Unidad Popular — la alianza de socialistas y comunistas — tuvo, en términos de eficacia frente a la burguesía opositora y a la situación general del país, resultados poco positivos por la misma indecisión que implicaba. Dentro de este contexto se desarrollaron las fracasadas pláticas de fines de junio y principios de julio de 1972 con la Democracia Cristiana que, a esa fecha, estaba ya embarcada en una ofensiva frontal contra el gobierno y la Asamblea Popular de Concepción, efectuada a fines de julio de ese año, que sirvió para la creación de embriones de poder popular los cuales jugaron un importante papel durante el paro patronal de octubre de 1972 en defensa del proceso de transformaciones estructurales por la UP.

13.- En efecto, a mediados de ese año, la oposición al gobierno conformada por el Partido Nacional, Demócrata Cristiano y Democracia Radical vinculando su acción con el bloqueo económico a Chile por el Departamento de Estado, puso en marcha un plan sedicioso conocido como Plan Septiembre. Dicho plan fracasó debido a la movilización popular en apoyo a la UP y a la actitud legalista de los altos mandos del Ejército, en especial del General Carlos Prats. Un mes más tarde la insurrección derechista adoptó una modalidad distinta de la que muchos esperaban pero que de todas maneras fue de una peligrosidad extrema: los paros gremiales. Apo-

yándose en la tradición gremialista de la burguesía chilena la oposición al gobierno popular desató un paro de vasta envergadura.

El paro patronal de octubre de 1972 prácticamente equivalió a un levantamiento generalizado de los propietarios contra el proletariado. Lo más grave de esta huelga fue que la gran burguesía contó con el apoyo de importantes sectores de la mediana, los propietarios de camiones, comerciantes y de los grupos mejor remunerados de las capas medias: médicos, agrónomos, ingenieros, abogados. Fue una enorme masa pequeño-burguesa fascistizada la que se lanzó a defender los intereses del imperialismo norteamericano y del capital interno convencida de que con ello estaba salvando su camión, su tienda y su status social.

Este paro tuvo serias repercusiones económicas que incidieron negativamente en una situación ya precaria. Pero sobre todo fue de enorme importancia política porque demostró, ahora sí con evidencia, que la gran burguesía no estaba aislada sino que había logrado estructurar bajo su hegemonía una sólida alianza de clases que, a su vez, le permitió realizar este primer intento general de derrocamiento de Allende. Sin embargo, la fuerza que por su parte mostró la Unidad Popular en esa ocasión no fue menos significativa. La clase obrera en su conjunto se mantuvo firme al lado del gobierno e impidió por todos los medios que -

la producción fuera paralizada. El gobierno pudo afirmar entonces, consciente de la importancia política de este apoyo popular, que a Chile sólo podía paralizarlo la clase trabajadora. Clase que, por lo demás, salió robustecida del enfrentamiento en la medida que durante los 26 días que se prolongó el paro pudo reforzar su unidad, su conciencia y organizaciones de base y afianzar su alianza con aquellos grupos de las capas medias que seguían a su lado: pequeños propietarios y comerciantes progresistas, ciertos contingentes estudiantiles y de maestros, sectores de profesionales.

14.- Podemos afirmar, no obstante, que esta confrontación generalizada de oposición y gobierno terminó en una suerte de empate en el cual el sector constitucionalista del Ejército, con el General Prats a la cabeza, aceptó el papel de árbitro de la situación. Se integró así un gabinete con participación militar que significó la primera aparición directa de las Fuerzas Armadas como institución en el escenario político en este período. Constituyó una medida arriesgada de la Unidad Popular, en especial del Presidente Allende, pero tal vez inevitable dada la gravedad de los momentos que vivía el país.

El panorama de 1970 se había alterado sustancialmente en dos años de aguda lucha de clases y el enfrentamiento social entre los dos bandos en pugna empezó a adquirir las características de una lucha por el poder político. Las Fuerzas Armadas pudieron desempeñar el papel de árbitro sólo en la medida en que las elecciones -

parlamentarias de marzo de 1973 estaban relativamente cercanas y que la burguesía opositora creía poder obtener en ellas la mayoría de los dos tercios, que le permitiría destituir legalmente al Presidente Allende mediante la acusación constitucional.

15.- Pero esas elecciones resultaron una amarga sorpresa para la oposición. Al contrario de lo que ésta suponía, la Unidad Popular no obtuvo una votación inferior a la de 1970 sino que la incrementó, pasando del 36% al 44% lo cual impedía a los partidos opositores al gobierno disponer de la mayoría de los dos tercios en el Congreso. Además evidenció su fracaso político a cierto nivel. De nada habían servido dos años y medio de sabotaje económico que efectivamente creó una aguda escasez, mercado negro, baja de la producción en ciertos rubros e inflación. Tampoco las acusaciones formuladas contra el gobierno de ilegalidad y arbitrariedad y el cerco económico de Estados Unidos habían servido para restarle apoyo popular a la coalición gobernante. El proletariado chileno y sus aliados aprendieron a través de dos años y medio de gobierno popular que tras los manidos términos de democracia y libertad podían surgir contenidos nuevos y distintos, formas más justas y fraternas de vida social.

16.- Ahora bien, si la clase obrera chilena comprendió todo esto y lo expresó en los comicios de marzo de 1973, la burguesía opositora constató, entre otras cosas, que la recuperación de todo su poder por la vía democrática y constitucional sería cada vez más difícil. Por esas razones, el lapso de tiempo que medió

entre las elecciones de marzo hasta el 11 de septiembre fue, en efecto, el de la preparación ya inequívoca del golpe de Estado. Por un lado se repite en escala ampliada lo ensayado entre septiembre y noviembre del año anterior: agitación estudiantil en las calles, enfrentamientos entre campesinos y ex-latifundistas en el campo, y entre grupos de choque de Patria y Libertad y obreros en las ciudades. Después, la huelga de los trabajadores de las minas de cobre El Teniente y Chuquicamata, la destitución constitucional por el Parlamento de tres miembros del gabinete ministerial, el intento de golpe de Estado del 29 de junio de 1973 y la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de reforma constitucional patrocinado por la oposición que, desde octubre de 1971, había sido el centro del conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Luego se produjo el aislamiento cada vez más progresivo del sector constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Después las acciones de fondo: paro de los gremios del transporte y comercio, de los Colegios Profesionales y la prolongación de la huelga de los mineros del cobre y mientras el terrorismo de la derecha arreciaba en todo el país los institutos armados, amparados en la ley de Control de Armas, allanaban fábricas, predios rurales, poblaciones y domicilios de militantes de los partidos de la UP. Por último la oposición a la Unidad Popular agrupada en la CODE aprobó en la Cámara de Diputados una resolución que dejó abierto el camino al golpe militar: declaró ilegal e inconstitucional al

gobierno, y conminó a las Fuerzas Armadas a intervenir para restablecer el Estado de Derecho que, según esa mayoría derechista, el Presidente Allende no respetaba.

17.- A estas alturas del proceso, el gobierno se batía ya a la defensiva pues se encontraba atrapado en un callejón sin salida. Intentar una toma violenta del poder era poco menos que imposible. En parte, porque la postura presidencial era otra. Vimos que Allende anunciaría el día 11 de septiembre la convocatoria a plebiscito. Pero fundamentalmente porque el trabajo político en el seno de las Fuerzas Armadas había sido mal hecho—en la Marina fue descubierto— o simplemente descuidado y, en todo caso, la derecha había ganado la batalla ampliamente en ese terreno por lo que era demasiado tarde para detener la insurrección militar.

El 11 de septiembre de 1973. se produjo lo que veíamos venir: el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y una de las represiones más violentas de que se tenga memoria en nuestro ensangrentado continente. La burguesía chilena y el imperialismo norteamericano se vengaron así de los tres años de gobierno en los cuales el proletariado lesionó sus intereses.

Lo demás corresponde a otra fase de la historia de Chile: la dictadura militar fascista con su secuela de terror, represión, muerte y tortura. Pero más que insistir en la permanente violación de los más elementales derechos humanos existente en la actual etapa histórica del país, queremos terminar preguntándonos dónde radi-

caron las principales fallas del proceso iniciado el 4 de septiembre de 1970.

18.- Una de ellas fue el aislamiento progresivo de la clase obrera que precedió a la derrota política y militar del movimiento popular representado en el gobierno de Salvador Allende. Esto nos remite a la incapacidad de los partidos de la UP para elaborar una política adecuada hacia las capas medias.

En efecto, cualquier proceso de transformaciones radicales de una sociedad requiere de una correlación de fuerzas favorables que garantice su éxito. En el caso del gobierno de la Unidad Popular, dada singularidad de la vía elegida, era más urgente tal correlación por lo que el adecuado tratamiento de los sectores medios — en Chile, política y socialmente importantes — adquiría una dimensión especial. No obstante, esta conclusión requiere de ciertas precisiones.

En esencia, las capas medias comprenden una amplia variedad de sectores que oscilan entre el proletariado y los grandes propietarios de los medios de producción. Se trata de grupos sociales con esquemas de intereses y aspiraciones culturales diferenciados que frente a la inminencia del cambio social no asumen posiciones coincidentes. Importantes grupos medios básicamente penetrados por la ideología burguesa son hostiles al cambio social. Muchos acceden a la perspectiva del cambio cuando éste se plantea como una categoría intelectual, pero disipan su entusiasmo cuando

aqué^l adquiere concreción en un proceso revolucionario.

Ahora bien, el problema fundamental, a nuestro juicio, reside en determinar qué entendemos por una política correcta hacia los sectores medios. Creemos que no es suficiente pretender ganarlas mediante la simple satisfacción de sus aspiraciones materiales, ni tampoco intentar garantizarles que las transformaciones estructurales proyectadas no herirán sus intereses.

La experiencia chilena demostró que estos caminos no concitan su adhesión y que los beneficios que recibieron durante el gobierno de Allende no provocaron una actitud favorable al proceso popular. Los comerciantes y los medianos industriales obtuvieron grandes ganancias durante los primeros años del gobierno lo que no fue óbice para que los núcleos más importantes de esos sectores, debidamente instrumentados por la gran burguesía expropiada, fueran sus más enconados adversarios y se sumaran a la resistencia al proceso de la Unidad Popular. Por lo mismo fue un error suponer que respecto a esos sectores una política de apaciguamiento traería consigo su apoyo o, al menos, su neutralización. No hay antecedentes de que ello haya ocurrido en el desarrollo de otras experiencias las que, por el contrario, señalan cómo en definitiva se ha logrado su integración cuando ésta se ha buscado desde posiciones de fuerza. En todos los países socialistas se ha impuesto una política para las capas medias sólo cuando el proletariado ha rescatado previamente el monopolio del

poder.

En un país como Chile, penetrado vigorosamente por la ideología anticomunista, se hacía aún más difícil y compleja la tarea de formular y llevar a la práctica una política correcta hacia los sectores medios. Su temor al comunismo, su resistencia al cambio social y el cuadro artificial de expectativas ofrecidas por el sistema dominante les arrastraron a oponerse al gobierno popular.

Por otra parte, entre esos sectores había grupos económicamente más débiles como empleados, profesionistas, pequeños comerciantes e industriales, pequeños agricultores respecto a los cuales se debió realizar un mayor esfuerzo ideológico orientado a demostrar que su destino como grupo social no estaba ligado en modo alguno al sistema capitalista. Pero no debemos extraer de esta omisión una conclusión equivocada. Nos parece incorrecto sostener que la experiencia chilena no logró la adhesión de la totalidad de las capas medias. No pocos se ubicaron al lado del gobierno desde los momentos iniciales y asumieron después un papel destacado en la defensa del gobierno. De otra manera no podría explicarse los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 celebradas apenas unos meses antes del golpe militar. En esa ocasión la UP obtuvo el 44% de los votos, es decir, después de dos años y medio de gobierno y en un contexto social y económico desfavorable al gobierno, el potencial electoral de la Unidad Popular se elevó en comparación al obtenido en 1970.

Estos antecedentes anulan la afirmación que la clase obrera enfrentó la derrota del proceso en condiciones de absoluto aislamiento, pues hace desaparecer el apoyo de sectores de las capas medias que se integraron al frente político y social que se aglutinó en torno a la UP. Sin embargo ese aislamiento relativo de la clase obrera se explica por el desarrollo de la vía chilena - al socialismo que entre 1970 y 1973 hizo cambiar diametralmente la situación. Así entre una y otra fecha se desarrolló un proceso que delimitó los campos de enfrentamiento y al cual, pensamos, deben atribuirse los desplazamientos sociales que provocaron el relativo aislamiento del movimiento popular. La fascistización progresiva de los sectores medios, en cierta medida, pueden atribuirse a las impaciencias de algunos sectores de la ultrazquierda que existieron dentro y fuera de la UP pero, en mayor parte, al fascismo entendido como un fenómeno histórico universal.

Consideramos que el fascismo es una constante histórica de respuesta al poderío que exhibe en un momento dado el movimiento obrero organizado y que la burguesía administra como último recurso ante la revolución. En el caso concreto de Chile, debido a la profundidad de las medidas transformadoras adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular las cuales estaban imprimiendo al proceso un carácter revolucionario, la burguesía interna apoyada por el Departamento de Estado norteamericano logró fascistizar a importantes sectores de las capas medias. De esta forma, la Unidad Popular perdió una batalla ideológica en la que la burguesía y el

imperialismo norteamericano desplegaron todo tipo de recursos, -derrota que, a su vez, impidió ensanchar suficientemente la base de apoyo social al gobierno.

En este orden de ideas nos parece importante resaltar que el gobierno de la UP en sus esfuerzos por ampliar su base de sustentación social y política, y a pesar de las reservas formuladas por la izquierda en el seno del bloque gobernante y fuera de él, siempre buscó un entendimiento básico con el Partido Demócrata Cristiano, expresión política de un sector de la burguesía y sustentado en amplios sectores de las capas medias. Pero esos intentos fracasaron también siempre debido a la decisión irrevocable del ala conservadora y fascistizante de aquel partido liderada por Eduardo Frei. Esta tendencia, hegemónica al interior de la DC, exigió a partir de fines de 1971 la mediatización del proceso de cambios y, más tarde en 1972, el sometimiento o la claudicación del gobierno de Allende. Finalmente en 1973, en sus pretensiones estratégicas de constituirse en alternativa de la Unidad Popular, aspiró al derrocamiento del gobierno y al consiguiente fracaso del proyecto político que éste desarrollaba. Y lo logró.

19.- Consideramos que otra falla del proceso iniciado por la Unidad Popular fue la ausencia de una dirección política homogénea capaz de utilizar plena y eficientemente el sector de poder concentrado en el Ejecutivo. Esto último exigía una disciplina partidaria dentro de la UP que, salvo el Partido Comunista, ningún otro partido demostró. Para encauzar la extraordinaria potencialidad

revolucionaria y de organización desarrollada en el seno de las masas y para mediar entre la voluntad política de aquéllas y los objetivos tácticos y estratégicos del movimiento popular, era necesario que las vanguardias políticas de la izquierda adoptaran criterios homogéneos. Sólo así habría sido posible, tal vez, dar una articulación más armónica a la acción del gobierno y a la fuerza del movimiento de masas.

Una de las consecuencias de esta falta de una dirección política homogénea fue la debilidad en la conducción del proceso, lo cual facilitó a la oposición burguesa ganarse ideológicamente a importantes grupos medios como lo señalamos anteriormente. El bloque opositor a la UP ayudado por el gobierno de Estados Unidos supo utilizar el aparato publicitario de que disponía para formar corrientes de opinión y orientar tácticas de formas legales e ilegales de lucha. El plan de la oposición se programó metódicamente, desde la simple reivindicación parcial hasta el cuestionamiento de la legitimidad misma del gobierno. Las medidas y posiciones del complejo proceso que Chile empezó a vivir desde la llegada de la Unidad Popular a la presidencia fueron deformadas mediante la manipulación colectiva de conciencias a través de los medios de comunicación social. Además es importante resaltar que todo este esfuerzo de penetración ideológica, si bien estaba dirigido a concitar la adhesión de los grupos medios de la población, sus verdaderos y últimos destinatarios eran los espectadores aparentes del enfrentamiento de la oposición y el gobierno:

las Fuerzas Armadas.

20.- Mientras esto ocurría, al interior de la coalición popular gobernante no existía un criterio unánime acerca de la vía chilena al socialismo. Recordemos que dentro de la izquierda había dos posturas diferentes respecto a la estrategia política a seguir y que éstas se manifestaron durante todo el transcurso del gobierno de Allende. Pero lo más grave fue que esas divergencias se agudizaron en los momentos en que el Ejecutivo requirió de una mayor fortaleza y ello ocurrió en la fase más difícil de su gestión: a partir de junio de 1972 cuando los escollos de la institucionalidad vigente le impidieron seguir avanzando de acuerdo al programa de transformaciones estructurales con el cual se accedió a la presidencia de la República.

La etapa histórica que se inició con el ascenso de la Unidad Popular al gobierno se caracterizó por la voluntad de iniciar la transición al socialismo en el país. En esa perspectiva el Programa Básico de la UP, reiteradamente explicitado por el Presidente Allende hasta las postrimerías de su mandato, precisó la naturaleza del proceso que se iniciaba y señaló a los enemigos principales cuyo centro de dominación aspiraba a destruir—monopolios, latifundios e imperialismo—para dar forma a una sociedad de transición al socialismo. La originalidad del proyecto político de la Unidad Popular residía en su pretensión de transformar pacíficamente el carácter de clase del Estado burgués chileno, es decir, sin su destrucción violenta. La vía ortodoxa sostiene que -

todo proceso revolucionario destruye primero el Estado burgués, para sólo entonces iniciar las transformaciones socio-económicas. En la experiencia nuestra, y ello es lo que la hacía esencialmente vulnerable, se trataba de transitar a la inversa pero culminando en todo caso en la transformación del Estado.

En esencia, se sostenía que conquistando el más importante centro de poder político, el Ejecutivo, se podía lograr a partir de él la globalidad del poder modificando progresivamente el carácter del Estado. La vía chilena al socialismo se basaba teóricamente en el supuesto de que el gobierno de la nación — el Poder Ejecutivo — era el núcleo estatal dominante desde el cual era posible ganar el conjunto. Suponía además que la institucionalidad chilena, que se había mostrado lo suficientemente flexible como para modernizarse en el curso de la larga evolución política y social del país, lo sería también para generar en su seno a la nueva institucionalidad socialista.

La experiencia de los tres años de gobierno popular demostró que el Ejecutivo no era el núcleo esencial de concentración del poder si se mantenía intacto y bajo custodia de la oposición burguesa el resto del aparato del Estado y, en especial, el conjunto del aparato represivo. Desde esta realidad, la perspectiva hipotética de utilizar la legalidad vigente en contra de la burguesía se hizo cada vez más imposible y, lo más serio, cada vez más controvertida y cuestionada por un sector de la izquierda dentro y fuera de la -

UP.

Debido a la habilidad táctica del bloque opositor constituido por el Partido Nacional, Demócrata Cristiano y la Democracia Radical, el régimen presidencial chileno caracterizado por la preminencia del Poder Ejecutivo devino en parlamentario y permitió una obstrucción persistente a la acción transformadora del gobierno. Señalamos cómo la legalidad, considerada en el proceso de la UP como un instrumento utilizable en contra de la burguesía — y de hecho fue así aprovechada inicialmente — se revirtió hasta convertirse en una camisa de fuerza del gobierno. Este no podía dar un paso — fuera de ella en los mismos instantes en que la oposición, autoconstituida en su garante, ubicaba todo el peso de su ofensiva al margen de la legalidad que decía defender.

De esta manera la vía pacífica o vía chilena al socialismo se fue desmoronando en la medida que se diluían sus fundamentos. El problema cardinal del proceso, esto es, el problema del poder no fue resuelto. No existió una estrategia para la conquista del poder que adecuara a los trabajadores, a las direcciones políticas y al gobierno a una dirección única en función de la necesidad de defender el proceso cuando fue evidente que éste estaba atrapado en un callejón sin salida.

A nuestro juicio, la experiencia chilena demostró que es factible conquistar una porción del poder de la institucionalidad burguesa y que es posible, a partir de ella, enfrentar las grandes trans

formaciones proyectadas. Al mismo tiempo demostró la posibilidad concreta de ganar para su causa a una parte de las capas medias. Lo único que no logró demostrar en definitiva es que pudiera evitarse el encuentro frontal y armado con la burguesía. Esto porque la profundidad de las transformaciones estructurales realizadas durante los mil días que duró el gobierno popular lesionaron los intereses de la burguesía monopolica nacional y del imperialismo norteamericano lo cual generó una convulsionante dinámica en el conjunto de la sociedad, en particular en el seno de las masas, que fatalmente obligó a ahondar el proceso más allá de las limitaciones preestablecidas en el programa de la UP.

Dicho en otros términos, creemos que se careció de una estrategia de poder basada en un hecho que debió haberse previsto: el entrampamiento del proceso en las redes de la misma institucionalidad bajo cuyo amparo se había generado. Congelada ésta, es decir, obstruida la sustitución del aparato estatal burgués, la estrategia debió centrarse, por un lado, en la tarea de estructurar un poder popular capaz de articular un cordón social defensivo del gobierno y, por otro, quebrar y/o neutralizar el aparato represivo potencialmente adverso. Esta última tarea implicaba el desarrollo de una política militar que, en forma paralela al esfuerzo específico que se realizó hacia las Fuerzas Armadas, implementara en el seno de las masas un poder disuasivo.

Sin embargo tal estrategia no existió. Y si a ello agregamos la ausencia de un criterio homogéneo respecto a la interpretación -

de la vía chilena al socialismo dentro del bloque de la Unidad Popular, los intentos para innovar en este sentido del sector altamiranista del Partido Socialista, dentro de aquél, y del MIR al exterior de esa coalición fueron poco serios, aislados y más bien contraproducentes.

24.- Por otra parte, consideramos que la más importante desviación del proceso, y que en definitiva selló su destino, fue la mantención de un mito que parecía estar avalado por la evolución política singular de Chile: el de las Fuerzas Armadas políticamente prescindentes, no deliberantes y sometidas al poder civil. La falsa creencia en unos institutos castrenses neutrales pues, como vimos en los capítulos iniciales, éstos nunca estuvieron ausentes del acontecer político del país.

En efecto, en octubre de 1970, las mismas fuerzas políticas y el mismo frente social que lo logró en septiembre de 1973 intentaron dar un golpe de Estado. En su ejecución estuvieron comprometidos algunos altos mandos del Ejército con la excepción de su Comandante en Jefe, el General Schneider. El ulterior asesinato de éste por un comando ultraderechista paralizó el operativo militar y operó como un factor neutralizante en el seno del Ejército.

Schneider, como el General Prats más tarde, fue la expresión de un arquetipo militar profesional producto de casi medio siglo de acatamiento del poder militar al poder civil para el

cual la práctica democrática determinaba su posición ante la elección, incluso de un Presidente marxista.

La existencia de este sector constitucionalista alimentó permanentemente la imagen del profesionalismo institucional de las Fuerzas Armadas. La misma sobreestimación, por lo demás, se proyectó sobre la potencialidad democrática de todo el sistema institucional chileno. Casi un siglo de tradición democrática burguesa parecieron pesar más en la conciencia de los partidos de la izquierda que en la conciencia de la burguesía y de los partidos políticos que la representaban. Podemos dimensionar el peso de este error si consideramos que su efecto político inmediato era nada menos que hacer garantes del proceso iniciado por la Unidad Popular a las Fuerzas Armadas.

En lo fundamental, esa apreciación errónea ignoró la ideología de clase de las instituciones armadas y el entrenamiento ideológico de la oficialidad en el sistema de defensa de Estados Unidos. Tampoco consideró el elemento socio-político que inducía al espejismo de la neutralidad de las Fuerzas Armadas. El conflicto político-social en Chile se dió siempre en el seno de la institucionalidad sin que jamás se llegara a cuestionar seriamente el poder de la burguesía. En estas condiciones, el Ejército fue "neutral" sólo en razón de no ser necesaria su intervención para la defensa del status.

Después del éxito de la Revolución Cubana, Estados Unidos articuló con mayor solidez su sistema defensivo continental asegurando sus vínculos con los ejércitos de América Latina. El modelo entonces elaborado, vigente hasta triunfo de la Unidad Popular, estaba orientado a la represión de la guerrilla rural y urbana la que se concebía como la única forma de ascenso del marxismo al poder. En nuestra tesis señalamos qué efectos produjo dentro de los círculos del gobierno norteamericano la sorpresiva victoria de la UP en Chile por una vía democrática.

De esta forma, las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países latinoamericanos eran controladas por el gobierno norteamericano a partir de una concepción globalmente difusa — la necesidad de la defensa continental— pero que se precisaba al explicitar que el enemigo interno es el marxismo. Así Estados Unidos era el dispensador único de entrenamiento al personal militar y el proveedor casi exclusivo de armamento.

Durante el transcurso del gobierno de Allende, a la par que el Departamento de Estado norteamericano bloqueó económica y financieramente a Chile, acentuó su red de vinculación con las Fuerzas Armadas chilenas. Fue evidente que los institutos castrenses del país por el carácter de su formación, la ideología dominante y su estructura interna estaban potencialmente adecuados para imponer un pronunciamiento militar. Esto no significa, en modo alguno, afirmar que el golpe de Estado constituyera una

fatalidad histórica ya que sobre determinados supuestos las contradicciones existentes en el seno de las Fuerzas Armadas pudieron resolverse favorablemente a la defensa del proceso.

No obstante llegó un momento en que las instituciones represivas se declararon abiertamente en contra del gobierno. Para que ello no hubiera ocurrido habría sido necesario que la Unidad Popular definiera una política militar que empezara por considerar las características de clase de los institutos castrenses y su estrecha vinculación, tanto a la defensa del Estado burgués como al sistema continental de defensa impuesto por Estados Unidos. Esta tarea de definición de una política militar debió haber tenido prioridad dada la naturaleza de la vía que se había elegido para llegar al gobierno cuya defensa, por ser pacífica, imponía la constitución de un poder disuasivo. Además los acontecimientos posteriores al triunfo electoral de septiembre de 1970 debieron haber alertado a los partidos de la U P acerca del grado de decisión de la ofensiva restauradora de las fuerzas políticas de oposición. Cuando la Democracia Cristiana, expresando entonces las preocupaciones de la burguesía electoralmente derrotada, exigió en 1970 el llamado Estatuto de Garantías Democráticas intentó sin éxito obtener que el Presidente renunciara a la facultad privativa de designar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los cuales se autogenerarían. La exigencia, aunque frustrada, no ocultaba la clara intención de hacer del Ejecutivo un prisionero de las instituciones armadas.

Posteriormente, avanzado el proceso en octubre de 1972, la oposición impuso en el Parlamento la Ley de Control de Armas que entregó el control exclusivo de éstas a las fuerzas represivas.

En definitiva la Unidad Popular y el gobierno, a falta de una política militar, desarrollaron una política hacia las Fuerzas Armadas centrada en prestar una atención preferencial, que los gobiernos anteriores nunca les dispensaron, en el plano de las reivindicaciones salariales y en su participación en las tareas del desarrollo nacional. Consideramos que este esfuerzo no debe subestimarse, en especial el último aspecto. Es cierto que oficiales altos y medios asumieron responsabilidades directas en las empresas del cobre, en consejos de administración de empresas y, después del paro de octubre en carteras ministeriales robusteciendo, por cierto, la precaria base de sustentación del proceso en el interior de las Fuerzas Armadas. Pero, por otra parte, esto obstruyó la formulación de una política que, ante la perspectiva del enfrentamiento, debió desarticular el operativo golpista que la oficialidad contraria al gobierno preparaba.

Hubo instantes en que ello fue posible y, en algunas ocasiones, el gobierno utilizó sus facultades constitucionales para promover mandos leales, disolver focos sediciosos y destituir elementos golpistas. Pero la concepción errónea de la neutralidad de las Fuerzas Armadas impidió cualquier esfuerzo serio y sostenido de penetración en la suboficialidad y en la tropa con lo que se -

esterilizó la posibilidad de ampliar la influencia de los sectores constitucionalistas o democráticos los cuales, gradualmente, fueron aislados.

Esta falla del proceso de gobierno de la UP resultó crucial porque afectó el centro mismo del balance de fuerzas en las cuales el gobierno se apoyó durante casi tres años pues perdida toda alternativa de contar con un sector de los institutos castrenses y no existiendo un núcleo compensatorio de poder armado del pueblo, la derrota de la Unidad Popular quedó sellada. La mayor equivocación fue creer que la institucionalidad, flexible y abierta en sus inicios para permitir a los partidos populares tomar posesión del gobierno, en definitiva lo permitiría todo. Pero la experiencia concreta demostró que si la legalidad vigente pudo ser apta para adecuarse a un programa reformista avanzado no lo era, en cambio, para sobrevivir a las presiones populares y a las condiciones prerevolucionarias que el mismo proceso de gobierno fue generando en el seno de la sociedad.

22.- También es necesario referirnos a la acción desestabilizadora del gobierno de Estados Unidos al proceso de la Unidad Popular. Consideramos que ella sola no había sido suficiente para derrocar a Allende, es decir, el bloqueo económico norteamericano al país influyó, pero no fue determinante en la derrota política de la UP. A nuestro juicio fueron más bien factores internos los que condujeron al fracaso de la vía chilena al socialismo sin que esto implique minimizar cuánto ayudó a esa derrota el boicot norteamericano

al gobierno popular.

Desde que Allende asumió la presidencia del país tanto Estados Unidos como el bloque gobernante supieron a qué atenerse. Lo supo Estados Unidos cuando se reivindicó la soberanía nacional rescatando, sin pago de indemnización, las riquezas básicas, en especial, el cobre. Y también significó un desafío la hábil política exterior del gobierno cuyo principal artífice fue el Canciller Clodomiro Almeyda. En efecto, se establecieron relaciones diplomáticas con Cuba, China, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea y la República Democrática de Vietnam y como una demostración del pluralismo ideológico no sólo se expresó solidaridad a todos los pueblo progresistas del Tercer Mundo sino que, además, se reforzaron los vínculos de amistad con los países desarrollados del hemisferio occidental. Todo esto se llevó a cabo dentro de una política exterior de irrestricta independencia y de respecto a la autodeterminación y no intervención consagrados en el Derecho Internacional, impidiendo así el aislamiento del país buscado por la Casa Blanca. Sin embargo la nacionalización de los recursos naturales y esa política exterior independiente provocaron la decisión del Departamento de Estado nortamericano de ayudar a clausurar el proceso iniciado en Chile en septiembre de 1970. ¿Pero qué país del mundo perteneciente a la esfera de influencia de Estados Unidos que pretenda un proceso de transformaciones estructurales no debe enfrentar la agresión norteamericana? Este es un factor adverso con el

cual debe contar todo proceso revolucionario que afecte los intereses estadunidenses.

23.- Creemos que el triunfo de la contrarrevolución en Chile estuvo condicionado, esencialmente, por la incapacidad de responder-táctica y estratégicamente a la resuelta decisión de Estados Unidos de cancelar la experiencia del gobierno de la UP. Es cierto que el Departamento de Estado desplegó un extraordinario potencial para conseguirlo: desde el bloqueo comercial y financiero hasta el apoyo económico a la oposición y sedición interna. Pero no lo es menos que el gobierno de Allende no tuvo un apoyo real de la comunidad socialista, en particular de la URSS, que impidiera o mitigara los efectos demoledores en la economía chilena de la caída del precio del cobre y del boicot crediticio y comercial de Estados Unidos.

Además es evidente que en el bloque popular existió una subvaloración de la firme, resuelta e irrevocable postura del imperialismo norteamericano para desestabilizarnos. El tránsito al socialismo en Chile — que suponía para Estados Unidos un problema más serio y trascendente de lo que inicialmente se imaginó — se hacía entonces más vulnerable debido a su derrota ante la Revolución Cubana.

La victoria de la UP en 1970 alcanzada por una vía que suponía una imprevista innovación en las tácticas revolucionarias sorprendió y rebasó las barreras defensivas militares del sistema interamericano, adecuado hasta ese instante, sólo para enfrentar al mer-

xismo en el terreno de la guerrilla armada. Los mecanismos de defensa del sistema de dominación norteamericana en nuestro continente fueron neutralizados no sólo por la novedad de la variante, sino también por la legitimación política y moral del triunfo de un frente social cuyo centro de gravitación lo integraban dos poderosos partidos marxistas que rompieron la ortodoxia al anunciar una experiencia revolucionaria en pluralismo, libertad y democracia.

De esta manera, el gobierno de la Unidad Popular establecía un precedente que podía reproducirse en otras latitudes y con perspectivas de triunfo similares. Además el eventual éxito de la vía chilena al socialismo podría llegar a afectar los intereses norteamericanos en el resto de América Latina, sobre todo en los países de la región andina y en el resto de las naciones del Cono Sur. En consecuencia, la posición adoptada por el Departamento de Estado consistió en no permitir otra sociedad como la cubana en su zona de influencia estratégica. Por lo mismo, Estados Unidos estimó que la evolución de Chile a partir de 1970 era intrínsecamente incompatible con sus intereses hegemónicos pues cuestionaba su esfera ideológica y económica de influencia en nuestro continente.

24.- Fue así como una experiencia histórica en la que se vislumbraban grandes esperanzas se interrumpió violentamente. La distribución de las fuerzas sociales en dos grandes bloques antagónicos, el obrero y popular de un lado, y el constituido en torno a la burguesía interna apoyada por el imperialismo norteamericano, de otro,

culminó con el golpe militar de septiembre de 1973.

Desde esa fecha se instauró en el país una dictadura de las Fuerzas Armadas donde imperan el terror, la represión y el asesinato como prácticas cotidianas de gobierno. Con el régimen dictatorial se abrió una fase en la historia nacional que tiene en contra al pueblo chileno, a los pueblos del mundo y a la opinión democrática internacional.

Han transcurrido trece años desde el golpe de Estado de 1973. Actualmente la dictadura militar se encuentra en una etapa de deterioro de su base social de sustentación. El apoyo incondicional que le brindaron la burguesía interna, las clases medias y el Departamento de Estado ya no es el mismo. Sólo cuenta con la adhesión de unas Fuerzas Armadas y una policía experimentadas en la represión que no ha cesado desde entonces.

Se trata de una derrota del movimiento popular. Pero lo esencial no se ha perdido. El pueblo de Chile ha podido preservar su capacidad política y organizativa de la única manera posible: luchando. Con la certeza de que como lo dijera el Presidente Allende: "La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada... Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor". (495)

(495) Allende, Salvador, "Discursos", op. cit., pp. 592 y 594.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- Altamirano, Carlos, "Dialéctica de una derrota", Siglo XXI Editores, México, 1977.
- 2.- Allende, Salvador, et. al., "La vía chilena al socialismo", Siglo XXI Editores, México, 1973.
- 3.- Angell, Alan, "Partidos políticos y movimiento obrero en Chile", Editorial Era, México, 1974.
- 4.- Bedrak, Moisés, "La estrategia del desarrollo espacial en Chile (1970-1973)", Ediciones Siap-Planteos, Buenos Aires, 1974.
- 5.- Bitar, Sergio, "Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena", Siglo XXI Editores, México, 1979.
- 6.- Bruna, Susana, "Chile: la legalidad vencida" Editorial Era, México, 1976.
- 7.- Caputo, Orlando y Pizarro, Roberto, "Desarrollismo y capital extranjero", Editado por la Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1970.
- 8.- De Riz, Liliana, "Sociedad y Política en Chile (de Portales a Pinochet)", UNAM, México, 1979.
- 9.- Espinoza, Juan y Zimbalist, Andrew, "Democracia Económica: la participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973", Fondo de Cultura Económica, México, 1984.
- 10.- Eyzaguirre, Jaime, "Fisonomía histórica de Chile", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1960.
- 11.- Farnsworth, Elizabeth, Feinberg, Richard, et al., "Chile: el bloqueo invisible", Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1973.
- 12.- Furtado, Celso, "La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la Revolución Cubana", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969.
- 13.- Garcés, Joan, "Allende y la experiencia chilena", Editorial Ariel, Barcelona, 1976.
- 14.- Garcés, Joan, "Chile: el camino político hacia el socialismo", Editorial Ariel, Barcelona, 1972.

- 15.- Garcés, Joan, "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", Siglo XXI Editores, Madrid, 1974.
- 16.- Gil, Federico, "El sistema político de Chile", Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1969.
- 17.- Guilisasti, Sergio, "Partidos Políticos chilenos", Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1960.
- 18.- Gunder Frank André, "Capitalismo y subdesarrollo en América Latina", Siglo XXI Editores, México, 1978.
- 19.- Halperin, Donghi, Tulio, "Historia contemporánea de América Latina", Alianza Editorial, Madrid, 1970.
- 20.- Heller, Claude, "Política de unidad en la izquierda chilena", El Colegio de México, México, 1973.
- 21.- Jovet, Julio César, "Desarrollo económico-social de Chile", Ensayo Crítico, Centro de Estudios Salvador Allende, Casa de Chile en México, México, 1982.
- 22.- Jovet, Julio César, "El Partido Socialista de Chile", Editorial Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1971, Tomo II.
- 23.- Joxe, Alain, "Las Fuerzas Armadas y el sistema político chileno", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970.
- 24.- Kudachkin, M, "Chile: la experiencia de la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias", Editorial Progreso, Moscú, 1978.
- 25.- Labrousse, Alain, "El experimento chileno. Reformismo o revolución", Editorial Grijalbo, Barcelona, 1973.
- 26.- Lamour, Catherine, "Allende: la nueva sociedad chilena", Editorial DOPESA, Barcelona, 1972.
- 27.- Marini, Ruy Mauro, "El reformismo y la contrarrevolución", Editorial Era, México, 1976.
- 28.- Mistral, Carlos, "Chile: del triunfo popular al golpe fascista", Editorial Era, México, 1974.
- 29.- Petras, James y Morley, Morris, "La conspiración yanqui para derrocar a Allende". Editorial Nuestro Tiempo, México, 1974.
- 30.- Pinto, Aníbal, et. al, "Chile hoy", Siglo XXI Editores, México, 1970.

- 31.- Pinto, Aníbal, "Chile, un caso de desarrollo frustrado", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1973.
- 32.- Prats, González, Carlos, "Memorias", Editorial Pehuén, Santiago de Chile, 1985.
- 33.- Ramírez Necochea, Hernán, "Balmaceda y la contrarrevolución del 91", Editorial Austral, Santiago de Chile, 1958.
- 34.- Ramírez Necochea, Hernán, "Historia del imperialismo en Chile", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1960.
- 35.- Ramírez Necochea, Hernán, "Historia del movimiento obrero en Chile. Antecedentes", Editorial Austral, Santiago de Chile, 1960.
- 36.- Ramírez Necochea, Hernán, "Las Fuerzas Armadas y la política en Chile (1810-1970)", Editado por Casa de Chile en México, 1984.
- 37.- Rodríguez, Felipe, "Crítica de la Unidad Popular", Editorial Fontamara, Barcelona, 1975.
- 38.- Selser, Gregorio, "Chile para recordar", Ediciones Crisis, Buenos Aires, 1974.
- 39.- Smirnow, Gabriel, "La revolución desarmada, Chile: 1970-1973", Editorial Era, México, 1977.
- 40.- Timossi, Jorge, "Grandes Alamedas. El combate del Presidente Allende", Editorial Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, 1975.
- 41.- Toer, Mario, "La vía chilena, un balance necesario", Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1974.
- 42.- Touraine, Alain, "Vida y muerte del Chile popular", Siglo XXI Editores, México, 1974.
- 43.- Uribe, Armando, "El libro negro de la intervención norteamericana en Chile", Siglo XXI Editores, México, 1974.
- 44.- Vázquez Montalbán, Manuel, "La vía chilena al golpe de Estado", Editorial Los Libros de la Frontera, Barcelona, 1973.
- 45.- Villalobos, Sergio, et. al., "Historia de Chile", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1979, Tomo III y IV.

- 46.- Vitale, Luis, "Interpretación marxista de la Historia de Chile", Editorial Fontamara, Barcelona, 1980, Tomo V.
- 47.- Witker, Alejandro, "Chile: Sociedad y Política". Antología, Lecturas Universitarias No. 30, UNAM, México, 1978.
- 48.- Witker, Alejandro, "El compañero Tohá". (Esbozo biográfico, Testimonios y Documentos), Editado por Casa de Chile en México, México, 1977.
- 49.- Witker, Alejandro, "Salvador Allende (1908-1973). Prócer de la liberación nacional.", UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, México, 1980.
- 50.- Zapata, Francisco, "Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende", El Colegio de México, México, 1976.

D O C U M E N T O S

- 1.- Constitución Política del Estado de Chile de 1925.
- 2.- "Cuba Chile", Ediciones Políticas, Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1972.
- 3.- Discursos de Salvador Allende, Editorial Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, 1975.
- 4.- Programa Básico de la Unidad Popular.

R E V I S T A S

- 1.- Cuadernos del Centro de Relaciones Internacionales No. 3, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1971.
- 2.- Cuadernos de la Realidad Nacional No. 4, junio de 1970, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.
- 3.- Revista de Derecho Económico, octubre de 1970, año IX, No. 33, Santiago de Chile.

- 4.- Revista de la Universidad Técnica del Estado, abril de 1972.
- 5.- Revista "Punto Final" de 11 de abril de 1972.
- 6.- Revista "Punto Final" de 15 de mayo de 1972.

D I A R I O S

Diario "El Mercurio"	de 13 de junio de 1971
-----	de 4 de diciembre de 1971
-----	de 17 de junio de 1972
-----	de 8 de octubre de 1972
-----	de 9 de octubre de 1972
-----	de 11 de octubre de 1972
-----	de 15 de octubre de 1972
-----	de 21 de octubre de 1972
-----	de 4 de noviembre de 1972
-----	de 5 de noviembre de 1972
-----	de 11 de abril de 1973
-----	de 14 de mayo de 1973.